GIANCARLO SOLER TORRIJOS

La invasión a Panamá

ESTRATEGIA Y TACTICAS PARA EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

CELA

GIANCARLO SOLER TORRIJOS

La invasión a Panamá

ESTRATEGIA Y TACTICAS

PARA EL

NUEVO ORDEN MUNDIAL

GIANCARLO SOLER TORRIJOS

La invasión a Panamá

ESTRATEGIA Y TACTICAS

PARA EL

NUEVO ORDEN MUNDIAL

CELA

Panamá

1993

Giancarlo Soler Torrijos, **Estrategia y tácticas para el nuevo orden mundial. La invasión de Estados Unidos a Panamá**

© Giancarlo Soler Torrijos y el Centro de Estudios Latinoamericanos, (CELA), "Justo Arosemena"

Reservados todos los derechos

1ª edición, abril de 1993

ISBN 84-8385-020-6

Diseño gráfico: David Montoya

Edición: Bolívar Franco

Armado: Valeria Neumann

Impreso en Panamá

Publicación del Centro de Estudios Latinoamericanos, (CELA), "Justro Arosemena".

Indice

Introducción 9

Capítulo Uno
Motivos y objetivos de la administración Bush en la invasión a Panamá 17

- Objetivos de la incursión militar 25
- Pasos en la creación del escenario para la invasión 35
- Notas 54

Capítulo Dos
Panamá en la evolución de la estrategia global de Estados Unidos 59

- Primeros pasos en la elaboración de una estrategia global 60
- Implicaciones para la evolución política de Panamá 65
- Panamá en la reformulación estratégica de posguerra 78
- Fundamentos para reintervenir en Panamá 89
- La democracia y el narcotráfico en la nueva estrategia global 95
- Panamá en la transformación del escenario internacional 100
- Notas 115

Capítulo Tres
Trasfondo histórico de una derrota política: una reinterpretación necesaria 121

- La crisis de 1968 y el golpe de Estado 126
- Restructuración de alianzas 143
- El reencuentro con Estados Unidos y con la oligarquía 160
- Preludios de la invasión 173
- Notas 177

Capítulo Cuatro
Estrategia y tácticas de Estados Unidos en la invasión a Panamá 183

- Criterios para invadir 187
- Movimientos y reacciones previas 192
- El instrumental en la estrategia de la invasión 196
- El manejo de la información dentro del operativo militar 203
- La secuencia de las tácticas 212
- Génesis y derrota de la resistencia militar panameña 223
- Notas 233

Capítulo Cinco
Panamá, génesis del nuevo orden mundial 239

- El "nuevo orden"... panameño 240
- La descomposición del régimen 244
- Panamá hoy 251
- ¿Se renegociarán los tratados? 255
- La génesis del nuevo orden 259
- Legados de Bush 262
- Panamá, antesala del nuevo orden 264
- Notas 269

Bibliografía 275

A Marta, con amor

A Chuchú, in memoriam

"... then conquer we must when our cause is just..."
(entonces debemos conquistar cuando nuestra causa es justa).

Fragmento del Himno Nacional de Estados Unidos de América,
The Star Spangled Banner.

Introducción

La invasión de Estados Unidos a Panamá del 20 de diciembre de 1989 fue una acción bélica de corta duración que marcó el inicio de un nuevo orden internacional con primacía político-militar norteamericana. La intervención en Panamá — al igual que la Guerra del Golfo Pérsico en enero de 1991 — le otorgó al Presidente de Estados Unidos, George Bush, el aplauso de gran parte de la población de su país y estableció el modelo que la Casa Blanca utilizó para definir las características que buscó imponerle al llamado "nuevo orden mundial" en gestación. La lucha armada contra un adversario que no estaba preparado para librar una guerra de grandes proporciones selló la historia panameña y, paradójicamente, la estadounidense.

A pesar del tiempo transcurrido, las heridas ocasionadas por la invasión distan de haber sanado. De ello da cuenta el repudio de la población panameña a la visita del mandatario norteamericano a la ciudad de Panamá el 11 de junio de 1992. Estregándose los ojos por los efectos de los gases lacrimógenos lanzados contra los manifestantes que rechazaban su pre-

sencia, el presidente de la potencia más grande del mundo tuvo que abandonar el Parque Porras de la ciudad de Panamá — desde donde estaba supuesto a emitir un discurso a la población panameña — y buscar refugio dentro de las seguras paredes de las bases militares norteamericanas en el istmo. Según reportó un corresponsal de un diario mexicano, "*ni el sorprendente dispositivo de seguridad estadounidense en tierra, aire y mar, en el que participaron centenares de hombres dotados de aparatos especiales, perros y detectores de metales, ni los antimotines de la policía nacional local pudieron contener el desbordamiento de la multitud, que* [llegó] *sólo dos minutos después de la comitiva presidencial ... al Parque Porras* [y] *los rebasó arrojando piedras ...* [que alcanzaron] *hasta el mismo podium en que debía hablar el mandatario visitante.*"[1]

Pero desde que las tropas estadounidenses se enfrentaron con grupos militares panameños escasamente armados, han surgido detalles que arrojan luz sobre el significado de la invasión para la administración Bush, para Panamá, y para la formación de un nuevo escenario internacional cuya característica principal, por ahora, es la unipolaridad centrada en Washington. Según Abraham Lowenthal, destacado especialista en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, "*aunque la invasión a Panamá en 1989 se le presentó al pueblo estadounidense como un ejercicio extremadamente exitoso del poderío militar de Estados Unidos, el hecho es que, como en el caso de Irak, no se nos ha informado adecuadamente ni de los antecedentes ni de las consecuencias de la intervención militar estadounidense*".[2] Esta obra pretende esclarecer tanto los orígenes como las consecuencias de dicha invasión, así como la estrategia y las tácticas militares que unieron ambos lados de la ecuación político-militar. Para ello es necesario profundizar en varios aspectos de la historia de ambas naciones.

Hasta el presente, la invasión ha sido atribuida a causalidades únicas. Autores estadounidenses (incluso algunos de los que se consideran críticos) y panameños que piensan como los primeros han destacado las circunstancias domésticas de Panamá en el período anterior a la invasión. Para estos, la conducta del General Manuel Antonio Noriega, Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) entre 1983 y 1989, fue la figura que, por sí sola, causó la acción bélica

estadounidense. Por otro lado, panameños y latinoamericanos hemos señalado, correctamente, que fueron los intereses estratégicos de Estados Unidos en el istmo los que impulsaron a Washington a emprender este esfuerzo bélico. Sin embargo, hay muchas otras facetas de la intervención que todavía están por ser explicadas.

Si bien el drama de la incursión armada de Estados Unidos en Panamá no puede desligarse del papel de figuras que impregnaron el curso de los acontecimientos con sus políticas e intereses, no por ello las afirmaciones y conductas de los distintos individuos que participaron en el escenario bélico deben ser el eje del estudio sobre la invasión. No olvidemos que el papel de los individuos — tanto el de Noriega como el de cualquier otro — en la historia, depende fundamentalmente de la coyuntura ante la que ellos se encuentran. Sin embargo, si bien son las estructuras políticas y sociales las que invitan al individuo, personero o estadista a tomar un curso específico, estos a su vez tienen un margen de acción que les permite encauzar los acontecimientos según sus intereses y proyectos: la invasión de Estados Unidos es un ejemplo de ello.

De allí que la presente exposición sobre la incursión militar de Estados Unidos a Panamá incluye un eje histórico para ilustrar la relevancia de los intereses, instituciones y tendencias que se hicieron presentes en el operativo militar. Sin embargo, ello no quiere decir que el curso de los acontecimientos fue inevitable. Si hay algo que debe quedar claro es que la coyuntura intervencionista en Panamá fue producto de la convergencia de los intereses de Estados Unidos por ampliar sus capacidades estratégicas en el istmo y la debilidad del Estado panameño por rechazarlos. Pero esa coyuntura podía dar frutos distintos: el hecho de la invasión fue posible gracias a escenarios precisos que podían o no hacerse presentes en el período previo a la incursión armada.

Bajo un prisma histórico, la invasión de Estados Unidos a Panamá es la continuación lógica de un proceso de expansión de ese país sobre el istmo. Si bien este proceso de expansión fue iniciado con vehemencia a principios de este siglo, durante su historia como nación formalmente independiente, Panamá no logró combatirlo acertadamente. Pero en el transcurso de esta confrontación existieron figuras en ambos países que

tuvieron un papel de relevancia e incluso determinaron la concreción de resultados específicos, tales como el General Omar Torrijos y James Carter mediante los tratados canaleros de 1977. De allí que en momentos específicos de la historia, personajes de Panamá y de Estados Unidos hayan tenido la primera palabra.

La historia de las relaciones Panamá-Estados Unidos y los sucesos inmediatamente anteriores al inicio del operativo militar aportan información sobre el objetivo real de Estados Unidos para incursionar masivamente sobre Panamá. La forma como el istmo ha sido considerado por Washington desde el siglo XIX hasta nuestros días, indica que su interés en este país dista de ser circunstancial. En la medida que se han producido cambios en el escenario internacional, Estados Unidos debió emprender alteraciones en las formas políticas y militares con que se vinculó con el mundo exterior. En esa secuencia, a Panamá le correspondió sujetarse a esa evolución: la invasión es, por lo tanto, producto directo del rediseño estratégico que la potencia del norte inició en el último lustro de la década de 1980. Precisamente, la incursión sobre Panamá fue una experiencia que le sirvió a Estados Unidos como modelo para marcar la pauta en la evolución de los asuntos mundiales.

Con el mismo esfuerzo esclarecedor, el presente análisis revisa el desarrollo de la estrategia de Estados Unidos hacia el mundo porque en ella se encuentra la lógica que movió a ese país a invadir a Panamá. Una vez terminado el operativo militar, el mandatario estadounidense declaró que ésta había sido una guerra "bellamente coordinada" que había permitido obtener los objetivos planteados. La "bella coordinación" del operativo, sin embargo, mas bien demuestra que las razones aducidas por el presidente Bush para justificar el inicio de operaciones bélicas contra el istmo panameño son razones que esconden los objetivos reales por los que se lanzó la invasión. Las razones aludidas por Washington ocultan los intereses reales que determinaron la decisión de intervenir, primero políticamente, y después, militarmente, en Panamá — pero dicen mucho sobre las formas como se conducen las resoluciones políticas en Washington. Así, precisar el desarrollo de la política exterior de Estados Unidos hacia fines de la década de

1980 nos conduce a conocer los medios y las armas que Estados Unidos tenía disponible en su estrategia global al momento de proceder con la invasión. De hecho, la evolución de su estrategia hacia el mundo determinó el curso a seguir hacia Panamá.

Pero no todo debe ser entendido como causa externa. A pesar de las limitaciones que Estados Unidos le impuso históricamente a Panamá, la potencia del Norte no logró impedir que de la misma institución panameña que el Pentágono estableció para salvaguardar los intereses norteamericanos en el istmo — las Fuerzas Armadas– emergiera un gobierno cuyas acciones lograron en el espacio de una década, cambiar en beneficio panameño las relaciones contractuales con la potencia norteamericana. En 1968, a través de un incruento golpe de Estado, esta institución desplazó del poder político a los clanes oligárquicos a través de los cuales Estados Unidos se había manifestado contra la evolución política autónoma del país. En dos lustros (1968-1978), el gobierno del General Omar Torrijos creó las bases institucionales para hacer efectiva la independencia panameña: creó un sistema político que dejó fuera — temporalmente — a la oligarquía; redirigió la atención del Estado hacia los sectores populares y las capas medias; firmó con Estados Unidos un tratado que recuperó el territorio canalero para la nación; y puso fecha límite (el 31 de diciembre de 1999) a la salida total de las tropas norteamericanas en el país. Más tarde, sin embargo, el régimen de Torrijos optó por aliarse "tácticamente" con algunos de los grupos desplazados del poder con el golpe militar de 1968. La percepción del gobierno militar istmeño de que tenía que crear y mantener una base social a largo plazo con el fin de evitar fuertes disensos internos que Estados Unidos pudiera utilizar para contrariar los esfuerzos panameños por consolidar su independencia, indujo que de aquella necesidad circunstancial el gobierno de Torrijos pasara más tarde hacia una alianza semi-formal con fracciones oligárquicas que a su vez, lograron reducir el ímpetu transformador de los gobiernos que le sucedieron.

Con la muerte de Torrijos en 1981, este proceso de reacomodo político doméstico adquirió tal fuerza que, para 1984, la alianza semiformal no sólo se dio con un segmento de la

oligarquía, sino con los intereses norteamericanos que se habían opuesto firmemente a los Tratados Canaleros. Pero hacia 1986, Washington se impuso la tarea de cambiar tanto de aliados internos como de formas de vincularse con Panamá — un proceso similar al que realizó con el resto del mundo, aupado por las transformaciones mundiales inherentes a la fragmentación del bloque soviético — para recomponer el tipo de relación y restablecer la vinculación que había tenido con este país antes del golpe militar de 1968. A partir de 1984, los gobiernos panameños subordinados a la jefatura militar del sucesor de Torrijos, el General Noriega, buscaron repeler las pretensiones absorbentes de la Casa Blanca, pero por la senda del mismo proceso de reacomodo aludido. Este camino, sin embargo, representó la derrota política del régimen militar frente a la sociedad panameña y frente al mismo Estados Unidos, un fracaso político que, precisamente, precedió al fracaso militar resultante de la incursión armada.

Es evidente que la invasión se deriva de la mezcla entre condiciones internas y externas tanto a Panamá como a Estados Unidos. En el operativo militar, Estados Unidos plasmó su interés estratégico en el istmo y las tácticas a seguir para alcanzarlo. En este, los intereses domésticos, el escenario internacional y las circunstancias que Estados Unidos encuentra en Panamá permiten su pleno desarrollo. Así, Washington utilizó el más alto grado de sofisticación de su poderío bélico y la más perfeccionada aplicación de su doctrina militar, bajo el supuesto de que los objetivos militares deben contribuir a obtener los fines políticos para los que se lanzó la masiva incursión armada. Como consecuencia de la invasión, Washington logró reinsertar plenamente al istmo panameño en la posición que históricamente le había adjudicado dentro de su esfera de influencia: Panamá quedó inmersa en una crisis cuyo final todavía está por escribirse. La actual crisis panameña es, paradójicamente, un adelanto de los problemas que confronta el "nuevo orden" en su aplicación a distintos países y regiones. Definitivamente, el nuevo orden que intentó crear la Casa Blanca es un estado de cosas todavía irresuelto. Su futuro hoy está dado por el triunfo del Demócrata William Clinton en las elecciones presidenciales

de noviembre de 1992 y dependerá de las acciones que el nuevo presidente tome con respecto a los problemas agobiantes que aquejan la economía de Estados Unidos.

Pero al comparar la invasión a Panamá con la participación de las tropas norteamericanas en el conflicto del Golfo Pérsico, la primera demuestra haber sido el paso inicial hacia la conformación del nuevo ordenamiento global destacado por el presidente Bush a raíz de su victoria contra Irak. A pesar de las obvias diferencias regionales y las distintas circunstancias domésticas que dichas naciones enfrentaron frente a sus respectivos enfrentamientos con Estados Unidos, desde el punto de vista estratégico, en las incursiones militares de Estados Unidos contra Panamá (diciembre de 1989) y el operativo multinacional contra Irak (febrero de 1991) existieron más similitudes que diferencias. En efecto, la estrategia y tácticas de Estados Unidos durante la "bellamente coordinada guerra" en Panamá fueron el preludio de su estrategia y tácticas para el llamado nuevo orden mundial.

1. Fernando Martínez, "Masivo repudio a Bush en Panamá", *La Jornada*, (México, D.F.), viernes 12 de junio de 1992, pp. 1, 44.
2. Abraham Lowenthal, "Engañoso éxito, la invasión a Panamá," *Excelsior*, sábado 13 de junio de 1992, pp. 1, 27.

"Endara fue juramentado poco antes del operativo. Fue juramentado en una base de Estados Unidos".

Gral. Collin Powell, 20 de diciembre de 1989.

1

Motivos y objetivos de la administración Bush en la invasión a Panamá

La invasión de Estados Unidos a Panamá del 20 de diciembre de 1989 fue un hecho que tomó por sorpresa tanto a la sociedad que hubo de enfrentarla, como a muchos periodistas y cientistas sociales estudiosos de la política exterior norteamericana hacia la región. Entre quienes indagamos sobre la forma como esta potencia buscaba afianzar a fines de la década de 1980 su posición hegemónica frente a la región centroamericana en particular — y latinoamérica en general — en un principio llegamos a la conclusión de que para los círculos de poder en Washington, emprender una contundente intervención militar en Panamá era una acción extrema que contrariaría un cierto grado de pragmatismo mostrado por la administración Bush en sus primeros once meses de gobierno.

Esta última idea parecía confirmarse en tanto que en Estados Unidos se daban medidas concretas que atestiguaban su validez. En este sentido, un analista mexicano afirmaba que, si bien la política norteamericana tiene límites no violados fácilmente por sus gobernantes, "*aunque no lo parezca, el sentido realista es ahora moneda corriente en los círculos dominantes de nuestro vecino* (norteño)... *si el impetuoso Ronald Reagan*

no se atrevió (a invadir Panamá), *¿cómo podría hacerlo ahora un Bush recién llegado a la Casa Blanca y con una serie de indefiniciones paralizantes en su política exterior?*".[1] La esencia de este juicio era mas bien la regla que la excepción entre quienes seguíamos el desarrollo de los acontecimientos entre Panamá y Estados Unidos.[2]

Esta visión fue puesta en práctica incluso entre los formuladores de política exterior de las cancillerías latinoamericanas. Un mes antes de la invasión, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Fernando Solana, dijo ante la Cámara de Diputados que "vivimos un momento histórico de aceleradas transformaciones. El esquema político bipolar que produjo la Segunda Guerra Mundial está siendo sustituído de manera vertiginosa e irreversible. Se desmoronan rígidos esquemas ideológicos. Aparecen procesos democratizadores y se resuelven añejos problemas regionales en diversas partes del mundo".[3] México, y muchos otros países de la región, asumían que Estados Unidos tenía otra visión sobre Centroamérica a la que imperó bajo el presidente Ronald Reagan: Estados Unidos buscaría soluciones pacíficas a los añejos conflictos de la región.

Durante varios meses previos a la invasión, diversos sectores políticos de la sociedad panameña mas bien especulaban sobre la forma y el momento en que Washington encontraría la manera para establecer un arreglo cordial con Noriega, su antiguo "hombre en Panamá".[4] Para gran parte de los observadores, Bush mantendría la estrecha relación que Washington había forjado con la institución militar bajo la jefatura del controversial militar. El relativo desacierto del antecesor de Bush en la Casa Blanca, Ronald Reagan, frente a la crisis panameña de mediados de 1987 y frente a añejos objetivos de imponer una solución militar a la crisis centroamericana, empujaba a los estrategas políticos del régimen panameño a confiar que el Presidente Bush mostrase moderación ante el *impasse* al que había llegado la coyuntura istmeña. Recordemos que Noriega había mantenido vínculos laborales con Bush cuando este último fue director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (C.I.A.) entre 1975 y 1976. Por ello, el gobierno panameño más bien anticipaba una negociación que no implicara capitular ante Washington. Además, personeros del régi-

men de Noriega aspiraban a que por esta vía fuera posible asegurar tanto la integridad personal de Noriega ante posibles revanchismos panameños o estadounidenses como la entereza de sus bienes materiales.

Para asegurar esta posibilidad, Noriega incluso pretendió "ayudar" a la campaña presidencial de su antiguo jefe en la CIA cerciorándose de que su controvertida figura no se convirtiese en un elemento discordante entre los candidatos presidenciales durante la campaña electoral de Estados Unidos de 1988.[5] Recordemos que Noriega fue Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) entre 1983 y 1989, y en esa calidad también fue depositario del poder político y militar del país y objetivo visible de la política de Estados Unidos hacia Panamá. Con la intención de apoyar las pretensiones electorales de Bush, Noriega manipuló los periódicos oficialistas a favor de su supuesto enemigo durante la campaña electoral e incluso, durante el breve período posterior a su elección al solio presidencial de Estados Unidos. Con ello, Noriega quiso dejar bien claro a sus opositores panameños que la elección de Bush a la presidencia no constituía peligro alguno a su posición como jefe militar.

¿Por qué Noriega ayudó a la campaña electoral de quien luego ordenó atraparlo durante la invasión a Panamá?. La complacencia gubernamental para con la elección de Bush a la presidencia se explica por el razonamiento imperante dentro del círculo cercano a Noriega. Para los allegados a Noriega, el conflicto con Estados Unidos lo habían causado extremistas conservadores en Washington que se habían opuesto a la firma de los acuerdos canaleros de 1977 y de su posterior ratificación por el Senado en 1978, que para este momento pretendían crear una situación de inestabilidad en Panamá para justificar la no entrega al gobierno istmeño de las instalaciones canaleras y las bases militares. En la medida que sí existían divisiones internas en la burocracia en Washington en torno a la cuestión panameña, los gobernantes del país centroamericano no intentaron formular alguna estrategia coherente que le permitiera solventar la crisis en las relaciones panameño-estadounidenses. Ellos esperaban que los grupos reacios a lanzarse a una batalla frontal contra el régimen de Noriega lograrían imponerse, tarde o temprano.

Las medidas de apoyo de Noriega hacia Bush durante el período electoral de 1988 en Estados Unidos tenían, paradójicamente, contrapartida en Washington. En mayo de 1988 destacados personeros del Pentágono y del Departamento de Estado le ordenaron al entonces Jefe del Comando Sur del ejército norteamericano en Panamá, Gral. Fred Woerner, reducir la posibilidad de un conflicto con las fuerzas militares panameñas mientras durara el torneo electoral, con la intención de evitar que los sucesos en dicho país aparecieran en los noticieros televisivos en Estados Unidos. Esta política quería evitar que una circunstancia como las que se querían prevenir contribuyera a resaltar las fallas de la administración Republicana a la que Bush estaba indisolublemente ligado como vicepresidente de Ronald Reagan (1981-1989).[6]

A mediados de 1988 era evidente que el Gral. Noriega confiaba en el éxito de las pretensiones electorales de su ex-jefe de inteligencia en su búsqueda por la presidencia de Estados Unidos. Noriega esperaba que Bush agradeciera no revelar secretos importantes que representarían, al menos, fuertes escándalos para la clase política norteamericana. Noriega también contribuía con recursos monetarios a la campaña electoral de Bush a través de uno de sus socios, Carlos Duque, quien posteriormente figuró como candidato oficial del régimen panameño para la presidencia en las elecciones de mayo de 1989 en Panamá. Para ayudar a la elección de Bush, Noriega también se negó a proporcionarle al contrincante Demócrata, Michael Dukakis, información que pudiese utilizar en su campaña electoral contra el candidato Republicano.[7]

Noriega veía en Bush a un aliado, sino principal, al menos secundario, que al asumir la investidura presidencial le permitiría salir exitosamente del antagónico escenario panameño. Evoquemos que para Noriega y sus asesores esta crisis había sido fraguada mayormente por los ideólogos "duros" de la saliente administración Reagan. Por ello, el supuestamente mesurado Bush seguramente le conferiría entonces al régimen panameño suficiente apoyo como para encontrar la buscada "salida negociada" al conflicto. Las expectativas de Noriega se fundamentaban en que, a pesar de que la administración del "duro" Reagan no había llegado a articular ninguna otra demanda que no fuera la de pedirle la renuncia incondicional

como Comandante militar, su relación con Bush le permitiría conseguir concesiones de Washington para solventar con mayor éxito las acusaciones de estar vinculado al narcotráfico que se le hacían desde territorio estadounidense, y posibilidades mayores de continuar como figura política y militar destacada en su país.

A falta de propuestas concretas y significativas de E.U. hacia la crisis panameña durante los últimos años de la administración Reagan y los primeros meses de la presidencia de Bush, se sumaban a la idea de que Washington no iría más allá de plantear ciertas diferencias a aquellos sectores de la oposición política istmeña que desde las frustradas elecciones generales de mayo de 1989 le reprochaban a Estados Unidos no haber lanzado una intervención militar para derrocar a Noriega. A su vez, la incapacidad de este sector político opositor de conseguir para su causa el apoyo activo y decidido de las masas panameñas obstaculizaba el diseño de los planes norteamericanos para el país, en la medida que Washington encontraba en estos grupos interlocutores débiles, en su política hacia Panamá.

Pero todavía un sinnúmero de circunstancias parecían impedir que Washington optara por la "via dura" hacia Panamá. La oposición panameña al polémico militar estuvo constituída principalmente por dirigentes empresariales conservadores con escasa capacidad de convocatoria hacia mas allá de sus cerrados círculos familiares y socios comerciales. La sola posibilidad de que Estados Unidos interviniera militarmente en el istmo, servía a su vez para desinteresar a estos grupos conservadores en formar alianzas con amplios segmentos del país, porque entendían que dicha intervención de sus socios del Norte los llevaría al poder.[8] Pero mientras este impasse continuara, la lógica de la coyuntura señalaba menos posibilidades para que Estados Unidos interviniera militarmente en el istmo, porque no se estaban forjando condiciones locales sobre las cuales establecer bases sólidas para justificar dicha acción.[9]

Asimismo, los obstáculos que encontraba el desempeño de la política exterior de Estados Unidos se añadían a diversos sucesos que emanaban del escenario internacional cuyo manejo tendría que contribuir a otorgarle cierta prudencia a la administración Bush en su primer año de gobierno. Llegar a

esta conclusión, si bien no ausente de riesgos, tampoco se hacía sobre el vacío. Obviamente, no había razones suficientemente importantes como para que Estados Unidos abandonase inmediatamente las formas mas cínicas y "duras" de ejercer su poder en el mundo, pero al menos sí una coyuntura internacional que indicaba la necesidad de alterar las premisas sobre las cuales el Pentágono había construído su agenda de prioridades globales. A fines de diciembre de 1988, antes de asumir la presidencia, Bush anunció que perseguiría un "enfoque flexible" hacia Centroamérica; en enero siguiente, incluso anunció que tendría conversaciones directas con el gobierno sandinista de Managua.

Además, el unilateralismo y el fuerte peso del conservadurismo ideológico en las políticas de Reagan habían traído, entre otros, escándalos como el Irán-Contras, la incapacidad para forjar políticas junto a aliados regionales y la demora en construir un consenso bipartidista en cuanto a la política exterior y la política comercial y presupuestal dentro de las estructuras del poder legislativo en Washington. Consecuentemente, la considerable experiencia diplomática de George Bush como embajador en China durante la *entente* desarrollada por la administración de Richard Nixon a principios de la década de 1970 y como su embajador en las Naciones Unidas, así como su experiencia al frente de la CIA durante la presidencia de Gerald Ford (1974-1976) y expresiones en este sentido en sus discursos durante la campaña electoral en 1988 anunciaban, cuando menos, tendencias distintas a las anteriormente impuestas por la saliente administración Reagan.

Naturalmente, diversos analistas destacaban que el surgimiento sorpresivo de un nuevo entorno internacional forzaría a Estados Unidos a alterar su patrón de conducta exterior en beneficio de las soberanías de países débiles del tercer mundo. El nacimiento e impulso del "desafío humanista" soviético debía responderse al menos con cambios en el discurso y con cambios en los instrumentos de la política exterior. A partir de los nuevos desarrollos en la Unión Soviética: afirmación del liberalismo político y del individualismo como referentes de la acción estatal y colectiva, el universo simbólico occidental fue momentáneamente desarmado para continuar justificando

sus programas bélicos y otras políticas basadas en el peligro que la potencia comunista tenía sobre las libertades democráticas occidentales.

Así, de igualar Bush la actitud de su homólogo Mijail Gorbachov frente a su área de influencia, era de esperar que Estados Unidos no actuara militarmente para resolver asuntos políticos, especialmente en la (discursivamente) anti-intervencionista América Latina. Las transformaciones del Bloque Comunista dificultaban el que Washington mantuviera los viejos esquemas de política exterior basados en el discurso este-oeste, por lo que reaccionar ante el nuevo escenario mundial alentarían a Bush a alejarse del firme unilateralismo reaganiano y lo acercaría a utilizar medios no desideologizados y no-bélicos para conducirse hacia el mundo.

¿Era posible esto?. La serie de nombramientos en posiciones claves dentro de la estructura de política exterior de Estados Unidos mostraba que Bush había abierto un espacio considerable para ajustarse a la nueva configuración mundial: En este sentido la nominación de James Baker, Secretario del Tesoro bajo la administración Reagan, como Secretario de Estado, delineaba un cambio importante en el énfasis — del ideológico al económico — que respaldaría la proyección exterior norteamericana. En la medida que el peso de la deuda externa latinoamericana amenazaba con provocar el desbordamiento de sectores pauperizados en el continente, poner en un segundo plano el manoseado discurso este-oeste para priorizar problemas de envergadura apuntaba a un alejamiento de la ideologizada y maniquea visión del mundo reaganiana, hacia la búsqueda de nuevas conceptualizaciones probablemente ajustadas a la nueva realidad mundial.

De hecho; varios de los nombramientos de Bush en posiciones claves de su gabinete mostraban la certeza de estas consideraciones. El nombramiento de Lawrence Eagleburger como Subsecretario de Estado indicaba un retorno parcial del equipo de Henry Kissinger (promotor de la *realpolitik*), y la salida definitiva de Elliot Abrams como encargado de los Asuntos Interamericanos representaba un adiós al conservadurismo "duro" que había contribuído a obstaculizar el desempeño exterior norteamericano, particularmente en Centroamérica. Colocar al Demócrata y pro-Contra Bernard Aronson

como remplazo de Abrams señaló además el paso inicial hacia la búsqueda de un consenso doméstico en materia de política exterior que le permitiera a Bush resolver los problemas que en este aspecto había encontrado su predecesor. Por último, si bien la nueva administración mostró no tener definido un proyecto para América Latina al demorarse no menos de cuatro meses para colocar a varios de los principales responsables de la política hacia la región en el Departamento de Estado, el Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional e incluso, en las principales embajadas del continente, al definir inicialmente una posición hacia América Latina el presidente Bush impuso la búsqueda de acuerdos consensuados, bipartidistas en lo interno y multilaterales en lo externo.

En efecto, la práctica de la política exterior de Bush en sus primeros once meses de gobierno evidenció precisamente la veracidad de las percepciones sobre la "nueva" moderación de Washington. La concreción del Acuerdo Bipartidista sobre Centroamérica firmado el 24 de marzo de 1989, daba muestras de que Bush pretendía llegar a soluciones consensuadas, no unilaterales. En cuanto al caso panameño, el confiar en comisiones bipartidistas para impugnar el proceso electoral istmeño de mayo de 1989 y, posteriormente, en la Organización de Estados Americanos (OEA) para aislar al régimen de Noriega de sus posibles fuentes foráneas de apoyo, fueron éxitos parciales en ese sentido. Además, la casi simultánea llegada de Carlos Salinas de Gortari al solio presidencial en México, y de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, prometía el establecimiento de canales directos de comunicación interamericanos con países considerados como potencias regionales, en la medida que estos priorizaban acuerdos de reducción de deuda y de intercambio comercial con la potencia del Norte. En octubre de 1989 en la Cumbre Interamericana de San José, en referencia al sentimiento de indiferencia norteamericana frente a latinoamérica percibida por los gobernantes latinoamericanos durante la presidencia de Ronald Reagan, Bush anunció que esta sensación no habría de continuar "nunca más".[10] Para completar el lado militar de esta ecuación, el general Fred Woerner, a cargo del Comando Sur de Estados Unidos, sostuvo que su país necesitaba "desarrollar un equilibrio entre (la) visión estratégica para el hemisferio occidental... los desafíos (de hoy) pueden ser tan indirectos y tan ambiguos que respuestas precavidas serían más productivas".[11]

A pesar de las nuevas circunstancias que Bush enfrentaba en su primer año de gobierno y del nuevo entorno internacional que surgió tras las transformaciones soviéticas, los hechos acaecidos en Panamá demostraron cuan erróneas habían sido dichas percepciones. En su mayoría, los analistas que estudiábamos los nuevos desarrollos habíamos dejado a un lado una consideración cuya validez minusvaloramos: las políticas y las acciones bélicas se producen como resultado de la interacción de varios intereses, independientemente de las coberturas subjetivas que hayan tenido en el pasado o que estén teniendo en el presente. Habíamos deseado que el futuro escenario internacional, y dentro de él, Estados Unidos, se desenvolviera según nuestro optimismo.

Los intereses objetivos de Estados Unidos en Panamá seguían siendo los mismos que lo habían guiado en su relación con dicha nación a través de la historia. Además, las circunstancias que se presentaban en el escenario panameño no guardaban relación con el que se conformaba allende a sus fronteras, aunque sí facilitaba que Estados Unidos tomase decisiones sobre su destino a voluntad. En la medida que las condiciones istmeñas no daban señas de poderse mostrar como una confrontación este-oeste, nuevas coberturas ideológicas fueron surgiendo para justificar las acciones por tomar hacia dicho país. Inclusive, en la medida que gran parte de la coyuntura interna de Panamá no se ajustaba a la que Estados Unidos estimaba indispensable para forzar la ampliación de su presencia en el istmo, los líderes del pentágono optaron por crear condiciones propicias para la obtención exitosa de sus objetivos. ¿Cómo hacerlo?.

Objetivos de la incursión militar

Los motivos aludidos por el presidente Bush para ordenar la masiva incursión militar que se inició el 20 de diciembre de 1989 fueron la cobertura subjetiva dada a los fines reales que su nación tenía para atacar militarmente dicho país centroamericano. Para justificar la magnitud de la invasión ante la

sociedad norteamericana y ante la comunidad internacional que demandaba explicaciones que fueran más allá del resurgimiento del "Gran Garrote" Rooseveltiano, Washington declaró varios propósitos para su esfuerzo bélico. Recién iniciada la incursión sobre Panamá, voceros de la Casa Blanca manifestaron que ésta se hacía (en ese orden) con la intención de salvaguardar la seguridad del Canal de Panamá y la integridad de los Tratados Torrijos-Carter, capturar al Gral. Noriega y llevarlo a territorio estadounidense para ser juzgado por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico, para proteger la vida y bienes de ciudadanos norteamericanos residentes en territorio panameño y para restaurar la democracia en Panamá. Al resaltar estos propósitos, la administración Bush pretendió presentarlos de una manera entendible y loable especialmente para el público estadounidense, con el fin de obtener su aquiescencia inmediata e incondicional: en juego estaba la imagen de la presidencia y del papel de los militares mas que los objetivos declarados.

Al denominar Causa Justa el operativo militar, la Casa Blanca sintetizó en una frase simple los objetivos y consecuencias del operativo de la invasión. Puntualicemos que la noción de justicia opera como un importante referente de interpelación en la cultura política norteamericana; consecuentemente, una lección aprendida por los estrategas militares estadounidenses ha sido la necesidad de que sus soldados, imbuidos de esa cultura política, entiendan porqué se les ha enviado a pelear. Optar por explicarles los motivos verdaderos tras la incursión armada implicaría utilizar términos oscuros que difícilmente pueden ser llevados a la práctica y conducir las tropas a la victoria. La táctica de determinar una frase o concepto que simbolice los propósitos de la intervención armada logró aumentar tanto la efectividad militar como el apoyo de la sociedad civil norteamericana. Causa Justa sirvió así como una frase-choque cuya connotación favoreció la disposición subjetiva de las tropas estadounidenses que recibieron el mensaje y entraron en combate en Panamá. De allí que la fuerza de la frase se encuentre mas bien en su capacidad para envolverse en elementos profundos de la cultura política que en denotar los intereses reales que impulsaron a Washington a ordenar la invasión a Panamá.

La doctrina militar norteamericana se refiere a este tipo de situaciones señalando que "los términos expresan lo que los formuladores de la política quieren que sus conflictos sean, y no el ambiente verídico en el cual tendrán que operar las fuerzas armadas de Estados Unidos".[12] Así, los objetivos declarados no son reales en sí mismos, pero sí efectivos en sus consecuencias militares. Para obtener la aquiescencia del pueblo estadounidense, Bush requería dar a conocer la invasión como una operación con propósitos morales encomiables, para esconder la agresividad y la primacía que intereses estratégicos tuvieron en la decisión de invadir. Por ello es necesario inquirir minuciosamente sobre los objetivos que declaró la Casa Blanca para invadir Panamá, pues un análisis de ellos los revela como absolutamente cuestionables e intencionalmente engañosos.

Las razones declaradas por la administración Bush para justificar la invasión a Panamá y su posterior ocupación no son muy diferentes de las utilizadas por Washington en el primer cuarto de siglo ante las invasiones y ocupaciones a países centroamericanos y del Caribe. Volver a utilizarlas implica que al término de la Guerra Fría, Estados Unidos nuevamente incluye en su discurso referentes simbólicos que ya había usado para envolver sus intereses estratégicos en un período en el que se expandía sobre el resto del continente americano. Al hacerlo, Estados Unidos le dota un comprobado componente subjetivo a su estrategia de guerra para movilizar las opiniones de su pueblo hacia los objetivos estratégicos que determinan su expansión intra y extracontinental.

Al mencionar los propósitos aludidos como supuestos objetivos loables para la intervención, Bush no aclaró cómo esta incursión armada contribuiría a alcanzar los objetivos deseados. Por qué la invasión a Panamá fue considerada como la mejor opción para proteger el funcionamiento del Canal, salvaguardar la vida de estadounidenses, restaurar la democracia y apresar a Noriega — cuando ni existían, ni la Casa Blanca mencionó, hechos previos a la invasión que confirmen que el Canal o que la vida de estadounidenses en Panamá estuviesen en peligro — fueron cuestionamientos que la Casa Blanca nunca respondió cabalmente. Recordemos que la casi totalidad de norteamericanos residentes en Panamá — ex-

cepto unos cuantos periodistas posteriormente heridos o aniquilados en la misma operación — estaban ya custodiados por las fuerzas militares norteamericanas de las bases acantonadas en las inmediaciones de la vía interoceánica. Según el almirante retirado Eugene Carroll, subdirector del Centro de Información para la Defensa en Estados Unidos, en Panamá la situación de violencia anterior a la invasión era "menor de la que existe en Washington, D.C., todos los días".[13]

Obviamente, existían métodos más seguros para salvaguardar la seguridad individual y colectiva de personas en Panamá de los que tuvieran como medida inicial poner a estas personas en un alto grado de peligro. La invasión de Estados Unidos provocó la muerte de cientos de panameños no vinculados a la institución armada local — que por deber nacional e institucional debía intentar repeler la invasión — y las heridas de trescientos estadounidenses y mas de mil panameños, según cifras proporcionadas por el Comando Sur. Inclusive, durante el operativo militar, las tropas norteamericanas no hicieron esfuerzo significativo alguno para proteger a sus conciudadanos civiles. La docena de sus compatriotas que, siguiendo planes previos, fue tomada como rehén por tropas panameñas durante los primeros días del operativo militar, fueron liberadas después por sus propios captores al notar que no existía liderazgo militar panameño con un plan definido hacia ellas.

Poco tiempo antes, la protección de la vida de estadounidenses en el exterior, si bien un constante motivo para justificar la mayor parte de las intervenciones militares norteamericanas en el extranjero, no estaba dentro de las preocupaciones reales de Washington. De hecho, el 2 de noviembre anterior a la invasión, una monja estadounidense de la Orden Ursulina fue secuestrada en Guatemala por efectivos militares, golpeada, abusada sexualmente y quemada con cigarrillos ciento once veces sin que ello haya provocado reacción alguna de parte de la administración Bush.[14] Años antes, en El Salvador y en las porciones de Nicaragua en donde las fuerzas contrarrevolucionarias desafiaban constantemente a las fuerzas gubernamentales, estadounidenses que realizaban trabajos religiosos y humanitarios fueron muchas veces ultrajados, arrestados y a veces, deportados, sin que ello haya provocado en Washington alguna reacción mínimamente similar.

Durante más de treinta meses, la Casa Blanca mantuvo sanciones económicas y acosó diplomáticamente al régimen de Noriega. Por ello, no tiene sentido la afirmación de que el supuesto riesgo en que se encontraban los ciudadanos estadounidenses en Panamá días antes de la masiva intervención militar fue el factor explicativo de una política de mediano y largo plazo iniciada por Estados Unidos en 1987. Al año siguiente de la invasión, la muerte del ciudadano estadounidense Michael Davis por efectivos militares guatemaltecos estuvo muy lejos de propiciar en la administración Bush una reacción parecida a la de Panamá. Aún más, la muerte del soldado de la armada norteamericana Child Jaile Mikael a manos de un efectivo de la Policía panameña en noviembre de 1991 provocó solo una protesta verbal del embajador estadounidense.

En esta secuencia, la administración Bush fue decididamente selectiva en determinar qué tipo de circunstancia constituye una agresión a ciudadanos norteamericanos. Para ello, la administración Bush se basó principalmente en el uso que le pueda dar a dichos incidentes para los fines de su política exterior. El 13 de noviembre de 1988 un marino estadounidense fue severamente golpeado y amenazado de muerte por efectivos de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) dirigidas por Noriega, un incidente cuya ocurrencia reconoció el gobierno panameño sin ofrecer ninguna excusa. Sin embargo, fue hasta *un mes después* cuando el Departamento de Defensa de E.U. le envió *una carta* a las autoridades panameñas protestando por el suceso. Según oficiales del Pentágono, la protesta se hizo sólo después de que el incidente había sido investigado minuciosamente. En la carta protesta las autoridades norteamericanas se preguntaron si este suceso mostraba ser parte de "una campaña de intimidación dirigida contra las fuerzas de Estados Unidos o una pérdida de control sobre los elementos de las fuerzas de seguridad pública".[15] ¿Por qué no investigaron minuciosamente la muerte del soldado norteamericano que supuestamente ameritó la incursión armada sobre Panamá (la invasión se produjo sólo tres días después)? Evidentemente, esta agresión de tropas panameñas a efectivos norteamericanos no tenía un uso inmediato, especialmente cuando Bush todavía no asumía la presidencia.

El gobierno de Estados Unidos tampoco pretendió justificar la magnitud de la invasión en la que murieron miles de personas — o aún las pocas centenas, según estimaciones hechas por las propias fuerzas invasoras — para capturar a *una persona acusada, todavía no inculpada*, de delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes. El propósito de llevar al acusado a los tribunales de Estados Unidos para que este sea juzgado no guarda proporción con las reacciones de la Casa Blanca durante las administraciones de Reagan y Bush frente a comprobadas actividades del narcotráfico cometidas por militares latinoamericanos — Honduras, Paraguay, Bolivia y la Contra en Nicaragua — de alta jerarquía y alto grado de alianza con los objetivos norteamericanos de seguridad hemisférica, cuya señalación jamás tuvo el mismo alcance ni la misma importancia dentro de la agenda gubernamental en Washington. De hecho, siete meses después de la invasión, el Departamento de Justicia todavía no había encontrado evidencias contundentes que involucraran al militar panameño con el narcotráfico.[16]

Existe también un espacio considerable de tiempo entre el supuesto descubrimiento de la vinculación de Noriega con el narcotráfico y la fecha escogida para acusarlo y pretender atraparlo. Al igual que otros autores que han investigado la relación de Noriega con el gobierno de Estados Unidos, John Dinges mostró que servicios de la agencia antinarcóticos estadounidense se cercioraron a mediados de la década de 1970 de dicha relación, pero decidieron no proceder por "razones de seguridad nacional".[17] Para esta época Noriega era el hombre de la CIA en la institución armada panameña, por lo que los dirigentes del aparato de inteligencia de E.U. prefirieron no malograr dicha relación. Nuevamente en julio de 1984 se "destapó" la vinculación Noriega-Cartel de Medellín,[18] cuando la administración Reagan simultáneamente preparaba una acción militar contra Nicaragua, para la que esperaban encontrar la cooperación de Noriega. Por ello, Estados Unidos optó nuevamente por no alterar las cordiales relaciones con el controversial militar.

La política de Estados Unidos contra el narcotráfico ha sido deliberadamente ambigua. El congresista por Massachusetts, John Kerry, destacó esta interesada ambigüedad desde 1986,

cuando Washington empezó a ventilar el tema del narcotráfico y su relación con el sistema de inteligencia norteamericano. De hecho, invocando razones de seguridad nacional, el Pentágono presionó y obtuvo la cancelación de las investigaciones impulsadas por Kerry. Según destacaron medios de prensa, en estas se descubrió que entre 1982 y 1984 el Cartel de Medellín transportaba las armas que la CIA enviaba a los Contrarrevolucionarios que atacaban al gobierno de Managua desde Honduras, en cuyo viaje de regreso a Colombia cargaban cocaína que luego la CIA vendía en Estados Unidos para financiar la compra y entrega de armas destinadas a los mercenarios nicaragüenses. Y esto se hacía cuando el Congreso de Estados Unidos había emitido una prohibición a todo tipo de apoyo a dicho grupo opositor.[19]

A su vez, es preciso notar que los Tratados Torrijos-Carter, que rigen la relación Panamá-Estados Unidos en materia canalera, no incluyen cláusula alguna que le permita a Estados Unidos intervenir en los asuntos internos panameños. Los acuerdos canaleros se refieren principalmente al reconocimiento inmediato de la soberanía panameña sobre la franja canalera y a los pasos que Estados Unidos tomaría para traspasarle a Panamá la administración del Canal. Entre lo acordado figura un Tratado de Neutralidad supuesto a garantizar el uso del Canal para todas las naciones del mundo tanto en tiempos de paz como de guerra.

Pero antes de la ratificación de los acuerdos, el Senado de Estados Unidos sancionó la Enmienda De Concini, reservándose el derecho de intervenir en el área canalera *cuando el contínuo funcionamiento de la vía interoceánica estuviese en peligro*, para mantenerlo en operación. A la vez que aprobaba este addendum al tratado, sin embargo, el Senado emitió una resolución para apaciguar las acusaciones de intervencionismo de la contraparte panameña. En esta el Senado sostenía que la Enmienda De Concini "no será interpretada como derecho de intervención en los asuntos internos de la República de Panamá ni como interferencia en su independencia política o integridad soberana". En esta ocasión Panamá obtuvo un Acuerdo Conjunto de Interpretación que se le añadió al Tratado de Neutralidad, cuya letra destacaba que "Estados Unidos no tiene el derecho, ni intentará tenerlo, de intervenir en el proceso político o los asuntos internos de Panamá".[20]

Con la invasión y con las medidas punitivas que *Estados* Unidos tomó contra Panamá durante los treinta meses anteriores a la incursión militar, Washington desconoció las provisiones del tratado canalero que debían regir su conducta en relación a la administración y defensa de la vía interoceánica. Sobra decir que ninguna de las dependencias del gobierno norteamericano mostró cómo el canal de Panamá fue puesto en peligro tal que fuera imperativa la intervención armada y la ocupación de todo el territorio panameño. Las tropas norteamericanas en el Canal de Panamá — oscilan entre diez mil y doce mil — y su equipo bélico ya eran más que suficientes para repeler cualquier intento de obstaculizar la adecuada operatividad de la vía interoceánica.

Noriega tampoco había intentado impedir el contínuo funcionamiento del canal en los seis años que estuvo al frente de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP). De haberlo hecho, los sofisticados mecanismos de comunicación e intercepción con los que Estados Unidos cuenta en Panamá y la amplia cooperación en todos los órdenes que la institución militar panameña tuvo con su contraparte estadounidense, aún a pesar del diferendo, habrían logrado impedirlo. De hecho, desde su inauguración en 1914, esta vía se mantuvo siempre abierta hasta que Estados Unidos invadió a Panamá el 20 de diciembre de 1989 y la cerró.

La justificación de que el Canal estaba amenazado a partir de las nuevas circunstancias surgidas tras un discurso de Noriega el 15 de diciembre de 1989 fue decididamente manipulado por la administración Bush con el fin de utilizarlo para sus objetivos hacia el istmo. Ese día, una Asamblea de Representantes nombrada por Noriega le confirió supuestos poderes extraordinarios con el declarado fin de afrontar la situación creada por las sanciones decretadas por la administración Reagan, que todavía eran vigentes. La Asamblea nombró a Noriega "Jefe de Gobierno" — un título inexistente en la constitución panameña — emulando con ello la ley que en ese sentido emitió la Asamblea Constituyente de 1972 para con el Gral. Omar Torrijos, Jefe de Gobierno de Panamá entre 1972 y 1978.

¿Noriega le declaró la guerra a Estados Unidos?. En su discurso ante la Asamblea, Noriega afirmó que "Panamá está en

estado de guerra *por* la situación creada por Estados Unidos . En el mismo, Noriega pidió "reforzar el frente interno para mejorar nuestra resistencia" a través de acciones como las de "enfrentar a la gente, púlpitos, universidades, encuentros profesionales y grupos de negocios, tanto como sea posible", según reportó el Sistema Informativo de Emisiones Extranjeras (Foreign Broadcast Information System, FBIS) del Departamento de Estado de Estados Unidos, en su reporte diario del 18 de diciembre de 1989.[21] Para quien tuvo acceso a las palabras de Noriega — el Departamento de Estado lo tuvo — difícilmente estas podían interpretarse como un llamado a la acción bélica, a menos que se le haya querido dar una interpretación distinta para justificar una política determinada.

Inmediatamente después del discurso de Noriega, en Estados Unidos se minusvaloró la referencia a la "declaración de guerra" a tal punto que esta nueva situación fue reportada dos días después en el diario *New York Times* en un artículo dedicado a analizar las limitaciones de la oposición a Noriega en Panamá.[22] Incluso el nivel de alerta de las tropas norteamericanas acantonadas en Panamá no fue alterado a raíz de la supuesta declaración de guerra. En este sentido el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Lawrence Eagleburger, llamó a estas declaraciones "una charada, no tienen sentido".[23] Un oficial del Departamento de Estado añadió que el nombramiento de Noriega como Jefe de Gobierno "no significa nada" y lo consideró una situación tan insignificante que, dijo, personeros de la Casa Blanca no informaron inmediatamente al Presidente Bush sobre el suceso.[24]

Las referencias sobre la poca importancia de las afirmaciones de Noriega reflejaban el sentir de Washington hasta que el presidente Bush decidió utilizarlas para justificar el lanzamiento de la invasión a Panamá. En un principio, Marlin Fitzwater, vocero de la Casa Blanca, ridiculizó las afirmaciones de Noriega, enfatizando que no eran importantes. Pero cuando se dió el suceso en el que murió un efectivo militar estadounidense y el acoso a otros oficiales de Estados Unidos poco tiempo después, el mismo Fitzwater se refirió a ellas como parte de "un patrón de violencia indiscriminada" iniciado por Noriega cuando declaró que existía un estado de guerra entre Panamá y los Estados Unidos.[25] En conferencia de prensa el día del

inicio de las hostilidades contra Panamá, el Secretario de Estado James Baker se refirió a la supuesta declaración de guerra y la responsabilizó de los actos de violencia posteriores iniciados por Estados Unidos. Al día siguiente de la invasión, el 21 de diciembre, el presidente Bush también se refirió a este incidente como uno de los factores que lo hicieron decidir la incursión militar sobre Panamá.

Si la administración Bush tomó al pie de la letra las declaraciones de Noriega en la que señalaba que Panamá estaba en "estado de guerra", asimismo debía ponerle atención a una afirmación en éste discurso del citado militar en el que aseguraba que, a pesar de la situación por la que el país atravesaba, el Canal "no será explotado". Noriega hacía referencia a ésta opción conociendo que los estrategas norteamericanos temían esta posibilidad. La opción de explotar las instalaciones canaleras permanecía dentro de la estrategia de defensa militar panameña ante posibles y previsibles enfrentamientos con Estados Unidos, desde que en 1978 el entonces Jefe de Gobierno Omar Torrijos preparó a sus fuerzas armadas para ello si los Tratados Canaleros firmados junto a Carter en septiembre de 1977 no eran aprobados por el Senado norteamericano.

El objetivo de "restaurar" la democracia en Panamá también es, obviamente, similarmente cuestionable como motivo para la invasión. Revisar la historia de las intervenciones norteamericanas en América Latina implica notar que esta es suficientemente amplia como para mostrar que la regla ha sido esencialmente la contraria. Estados Unidos reconoció, apuntaló, financió y armó las distintas dictaduras militares que emergieron en las décadas de 1960 y 1970 — sin menoscabo de las que instaló durante la primera mitad del siglo — en las que las de Somoza, Pinochet y Stroessner son sólo algunas de las más conocidas por haber constituído regímenes severamente represivos. Aún más, la voluntad de imponer criterios de conducta a regímenes que han diferido de las orientaciones básicas del complejo político-militar norteamericano, independientemente de la legitimidad democrática de estos, ha sido preponderante en el accionar estadounidense para con la mayoría de los países del hemisferio. En efecto, la anulación de las elecciones de mayo de 1989 por el régimen de Noriega no

comportaba nada sustancialmente ajeno a la orientación "democrática" del militar panameño alabada por el Secretario de Estado George Shultz poco después del amañado torneo electoral de 1984. La violencia que acompañó el proceso electoral de 1989 tampoco fue significativamente diferente del de 1984 como para que Estados Unidos quiera ejercer con alguna credibilidad relativa su autoconferido papel de guardián de la democracia en la región.

Al no encontrar la coyuntura propicia para que los propósitos declarados por la administración Bush tuvieran sentido con la intervención a Panamá, Washington se ocupó de crear el escenario adecuado para ello. El discurso oficial contra el gobierno panameño ya había calado lo suficiente como para que amplios sectores en Estados Unidos, dado un suceso que supuestamente lo amerite, aprobaran el uso de medidas de fuerza contra Panamá. Sin embargo, era todavía más indispensable que el curso de los acontecimientos en el istmo no se alterara tanto como para impedir que el Pentágono pueda emprender una "pequeña" guerra para lograr sus objetivos. Ello podía ocurrir si los panameños de diferentes facciones políticas, vía negociación o por la fuerza, derrocaban a Noriega independientemente de lo que Estados Unidos le reservaba para el país. Asimismo, cuando el aparato bélico norteamericano estuviese listo para iniciar el operativo en Panamá, sería necesario crear otra circunstancia para que el pueblo norteamericano no tuviera alguna duda de que la decisión de Bush era la apropiada.

Pasos en la creación del escenario para la invasión

La reacción de la administración Bush frente al intento de golpe que miembros de la oficialidad joven de las FDP realizaron contra Noriega el 3 de octubre de 1989, demuestra que para Estados Unidos no era suficientemente importante la sola captura y el derrocamiento del militar panameño. Washington estaba pendiente de la manera como Noriega dejaría el poder y la forma como las estructuras políticas panameñas quedarían conformadas después de su partida. Washington quería definir las condiciones y formas de salida del militar pana-

meño, porque ello le facilitaba controlar los acontecimientos con una ventaja inicial: impedir que la oposición a Noriega, si panameños no subordinados a Washington lo separaban del escenario político, tuviera que negociar con sectores políticos y militares del oficialismo al perder su principal bandera de lucha, y así, tener que compartir el poder. De haber ocurrido así, los planes de Estados Unidos para el istmo hubieran quedado bloqueados, al menos temporalmente. Recordemos que la estrategia militar tiene como objetivo lograr definir el campo enemigo. En el caso panameño, una salida de Noriega conforme a las luchas políticas internas no necesariamente implicaba forzar al ejército panameño a subordinarse al Pentágono como sí lo sería si Noriega salía tras una intervención militar.

La forma como Noriega dejaría el poder en Panamá influiría determinantemente sobre el futuro del escenario istmeño. Al instalarse un gobierno distinto al de Noriega, si este surgía de circunstancias domésticas, tendría la potencialidad de permanecer independiente de los intentos de Estados Unidos por imponerle una serie de criterios de envergadura para Washington. A su vez, la manera como se instalaría un nuevo gobierno también influiría en la percepción que los actores internacionales tenían sobre la primera potencia militar del orbe. La captura de Noriega implicaba que, simbólicamente, Estados Unidos viese afirmada su posición y sus pretensiones sobre la región latinoamericana. La invasión a Panamá había sido justificada discursivamente por la captura del militar panameño y era la carta de presentación de Estados Unidos frente a sus competidores y frente a sus aliados occidentales que, siendo testigos de sendas transformaciones globales, ratificaron la voluntad norteamericana de permanecer como potencia mundial. La manera como Washington se comportó frente al intento de golpe que sufrió Noriega en octubre de 1989 es un claro ejemplo de ello.

El 3 de octubre de 1989 un grupo de oficiales panameños dirigidos por el Mayor Moisés Giroldi — uno de quienes lograron frustrar una previa intentona golpista contra Noriega en marzo de 1988 — promovieron un golpe institucional con el fin declarado de deponer al controvertido militar y pasar a retiro a su estado mayor. Como medida inicial de apoyo, un contingente del ejército de Estados Unidos bloqueó algunas

vías de acceso hacia el Cuartel Central de la ciudad de Panamá, inmobilizando temporalmente con ello las unidades militares panameñas acuarteladas en Fuerte Amador (cercano al Cuartel Central, en el que se encontraban tropas leales a Noriega). Sin embargo, Estados Unidos levantó esos obstáculos pocas horas después cuando los militares golpistas todavía no habían logrado controlar la situación.

No obstante, no es menos cierto que los oficiales golpistas cometieron errores tácticos que les impidieron consolidar el golpe contra Noriega. Ellos no aseguraron el apoyo de otras unidades que estaban mejor entrenadas. Ante estas circunstancias, era de esperar que Noriega lograra doblegarlos: Giroldi y sus hombres se rindieron sin librar hasta el final la batalla que habían iniciado. Para los golpistas, su incapacidad militar fue fatal, pues luego de que unidades leales a Noriega rodearon el cuartel central y forzaron la rendición de Giroldi y sus acompañantes, Noriega ordenó su ejecución.

Pero si los golpistas perdieron el apoyo logístico de Estados Unidos, es porque aquella potencia no deseaba la salida de Noriega bajo las condiciones que ellos proponían. En este sentido el reportero Andrew Rosenthal del *New York Times* reportó que "la Casa Blanca consideró apoyar militarmente el levantamiento panameño pero lo descartó porque se sentía inquieta con el liderazgo de los rebeldes".[26] Por ello el Gral. Marc Cisneros, jefe del Ejército Sur — con sede en Panamá — optó por obstaculizar la ayuda prometida demorando el encuentro con emisarios de los golpistas a medida que se gestaba el operativo.[27] La excusa posterior dada por Cisneros: temor ante la reacción de la comunidad internacional por el intervencionismo de Estados Unidos;[28] y por el Secretario de Estado Baker: se utilizarían las tropas de Estados Unidos sólo si estas podían usarse sin derramamiento de sangre y sin causar graves pérdidas,[29] muestran ser absurdas al notar las consecuencias que su intervención ocasionó dos meses y medio más tarde, en la que demostraron no haberles preocupado ni las reacciones internacionales ni el derramamiento de sangre causado por sus tropas y su armamento.

La administración Bush, repito, no deseaba que Noriega fuera derrocado bajo condiciones creadas por los panameños.

Declarar como objetivo atrapar a Noriega era una medida táctica que debía ser llevada a cabo sólo como parte del propósito de la acción bélica: tomar a Panamá y tomar control de sus instituciones. Si Estados Unidos hubiera optado por enviar un contingente que secuestrara a Noriega y lo llevara a Estados Unidos — una operación "quirúrgica" — nada garantizaba que los sucesores de Noriega entregaran el poder a la oposición o que no surgiera de las filas de las FDP alguna figura que buscara imprimirle un giro independiente tanto a su institución como al gobierno que se formaría tras la caída del general. Aún más, era posible que el contingente fallara en su cometido, y forzaran a Noriega a tomar rehenes estadounidenses (para protegerse de los ataques estadounidenses) o a iniciar actividades guerrilleras para atacar objetivos de seguridad norteamericanos en el istmo. Diversos analistas y estrategas militares del Pentágono lo han confirmado.

Al respecto, el Gral. Thomas W. Kelly, director de Operaciones Especiales del Departamento de Defensa, señaló que "si hubiéramos ido con un golpe "quirúrgico" y sacáramos así a Noriega, probablemente tendríamos a algún matón detrás dirigiendo las FDP, y en cuestión de tiempo hubiéramos estado donde empezamos". Según Kelly, para el 3 de octubre personeros de los servicios de inteligencia de Estados Unidos ya habían planificado la invasión, "*un plan... llamado Blue Spoon ...porque sabíamos que podríamos ir. Pero después del fallido golpe contra Noriega el plan fue revisado y algo restructurado... lo que fue cambiado fue el método de inserción — aerotransportado — y la cadena de comando*".[30] El Gral. Maxwell Thurman había tomado posesión del Comando Sur escasos días antes con la tarea de revisar los planes ya existentes para la invasión, por lo que no debía colaborar con ningún operativo que le desviara de los objetivos planteados. Según Thurman, el plan usado para la Operación Causa Justa fue una versión revisada de otro plan que *ya existía cuando tomó posesión el primero de octubre.*[31] Según el diario *Los Angeles Times*, fue el General Colin Powell, recién nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto días antes de la intentona golpista, "admirado por ... su habilidad para estudiar movimientos militares en relación a sus consecuencias políticas" quien le aconsejó a Bush no responder al pedido de ayuda de los oficiales panameños cuando se rebelaron contra Noriega en octubre de 1989.[32]

En este contexto cobra importancia el que en el día mismo del fallido golpe contra Noriega, el ex-subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos y fiel exponente de la línea "dura" contra Panamá durante la administración Reagan, Elliot Abrams, apareció en las pantallas de televisión de Estados Unidos explicando que en cierta medida fue mejor que los golpistas no triunfaran en su intentona, "porque estos eran peores que Noriega". Así, Abrams hizo referencia a que los golpistas tenían una trayectoria conocida por los servicios de inteligencia norteamericana que los hacía poco confiables para delegar en ellos los objetivos de seguridad nacional norteamericanos en la región. Los golpistas no proyectaban entregarle el poder a los aliados de Washington, por lo que este intento de golpe no fue motivo de satisfacción para la administración Bush.

A pesar de que el líder golpista Giroldi había tenido contactos con funcionarios militares norteamericanos y de la CIA antes de efectuarlo, la administración Bush no lo consideró confiable y optó por no colaborar plenamente en este intento que, si hubiese sido exitoso, habría sacado a Noriega del poder con poco o ningún derramamiento de sangre. Según Kempe, oficiales del servicio de inteligencia militar de Estados Unidos que se encontraban en Panamá durante la intentona sostuvieron que en el momento del golpe ellos consideraron fácil preservar la victoria de Giroldi, ya que "*sólo se habrían necesitado dos o tres blindados para bloquear las únicas tres carreteras que habría podido tomar el Batallón 2000* (de élite)... *Sólo unos pocos aviones A-37 trazando círculos en el aire habrían sido suficientes para detener a los Machos de Monte* (compañía militar especializada) *que llegaron en avión. Cualquier señal de intervención norteamericana habría asustado a la mayoría de las tropas leales a Noriega*".[33]

Pero la desaparición de Noriega del escenario político panameño mediante un golpe de Estado o mediante un ataque "quirúrgico" le quitaba justificaciones a Estados Unidos para su intervención y dejaba en pie una dirigencia política y militar que no garantizaba plegarse a los objetivos de la Casa Blanca. Por ello, si Estados Unidos ayudaba a los golpistas, los planes

para invadir Panamá hubieran perdido su justificación principal: la captura de Noriega. No obstante, un apoyo decidido, aunque fuese de poca envergadura, habría significado un triunfo contundente para el golpismo. Con la invasión a Panamá, Estados Unidos mostró no preocuparle las reacciones contrarias a su intervención militar, por lo que interceder a favor de los oficiales contrarios a Noriega en esta ocasión era una decisión política que, si era tomada, debía planearse consecuentemente. Sin embargo, las repercusiones de optar por esta vía no aseguraban que Estados Unidos lograse los objetivos políticos para los que se planificaban ya los preparativos bélicos para una incursión militar en el país.

De hecho, el sofisticado armamento que se utilizó en el operativo podía usarse incluso para este tipo de operaciones con objetivos limitados. Según sus creadores, el cazabombardero F-117 Stealth que el Pentágono utilizó en la invasión a Panamá puede ser usado en una gama de opciones dependiendo del objetivo perseguido, gracias a sus características peculiares. Precisamente, una de estas opciones es el "golpe quirúrgico" descartado por los estrategas militares norteamericanos para afrontar el caso panameño porque esta acción no aseguraba instalar en Panamá una estructura de poder acorde con sus intereses. Otra posibilidad es usarlo para el rescate de rehenes. Sin embargo, según un especialista en el cazabombardero, una de sus funciones principales es la de apoyar un golpe de Estado, "*dirigido* (contra) *un líder cuyas actividades en apoyo a terroristas o traficantes de droga han finalmente abusado de la paciencia de Estados Unidos*". En este caso, aconsejó el especialista, "*una facción creíble ha ofrecido removerlo, pero sin alguna asistencia sus posibilidades no son buenas*".[34]

Por ello y por las razones aludidas, en la medida que la facción que pretendía relevar del poder a Noriega no era "creíble" desde el prisma de los requerimientos estratégicos de corto y largo plazo instituidos por la administración Bush, el esfuerzo contra Noriega no debía apoyarse. El derrocamiento de Noriega solo era procedente si conllevaba la plena absorción de la autonomía panameña a los intereses estratégicos estadounidenses. Averiguaciones previas no culminadas de algunos miembros del Congreso en Washington apuntaban en el sentido de que no se brindó suficiente apoyo a los golpistas panameños porque de haber tenido éxito, se habría preservado la institución armada y Estados Unidos no tendría pretexto para invadir.

Por todo ello, oficiales estadounidenses eligieron no cumplir con los ofrecimientos hechos al grupo de golpistas que pretendieron derrocar a Noriega el 3 de octubre de 1989. Líderes del golpe que sobrevivieron a esta intentona golpista más tarde dijeron que oficiales de Estados Unidos les prometieron mucho más apoyo militar directo del que fue reconocido por la administración Bush. El capitán Javier Licona, uno de los implicados, dijo que sus superiores — ejecutados por Noriega el día del golpe — le aseguraron que Estados Unidos usaría un helicóptero artillado sobre un campo aéreo panameño para prevenir el envío de refuerzos por aire a la ciudad de Panamá, y que también bloquearían, mucho antes de lo que lo hicieron, algunas calles que resultarían clave para el éxito del golpe.[35] Collin Powell, recién nombrado como jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que "*desembarazarse de Noriega debía ser algo que se haría mediante un plan estadounidense, no un golpe semicocido con un líder semicocido*".[36] Con esta frase, Powell hizo evidente que los objetivos políticos delineados por el Departamento de Estado debían obtenerse mediante medidas militares precisas que lo lograran: una unidad de criterios en Washington fundamental para la consistente proyección exterior de Estados Unidos.

Para el Pentágono, Estados Unidos no debía participar en un golpe que llevaría a "otro hambriento de poder" a la jefatura de las fuerzas armadas panameñas. El plan para derrocar a Noriega debía ser más ambicioso: la ofensiva contra las FDP debía ser total, e incluiría la captura de toda la jerarquía militar *y la instauración* del liderazgo civil opositor a Noriega en la presidencia panameña.[37] Por lo mismo, Woerner, jefe del Comando Sur, debía dejar su posición para darle cabida a un oficial que no cuestionara el plan para invadir.[38] Según declaró el coronel Eduardo Herrera Hassán — a quien el Comando Sur le encargó la Comandancia de la FP poco tiempo después de la invasión — Estados Unidos no estaba interesado en que la salida de Noriega "*se diera* [a causa de una acción] *panameña*

porque eso no les convenía a ellos... Estados Unidos tenía el interés de meterse de todas maneras aquí, y lo hicieron".[39]

Para impedir que el curso de los acontecimientos tomara otro cauce, a partir del frustrado intento de golpe la Casa Blanca creó un Comité de Crisis. La relación Panamá-Estados Unidos fue cuidadosamente estudiada por este grupo, que fue responsable de todos los cambios y decisiones que se tomaron en relación con Panamá. Este comité debía prever las condiciones en que las políticas de Estados Unidos se desenvolverían y definir las acciones necesarias para llevar a cabo el diseño de políticas hacia el istmo. Este grupo estuvo formado por el subsecretario de Estado, un miembro del Pentágono y de la CIA, quienes, a través de un mecanismo optimizado de comunicación, debían prepararse para coordinar el flujo de información y las reacciones de la Casa Blanca ante eventuales contingencias en dicha nación. No es de extrañarse de que en este período Bush insistió en que su intención era "ver a Noriega fuera de Panamá y ante la justicia estadounidense" y que estaba dispuesto a utilizar la fuerza militar "*si pudiera hacerlo de manera prudente*". A mediados de octubre, sin embargo, Bush destacó que "*no están dadas las condiciones para actuar.*"[40]

¿Y qué condiciones había a mediados de 1989 que no existían a finales del mismo?. Bush esperaba que Noriega reaccionara de manera tal que pudiera justificar la intervención. De hecho, desde junio y julio de 1989 el Comando Sur emprendió maniobras militares sin solicitar el debido permiso de las autoridades panameñas. Tales maniobras se realizaban con el fin de crear un clima de tensiones que facilitasen la ocurrencia de un suceso que pudiera ser utilizado para defender la incursión armada sobre Panamá. Pero desde mayo, Noriega anticipaba lo que Washington buscaba, por lo que ordenó a sus tropas evitar toda confrontación. En julio, el Gral Thomas Kelly — quien atendía la evolución panameña — concluyó que Noriega evitaba cuidadosamente toda confrontación con E.U. Según Kelly, para entonces se habían dado casos en los que las tropas estadounidenses *mentían* sobre supuestos enfrentamientos con miembros de las FDP, pero no lograban demostrarlo.[41] Dada la naturaleza jerárquica de toda institución militar, es imposible que estos soldados hayan estado realizando dichas actividades por cuenta propia.

En julio, Cisneros, recién nombrado como Jefe del Ejército Sur, se pronunció a favor de una intervención militar directa para provocar la salida de Noriega. Cisneros le adjudicó a las FDP adjetivos como "demoníaca" y "corrupta" y manifestó su "pesimismo" sobre la gestión negociadora de la OEA frente al anulado proceso electoral de mayo, y anticipó que la invasión a Panamá se llevaría a cabo ante la eventual "*muerte violenta de un ciudadano norteamericano*".[42] Según comentó después, él "*estaba seguro de que habría un incidente y cuando eso ocurriera íbamos a tener que actuar, y entonces comencé a prepararme* [por] *si algún día llegaba la orden de invadir*".[43]

Lo peculiar del caso está en que Cisneros no era el único con esas "premoniciones". Gran parte de la jerarquía político-militar en Washington también anticipaba la invasión a Panamá porque, por alguna razón no destacada públicamente, preveían el "incidente" que lo provocaría. En agosto, William Crowe, jefe del Estado Mayor Conjunto en Washington, le confesó a quien estaría por tomar posesión del Comando Sur el primero de octubre, Maxwell Thurman, que había una alta probabilidad de que Bush ordenara una operación militar a gran escala en el futuro cercano. Incluso, Crowe dijo que ya se había establecido una fecha probable para el operativo, y justificó la incursión militar sobre la base de que las fallas acumuladas de la administración Reagan y la de Bush en Panamá aseguraban que la Casa Blanca optara por la opción de un conflicto militar en Panamá.[44]

En septiembre, tres meses antes de la invasión, Crowe también le comentó a sus subalternos que "yo no sé cuando sucederá, *no se qué lo precipitará*, pero estoy convencido de que tendremos que ir con (nuestra) fuerza militar a Panamá para resolver la situación...". Asimismo, el Secretario de Defensa Dick Cheney se refirió a la opción militar y dijo que la favorecía si Noriega "hacía algo abiertamente provocativo". En octubre, pocos días después del fallido golpe contra Noriega, Bush le anunció al Consejo de Seguridad Nacional (NSC) que Noriega "se propasaría" algún día, por lo que Estados Unidos debía estar preparado para ello. A fines de noviembre, Thurman dijo que "si hay un estadounidense muerto, iremos a destruirlo. El Gral. Noriega se irá". Desde el Pentágono, el. Gral. Thomas Kelly estaba "rastreando personalmente todos los incidentes

de importancia sobre estadounidenses que estaban siendo abusados o acosados en Panamá". Sin embargo, Kelly no fue capaz de señalar dicho acoso hasta la muerte del Tte. Robert Paz-Fisher el 16 de diciembre de 1989.[45]

A la luz de la insistencia de la administración Bush de sostener que la invasión fue la respuesta circunstancial ante el disparo y acoso contra estadounidenses en Panamá, las evidencias sobre el acontecimiento anhelado muestran que son falsas las afirmaciones de la Casa Blanca y que dicho acontecimiento debe verse mas bien como el incidente fabricado por sus oficiales para justificar la invasión. Según el secretario de Defensa Cheney, los planes para invadir Panamá le fueron presentados una vez que tomó posesión de su cargo en abril de 1989.[46] Según el Cnel. Douglas Terrel, comandante de la Fuerza de Tareas de Aviación del operativo militar, desde principios de 1989 "la Brigada de Aviación de la División de Infantería fue designada Cuartel General para el control de todas las fuerzas de aviación en Panamá, para las operaciones de contingencia ... (para) el plan que eventualmente sería utilizado durante la Operación Causa Justa".[47] Y esto lo confirmó el director de la CIA, William Webster, quien afirmó durante los días posteriores al inicio de la invasión que el operativo militar venía preparándose tres meses antes.[48]

Los preparativos para la invasión fueron estudiados y planificados desde el mes de julio hasta el día previo al inicio de las hostilidades contra Panamá. Según el Gral. Carl Stiner, todos los ejercicios militares semanales efectuados por tropas estadounidenses en Panamá desde el mes de julio de 1989 eran parte de un operativo para familiarizar las tropas involucradas en la invasión con los objetivos que serían atacados posteriormente.[49] En las semanas que le siguieron al intento de golpe contra Noriega, el Pentágono comenzó a introducir en Panamá equipo militar pesado de carácter ofensivo, incluyendo "cuatro tanques y helicópteros Apache... equipados con ametralladoras de alta velocidad capaces de saturar de balas un campo de fútbol".[50] Incluso, el 3 de noviembre, el Pentágono le instruyó a Thurman estar listo para ejecutar el plan de la invasión "*tan rápido como sea posible*".[51] De ahí que desde finales de noviembre, los helicópteros que después serían utilizados en la incursión en Panamá fueron llevados a las bases militares de

Estados Unidos en territorio panameño para que estuviesen listos el día del inicio de la invasión.[52]

Además, a partir del 6 de octubre los soldados de la Compañía Bravo de la 82 División Aerotransportada escucharon "rumores" sobre la posibilidad de su participación en una incursión militar en Panamá. Sin embargo, lo que eran "rumores" resultaron ser mucho más que eso cuando se les informó que estarían entrenando en territorio panameño para *fines de diciembre.* Según reportó después uno de los suboficiales de esta compañía, también se les dijo que sus enemigos serían las tropas de las FDP y los Batallones de la Dignidad — grupo paramilitar entrenado por las FDP para defender el país en caso de una invasión — por lo que para ellos fue obvio que en Panamá enfrentarían una situación bélica real.[53]

Así, durante los nueve días previos al 20 de diciembre, ochenta miembros de esta división ensayaron un asalto para liberar a dos estadounidenses presos en la prisión El Renacer — situada en las afueras de la ciudad de Panamá — e incluso en terrenos adyacentes a dicho penal.[54] Antes del 10 de diciembre, los soldados de la Compañía Bravo renovaron poderes legales y testamentos, "absolutamente esenciales para la paz del soldado enviado a pelear", y se les entregó equipos de combate. Según reportó el mismo, para el 13 de diciembre él y sus compañeros entrenaron en Panamá con técnicas de combate antiguerrillas; el 14 de diciembre se les entregó municiones, armas, granadas, minas y ametralladoras; y el 15 de diciembre practicaron técnicas de combate urbano. La intención declarada de estos ejercicios era la de reducir la sensibilidad de las tropas panameñas a la presencia y actividad de las tropas norteamericanas.[55] *Y todo esto sucedía días antes del hecho que supuestamente desencadena la invasión, acaecidos el 16 de diciembre. Todo estaba listo para la invasión, por lo que era necesario tener un elemento que disparara la coyuntura intervencionista.*

Las circunstancias que rodean la muerte del Tte. Robert Paz-Fisher la noche del 16 de diciembre anterior a la invasión — factor que la Casa Blanca señaló como suficiente para desencadenar la masiva incursión armada — son lo suficientemente incriminatorios como para inferir que este suceso fue provocado por oficiales de Estados Unidos con el fin de proveer

a su gobierno la excusa que buscaba para invadir Panamá. Poco tiempo antes de este hecho, un equipo de expertos de la Fuerza Delta de la 82 División Aerotransportada se había trasladado a Panamá con equipos de detección *electrónica* altamente sofisticados con antelación a la incursión armada.[56] Si fue la muerte de Paz-Fisher lo que provocó la invasión, no se explica ni la planificación del operativo, ni el entrenamiento de las tropas ni la llegada previa de armamento sofisticado a Panamá. Por ello coincidimos con Dinges en sostener que la decisión de invadir fue una "decisión en busca de un pretexto" encontrado con la muerte del sub-oficial norteamericano.[57]

Manipular coyunturas específicas para justificar acciones armadas de envergadura es parte de la estrategia política y militar de Estados Unidos desde fines del siglo pasado. Es un episodio conocido que en 1898, elementos estadounidenses, operando a su favor provocaron la explosión del buque de guerra norteamericano *Maine* en las costas de La Habana, Cuba, para que la potencia en ciernes emprendiera una guerra contra el reino español y se apropiara de algunas de sus posesiones extramarinas. Este suceso fue usado por el gobierno de Estados Unidos para fomentar el belicismo nacional, a pesar de que un hecho similar en 1873, el asesinato de la tripulación del *Virginius* en aguas cubanas, no provocó el mismo grito de guerra. Igualmente, en 1964 un destructor norteamericano que patrullaba el golfo de Tonkín, próximo a las costas de Vietnam del Norte, informó haber interceptado órdenes de ataque norvietnamitas. Si bien éstas últimas resultaron falsas, este hecho allanó el camino para la Resolución del Golfo de Tonkín que dio luz verde al Presidente Lyndon Johnson para iniciar acciones bélicas contra Vietnam del Norte.[58] En esta secuencia, hechos como el intento del Presidente Johnson de utilizar una conferencia de Paz sobre Vietnam en 1968 para favorecer al copartidario y candidato demócrata a la presidencia; las acusaciones a colaboradores de Ronald Reagan de haber impedido el regreso de los rehenes estadounidenses capturados en Irán para disminuir las posibilidades de reelección del presidente Carter en 1980, son algunos de otros ejemplos que indican la práctica de incidir en coyunturas específicas para impulsar situaciones que puedan favorecer los objetivos de política interna y exterior.

La muerte de Paz Fisher muestra ser una de estas manipulaciones. Recordemos que en el discurso de Noriega del 15 de diciembre — cuando los preparativos para la invasión ya estaban en operación — estuvo la declaración de que Panamá estaba en un "estado de guerra" por la injerencia de Estados Unidos. Por ello, supuestamente había en Panamá un estado de excepción que debía tomarse en cuenta. Por ello, no tiene explicación que Paz Fisher, en compañía de otros, se encontrara en esos momentos álgidos por la ciudad de Panamá — fuera de su base — y mucho menos en las inmediaciones del Cuartel Central de las FDP. Durante los meses que duró la intervención norteamericana en Panamá (1987-1989) y con mayor rigor a partir de una orden del Comando Sur en octubre, los soldados, oficiales y sus familias habían sido trasladados a territorio situado dentro de las bases militares acantonadas en las tierras aledañas al Canal y a territorio continental de Estados Unidos. Por lo tanto, su presencia en la ciudad sólo tendría sentido si esta perseguía algún objetivo específico. Los hechos sugieren que el Comando Sur ostensiblemente habría encontrado dispensable la vida y carrera de Paz-Fisher y por ello se le colocó en la circunstancia que lo llevaría a su muerte y a servir de argumento para justificar la invasión de Estados Unidos a Panamá.[59]

Los estrategas norteamericanos escogieron la noche del 16 de diciembre de 1989 para forjar la situación aludida. Junto al Capitán Richard Haddad, miembro del servicio de inteligencia del Comando Sur, el Tte. Paz-Fisher y sus acompañantes se dirigían desde el Fuerte Clayton hacia el Hotel Marriot, donde se disponían a "buscar diversión". Sin embargo, ellos se desviaron "por error" hacia el Cuartel Central de las FDP, fuertemente custodiado por la brigada Machos de Monte, que había colocado barricadas previniendo un posible intento de golpe contra Noriega. Según fuentes militares panameñas, la CIA infiltró información sobre el posible intento de golpe, por lo que ese día la oficialidad castrense estaba particularmente alerta.

Las circunstancias del hecho, sin embargo, denotan que muchos de los acontecimientos fueron arreglados para la ocasión. Según reportó Kemp, los efectivos norteamericanos viajaban en un auto marca Chevrolet Impala — que en Panamá

sólo tienen los estadounidenses o los pertenecientes a la clase alta panameña — que tenía pegada una calcomanía azul que lo identificaba como propiedad de un oficial estadounidense, tenía además la matrícula del estado de Michigan y llevaba escrita la palabra "*gringo*" por todas partes. Pero a pesar de la tensión que existía por la supuesta declaración de guerra por Noriega, Haddad optó por traspasar las barricadas, lo cual forzó a los soldados panameños que custodiaban el Cuartel a dispararle a los oficiales norteamericanos. Supuestamente, una de las balas disparadas penetró el portaequipajes, atravesó el asiento trasero y el delantero e hirió en la espalda a Paz-Fisher. Según dieron a conocer las autoridades estadounidenses, nuevamente Haddad se perdió en su camino hacia el cercano Hospital Gorgas (administrado por Estados Unidos), y cuando llegó a él, Paz-Fisher había muerto. Por su ubicación geográfica, para ir del Fuerte Clayton al Hotel Marriot es *imposible* desviarse hacia el Cuartel Central sin dirigirse expresamente a el, porque no hay vías de acceso que partan del camino entre la base militar y el hotel que se desvíen hacia el cuartel panameño. Es necesario precisar también que la distancia entre el lugar del suceso y el Hospital Gorgas no es mayor a un kilómetro. Por ello, los sucesos anteriormente descritos difícilmente pueden considerarse como fortuitos.[60]

Es evidente la búsqueda de un suceso que justificase la reacción inmediata y masiva de Estados Unidos. Una pareja de estadounidenses, un oficial y su esposa — según la versión de Kempe y la de otros medios periodísticos norteamericanos — también se "equivocó" en su ruta aproximadamente a la misma hora y por el mismo lugar, lo que les permitió ser testigos del incidente y, poco después, ser sujetos a interrogación por parte de los soldados panameños quienes "amenazaron con abusar sexualmente de la esposa" del oficial.[61]

Al justificar las hostilidades contra Panamá dos días después del inicio de la invasión, Bush afirmó que tal amenaza si tuvo lugar — si bien mas tarde se retractó. Obviamente, el testimonio de esta pareja supuestamente corroboró la versión que fue usada para justificar la invasión. En este sentido recordemos que al día siguiente del suceso, otro teniente de las fuerzas armadas de E.U., mientras realizaba actividades presuntamente rutinarias en otro lado de la ciudad de Panamá, se

sintió repentinamente "amenazado" por un cabo de las FDP. Según declaró el sub-oficial norteamericano, el panameño estaba por dispararle y por ello él le disparó. El Comando Sur admitió después que el soldado estadounidense no estaba autorizado para llevar su arma cuando ocurrió este incidente. Fuentes militares citadas por *Los Angeles Times* afirmaron más tarde que las tropas de Estados Unidos en Panamá, con el apoyo tácito de oficiales de mayor rango, *deliberadamente* trataban de provocar a las FDP.[62]

De acuerdo a la versión de un Mayor de las fenecidas FDP publicada en un diario capitalino panameño el 19 de diciembre, los pasajeros entre los que se encontraba Paz-Fisher iban *armados*, vestidos de civil, e hicieron caso omiso de la orden de alto repetida por el centinela de turno en el retén del Cuartel Central. El conductor, al contrario, decidió entonces imprimirle velocidad al vehículo, rompiendo con el retén. Después los oficiales norteamericanos hicieron disparos indiscriminados a ambos lados de la vía, incluyendo a las instalaciones del Cuartel Central. Según el Mayor, los estadounidenses también traspasaron otros retenes además del que rompieron. Fue entonces cuando los centinelas panameños abrieron fuego. El oficial panameño añadió que días antes, un contingente de cuarenta a cincuenta soldados estadounidenses con arreos de combate, lanzagranadas y artillería liviana habían sido sorprendidos e interceptados por las FDP en las cercanías del Cuartel Central, quienes al ser cuestionados mencionaron como excusa que "estaban perdidos". Sobre el incidente relativo al oficial y su esposa que supuestamente fueron agredidos por tropas panameñas, el mayor panameño declaró que "*este hecho jamás se produjo... Hablan de un muerto por parte de ellos ... ¿Quién lo mató? ¿Para qué lo mataron?*".[63]

La muerte de Paz-Fisher fue utilizada por la administración Bush para justificar la invasión. A pesar de que los preparativos para la incursión militar ya estaban en marcha desde cuando menos dos meses antes, fue hasta que ocurrió este suceso cuando el Comando Sur emitió una orden que limitaba los movimientos de su personal militar, restringiéndolos a las bases militares. A la vez que el Comando Sur emitía la orden, sin embargo, los burócratas de Washington señalaron que las tropas panameñas no actuaron bajo órdenes que los apremia-

ran a atacar a estadounidenses. Un alto jerarca del Departamento de Estado que pidió no ser identificado reportó el 17 de diciembre a *Los Angeles Times* que era poco probable que los que mataron al sub-oficial estuvieran actuando bajo órdenes, ya que la confrontación ocurrió sin que se hayan producido antecedentes que así lo señalaran. Asimismo, dijo, la subsecuente detención, paliza y acoso a los estadounidenses que se encontraban en las inmediaciones del Cuartel Central no fue una acción predeterminada por las FDP.[64] La versión del oficial del Departamento de Estado claramente contradecía la que dos días después usó la administración Bush para defender el uso de tropas en Panamá.

En el mismo sentido fueron las observaciones del *Gral. Kelly*, quien dijo que a pesar de haber estado buscando el incidente que justificara el inicio de hostilidades contra Panamá, al leer los reportes sobre la muerte del soldado concluyó que el incidente no era una clara prueba de la agresión de las FDP porque el auto donde viajaban los suboficiales estadounidenses había huido de una *"barricada legítima"*.[65] Con la misma opinión se expresó un guardiamarina que trabajaba en la sede de la Embajada de E.U. en Panamá quien, al hablar por teléfono con su madre el domingo 17, dijo que no había razones para que las tensiones entre los dos países aumentaran: *"todo el mundo sabe que ellos* (los norteamericanos) *no debían haber ido allí. Ellos lo estropearon. Si los Estados Unidos establece una barricada en algún lado y cualquiera actuara de la misma manera, nosotros también dispararíamos... no fue falta de los panameños. Estaban haciendo su trabajo. No tuvo nada que ver con la declaración de guerra de Noriega..."*.[66]

Para sus fines de política exterior, a Bush le resultó útil manipular las percepciones públicas sobre los hechos citados. El 21 de diciembre, Bush respondió a la críticas soviéticas a la invasión declarando que "si los panameños matan un Infante de Marina estadounidense... y si ellos amenazan y golpean brutalmente a la esposa de un ciudadano estadounidense (y) acosan sexualmente a la esposa del teniente mientras lo patean en la ingle una y otra vez, entonces, Sr. Gorbachov, por favor entienda que este Presidente tenía que hacer algo al respecto".[67] Para ser sincero, sin embargo, Bush tenía que haber agregado que la respuesta militar a estas acciones se da

siempre y cuando hacerlo le permita afianzar los intereses de su país. Para cuando ocurrió el mencionado incidente, Bush había desarticulado todas las opciones para derrocar a Noriega que pudieran tener como resultado la llegada al poder de un gobierno o de una jefatura militar no supeditada a los objetivos inmediatos de la Casa Blanca, para que no quedara otra opción que no sea la de la intervención militar.

Al enfatizar continuamente que la intervención era una reacción defensiva ante la agresión provocada por las FDP, Bush logró obtener la solidaridad y la aquiescencia de gran parte de la población de su país. No existen guerras accidentales. Una guerra es posible sólo cuando existen fuertes intereses para que de un evento fortuito contra uno de sus ciudadanos, un país proceda con una acción bélica. Por ello, la muerte de Paz-Fisher sólo tiene sentido como la circunstancia creada para que los E.U. pudiera emprender la desenfrenada búsqueda de sus intereses en Panamá. Sin embargo, los medios de comunicación estadounidenses han hecho caso omiso de estas circunstancias.

Es inexplicable que después de repasar la relación entre el Gral. Noriega y las distintas administraciones en Washington, todavía el periodista John Dinges sostenga que "el 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadió a Panamá para retirar a Noriega del gobierno y juzgarlo" y que la invasión fue llevada a cabo por *"un objetivo mas personal que político"*.[68] Con la misma cortedad de miras Kempe sostiene que la invasión a Panamá "fue la mayor invasión llevada a cabo por Estados Unidos *dirigida exclusivamente contra un sólo hombre*", y le da cabida a referencias personales como las de que Noriega era "un hombre malformado por la naturaleza y la sociedad... un *virtuoso del mal*" que Estados Unidos fue a capturar.[69] Asimismo, afirmar en foro público que la invasión es producto de la "falta de virilidad" de Bush ante la figura de Noriega — tal y como lo afirmó en una conferencia en la ciudad de México el asesor de Seguridad Nacional del presidente James Carter, Robert Pastor —[70] es irresponsable desde todo punto de vista y muestra la falta de seriedad con que se ha indagado tanto el problema panameño como los intereses tras la incursión militar de E.U.

El único medio periodístico estadounidense que cuestionó

las aseveraciones de la administración Bush es la revista semanal *Newsweek*. A mediados de 1990, la revista destacó que mientras "la administración Bush ha insistido siempre en que la invasión fue la respuesta de último minuto al disparo y acoso de las tropas de Noriega a efectivos estadounidenses". Sus articulistas detectaron que "los planes para invadir fueron puestos en marcha mucho antes".[71] Sin embargo, al igual que los autores arriba mencionados, no continuaron investigando los indicios que habían encontrado ni elaboraron sobre sus implicaciones. De hecho, el caso Paz-Fisher todavía está registrado como lo estableció el ejército norteamericano. Asimismo, la visión oficial de la Casa Blanca sobre el caso Noriega todavía impera entre los diversos medios de comunicación de ese país ni los intereses estratégicos de esa potencia en el istmo han sido suficientemente resaltados.

La calidad de la información recabada por Dinges, Kemp y la revista *Newsweek* indican, mas allá de cualquier tipo de carencias, la vigencia de una orientación en la evaluación sobre la invasión que — implícita o explícitamente — es complaciente con las declaraciones de Bush y es una muestra de lo exitoso que fue la estrategia de Estados Unidos hacia Panamá.[72] Reducir el problema panameño a las características personales de Noriega no aporta suficientes elementos válidos para una indagación objetiva. En este sentido, un estudio presuntamente académico sobre el narcotráfico en los países andinos y Panamá señaló que "nacido en 1934, el Gral. Noriega fue un hijo ilegítimo cuya madre lo colocó en un orfanato a los cinco años de edad..." y además "violó a una prostituta en Colón y a una joven de 13 años en Chiriquí".[73] Con las mismas limitaciones, una periodista panameña resaltó las luchas políticas panameñas entre 1987 y 1989 obviando las raíces históricas y los intereses concretos de Estados Unidos en el istmo como factores determinantes de los acontecimientos que culminaron con la intervención militar. De hecho, dicha obra constituyó un golpe propagandístico a favor de la invasión y ocupación norteamericana.[74]

Todavía más lejos fue el analista de inteligencia Bruce Watson al sostener que la visión latinoamericana contraria a la invasión de Estados Unidos es una visión errónea. Watson, editor de un libro sobre la Operación Causa Justa cuyo

contenido no cuestiona ninguno de los supuestos que la administración Bush declaró para ordenar la incursión militar, sostuvo que dicha visión "ignora la sensibilidad de Estados Unidos" al problema de las drogas. Oficial de inteligencia naval por 22 años, Watson afirmó que las acciones de Noriega empujaron a Washington a actuar, porque no hacerlo habría significado "una gran pérdida para el prestigio global y regional" de E.U. Para él, la invasión fue producto de "la culminación de un complejo grupo de temas que se deterioraron hasta el punto que fallaron esfuerzos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, por lo que la operación militar... era la única opción".[75]

Las opciones tomadas por la Casa Blanca y las circunstancias que envuelven los hechos aludidos hacen necesario cuestionarse profundamente sobre las motivaciones reales que condujeron a Estados Unidos a invadir y ocupar Panamá. Es claro que la incursión armada no era necesaria para ninguno de los objetivos planteados por Bush. Toda incursión militar sólo tiene sentido si esta tiene un objetivo lo suficientemente importante como para ordenar la muerte de otros y aceptar la de los propios.

Estratégicamente, un operativo militar es válido para responder a las necesidades de una política determinada cuando se tiene bien claro una serie de elementos: quién tiene que morir, ser neutralizado o intimidado para obtener lo que se busca. También es necesario conocer cuáles y cómo son las fuerzas que están disponibles y cómo podrían ser utilizadas ventajosamente.--Clausewitz, pensador clásico sobre la estrategia militar, destacó que "nadie empieza una guerra — mas bien, ninguno en su pleno sentido debe hacerlo — sin tener claro en su mente qué intenta lograr con la guerra y cómo intenta conducirla".[76]

Por ello es imperativo indagar y resaltar los intereses que motivaron a Bush a lanzar su "bellamente coordinada" guerra en Panamá, más allá de las referencias a las características personales al Gral. Noriega y más allá de sucesos que no dejan de ser anecdóticos. De lo contrario, todo intento por explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la invasión están destinados a ser, por lo menos, incongruentes. En esa indagación, sin embargo, es primordial destacar la evolución

de la estrategia de Estados Unidos hacia el mundo, y conocer el papel de Panamá en esta, porque ese interés fue lo que dictó las distintas políticas de Washington hacia Panamá en el transcurso de su historia — y la imperatividad de lanzar la invasión a fines de diciembre de 1989.

Notas

1. Oscar Edmundo Palma, "¿Intervendrá el Pentágono en Panamá?", *Unomasuno* (México, D.F.), viernes 5 de mayo de 1989, p. 2. Ese primer período debía verse sólo como un momento transitorio en el que estaban por definirse las características de la política exterior de Estados Unidos. Ver Lilia Bermúdez Torres, "Bush ante centroamérica: derbate interno, consensos previos y primeras pruebas". Mimeo. Una primera versión de este artículo apareció publicada en el mes de julio de 1989 en el libro *Conflicto y Unidad Latinoamericana*, editado por el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina "Oscar Arnulfo Romero", México, D.F., México.
3. "Realismo, no emotividad ante Centroamérica, pidió Solana", *La Jornada* (México, D.F.), miércoles 29 de noviembre de 1989, pp. 1, 6 y 8.
4. A juzgar por las evidencias descritas por varios autores, aunque especialmente las de John Dinges, *Nuestro Hombre en Panamá*, (México: Lasser Press Mexicana, 1990), versión traducida al español de Luis Enrique Guarín de la versión original en inglés *Our Man In Panama* (Nueva York: Random House, 1990), y las de Frederick Kempe, *Noriega: toda la verdad*, (Bogotá y Barcelona: Grijalbo, 1990), versión en español traducida por José Manuel Pomares del original *Divorcing the Dictator*, (Nueva York: G.P. Putnam's Sons, 1990); aunadas a consideraciones propias, asumimos que es evidente la vinculación Noriega-CIA durante no menos de dos décadas. Ninguno de los dos autores, sin embargo, se refiere a la posibilidad de que la supuesta relación de Noriega con el narcotráfico haya estado determinado por la primera.
5. Kempe, *op. cit.*, p. 60.
6. Kevin Buckley, *Panama: The Whole Story*, (Nueva York: Simon & Schuster, 1991), pp. 162-163.
7. Kempe, *op. cit.*, p. 61.
8. Los grupos de oposición a Noriega, en general los mismos que se opusieron al gobierno del régimen reformista del Gral. Omar Torrijos (1968-1981), son los grupos y clanes familiares propietarios de la mayoría de las grandes empresas del país. Esta "oligarquía" -como se les conoce en Panamá- optó por no estructurar una política cuyos posible resultado hubiera sido la activación de las masas. Esta conducta es digna de ser resaltada porque nos remite a las características del grupo que tomó las riendas mediante la intervención de tropas extranjeras. Cabe notar también que esta actitud también confirma algunas teorías sociológicas latinoamericanas sobre el comportamiento de las "burguesías compradoras" o "lumpenburguesías".
9. Giancarlo Soler Torrijos, "Se profundiza la crisis, arranca la maquinaria electoral", *Coyuntura Centroamericana* (México, D.F.), diciembre 1988-enero 1989, pp. 19-21.
10. Jorge Heine, "¿De la negligencia benigna a la doctrina Bush? Estados Unidos y América Latina en 1989", en Heraldo Muñoz, *Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas 1989-1990: el desafío de los Noventa* (Caracas: Nueva Sociedad y Prospel, 1990), pp. 335-344.
11. Gral. Fred Woerner, "The Strategic Imperatives for the United States in Latin America", *Military Review* vol. LXIX No. 2, febrero de 1989, pp. 10.
12. John M. Gates, "Problemas del desarrollo de la doctrina", *Military Review* (ed. hispanoamericana) vol. LXVIII, No. 8, agosto 1988, p. 77.
13. Citado en Tom Wicker, "Panama and the Press", *The New York Times*, jueves 19 de abril de 1990, p. A25.
14. Alexander Cockburn, "Noriega fue nuestro compinche", *Tareas* (Panamá, Panamá), enero-abril de 1990, p. 97.
15. Elaine Sciolino, "Beating in Panama Protested by U.S.", *The New York Times* viernes 13 de enero de 1989, p. A8.
16. James Le Moyne, "A Thin Paper Trail in Noriega Inquiry — U.S. Finds Few Documents Tyng Ex-Leader to Drugs," *The New York Times*, 12 de junio de 1990, p. 1A.
17. Dinges, *op. cit.*, p. 78.
18. Ibid., pp. 35-38.
19. Ver revelaciones del diario madrileño *El Independiente*. "Nexos de Bush y la CIA con el Cartel de Medellín", *La Jornada* (México, D.F.), lunes 22 de enero de 1990, pp. 48 y 38.
20. Ver la Enmienda (a,1) al Tratado de Neutralidad. Department of State, *The Defense and Neutrality of the Panama Canal Under the New Treaties* Special Report No. 37, (Washington, D.C.: Bureau of Public Affairs, Department of State), p. 3.
21. Dicho sistema informativo tiene una de sus principales instalaciones en Panamá, en la ribera oeste del Canal. Los edificios y aparatos electrónicos de gran alcance que tienen en dicho país monitorean toda la información radial, televisiva y escrita proveniente de todos los países del istmo centroamericano y del caribe. Está localizado tras unas colinas que sirven como sitio para arrojar parte de los desechos provenientes de la capital panameña, a fin de alejar a curiosos.
22. "Opposition Leader in Panama Rejects a Peace Offer from Noriega", *The New York Times*, domingo 17 de diciembre de 1989, p. A5.
23. Señalamiento de Theodore Drapper, "Warl (Part III)", *The Washington Post*, viernes 9 de junio de 1990.
24. "Panama Assembly Names Noriega Government Chief", *Los Angeles Times*, sábado 16 de diciembre de 1989, p. A4.
25. Andrew Rosenthal, "President Calls Panama Slaying a great Outrage", *The New York Times*, martes 19 de diciembre de 1989, pp. A1, A12; ver también a Buckley, *op. cit.*, p. 231.
26. Andrew Rosenthal, "U.S. Considered Aid to Panama Rebels", *The New York Times*, jueves 5 de octubre de 1989, p. 1A.
27. Buckley, *op. cit.*, pp. 201-204.
28. Kemp, *op. cit.*, p. 516.

29. "Intentó E.U. secuestrar a Noriega en el golpe", *Unomasuno* (México, D.F.), 9 de octubre de 1989, p. 1.
30. "Interview: General Thomas Kelly", *Soldier of Fortune*, (septiembre de 1990), p. 45.
31. George Wilson, Southern Commander Rewrote Contingency Plans For Action", *The Washington Post*, 7 de enero de 1990, p. 1.
32. "Powell first U.S. Black President?", *Star & Herald*, miércoles 22 de agosto de 1990, p. 1. Suplemento en inglés publicado por y adjunto al diario *La Estrella de Panamá*, que cita un cable de la agencia española EFE procedente de Los Angeles, California.
33. Ver Kempe, *op. cit.*, p. 545.
34. Esta referencia al apoyo a un golpe de estado es mas bien un consejo de los especialistas citados al gobierno de su país para tratar el caso panameño. Observemos también que el manuscrito del libro se realizó en 1989, antes de la invasión a Panamá. Ver Bill Sweetman y James Goodall, *Locheed F-117a: Operation and Development of the Stealth Fighter*, (Osceola, Wisconsin: Motorbooks International Publishers, 1990), p. 85. Las cursivas son nuestras.
35. Elaine Sciolino, "U.S. Says Leaders of Panama Revolt Were in Disarray", *The New York Times*, miércoles 11 de octubre de 1989.
36. Citado por Bob Woodward, *The Commanders*, (New York: Simon & Schuster, 1991), p. 120.
37. Ver la continuación de las afirmaciones de Powell en este sentido en entrevista con Woodward, *op. cit.*, p. 133.
38. El Gral. Fred Woerner, Comandante en Jefe del Comando Sur, manifestó ante el Subcomité de Defensa del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes el primero de febrero de 1989 que, "aunque Panamá todavía es [un punto] de gran importancia estratégica, y los sucesos político-militares en ese país tienen un impacto significativo en los intereses de E.U. dentro de la región, no deberíamos permitir que la crisis actual domine nuestras preocupaciones generales sobre América Latina, necesitamos examinar *vías alternas* para resolver el problema" panameño. Obviamente, esta posición implicaba oponerse a los planes que el Pentágono diseñaba para intervenir militarmente en el istmo.
39. Ver declaraciones del citado Coronel en *El Panamá-América*, (Panamá, Panamá), sábado 29 de junio de 1990. Poco después, Herrera Hassán fue removido de su cargo.
40. Ver "Bush aún no descarta el uso de la fuerza contra Noriega", *La Jornada* (México, D.F.), sábado 14 de octubre de 1989, p. 38.
41. Citado por Woodward, *op.cit.*, p. 100.
42. "Jefe del Ejército Sur partidario de la intervención armada en Panamá", *Opinión Pública* (Panamá, Panamá), (agosto de 1989), pp. 8-9.
43. Migdalia Fuentes (entrevista), "General Marc Cisneros: yo no quería la guerra", Suplemento "20 de diciembre: documentos para la historia", del diario *La Prensa* (Panamá, Panamá), 20 de agosto de 1990, pp. 30-31.
44. Buckley, *op. cit.*, p. 193.
45. Woodward, *op. cit.*, pp. 90, 116, 128, 157. El autor se basa en entrevistas con los principales actores del drama de la invasión, si bien su libro no es crítico de la política militar de Estados Unidos. Las cursivas son nuestras.
46. "Excerpts From Briefings on U.S. Military Action", *The New York Times*, jueves 21 de diciembre de 1989, p. A19.

47. Citado en José Quintero De León, "¿Se planeó la invasión en Octubre?", *La Prensa* (Panamá, Panamá), jueves 20 de diciembre de 1990, p. 2A.
48. Según dijo el representante republicano por Illinois, Henry Hyde. Ver "Bush dice ahora que su meta es proteger a los estadounidenses", *La Jornada* (México, D.F.), jueves 21 de diciembre de 1989, p. 5.
49. "The Architect of 'Just Cause' Lt. Gral. Carl Stiner Explains his Panama Plan", *Army Times*, 12 de marzo de 1990, p. 14.
50. Dinges, *op. cit.*, p. 309.
51. Buckley, *op. cit.*, pp. 222-223.
52. Robert R. Ropelewski, "How Panama Worked: Planning, Precision and Surprise led to Panama Successes", *Armed Forces and Society Journal International*, febrero de 1990, p. 26.
53. Clarence E. Briggs III, *Operation Just Cause: Panama December 1989*, (Harrisburg, PA: Stackpole Books, 1990), p. 8. Durante el operativo el autor era teniente primero y miembro de la Compañía Bravo de la 82 división aerotransportada.
54. "Inside the Invasion", *Newsweek*, 25 de junio de 1990, p. 10.
55. Briggs, *op. cit.*, pp. 12, 24, 30.
56. Frederick Kempe, "Give Noriega This: He Adds New Twist to the Word "Wily", *The Wall Street Journal*, 22 de diciembre de 1989. Ver también a Kempe, *op. cit.*, p. 35.
57. Dinges, *op. cit.*, p. 370.
58. Para éste último caso ver, entre otros, "The Phantom Battle That Led To War", *U.S. News & World Report*, 23 de julio de 1984.
59. Según el ex-diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Luis Navas (1984-1989), Paz-Fisher pudo haber muerto por cualquier otra razón en Panamá o en Colombia (i.e en operaciones antinarcóticos), pero para llenar las necesidades del momento se lo hizo aparecer como muerto por tropas panameñas. Testimonio de Luis Navas, Panamá, Rep. de Panamá, agosto de 1991.
60. Para la reconstrucción de los hechos según los dieron a conocer la parte norteamericana y algunos de los involucrados, ver a Kempe, *op. cit.*, pp. 28-29 y los diarios de mayor circulación en sus ediciones del 17 de diciembre de 1989. Una investigación pormenorizada del suceso, todavía no iniciada por las autoridades judiciales y políticas de Estados Unidos, debería destacar si las municiones arrojadas por el AK-47, arma utilizada por las tropas panameñas, tienen la capacidad de aniquilar en tan poco tiempo a un individuo después de atravesar tales obstáculos. Kempe no sólo no cuestiona la versión oficial sobre el hecho, sino que además confió en relatos mas que en averiguaciones personales para establecer la distancia entre el Hospital Gorgas y el Cuartel Central. Kempe dice que esta es de 6 kms., lo que para cualquier panameño que conoce el área resulta ser totalmente erróneo, ya que esta no pasa de 1 km. No es descartable que otros elementos de su argumento también sean erróneos, si confió en las mismas fuentes que le describieron la distancia. Entre 1 km. y 6 kms. hay algo mas que un simple error de cálculo. En lo que nos toca en cuanto a la reconstrucción del hecho, sólo mencionamos aquí los datos que concuerdan con otras versiones más creíbles.
61. Kempe, *op. cit.*, p. 29. Ver también a diversos medios de prensa del 17 de diciembre de 1989.

62. Buckley, *op. cit.*, p. 232.
63. Mayor Edgardo López Grimaldo, "La peligrosa comedia bufa de los eternos perdidos", *La Estrella de Panamá*, martes 19 de diciembre de 1989.
64. "U.S. Officer, Wife Beaten in Panama", *Los Angeles Times*, lunes 18 de diciembre de 1989, p. 26A.
65. Citado por Woodward, *op. cit.*, p. 157.
66. Esta conversación fue grabada y transcrita por los servicios de inteligencia de Noriega. Estos documentos fueron decomisados por el ejército de E.U. durante la invasión. Ver a Buckley, *op. cit.*, pp. 228-229, citando fuentes del Joint Debriefing Center del Ejército de E.U.
67. Ver cables y medios de prensa del 21 y 22 de diciembre de 1989.
68. Dinges, *op. cit.*, p. 9.
69. Kempe, *op. cit.*, p. 29.
70. Ver conferencia de Robert Pastor, "Política Exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica: no más condenado a la repetición", período de preguntas y respuestas, ante el Coloquio organizado por el Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América de la Universidad Nacional Autónoma de México (CISEUA-UNAM) y la sede Académica de México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). México, D.F., lunes 23 de julio de 1990.
71. Ver, "Inside the Invasion", *Newsweek*, 25 de junio de 1990, vol. CXV, No. 26, pp. 10-13.
72. Sólo Bob Woodward, *op. cit.*, p. 83 *sugiere* la importancia estratégica de Panamá como motivación para que Bush entrara en la escena: "Con el estratégicamente importante Canal de Panamá programado a pasar a control panameño a fin de siglo, y 12,000 miembros del personal militar estadounidense con sus familias en Panamá, la administración Bush quería fuera [de Panamá] a Noriega". Sin embargo, al igual que los otros autores mencionados, Woodward tampoco fue más allá de ello.
73. Scott Mc Donald, "Panama: At the End of Avalanche", en *Mountain High, White Avalanche: Cocaine and Power in the Andean States and Panama*, (New York: Praeger Publishers, 1989), p. 106.
74. Ver a Elia Navarrete Talavera, *Panamá: ¿invasión o revolución?, (Madrid: Editorial Planeta, 1990).*
75. Bruce Watson, "Introduction", en Bruce Watson y Peter Tsouras, *Operation Just Cause: the U.S Intervention in Panama*, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1991), p. xii.
76. Carl Von Clausewitz, *On War*, (Princeton: Princeton University Press, 1976), p. 579.

"Los recientes acontecimientos en Panamá nos ofrecen un excelente ejemplo sobre cómo se confunden los factores concernientes a tratados, narcotráfico, terrorismo y conflictos de baja intensidad..."

Robert B. Davis, *Military Review*

2

Panamá en la evolución de la estrategia global de Estados Unidos

Las relaciones Panamá-Estados Unidos tienen raíces profundas en el interés de ésta última nación por la posición geográfica istmeña y por el valor que, como potencia mundial, le ha concedido a su control. Estados Unidos empezó a forjar las bases sobre las que emprendió su expansión hacia el exterior desde mediados del siglo XIX, después que cobró importancia para su desarrollo económico el dominio directo e indirecto sobre la región mesoamericana y, particularmente, sobre el territorio panameño. Las ventajas que acarrea la posición geográfica del istmo — en la mitad del continente americano — y la potencialidad de su paisaje — hidrográficamente rico y poco montañoso — convirtieron a Panamá en encrucijada de múltiples intentos por acaparar su territorio a lo largo de su historia.

Durante siglos, Panamá probó su importancia geopolítica. Sirvió al colonialismo español, que la convirtió en centro de distribución y circulación de mercancías y grupos humanos que debían "transitar" por el istmo. Por lo mismo, Panamá también hubo de ser objeto de ataques y pillajes por parte de

piratas y filibusteros. Más tarde, la estratégica posición geográfica del istmo hizo de Panamá un objetivo central de las potencias europeas que apreciaban — por su importancia militar y comercial — su ubicación. El paso obligado por aguas panameñas implicó que, desde la gesta independentista hispanoamericana, España intentase aprovechar la posición geográfica del istmo, cuando después de la derrota de los realistas en Boyacá en 1819 el virrey de la Nueva Granada decidió, en 1820, ejercer desde Panamá la autoridad de la Corona española donde todavía podía hacerlo.[1] Y mientras el resto de latinoamérica supeditaba su evolución a la metrópoli inglesa, desde temprano el siglo XIX Panamá se vinculó con Estados Unidos para desempeñar un papel fundamental en el proceso de integración interna y de expansión externa de la emergente nación norteamericana.

Primeros pasos en la elaboración de una estrategia global

Washington comenzó a mostrar interés por la posición geográfica panameña cuando todavía la Unión Americana no cumplía el primer cincuentenario de su independencia. Recordemos que uno de los temas que incitaron al Libertador Simón Bolívar a convocar el Congreso Anfictiónico de 1826 en Panamá fue considerar la construcción de un canal a través del istmo. Ante esto, Henry Clay, Secretario de Estado de Estados Unidos, giró instrucciones a los delegados de Washington que debían hacerse presentes en el citado congreso destacando que "si esta obra se llegara a ejecutar, el beneficio de ella no debería ser apropiado para el beneficio de una sola nación."[2] Esta orden conllevaba, implícitamente, la imposibilidad que en aquella época tenía Estados Unidos para ser esa nación que vendría a apropiarse de los beneficios de la construcción de una vía interoceánica — pero que logró ocho décadas después.

Consecuentemente, en 1835 el Senado norteamericano aprobó una resolución por la cual autorizaba a la Casa Blanca a celebrar tratados con Colombia (a la que Panamá se unió tras su independencia de España en 1821) y las nuevas naciones de América Central, con objeto de conseguir la construcción de un Canal que uniera los océanos Atlántico y Pacífico. Más

tarde, en 1848, Estados Unidos logró firmar un tratado con la Nueva Granada (nombre anterior de Colombia), a fin de garantizar la soberanía neogranadina sobre Panamá y asegurarse para sí los beneficios que esa "garantía" le proveía. Amparado por ese tratado, la potencia del Norte lanzó varios esfuerzos militares y diplomáticos para suprimir las diversas intentonas independentistas emprendidas por los criollos panameños.

En la década de 1840, a raíz de la fiebre del oro en California, Estados Unidos empezó a utilizar el territorio panameño para facilitar la explotación del preciado recurso mineral. Para ello, en 1850 construyó el Ferrocarril Transístmico en Panamá, estableciendo así las bases para que Gran Bretaña, pese a sus adquisiciones territoriales en la región y su todavía incontestable poderío mundial, reconociera el poder de facto y la paridad alcanzada por Estados Unidos en el istmo. Este reconocimiento tomó forma jurídica en 1850 con la firma del Tratado Clayton-Bulwer entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, a través del cual ambas naciones se comprometieron a consultarse mutuamente para la construcción de un canal interoceánico por la América Central. La Doctrina Monroe de 1823 — América para los Americanos — tuvo así como primer escenario efectivo el istmo centroamericano.

En la década de 1870, cuando Estados Unidos todavía no había finalizado el proceso de reconstrucción interna del país devastado por la Guerra de Secesión, Colombia, de la cual Panamá era un Departamento, optó por conceder la construcción del Canal a Francia. Pero el rotundo fracaso de esta empresa le abrió la posibilidad a Estados Unidos para que, en su primera expansión allende sus fronteras, retome la construcción de la vía interoceánico e impulse a través de ella las perspectivas de su influencia regional.

En la última década del siglo XIX, Estados Unidos comenzó firmemente a dejar atrás la política de no involucramiento en los asuntos exteriores que la había caracterizado desde que las trece colonias inglesas proclamaron su independencia en 1776. La reflexión de los forjadores de la nueva nación norteamericana había sido proclive a evadir un papel internacional de relevancia. En su discurso de despedida de la presidencia, el primer Presidente de Estados Unidos, George Washington, destacó la necesidad de que sus sucesores garan-

tizaran la expansión interna de la nación, se concentraran en afianzar las capacidades productivas del país y que no se involucraran en el sistema internacional, que en aquella época estuvo dominado por las potencias europeas.

La convocatoria al aislacionismo de Washington fue entonces la base de la actividad internacional de Estados Unidos durante su primer centenario como nación independiente. Aceptar esta sugerencia, sin embargo, era recomendable desde todos los puntos de vista porque estaba estrechamente vinculada a una ventaja precisa: construir un país aprovechando las ventajas que su posición geográfica ofrecía — alejado del continente europeo y, por lo tanto, de sus perennes querellas políticas; y cercano a otros territorios que alimentarían su expansión territorial y económica — y convirtiendo su no participación en los conflictos europeos en un elemento de legitimidad para evitar la intromisión de estas potencias en las tareas que preveía el desarrollo interno norteamericano. Si bien tal tendencia al aislacionismo terminó definitivamente sólo hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando esta nación se convierte en la primera potencia del orbe, en las postrimerías del siglo XIX e inicios del siglo XX, este país inició una serie de políticas que le sirvieron para obtener el control político y militar sobre sus áreas principales de expansión.[3]

Es preciso rememorar que, aún antes de que E.U. iniciara decididamente su expansión sobre la región, Washington utilizaba la diplomacia coercitiva hacia latinoamérica. El proceso de conformación nacional de Estados Unidos ya había incluido espacios arrancados a sus vecinos. Además, la posibilidad de que Estados Unidos proyectara su hegemonía sobre la región quedó establecida con la proclamación de la Doctrina Monroe (1823), supuesta a excluir la presencia europea del hemisferio americano.

La presencia inicial de este país hacia mediados del siglo pasado se hizo sentir con las incursiones de William Walker en México y en Centroamérica, los debates en el Congreso en Washington sobre la pertinencia de anexarse la isla de Cuba, las diversas intervenciones militares en Panamá, todas precursoras del posterior activismo internacional. Las veces que Estados Unidos formuló su presencia en Centroamérica,

fue resultado de un proceso de expansión interna que crecientemente vislumbró la necesidad de incorporar el resto del continente americano para adquirir materias primas y satisfacer las demandas de su producción industrial y de encontrar mercados externos para colocar los excedentes de ella.

La guerra de 1898 con España — entonces un imperio en decadencia irreversible — es el punto de inflexión en la evolución de la manera como Estados Unidos destacó sus intereses en el exterior. En la década de 1890, este país tuvo sus primeras actividades internacionales importantes e inició una primera vinculación específica con determinados territorios y zonas que quedaron colocados de modo directo bajo la hegemonía norteamericana. Recordemos que como resultado de esta guerra gran parte de los territorios que España perdió fueron tomados directamente bajo el control de Estados Unidos, siendo materia de ocupación directa Filipinas y Puerto Rico, o indirecta, tal como Cuba bajo la enmienda Platt, que le reservaba a Estados Unidos el "derecho" de intervenir en los asuntos internos de Cuba cuando Washington lo estimase conveniente.

Como consecuencia de esa expansión tanto hacia el Mar Caribe como hacia el Océano Pacífico, la necesidad de construir un canal interoceánico por Centroamérica adquirió un carácter urgente. Según La Feber, entre 1893 y 1897, "concisos y conscientes análisis económicos de la administración [del Presidente] Cleveland, la comunidad de negocios y figuras del Congreso les llevaron a concluir que los mercados foráneos eran necesarios para la prosperidad y la tranquilidad de los Estados Unidos".[4] En ese sentido, un diario dirigido a empresarios observó en una de sus ediciones de 1895 que un canal por Centroamérica le daría a Estados Unidos "una ventaja decidida sobre otras naciones" en el futuro desarrollo de los países sudamericanos y orientales".[5] En ésta década también fueron construidas las primeras naves de guerra de la Marina, lo que trajo la idea de que un canal era esencial para que sus barcos pudieran conducirse rápidamente de un océano a otro y proteger ambas costas de Estados Unidos.

En efecto, la guerra con España en 1898 probó cierta ésta percepción. Una parte de la flota naval norteamericana tuvo que viajar a través del Cabo de Hornos para llegar hasta

el mar Caribe, donde tuvo lugar gran parte de aquella confrontación. Con el empuje hacia el Pacífico — tras el cierre de la frontera oeste de E.U. — terminó el proceso de expansión interna y se iniciaba uno de expansión externa. Por ello, para la unión americana era imperativo ampliar sus intereses por fuera de las fronteras establecidas, especialmente sobre las áreas que, por su cercanía y por la débil presencia europea, eran más fáciles de dominar.

El agotamiento de posibilidades de expansión hacia el oeste desde mediados de siglo requería de la búsqueda de nuevas fronteras. Para la década de 1890, la influencia de E.U. en Centroamérica y el Caribe se expandía sobre plantaciones de café y banano, ferrocarriles, y minas de oro y plata.[6] Este ímpetu quedó resaltado en 1893 por el influyente ensayo de Frederick Jackson Turner — ampliamente destacado por la historiografía norteamericana — sobre el cierre de las fronteras, aludiendo a ese proceso. En 1895, Brook Adams, posterior asesor del presidente Theodore Roosevelt (1901-09), estableció en un análisis sobre los factores que impulsan y hacen caer las civilizaciones, que el sistema internacional estaba en proceso de desintegración y que sólo E.U. podía ofrecer el liderazgo global para estabilizar el orden mundial. Por ello es posible sostener que en 1898, con la victoria sobre España, se inició lo que se ha denominado la primera expansión imperial de Estados Unidos. A partir de entonces el activismo de E.U. en el extranjero tuvo sus manifestaciones iniciales en la región mesoamericana en particular, con efectos muy directos para el istmo panameño.

Básicamente, el expansionismo estadounidense se dirigió a impedir la confrontación directa y los conflictos de envergadura con las potencias europeas. Recordemos que la capacidad desestabilizadora de estas era significativa para el Estados Unidos de esa época. A partir de entonces, Estados Unidos buscó convertirse en potencia global fundando su poderío en el control de los espacios marítimos, especialmente hacia el Pacífico y hacia el Caribe.[7] Según el analista chileno Luis Maira, esta proyección inicial se caracterizó por una "política dura, primaria, y ruda, característica de las potencias imperiales nuevas que se asoman al ejercicio de la influencia internacional".[8] Diversos estudios sobre la historia latinoamericana señalan este período como uno en el que ascendieron rápidamente las inversiones norteamericanas en la región, y creció la influencia de la banca de ese país, desplazando aceleradamente a las potencias europeas, fundamentalmente a la Gran Bretaña.

Implicaciones para la evolución política de Panamá

Hacia latinoamérica, la política exterior de Estados Unidos se caracterizó por dos factores decisivos. En primer lugar, las políticas se definieron en función de la proximidad geográfica: la política exterior se tornó menos ruda a medida que los países destinatarios de la política estadounidense se sitúan más lejos del territorio continental norteamericano. Por ello, el perfil de la política norteamericana hacia latinoamérica se refirió en primera instancia hacia la Cuenca del Caribe y hacia Centroamérica, y en segunda, al resto del sur del continente.

En segundo lugar, la política hacia la región estuvo definida en términos de rudeza. En este contexto surgió el Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe — puesto en práctica por el Presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) — en el cual E.U. se reservó el derecho de dirimir aquellos aspectos de desajuste doméstico que surgieran (especialmente en algún país de Centroamérica o del caribe), o aquellas situaciones que afecten a sus nacionales o a intereses de empresas norteamericanas. Posteriormente, Washington asumió un papel de policía política sobre las naciones situadas al sur de sus fronteras.

Precisamente, una de las primeras medidas que Estados Unidos emprendió para hacer efectiva su pretensión imperial fue la de procurar por cualquier medio la construcción de la vía interoceánica. Es en este momento cuando la Nueva Compañía del Canal de Panamá (creada en 1888 tras el fracaso de la Compañía francesa a la que Colombia le había encargado la construcción del Canal) le ofreció a E.U. venderle su concesión canalera. A fin de siglo, consolidado como indiscutible poder regional, Estados Unidos rompió — con venia, aunque a regañadientes, británica — su previo tratado con la Gran Bretaña mediante la firma del Tratado Hay-Pauncefote de 1901 y logró un exclusivo convenio con Colombia en enero de 1903 que le otorgó, por cien años, la concesión para la construcción y usufructo del canal. A partir de entonces, el destino de

Panamá estuvo delimitado por los intereses globales norteamericanos.

Cuando por razones circunstanciales el Congreso Colombiano se pronunció contra dicho convenio ese año, Estados Unidos maniobró junto a un grupo de panameños ansiosos por usufructuar los beneficios que la construcción del canal conllevaría para forzar la independencia de Panamá. Conservadores panameños no vinculados al liderazgo Liberal preponderante en el resto del país (Colombia), buscaron y consiguieron apoyo norteamericano para darle continuidad al proyecto canalero, que se realizaría con ellos como contraparte cuando se diera la separación del istmo de Bogotá. En el proceso, sin embargo, estos grupos renunciaron a dirigir un proyecto de organización para la nueva nación que tuviera como premisa aprovechar las ganancias que surgirían tras la explotación de la posición geográfica del país.

El Tratado Hay-Bunau Varilla de noviembre de 1903 sería entonces el marco jurídico tras el cual Estados Unidos construyó y ejerció el control efectivo tanto de la vía interoceánica como de los asuntos domésticos del país. La presencia de Estados Unidos en Panamá determinó así desde principios del siglo XX una relación de cuasi-protectorado. Washington tuvo una presencia militar directa en situaciones de crisis e incluso puso bajo su control gran parte de la administración del nuevo estado panameño. A Panamá, sin embargo, esta relación con Estados Unidos no le trajo las ventajas que una relación formal de protectorado le hubiera significado, ya que este nuevo país no obtenía ni su autonomía política en sus asuntos internos ni derechos sobre la explotación de sus recursos.

Durante los primeros lustros de su existencia, la cristalización fundamental del cuasi-protectorado se dio con la presencia prolongada en varias ocasiones de contingentes de marines norteamericanos que desembarcaron tanto en Panamá como en diversos países de esta región. En la década de 1930, después que Estados Unidos retiró de las naciones centroamericanas sus fuerzas militares y estableció aparatos policíacos y de seguridad, les impuso como modelo de organización cívica el sistema entonces predominante en el sur de la unión americana: sistemas represivos que luego se convirtieron en el germen de prolongados regímenes autoritarios. La dinastía Somoza en Nicaragua es un claro ejemplo de ello.

La pequeña variación en la aplicación de ese dominio sobre Panamá tuvo cuatro rasgos fundamentales: Estados Unidos controló directamente el principal recurso natural istmeño, desarmó la Policía Nacional, ejercitó libremente su poderío militar en el istmo y mantuvo el control de las instituciones políticas y burocráticas nacionales. La variante panameña significó el establecimiento del ya citado sistema heredado del sur estadounidense, y la creación de un enclave de población de Estados Unidos en las riberas canaleras — la Zona del Canal de Panamá — que permitió escasos grados de autonomía a la oligarquía que administraba la relación semicolonial desde la ciudad de Panamá hacia el interior de la República.

Por ello, bajo las circunstancias en que se produjo su independencia de Colombia el 3 de noviembre de 1903, Panamá no podía aspirar a ninguna relación con Estados Unidos que no fuera el cuasi-protectorado. La nueva República inició su vida política obstaculizada por la intervención norteamericana que frenó las aspiraciones autonomistas de la joven nación aún antes de que pudieran echar raíces. Con la firma del Tratado Hay-Bunau Varilla en 1903 — firmado por un francés en representación de Panamá — el principal recurso natural panameño, que engendraba intereses por aprovechar las regalías que podrían surgir de su activación, quedaba sometido por completo a la autoridad de un estado extranjero. Todavía, Estados Unidos presionó a los gobernantes istmeños a que sancionaran en la Constitución de 1904 su injerencia en los asuntos internos de la nueva república.

De esa manera se estableció en Panamá un sistema estatal represivo que expresó el vínculo entre los intereses expansionistas de Estados Unidos y los grupos de poder plutocráticos del istmo. En calidad de socios menores, estos grupos oligárquicos acordaron aprobar el instrumento jurídico que le otorgó "a perpetuidad" el canal a la potencia del Norte y que les garantizaba el control sobre las incipientes instituciones estatales. A su vez, el tratado canalero dejó en pié un régimen que le permitió a Estados Unidos abrogarse gran parte de las prerrogativas del naciente estado panameño. De ahí que el historiador panameño Ricaurte Soler sostenga que "dadas las condiciones de mediatización política del Estado (paname-

ño) por parte del imperialismo, y de absoluta dependencia económica de las clases dominantes, el proceso de afirmación estatal-nacional se inició lento, inseguro y contradictorio".[9] La vida política nacional nació dirigida por una burguesía que abandonó toda pretensión de llevar a cabo una política económica y de comercio independiente de la nueva metrópoli, cediendo a grupos sociales subalternos la tarea de construir una nación.

En efecto, la necesidad de Estados Unidos de facilitar en aquella época los pagos derivados de la construcción del canal son el origen de que en 1904 Panamá haya establecido la Convención de Washington para establecer el dólar estadounidense como moneda de curso legal — y el continuo dominio de la oligarquía en la economía lo que impidió su alteración. Y, en la medida que las fuerzas armadas pueden convertirse en punto de apoyo significativo para la edificación de un Estado Nacional coherentemente estructurado, no es de extrañar que al poco tiempo de separarse de Colombia, Estados Unidos y la oligarquía coincidieron en desarmar la incipiente fuerza armada panameña. Estados Unidos se reservó para sí el derecho de establecer "la paz y el orden" en cualquier punto del país. Theodore Roosevelt, Presidente de E.U. que sancionó dicha relación en 1903, prometió nunca intervenir en el país... siempre y cuando este mantuviera una "conducta civilizada".[10]

Pero la intervención de Washington en la independencia de Panamá en 1903 no implicó que E.U. haya creado la nación panameña. Autores panameños coinciden en afirmar que "en 1903, una nación ya existía y una conciencia nacional panameña había sido ya formada".[11] Lo singular del caso panameño es que, como respuesta al alto grado de intervencionismo estadounidense en los asuntos internos del país y la supeditación de la plutocracia istmeña a los intereses norteamericanos, en Panamá surgieron expresiones culturales y políticas que le daban un incipiente carácter nacional al estado panameño. A pesar de que esto ocurría dentro de un ordenamiento institucional que no permitía ningún orden que no fuera el oligárquico-imperial, estas voces lograron salir algunas veces a la palestra política, pero no pudieron establecer su presencia permanente y consistente en el manejo estatal del país.

Paradójicamente, los norteamericanos mas bien han

considerado a Panamá como su creación. Esta idea se llegó a extender a tal punto que aún en la década de 1960 e inicios de la de 1970, historiadores de la potencia norteña mantuvieron la idea de la artificialidad del estado panameño. En ese sentido Russell Fitzgibbon afirmó que "Panamá es el estado más artificial en América Latina — artificial en su creación, su estructura social e integración interna, su economía, su política doméstica e internacional".[12] Asimismo, otro autor destacó que "la República de Panamá es un estado artificial que se formó porque el Presidente Roosevelt se tornó impaciente con los gobernantes de Colombia en las negociaciones de la ruta del canal ístmico".[13] Incluso, autores latinoamericanos de diversas tendencias ideológicas mostraban iguales creencias. Más que indagar profundamente en los procesos históricos panameños y su imposibilidad por superar el dominio directo y permanente por parte de Estados Unidos, estos autores señalaban lo que podía decirse sobre un Estado panameño que desde su formación en 1903 no daba señales significativas de independencia.

Durante las primeras décadas de formación de la república, la oligarquía que se apoderó del Estado necesitó de la periódica intervención estadounidense para asegurarse el control sobre las instituciones políticas panameñas. El poder de la oligarquía era un poder administrativo, y a su vez, de cómplice: aunque usufructuaba de él, no podía alterar el ordenamiento sobre el cual se basaba para dirigir el país, ya que su atadura a Estados Unidos le impedía tomar los pasos para desarrollar las condiciones sociales y económicas estables para asegurar su desenvolvimiento sin fricciones. Según el académico estadounidense Walter La Feber, "*una vez libres del control colombiano, (...) estos oligarcas, sus hijos y sus nietos, dominaron Panamá por sesenta años*".[14] Así, gobiernos oligárquicos y oposiciones oligárquicas recurrían a las autoridades norteamericanas de la Zona del Canal o del Departamento de Estado para supervisar los torneos electorales, manteniendo así el status de cuasi-protectorado. Según el politólogo francés Alain Rouquié, después de 1903 en Panamá "*el control de los asuntos públicos fue asegurado por un grupo dirigente muy reducido que concentró en sus manos la riqueza financiera y económica*".[15]

En efecto, la cláusula a perpetuidad del Tratado Hay-

Bunau Varilla fue la garantía permanente del poder oligárquico. Con el Tratado de 1903 Panamá cedió a Estados Unidos, a perpetuidad, una zona terrestre y marítima de 10 millas para la construcción, administración y protección del canal. Para estos fines, E.U. también se reservó el derecho de utilizar sus fuerzas de policía, militares y navales, y el de crear fortificaciones para el efectivo control del área cedida "como si fuera soberano." A cambio, la potencia norteña estaba supuesta a garantizar la independencia del istmo. No está de más decir que la Unión Americana tomó mucho más prerrogativas de las que le reservaba el tratado y que lo que quedó garantizado — mientras la sociedad panameña no lograra superarlo — fue el dominio oligárquico.

La relación oligarquía-Estados Unidos llegó a tal punto que la primera dependió no sólo económicamente, sino militarmente, del segundo. La sumisión de la oligarquía al enclave canalero, sin embargo, limitó a su vez su capacidad para promover el desarrollo conjunto de la economía panameña. Con el establecimiento del enclave colonial que se derivó de ese tratado — al monopolizar la provisión de bienes y servicios a la población estadounidense acantonada en las riberas del canal — la potencia del norte le arrebató a la burguesía comercial panameña todas las posibilidades para capitalizar la posición geográfica del istmo. Pero en la medida en que la oligarquía istmeña conservó su unidad como bloque de poder, las formas semi-coloniales de la dependencia panameña se mantuvieron incólumes durante las siguientes seis décadas.

Desde 1904, las luchas políticas de amplios sectores sociales estuvieron ligadas al intento por contrarrestar las interpretaciones arbitrarias del Tratado Hay-Bunau Varilla por parte de Washington. En 1906, a fin de calmar los ánimos panameños, el Secretario de Guerra William Taft negoció un acuerdo mediante el cual E.U. reconocía que Panamá detentaba la "soberanía titular" sobre el canal y sus áreas periféricas — según Taft, la soberanía era un ideal estéril que apetecía sólo a "mentes poéticas y sentimentales" latinoamericanas que gustan de "nombres y formas".[16]

Durante la vigencia de ésta relación, las reclamaciones panameñas sólo alcanzaron un mínimo grado de coherencia cuando fueron llevadas por grupos políticos que enfrentaron el

dominio oligárquico, como durante la administración del Dr. Belisario Porras en sus presidencias casi ininterrumpidas entre 1912 y 1924. La evidente necesidad para crear y reforzar instituciones estatales para que se sostuviera la incipiente República, hizo que el Dr. Porras pusiera en práctica diversas políticas que resultaron en una parcial afirmación del Estado panameño. En este sentido cabe destacar la construcción de infraestructura que le dio cohesión física a la incipiente nación, y la intervención del Estado ante algunas funciones públicas que todavía eran conservadas por la Iglesia. Precisamente, de ahí se deriva la resistencia exitosa de Porras a la pretensión de E.U. de desarmar la Policía Nacional en 1921.[17]

Los intentos de los gobiernos panameños por alterar el tratado canalero de 1903 no sólo fueron infructuosos sino que dependían de lo que Washington estimase conveniente para el istmo. Cuando el Presidente Porras en 1920 y en 1923 solicitó una renegociación para remover el carácter unilateral del tratado canalero, el Secretario de Estado Charles Evans Hughes reafirmó los supuestos derechos obtenidos por su país con el tratado canalero e incluso abrogó el acuerdo Taft. Un convenio negociado por ambos países en 1926 obligaba a Panamá a declararle la guerra a cualquiera nación contra la cual E.U. entrara en conflicto y establecía una fuerza militar panameña que estaría comandada por oficiales norteamericanos. El convenio de 1926 además omitía toda referencia a la soberanía panameña, no aumentaba las prestaciones financieras a Panamá, pero sí añadía tierras a la jurisdicción norteamericana. Habiendo reasumido plenamente el poder político en 1924, la oligarquía quiso ampliar sus relaciones con la potencia norteña, para evitar ser desplazada nuevamente por grupos políticos populistas como el del Dr. Porras. Si bien las presiones de los sectores medios impidieron que el acuerdo fuera aprobado por la Asamblea Nacional, la relación de cuasi-protectorado con Estados Unidos no cambió mínimamente. En ese último lustro de la década de 1920 el gobierno panameño no daba señales de independencia a tal punto que el Presidente de E.U., Calvin Coolidge, se refirió a Panamá como "*una posesión periférica*" de su país.[18]

La constante injerencia de E.U. en la política panameña inhibió el desarrollo de un proceso político nacional autónomo

y fuerte que fuera capaz de conducir las aspiraciones nacionales y renovadoras de sectores sociales emergentes. Según un investigador norteamericano, "*esfuerzos tempranos de las élites dominantes para administrar el nacionalismo frecuentemente fallaron porque las élites eran débiles y estaban divididas... y porque ninguna reforma significativa fue iniciada para diferir conflictos interclasistas*".[19] La subordinación de la oligarquía a Estados Unidos y el proceso político istmeño eran parte de una misma dimensión: la primera se encargaba de que los anhelos populares y nacionalistas no rebasaran el marco del cuasi-protectorado, y el segundo le daba a las primeras la seguridad militar y económica de que, independientemente de lo que sucediese, esa relación y aprovechamiento mutuo jamás terminaría. Sin embargo, la intervención permanente de E.U. dejaba a su vez a la plutocracia istmeña con un tenue control político y una escasa autoridad que fue permanentemente cuestionada por la comunidad nacional en formación.

La oligarquía panameña tenía que equilibrar su dependencia económica y militar de Washington con las presiones populares nacionalistas que buscaban remover el enclave colonial. Su endeblez era precariamente balanceada sólo cuando Washington estaba dispuesto a dar algunas concesiones simbólicas. Entre la nueva metrópoli — Estados Unidos — y el pueblo, la oligarquía optó en varias ocasiones por profundizar sus lazos con el primero. Prueba de ello son la intervención de tropas norteamericanas en Panamá para aplastar las luchas inquilinarias de 1925 — solicitada y aplaudida por el Secretario del Exterior, Horacio Alfaro, fundador de la Cámara de Comercio panameña — y los intentos por introducir cambios mínimos al Tratado Canalero en 1926, 1947 y 1967, que precisamente resultaron infructuosos porque el rechazo popular desafiaba salirse de sus cauces.

Es demostración de la supuesta "disponibilidad" de Washington para atender las demandas panameñas el Tratado Arias-Roosevelt de 1936. Con este acuerdo, se eliminó el artículo constitucional que sancionaba la intervención norteamericana en el istmo, se actualizaron algunas prestaciones económicas y se le permitió a los panameños transitar por la Zona del Canal. Sin embargo, el acuerdo no fue ratificado por el Senado de E.U. sino hasta 1939 — en la antesala de la

Segunda Guerra Mundial — cuando por intereses estratégicos lo requerían. Aunque dicho tratado, sin embargo, no tocaba en lo absoluto la cláusula a perpetuidad, para que el Senado de E.U. lo aprobara, Panamá se vio obligada a autorizarle a las fuerzas militares de ese país conducir maniobras sobre cualquier parte del territorio panameño y cederle el derecho de tomar medidas unilaterales para defender el canal si hubiera insuficiente tiempo para consultar con las autoridades panameñas, lo que se constituyó en nuevas puertas abiertas para la intervención de E.U.

En las postrimerías de la Guerra Fría, en diciembre de 1947, Estados Unidos quiso acordar la permanencia de las bases militares que había establecido arbitrariamente en territorio panameño durante la segunda guerra mundial. Mediante el proyecto de tratado Filós-Hines, la oligarquía panameña se aseguraba una cantidad significativa de recursos económicos precisamente cuando estaba por iniciarse un proceso electoral. Sin embargo, los sectores medios y populares lo objetaron y lograron, mediante su amplia movilización, que la Asamblea Nacional rechazara el acuerdo a pesar de que en su mayoría estaba formada por diputados afines al gobierno. Un nuevo tratado en 1955, el Remón-Eisenhower, amplió por 15 años la presencia de E.U. sobre una base militar en la localidad de Río Hato a cambio de abrir el mercado zoneíta a contadas empresas panameñas.

La debilidad política de la oligarquía para estructurar un sistema político coherente también se manifestó en la pobre institucionalización de los partidos políticos. Por varias décadas hasta su abolición temporal con el golpe de estado de 1968, Panamá contó con un sistema de partidos múltiple y endeble, en el que ninguno de ellos logró jamás alcanzar, por sí sólo, mayorías relativas en el congreso panameño. Al no poder controlar por sí solos las instituciones políticas del país, existieron fuertes presiones para establecer coaliciones que, en última instancia, tenían una mayor habilidad para lograr la identidad y la adhesión de los partidos que la componían. Los partidos muchas veces desaparecían del todo durante períodos no electorales y resucitaban cada cuatro años para los períodos electorales, muchas veces cambiando entre uno y otro las alianzas construidas anteriormente.

El dominio político de los "rabiblancos" — como se le ha llamado a la oligarquía en Panamá — se basaba fundamentalmente en la manipulación de procesos electorales que fueron, esencialmente, tácticas dilatorias para mantenerse en el poder. Sin embargo, con ello estos grupos plutocráticos impedían desbordamientos populares y, en la medida de lo posible, nacionalistas. Así, el fraude fue sistemático y habitual. Generalmente, durante este período toda lucha política se circunscribió a apoderarse de la mesa de votaciones.[20]

En este sistema, la cohesión intrapartidista fue posible sólo cuando sus líderes mostraron la capacidad de mantenerse como dirigentes, ya sea por su carisma o por sus vínculos familiares, clientelistas o de negocios. A pesar de los diferentes nombres y símbolos que los partidos adquirieron, sus plataformas políticas eran esencialmente iguales: a pesar de que ninguno proponía nada en concreto, sus líderes buscaban diferenciarse sobre la base de discursos alegóricos a la panameñidad o a temas en los que de todas maneras era imposible encontrar propuesta alguna. Aunado a su carencia de organización, estos partidos crearon uno de los sistemas políticos más inestables del continente.

Consecuentemente, los partidos oligárquicos no establecieron una funcionalidad y diversidad como organizaciones supuestas a reunir diversos intereses nacionales. Estos partidos sólo representaban intereses específicos de las distintas fracciones familiares oligárquicas que controlaban gran parte de las riquezas de la nación. Al presentarse divididos en varias organizaciones y así postulados en papeletas electorales distintas, los grupos oligárquicos se aseguraron de ser electos y predominar no sólo en la presidencia, sino en la Asamblea Nacional.[21] Ronald Mc Donald, un investigador estadounidense, concluyó al observar este sistema político que "*la demagogia es una vía de la política, independientemente de las ideologías o partidos. La táctica política más común es apelar al fuerte sentimiento antiyanqui que traspasa clases, religiones o partidos*".[22]

Estos "partidos" eran a su vez vehículos para que la plutocracia influyera sobre el resto de la sociedad bajo una fachada de competitividad democrática. Mientras los sectores medios y populares no lograron organizarse efectivamente, sin

embargo, perduró el dominio oligárquico. Pero si la oligarquía pudo mantener las riendas del país por más de seis décadas fue porque la estructura social panameña había permanecido relativamente igual: unas cuantas familias dueñas de casi todo, clases medias que carecen de fuerza y un sector popular escasamente organizado e ideologizado. Por lo tanto, al incluir consignas nacionalistas en sus discursos y planteamientos, la oligarquía pudo permanecer al frente de las instituciones del estado panameño. Con ésta táctica, la plutocracia istmeña recogió sentimientos nacionalistas de las masas y apartó un tema vital de las aspiraciones populares: nacionalismo manipulado y clientelismo oligárquico fueron efectivos para salvaguardar el neocolonialismo.

La característica principal del estado oligárquico consistía en que la riqueza y las relaciones familiares eran los prerrequisitos para acceder a posiciones gubernamentales. La política panameña no se organizaba a través de los partidos, sino sobre las riquezas de hombres y familias que se acrecentaban con el uso del poder. A su vez, el permanente faccionalismo entre las filas de la oligarquía panameña se tradujo en una inestabilidad política crónica, acompañada generalmente de dosis de violencia sin que ello provocara cambios sustanciales en las orientaciones gubernamentales. Una compañía de consultoría política con sede en Washington sostuvo después de observar la evolución de este sistema político que "*los partidos grandes son de naturaleza personalista, contendiendo por las ventajas que se le adjudican al vencedor y sus seguidores inmediatos. Muy raramente el electorado general ha articulado una posición e influido en el proceso* [político]*... la manipulación de la maquinaria electoral ha sido la regla*".[23]

Sin embargo, al depender de Estados Unidos para mantenerse en el poder, la oligarquía no contó con un dinamismo propio que le permitiera consolidarse mediante instituciones políticas y procedimientos electorales que tuvieran arraigo en el país. Aunado a su incoherencia organizativa, fue frecuente que estas familias buscaran su linaje en quienes gobernaron Panamá durante el período colonial y la época de unión a Colombia para reclamar derechos a mantener sus posiciones políticas. Por ello, cuando militares no controlados directamente por estos clanes o por Estados Unidos tomaron el poder político en 1968,

la oligarquía maniobró poco para recuperarlo, porque esperaban que se les regresara al poder gracias a lo que supuestamente les correspondía por "derecho histórico" y por su asociación con Estados Unidos.

Durante más de seis décadas, este sistema oligárquico sirvió a los intereses de Washington. El completo dominio norteamericano sobre la franja canalera istmeña no fue cuestionado significativamente por la oligarquía, lo que le permitió a E.U. erigir un enclave colonial que hasta 1978 figuró en sus libros de texto como una posesión extraterritorial. El canal mostró ser una infraestructura física que le permitió a la potencia del norte subsidiar su comercio exterior — al cobrar peajes que no reflejaban los costos de operación, ya que no incluían pagos dignos para Panamá — establecer un enclave militar en medio de latinoamérica y extraer directamente los beneficios de su explotación. Especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consideró que el territorio panameño era el lugar adecuado para el establecimiento de sus bases militares, adicionales a las que ya había establecido en las riberas del Canal.

A raíz de la Segunda Guerra Mundial, E.U. empezó a reconsiderar sus intereses no sólo en Panamá, sino en América Latina. Si bien en el segundo lustro de la década de 1940, cuando se inicia el escenario internacional conocido como "Guerra Fría", Estados Unidos fomentó en sus áreas de influencia regímenes abiertamente dictatoriales o democrático-autoritarios que retomaran los intereses de seguridad norteamericanos como suyos, en Panamá este país se mostró aquiescente con la reedición cuatrienal de regímenes oligárquico-democráticos que, para el caso, cumplieron con las mismas funciones. Bajo el esquema de la confrontación este-oeste, desde la década del cincuenta hasta la mayor parte de los setenta — con secuelas en los ochenta — en América Latina preponderaron dictaduras militares que asumieron el papel contrainsurgente, antirenovador y antireformista asignado por Estados Unidos. Este último, ya como potencia y centro militar, económico y político del bloque occidental, condujo el establecimiento de aquellos sistemas como parte de su intento por conservar y ampliar las esferas en las que predominaba su influencia.

Una vez finalizada la conflagración de las potencias mundiales, la permanencia en el continente de estos regímenes represivos encontró fuertes obstáculos para contener las aspiraciones sociales de los pueblos latinoamericanos. El breve período democrático de la posguerra no fue capaz de llenar las expectativas de amplios sectores de las poblaciones que fueron movilizadas por las transformaciones económicas de la Segunda Guerra Mundial. En el caso panameño, el único y breve período en el que en este país sus dirigentes permitieron la participación de sectores medios y partidos de izquierda fue en el período inmediato a esta conflagración. Ello se reflejó en el acceso a una Asamblea Nacional Constituyente en 1947 de figuras reformistas que luego hicieron posible una nueva constitución que sustituyó la heredada de Colombia — reeditada en sus puntos básicos por Panamá en 1904 — y un Código (el primero) de Trabajo. La movilización política y reivindicativa de sectores medios y populares, en algunos casos movidos por las transformaciones económico-sociales del socialismo, desafió las formas tradicionales del ejercicio de la política en el istmo.

Así, al margen del establecimiento de sistemas electorales, en América Latina se produjeron otras alteraciones aún más profundas que terminaron cuestionando y cancelando las débiles bases sobre las que se construyeron los regímenes políticos existentes: las migraciones campo-ciudad generada por la creciente concentración de la tierra en pocas manos, las movilizaciones obreras, la reducción del peso político de sectores rurales tradicionales, el considerable aumento de la participación de grupos profesionales y el auge del activismo de estudiantes que reclamaban un nuevo modelo de sociedad. Con estos cambios, los endebles sistemas políticos civiles no fueron capaces de tomar el papel contrainsurgente que les exigió E.U. en pleno transcurso de la Guerra Fría. Por ello, en latinoamérica los regímenes civiles sucumbieron ante instituciones militares fortalecidas por el apuntalamiento antisubversivo de E.U. que llegaban al poder apoyados por empresarios transnacionales.

En la década de 1960, Estados Unidos buscó nuevas formas de vincularse con América Latina precisamente después del estallido de la revolución cubana en 1959. Esta revolución encendió las aspiraciones populares y nacionalistas latino-

americanas y alarmó a los estrategas militares norteamericanos que, en lo inmediato, no encontraron otras formas de prevalecer sobre estos desafíos que no fueran las que destacaban el enfrentamiento militar. Así, las intervenciones de Estados Unidos en Cuba (1961), Panamá (1964) y República Dominicana (1965), y en el sureste asiático — Corea en los cincuentas y Vietnam en los sesentas — independientemente de su éxito o fracaso, muestran la dificultad que tuvo E.U. para alterar las formas político-militares con las que formuló su influencia global.

Con las administraciones de Harry Truman (1945-1953) y Dwight Eisenhower (1953-1961), la consolidación de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial ocurrió sobre la base de una estrategia global que centraba su atención en la supremacía nuclear norteamericana. Esta, supuestamente, sería capaz de "contener" el expansionismo soviético. A partir de entonces, en Washington dominó la percepción del escenario internacional como un "juego de suma cero" en el que las pérdidas de un bloque eran las ganancias del otro, y viceversa. A través de la homogeneización ideológica que traían consigo los pactos militares de E.U. con diversos países del mundo, E.U. inhibió todo intento por proceder autónomamente en otras regiones del globo.

En la década de los cincuenta y al principio de los sesentas, sin embargo, esta estrategia de "contención" no fue factible para dirimir la insubordinación de movimientos sociales contestatarios. En el hemisferio, la "Alianza para el Progreso" promulgada por el Presidente John F. Kennedy (1961-1963) fue un temprano intento por superar las limitaciones de la estrategia global en el aspecto político-económico. Washington encontró la contraparte militar de este nuevo desarrollo en la readecuación del entrenamiento de los militares latinoamericanos para hacerlos capaces de enfrentar el nuevo desafío surgido por la creciente emergencia de movimientos de liberación.[24]

Panamá en la reformulación estratégica de posguerra

Panamá no es ajena a las transformaciones de las sociedades

latinoamericanas ni a los tempranos intentos de Estados Unidos por alterar las bases sobre las cuales ejerció su influencia tanto global como hemisférica. A lo largo de su historia, el intento por superar el vínculo oligárquico-imperial fue una constante de las luchas políticas y sociales de sectores sociales medios y populares. Durante más de seis décadas como país independiente, estos grupos sociales intentaron establecer las bases sobre las que Panamá edificaría un Estado nacional viable y lograr que los recursos económicos y humanos del país contribuyan a su posterior desenvolvimiento. De allí que el control de su principal recurso geográfico por parte de Estados Unidos y el estado oligárquico que ello conllevó, fueron el blanco principal de sus luchas.

En las décadas de los cincuentas y los sesentas ocurrieron una serie de transformaciones en Panamá que resquebrajaron el sistema oligárquico a partir de sus raíces. En ésta época se evidencian los amplios problemas sociales inherentes al enclave colonial-oligárquico. Grupos sociales de diversa índole se pronuncian frecuentemente a favor de reivindicaciones populares y nacionales, traspasando las barreras partidarias. En 1947 la ciudadanía logró que la Asamblea Nacional no ratifique el Tratado Filós-Hines, instrumento cuyo objetivo era renovar las bases militares de E.U. en el istmo. En 1949, moradores de áreas populares lograron un dictámen que les protegió del desalojo de sus viviendas. En 1950, la Presidencia aceptó las condiciones del sindicalismo que protestaba por las alzas de precios y alquileres. Entre 1956 y 1959, las capas medias lucharon por la autonomía municipal, ocurrieron diversas huelgas estudiantiles y surgió un levantamiento armado en Cerro Tute, un primer intento de estudiantes radicalizados por emular la Revolución Cubana. También se dió la masiva Marcha del Hambre y la Desesperación de Panamá a Colón, así como miles de panameños se movilizaron para colocar la bandera nacional en la Zona del Canal. Después de una huelga prolongada, en 1960 los trabajadores del enclave bananero lograron su primer contrato colectivo de trabajo. En 1962 tuvo lugar el Primer Congreso Nacional Campesino y mediante mitines, marchas y congresos, estudiantes y maestros se pronunciaron por una Reforma Educativa.

Estas y muchas otras manifestaciones antimperialistas y

antioligárquicas se combinaron con luchas reivindicativas específicas. Los clanes de la oligarquía panameña, sin embargo, no lograron canalizar el activismo popular hacia sus redes clientelistas y optaron por reprimirlas. Tal tarea le fue encargada a una fuerza policial creada con el inicio de la guerra fría, una institución intencionalmente creada, entrenada y armada para sustituir a E.U. en el papel policial que sus tropas habían tenido en Panamá hasta 1936. Paralelamente, sin embargo, las capas medias se organizaron autónomamente y buscaron sustraerse de la égida oligárquica.

Bajo el gobierno del Presidente José Remón (1952-1955), que surgió de las filas de la Policía Nacional, la plutocracia panameña logró algunas concesiones comerciales de Estados Unidos. Mediante el Tratado Remón-Eisenhower, se acordó un aumento en la anualidad destinada por Washington para el uso del Canal, pero no se discutió el tema de la soberanía panameña sobre el territorio canalero. A pesar de ello, con la apertura del mercado de la población zoneíta para algunos negocios panameños, Panamá experimentó una leve industrialización que vendría a sumarse a la inducida anteriormente por la expansión de la fuerza de trabajo canalera durante la segunda guerra mundial. Ello, junto a una política limitada de sustitución de importaciones en la década de 1960, alteró la estructura social panameña de tal forma que se añadieron al escenario político y social masas de trabajadores y capas medias que iban en ascenso, en busca de una expresión directa en el Estado. Sin embargo, la oligarquía panameña no tuvo la capacidad de ampliar su influencia a estos sectores.

En la década del sesenta, se produjeron movimientos concretos que demandaban respuesta a diversos problemas inherentes al enclave oligárquico-imperial. A raíz de la Revolución Cubana de 1959, elementos de la plutocracia istmeña tomaron conciencia de la necesidad de permitir algunas alteraciones. En 1960 Roberto Chiari, un representante de este sector "concientizado", llegó a la Presidencia mediante elecciones relativamente "competitivas".[25] Según Goldrich, Chiari se reconoció públicamente como oligarca, "*probablemente el último de ese pequeño círculo en detentar la Presidencia*".[26] La consultoría con sede en Washington ya aludida se refirió a ésta situación destacando que, "*temerosos de las perspectivas de una revolución social, muchos miembros de la oligarquía reconocieron la necesidad de aceptar al menos reformas sociales limitadas... Chiari promulgó un programa de reformas sociales moderadas para enfrentar el desafío de una posible revolución inspirada en* [Fidel] *Castro*".[27] Chiari predijo que el cambio era inevitable y que el fracaso de las reformas sería seguido por eventos paralelos a los de Cuba. A pesar de ello, anotó Goldrich, "*la estructura política* [panameña] *permaneció igual*".[28]

Para este período, incluso los hijos de ésta élite oligárquica exhibieron un cierto grado de hostilidad hacia el sistema político vigente y reticencia hacia E.U., más allá del que se podría esperar sobre la base de los intereses de sus padres en mantener los lazos prevalecientes con ese país.[29] En ese sentido, una encuesta de Goldrich — preocupado por el futuro desarrollo istmeño a raíz del desafío proveniente de "*amplios levantamientos nacionalistas con respecto al canal*" — reveló que un noventa por ciento de estos jóvenes creía en algún grado que los políticos panameños "se venden fácilmente" mientras que una igual mayoría, paradójicamente, apoyaba el régimen de Chiari.[30]

A pesar de las intenciones declaradas por Chiari, las propuestas de reforma agraria, fiscal, y otras de igual relevancia no fueron llevadas a cabo. Panamá todavía podía caracterizarse como dominada políticamente por unas cuantas familias cuyas fortunas estaban basadas principalmente en el comercio, y secundariamente, en la tenencia de la tierra. En los sesenta, discusiones caseras sobre éste grupo en el poder le adjudicaban el calificativo de ser parte de un "Club de los Exonerados", ya que en su mayoría no pagaban impuestos al Estado. Ocasionalmente, un miembro de la clase media ganaba influencia política propia, "*pero no como vocero de ésta*", según la consultoría aludida.[31] En este sentido, Goldrich también destacó que "*aunque gente de los sectores medios y hasta humildes han llegado a altas posiciones políticas y económicas, Panamá... nunca ha experimentado cualquier cosa parecida a una revolución de clase media a través del cual* [esta] *haya entrado a la arena política*".[32]

La capacidad reformista de la oligarquía panameña estaba obstaculizada por dos barreras que les fue imposible superar. En primer lugar, el segmento reformista de la oligarquía era

minoritario y, al no estar canalizadas y coordinadas las presiones sociales, la presencia militar de E.U. era suficiente para ahuyentar todo impulso al reformismo — que necesariamente tendría que estar acompañado de una retórica revolucionaria o, al menos, reformista. Era improbable que esta plutocracia iniciara un programa de reformas significativas, ya que ellas mismas, junto a las fracciones tradicionales de su género, dominaban directamente las instituciones del Estado. Los sectores medios, si bien en aumento, aún no lograban controlar algún aparato del Estado que pudieran utilizar para llevar a cabo esas reformas. Y en segundo lugar, a pesar de las intenciones reformistas, el estado oligárquico no podía tolerar afectar a los poderosos intereses de compañías norteamericanas establecidas en el país — lo que un serio programa de reformas debería tocar necesariamente — porque uno y los otros formaban parte del mismo concatenamiento oligárquico.

En efecto, el poder plutocrático no tuvo la capacidad para responder a las crecientes demandas de los estratos sociales inferiores. Si bien el complejo oligárquico fue suspendido por el golpe militar de 1968 — cuyo manejo político inicial lo tuvieron oficiales medios apoyados por las clases medias — fueron las profundas y cruentas manifestaciones de enero de 1964 en Panamá las que precedieron la decidida transformación del enclave colonial canalero. En enero de 1964 murieron varios estudiantes panameños que pretendían izar la bandera panameña en la Zona del Canal al ser enfrentados por la población estadounidense y por la policía zoneíta. A partir de este incidente, algunos grupos en Washington percibieron la necesidad de modificar la forma como E.U. ejercía su relación con Panamá, con el objeto de impedir que éstas se desborden y traigan una amplia reformulación del estado panameño.

Estos sucesos acentuaron las percepciones de la crisis tanto de los distintos sectores panameños como de Washington. En la ciudad de Panamá, entre el 9 y el 11 de enero de ese año, se movilizaron casi cien mil panameños — de una población total menor de 1.2 millones — protestando por la agresión. El gobierno de Chiari se vió forzado a romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y no las reestableció hasta tanto Washington no aceptó negociar un nuevo acuerdo canalero que resolviera el conjunto de disputas entre las dos naciones.

Posteriormente, bajo la administración del sucesor de Chiari, Marcos Robles (1964-1968), se iniciaron y concluyeron las conversaciones entre Panamá y E.U. tendientes a replantear la administración, usufructo y defensa del canal. Ello trajo la firma del proyecto de Tratado Johnson-Robles en 1967 que, a pesar de abrogar el de 1903 y de que Panamá recobraba "en principio" la soberanía sobre la Zona del Canal, no contemplaba el pleno y efectivo derecho de Panamá sobre esta franja de su territorio, así como E.U. se reservaba la decisión de dejar en el istmo las tropas militares que considerase necesarias. En este proyecto, la cláusula a perpetuidad del tratado de 1903 era reemplazada por una no menos onerosa que establecía cien años como término de perentoriedad. Sin embargo, la vigorosa oposición ciudadana nuevamente dió al traste con este proyecto.

Por otro lado, ni Panamá ni E.U. estaban listos para aprobar nuevos acuerdos canaleros que alteraran la vieja relación, por lo que entre 1968 y 1970 mas bien las negociaciones se estancaron. Las negociaciones se hacían sobre la base de que aún cuando E.U. regresara el canal, sus instalaciones se volvían obsoletas. En efecto, a fines de 1964, a pocos meses de haber iniciado las negociaciones bilaterales, Johnson declaró que E.U. podría construír un canal a nivel sobre territorio colombiano, por la frontera Costa Rica-Nicaragua, o por territorio panameño. A su vez, en Panamá la discusión de los proyectos en las cercanías del proceso electoral de mayo de 1968 imposibilitaba que la Asamblea Nacional pretendiera discutirlo y que tuviera alguna posibilidad de ser aprobado. La conciencia nacional de sectores emergentes provocó que el país no estuviera listo para aceptar la nueva relación, ya no colonial, sino neocolonial, pero igualmente antinacional que habría de surgir de los tratados Johnson-Robles.

Por su parte, E.U. tampoco estaba preparado para asumir un cambio en la nueva relación. El año de 1968 también fue un sensible año electoral en este país. Es un período en el que todavía prevalecía la visión del istmo de Panamá como punto central de la defensa de los intereses norteamericanos en el hemisferio occidental. En este contexto, en la Cámara de Representantes, el congresista O. J. Flood hizo eco de ésta visión afirmando que E.U. nunca abandonaría su supremacía

sobre la Zona del Canal, apoyado por un grupo de ciento veinte representantes y senadores de ambos partidos y otras varias organizaciones conservadoras que se movilizaron para impedir una resolución favorable a las demandas panameñas.[33]

No obstante el estancamiento derivado de aquella situación, en el primer lustro de la década de 1970 surgieron las condiciones que permitieron renovar las relaciones Panamá-E.U. El proceso electoral de 1968 en ambos países y el golpe de Estado en Panamá en octubre del mismo año — y su indefinición hasta diciembre de 1969 — contribuyeron a alargar el impasse negociador. Sin embargo, para 1973 el escenario internacional mostraba nuevas condiciones para lograrlo. En el primer lustro de ésta década, E.U. estaba inmerso en un conflicto militar de crecientes proporciones en el sudeste asiático y en un proceso de distensión este-oeste que implicó, para casos como el panameño — donde no se reformulaban las relaciones sociales internas — ampliar su espacio de tolerancia para permitirle al país tercermundista un cierto grado de autonomía periférica.

Así, el ejercicio de esa autonomía relativa en la esfera internacional fue la constante de la política exterior del gobierno del Gral. Omar Torrijos. Su gobierno, el primero en obtener una base social nacional desde la época del Dr. Porras, amplió sus márgenes de negociación a través de múltiples contactos con sus vecinos, con potencias medias emergentes, e incluso, con instituciones militares y políticas de distinto corte ideológico. En un intento por lograr el reconocimiento de Panamá como nación independiente y contrarrestar la influencia determinante de E.U., el gobierno de Torrijos emprendió un proceso de denuncia y búsqueda de apoyo a nivel regional y hemisférico. Junto a otros países de la región que también pugnaban por ejercer su autonomía — México, Venezuela, Jamaica, Perú, Argentina y Chile — Panamá apoyó e impulsó diversas iniciativas de corte tercermundista y nacionalista que, para 1975, llegaron a abarcar la apertura de relaciones diplomáticas con Cuba.

Consecuentemente, Panamá pudo empezar a redefinir su relación con E.U. en la medida que trabajó para alterar la visión que este país tenía del istmo en el conjunto de su estrategia global. Panamá reconoció los riesgos que implicaba tener

disensos con Washington. Después del impasse entre las dos naciones por los vaivenes políticos en Panamá y por los claros intentos de E.U. por hacer volver al istmo a su antiguo status, Panamá logró convocar en marzo de 1973 a una reunión especial del Consejo de Seguridad en territorio panameño para tratar el asunto canalero. En ese foro, Panamá obtuvo un abrumador respaldo a su causa, a pesar de que E.U. ejerció su poder de veto a la resolución que favoreció la causa istmeña.

El amplio apoyo a Panamá finalmente condujo a E.U. a cambiar su disposición hacia la cuestión canalera. Tres meses después de la reunión de las Naciones Unidas en Panamá, el Presidente Richard Nixon declaró en un mensaje sobre política exterior al Congreso que *"en los últimos nueve años los esfuerzos para conventr un nuevo tratado aceptable para ambas partes han fracasado. Esto ha agregado considerable tensión en nuestras relaciones con Panamá. Es hora de que... surjan nuevas relaciones entre nosotros..."*.[34]

La posibilidad de una explosión en la región mesoamericana era evidente al calor de la unidad nacional y el apoyo internacional a la demanda istmeña de obtener un nuevo tratado a su favor. E.U. accedía a negociar su presencia en el istmo para evitar que las condiciones empeoraran de tal manera que le impidiera enfrentarse a otros retos de mayor o igual envergadura en otras partes del globo. Si bien E.U. era indiscutiblemente la nación más poderosa del mundo, era evidente la incapacidad de este país para tratar los nuevos desafíos que emergían en el sistema internacional. Así, en septiembre de 1973, E.U. hizo un esfuerzo particular para llevar a cabo las negociaciones dándole una prioridad y una relevancia nunca antes otorgada — en momentos en que inducía la reversión de la democracia chilena.

Las negociaciones en curso se movían de una estructura de incompatibilidad a una de mayor compatibilidad: los gobiernos de ambos países decidieron resolver sus diferencias sobre la base de encontrar puntos en común, sin que ello implique renunciar a sus divergencias. Para Panamá, el acuerdo firmado en febrero de 1974 por el canciller Juan Antonio Tack, y por el Secretario de Estado de E.U., Henry Kissinger, implicó la posibilidad de darle una respuesta concreta y real a las aspiraciones nacionales. Para Estados Unidos, reformar las

normas jurídicas que establecían su relación con esa nación conllevaba demostrarle al mundo la flexibilidad con que podía ejercer su poder global.

El escenario internacional de 1973 era proclive al inicio de negociaciones. Recordemos que el acuerdo mencionado ocurre mientras Washington centra su atención en problemas del Medio Oriente (conflicto árabe-israelí), desarrolla la *deténte* con la Unión Soviética — para ampliar las limitaciones a la construcción de nuevas armas estratégicas y encontrar un balance en Europa del Este mediante la reducción de fuerzas convencionales — y con China, y está envuelto en una Conferencia sobre Seguridad y Cooperación con sus aliados de Europa.[35] Los estrategas de Washington consideraban haberle dado poca atención a América Latina — la manera grotesca como se envuelve en el derrocamiento del Presidente Salvador Allende en Chile es muestra de ello — por lo que alcanzar nuevos acuerdos con Panamá adquiría relevancia regional, al convertirse en un imperativo de la política hacia latinoamérica.

Con el acuerdo Tack-Kissinger, la administración Nixon añadió premisas distintas a las relaciones Panamá-E.U. El acuerdo propuso eliminar el concepto de perpetuidad y señaló que el Tratado de 1903, junto a sus varias enmiendas, sería reeemplazado íntegramente por otro que le pusiera término a la jurisdicción norteamericana. A pesar de la voluntad de la Casa Blanca para obrar en esta dirección, sin embargo, varias circunstancias impidieron avanzar rápidamente en las negociaciones. Aupados por grupos de presión Zonians (habitantes de la Zona del Canal), un grupo de treinta y siete senadores bloquearon las proposiciones de estos acuerdos y la Cámara de Representantes congeló los fondos dedicados a las negociaciones con Panamá y exigió "q*ue se protejan los intereses vitales de E.U. en la Zona del Canal*". Además, el escándalo Watergate y más tarde la división del Partido Republicano en torno a la cuestión canalera — reflejado en el desafío conservador de Ronald Reagan a la candidatura de Gerald Ford a la presidencia en 1976 — contribuyeron a retrasar las negociaciones para un nuevo acuerdo.

En el transcurso de éste período, sin embargo, la atención de E.U. hacia América Latina se tradujo en una alteración radical del clima político del continente. Dictaduras militares

anticomunistas erigidas sobre la doctrina de seguridad nacional del Pentágono desalojaron progresivamente a los gobiernos proclives al nacionalismo y al reformismo — por no decir del socialismo, como en Chile en 1973. Así, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador y Honduras, previamente bajo gobiernos nacionalistas o reformistas, en el transcurso de estos años observaron cambios de gobierno y así alteraron la balanza continental hacia el conservadurismo. Panamá, si bien se mantuvo bajo las mismas figuras, para mantener una unidad nacional mientras se desaceleraban los ritmos de crecimiento económico, otorgó concesiones a grupos de comerciantes y empresarios en detrimento de demandas populares redistributivas. El régimen del Gral. Torrijos había logrado el apoyo de los grupos y clases que desafiaron el sistema oligárquico, y para este momento el líder panameño podía extender el compás de apoyo a grupos de empresarios con el objetivo de mantener la estabilidad política mientras se negociaban los tratados.

A pesar de los cambios en el equilibrio regional favorables a E.U. y contrarios a regímenes como el panameño, una serie de imperativos de la estrategia global norteamericana dieron pié a la celebración de dichos acuerdos canaleros. En primer lugar, con el paso del tiempo la vía canalera resultaba inadecuada para los supertanques y otros barcos de gran extensión. Analistas estadounidenses calcularon que las instalaciones canaleras existentes se encaminaban hacia su obsolescencia. En este contexto, un estudio destacó que la capacidad de tránsito del canal llegaría a sus límites en pocos años. La cuestión de la perentoriedad de la presencia de las bases adquiría menor relevancia en la medida que la posible construcción de un canal a nivel requería menor personal, menor infraestructura y por lo tanto, menos áreas sujetas a controles de seguridad. Incluso, un segmento importante del liderazgo del ejército de E.U., que sería desplazado eventualmente de Panamá de concretarse los tratados, favorecían las demandas panameñas.[36]

Consecuentemente, si estaba en proyecto una arteria de comunicación relativamente más simple, no sería indispensable una presencia norteamericana de envergadura. Para los estrategas militares, el desarrollo alcanzado por la tecnología

nuclear en el armamento militar había desplazado a un segundo plano la necesidad de la defensa convencional de la vía acuática. Asimismo, estudios realizados sobre la posibilidad de construir otra vía interoceánica por alguna vía alterna demostraron que, "*visto a la luz de consideraciones de ingeniería, es probable que el canal ístmico solamente pueda estar localizado en Panamá. Factores físicos y tecnológicos sugieren que el istmo de Panamá es la localidad más razonable para la excavación de cualquier otro nuevo canal en el futuro*".[37]

En lo político, la estrategia exterior norteamericana planteaba la necesidad de llegar con rapidez a un acuerdo con Panamá. Los estrategas del Comando Sur calculaban que el canal podía ser defendido efectivamente sólo en medios no-hostiles. De tener que enfrentar a los panameños, los analistas militares calculaban que E.U. necesitaría alrededor de cien mil hombres (diez veces más de los que estaban acantonados en Panamá) para la efectiva defensa del canal. Como resultado de la derrota estratégica en Vietnam, "*en gran medida... el ánimo del gobierno y de la nación* [E.U.] [fue] *no enfrentarse con pequeñas guerras sucias' en algún rincón distante del mundo...*".[38] De la misma manera, en la medida que Panamá había logrado el apoyo de casi todo el continente, Estados Unidos no podía formular una creíble y consistente política hacia América Latina mientras no le diera respuesta a Panamá. El surgimiento del Tercer Mundo y de su importancia política había hecho evidente el status colonial de la Zona del Canal, por lo que Washington no podía darse el lujo de no responder a lo que para mediados de la década de 1970 era una demanda latinoamericana.

En consecuencia, al llegar a la Casa Blanca en enero de 1977, el Presidente James Carter hizo uso de estas consideraciones para apresurar la firma de los Tratados. A menos de nueve meses de haber asumido la presidencia, Carter firmó los acuerdos canaleros e inició la reformulación de sus vínculos con el hemisferio. Según Zbigniew Brzezinsky, Secretario de Defensa de la administración Carter, los acuerdos canaleros eran "*una precondición necesaria para una más madura e históricamente justa relación con América Central, una región que no hemos comprendido bien y que ocasionalmente hemos dominado como lo hacen los soviéticos en Europa Oriental*".[39]

Para ello, sin embargo, los tratados canaleros incluyeron cláusulas que dejaban a Panamá en lo que Torrijos llamó "bajo el paraguas del Pentágono": E.U. podría intervenir en el istmo para mantener en operación el canal cuando razones de seguridad así lo aconsejasen. No obstante, desaparecía el enclave colonial engendrado jurídicamente por el Tratado de 1903 y las principales instalaciones canaleras revertían a la soberanía panameña en el momento que entraron en vigencia dichos acuerdos. Una progresiva proporcionalidad del peso panameño en la administración del Canal y proyecciones para la pronta renovación de sus instalaciones cubrieron amplias expectativas nacionales e internacionales sobre la firma de los tratados.

Fundamentos para reintervenir en Panamá

Los imperativos de la política exterior de Washington presentes en la coyuntura de la firma de los tratados (1977) y su aprobación (1978) adquirieron un mayor peso relativo en la medida que Estados Unidos iniciaba un proceso de reformulación de su doctrina militar después de su derrota en Vietnam. Por ello, desde el punto de vista del Departamento de Estado y del Pentágono, la devolución del Canal a Panamá — una política sin respaldo electoral — debía ser llevada a cabo a pesar de la oposición interna a lo que conservadores como Ronald Reagan llamaban una cesión de territorio soberano de E.U.

En 1976, aún los grupos conservadores del aparato de inteligencia norteamericano apoyaban el cambio del status jurídico de la Zona del Canal como medida para desbloquear las relaciones con Panamá y América Latina. George Bush, jefe de la CIA bajo la administración de Gerald Ford, manifestó su despreocupación por la entrega del Canal a Panamá, aunque no dejaba de señalar sus reservas por la posibilidad de que E.U. estuviera perdiendo con la firma de los tratados el supuesto derecho a mantener una presencia física en el istmo.[40] Pero los límites del poderío norteamericano en el mundo, demostrado ampliamente por la derrota en Vietnam, contribuyó a que este supuesto derecho por el cual grupos en Washington se preocu-

paban, pasara temporalmente a un segundo plano, en la medida que el Congreso incluyó algunas provisiones tendientes a favorecerlas al imponerle varias enmiendas a dichos acuerdos.

En el último lustro de la década de 1970, a partir del fiasco estadounidense en Vietnam, analistas políticos y militares de Washington emprendieron algunos cambios en la estrategia global de su país. Estos se realizaron particularmente a partir de una revisión sobre los errores políticos y militares cometidos por sus tropas en el Sudeste Asiático. Desde la administración del Presidente Johnson (1963-1969) hasta la de Nixon (1969-1974), Washington anunció que E.U. se jugaba en Vietnam su credibilidad ante el mundo. El aparato militar norteamericano así incrementó gradualmente su compromiso con el régimen sudvietnamita, cuyas fuerzas resultaron ser poco efectivas y poco capaces de impedir su propio colapso. Por ello, tropas norteamericanas sostuvieron gran parte del esfuerzo de guerra, así como gran parte de la "guerra sucia" dirigida contra el Vietcong — un escenario poco convencional que E.U. no había logrado discernir. Esta participación, duramente reprobada por la sociedad norteamericana que se organizó y manifestó fuera de los canales tradicionales para rechazarla, provocó una serie de reconsideraciones destinadas a adecuar la doctrina militar estadounidense a los cambios que se habían dado en el mundo. A raíz de esta situación, en 1976 el Secretario de Estado Kissinger señaló que "*el peligro principal que enfrentamos está en nuestras propias divisiones domésticas*".[41]

En Vietnam, E.U. perdió la fuerza de las pasiones belicistas de su pueblo: un factor indispensable para la movilización guerrera. El Almirante Frank B. Celso II, jefe de operaciones navales y miembro del Estado Mayor Conjunto de E.U. durante la Guerra del Golfo Pérsico, se refirió a la reacción de la sociedad de su país frente a Vietnam destacando que "*vi el cambio de actitud de nuestros jóvenes, y* [ésto] *tuvo un profundo efecto en mí. Fuimos de tener... pocos consumidores de droga a muchos. De jóvenes que estaban en algún grado felices de huir a Canadá...* [que] *estaban rechazando lo que el país estaba haciendo en ese momento*".[42]

A partir de la experiencia en Vietnam, el consenso entre los estrategas militares se fundaba en que había que evitar repetir el fiasco que significó su participación en el Sudeste Asiático:

había que superar el "Síndrome de Vietnam". Durante la administración Carter, ello trajo la idea de que debía evitarse el uso de las fuerzas armadas estadounidenses en el extranjero. Sin embargo, mientras que en el último lustro de la década de 1970 E.U. evitó introducir tropas en Angola (1975-1976) y en Nicaragua (1979), aumentó los programas de asistencia militar directa y de entrenamiento a las fuerzas armadas de los países aliados, quienes deberían llenar el espacio antes ocupado por las fuerzas norteamericanas. Fundamentalmente, la revisión doctrinaria apuntó a la ineludibilidad de iniciar un esfuerzo para desarrollar las herramientas político-ideológicas necesarias para conseguir por vía de instrumentos no-bélicos la obtención de los objetivos por el que antes se emprendían guerras e intervenciones.

La administración Carter intentó superar las limitaciones impuestas por la derrota en Vietnam desarrollando el lado político de la estrategia global. Ello implicó reconocer el peso de Japón y Europa en los asuntos mundiales — el trilateralismo — y promover una política exterior de principios que mostrara los valores destacables por la sociedad norteamericana, como los derechos humanos y la democracia, buscando con ello superar el rechazo de ésta a la participación externa de su país. Con ello Carter mostró su preocupación por el papel policial de E.U. en el mundo, y las consecuencias que este papel tenía sobre la sociedad estadounidense. Su estrategia hacia el mundo asumía que la Guerra Fría había terminado, y con ella, el mundo bipolar basado en las divisiones este-oeste. Así, Carter le otorgó importancia a las relaciones Norte-Sur, le concedió grados de autonomía a países periféricos y reclamó la colaboración, más que la obediencia, de Europa y Japón.

En este contexto, la plataforma electoral del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre de 1976 señaló el deterioro de las relaciones interamericanas. Esto era atribuido a la indiferencia mostrada por Washington ante el incremento de la presencia militar en los gobiernos latinoamericanos. Para superarlo, existía consenso entre la clase política en Washington sobre la necesidad de una nueva política hacia América Latina.[43] La celebración de acuerdos con Panamá tuvo por ello una importancia particular para el inicio de una nueva política hacia el resto del continente. América Latina había

adquirido una posición importante en el sistema internacional y, dentro de ella, particularmente Panamá, por el sistema de alianzas que Torrijos construyó junto a la mayoría de los países de la región.

Las reconsideraciones inherentes a la derrota en Saigón crearon el impulso para renovar los principios sobre los que la estrategia militar estadounidense estaba construida. Una de ellas fue la reacción de la sociedad norteamericana frente a la guerra. La disociación del pueblo estadounidense del esfuerzo bélico de Washington hacía que los militares norteamericanos desearan no verse involucrados en operativos militares de envergadura que pudieran generar incomodidad generalizada a la nación. Porque aunque sus tropas no fueron derrotadas en campaña, éstas nunca obtuvieron los objetivos políticos para el que habían emprendido la guerra.

Por ello, los analistas del Pentágono consideraron esencial precisar cómo utilizar los medios militares para conseguir los fines de la estrategia global de su país. El continuo incremento de tropas y recursos militares por más de una década en Vietnam no fue suficiente para alcanzar los objetivos que se habían planteado. Por ello, el Pentágono encontró indispensable precisar las acciones que definen cómo y cuándo se logra la victoria para evitar las escalada militar que provocó el empantanamiento en Vietnam. Se tradujo en términos militares los objetivos políticos para los que se ordenan operativos militares, con tal de establecer el tiempo límite en el cuál éstos se desarrollan. Para ello, los estrategas militares destacaron que en un operativo militar es necesario saturar el escenario bélico — para impedir la capacidad ofensiva del enemigo — para obtener la victoria y, una vez alcanzada, proceder con un rápido retiro de sus tropas. Ello requiere un entrenamiento y una tecnología militar que concentre las capacidades bélicas en un tiempo y lugar determinados para causar la derrota al enemigo con el menor número posible de bajas propias — y así evitar las reacciones internas contrarias a su participación militar.

Entre otras medidas, los estrategas de la defensa de E.U. también determinaron que su ofensiva militar debe evitar causar daños colaterales en sus acciones, con la intención de evitar que grupos de las poblaciones afectadas se sumen al

esfuerzo de guerra enemigo — como sucedió en Vietnam. Toda acción bélica debe evaluarse sobre la base de las consecuencias políticas que éstas pueden tener: ganar las "mentes y corazones" de la población que es atacada es el requisito fundamental para asegurar el predominio de los intereses norteamericanos durante y después del operativo bélico. En Vietnam, E.U. cometió una serie de errores que los estrategas del pentágono juraron no volver a perpetrar. Según el Cnel. Harry G. Summers, a pesar de las contínuas victorias tácticas de E.U. contra Vietnam del Norte, el hecho de no haber incorporado la dimensión política de la guerra produjo que al final esas victorias tácticas no les lleven a la victoria estratégica.[44]

A partir de esas reformulaciones, el Pentágono buscó las formas para poner en práctica y mejorar dichas apreciaciones. Su primera aplicación práctica fue en la invasión de E.U. a Grenada en 1983, de la que se aprendieron varias prácticas que fueron incorporadas a la estrategia de guerra. Una de ellas es que la cadena de mando del operativo debe formarse de acuerdo a los requerimientos de la acción militar. La cadena de mando debe establecer una jerarquía definida a la que las tropas en el escenario de guerra deben remitirse. La invasión a Grenada, si bien exitosa, mostró que una cadena de mando formada por muchos oficiales con distintas responsabilidades resulta contraproducente en la medida que los soldados deven llevar a cabo distintas órdenes que pueden ser contradictorias. Ese había sido el caso en Vietnam, donde la contínua rotación de comandantes provocó que pocos de ellos llegaran a conocer el terreno donde realizaban sus operaciones, obstaculizando el buen desempeño de sus tropas.

Consecuentemente, una de las lecciones de Vietnam para el Pentágono fue la disposición de cambiar las reglas con que sus soldados se enfrentan con tropas enemigas, para que estas reglas no estorben el despliegue rápido de sus fuerzas y la rápida concreción de sus objetivos. Según los analistas militares del conflicto en Vietnam, esas reglas impidieron que las tropas norteamericanas cruzaran el paralelo que dividía el Sur y el Norte de Vietnam cuando el Vietcong no dudaba hacerlo, así como reglas de enfrentamiento rígidas impidieron que tropas estadounidenses repelieran un ataque terrorista en Líbano en 1983. Siguiendo disposiciones superiores, los soldados norte-

americanos que cuidaban la base de E.U. en Líbano no contaban con las armas necesarias para enfrentar la acción terrorista, porque se las habían retirado para no provocar indirectamente bajas o daños a la población civil. La lección aprendida fue que toda acción militar debe subordinarse al objetivo para el cual se emprende la guerra, ya que si por reducir las restricciones "*se provoca un error, es el otro el que resulta muerto, no el nuestro*", según dijo un oficial del Pentágono.[45]

En esencia, ésta reformulación mostró la necesidad de mejorar la capacidad de E.U. de intervenir directamente en el Tercer Mundo. La finalidad de los cambios doctrinarios fue la de evitar a toda costa el estancamiento que trajo consigo el gradualismo con que antes E.U. enfrentó los escenarios de confrontación armada. Subsecuentes análisis del Pentágono condujeron al entonces Secretario de Defensa, Caspar Weinberger, a establecer criterios básicos para decidir comprometer sus tropas en el exterior. En síntesis, esos criterios señalan que sus fuerzas deben usarse sólo si lo que está en juego es considerado como vital para los intereses del país, si ésta incursión se emprende con la clara intención de ganar y con un plan de operaciones militares sobre objetivos claramente definidos, si el hacerlo tiene el respaldo del pueblo estadounidense y de sus representantes en el Congreso, y si también ésta es la única opción para enfrentar el escenario en cuestión.[46]

Quienes readaptaron la estrategia político-militar de E.U. hacia el mundo quisieron encontrar opciones menos costosas desde todos los puntos de vista. Fundamentalmente, esta opción se concretó en lo que debía ser una guerra sistemática y de desgaste contra todo grupo o líder que la Casa Blanca considere como enemigo o potencialmente desafiante a los intereses de seguridad de E.U., mediante mecanismos psicológicos, económicos y políticos, cubiertos o encubiertos, para asegurar el control de las poblaciones que se encuentran en el escenario bélico. Según Lilia Bermúdez, estos elementos fueron parte de una guerra contrarrevolucionaria prolongada para "enfrentar a los movimientos de liberación y a los gobiernos definidos como enemigos en el Tercer Mundo".[47]

La doctrina sobre ésta "guerra de desgaste" fue, definitivamente, producto del esfuerzo de la administración Reagan por superar el "Síndrome de Vietnam". Pero en la medida que

el imperativo de la administración Reagan era el de recuperar la hegemonía de su país sobre el resto del mundo, la política exterior de E.U. en la década de 1980 adquirió un carácter inusualmente ofensivo: intervenciones militares, ofensivas diplomáticas, sanciones a países con gobiernos considerados enemigos y guerras no declaradas fueron la tónica de las relaciones de E.U. hacia el resto del globo. En ese período, la posibilidad de que Washington optara por soluciones militares a conflictos en el tercer mundo retomaron el carácter dado a éstos durante la Guerra Fría. En este sentido, la gama de opciones se extendió desde el uso de la diplomacia coercitiva — sanciones, veto a préstamos de los organismos multilaterales de financiamiento, entre otros — hasta la intervención militar directa. Y fue precisamente en Centroamérica, particularmente en Nicaragua y Panamá, donde estas distintas opciones pudieron observarse con más claridad.

No obstante, durante la segunda mitad del mandato presidencial de Reagan (1985-1989), Washington se encontró con cambios dramáticos en la situación mundial principalmente derivados de las transformaciones en la Unión Soviética. Estos cambios alteraron la balanza del poder mundial a favor de E.U. y le representaron nuevos desafíos para enfrentar los complejos temas de seguridad que habían sido minusvalorados al destacar la dimensión militar de la agenda de seguridad. Una estrategia destinada a incorporar amplias dimensiones políticas — la democracia y el narcotráfico — llenó la necesidad de adaptar la política exterior hacia las nuevas realidades regionales y mundiales.

La democracia y el narcotráfico en la nueva estrategia global

Con la inclusión de los temas de la democracia y el narcotráfico, Washington le añadió un eje político-ideológico a su estrategia hacia el resto del mundo. El trilateralismo impulsado por la administración Carter fue así rebasado por un conjunto de estrategias político-militares destinadas a hacer prevalecer la influencia estadounidense en el mundo. En América Latina, en general, la nueva dimensión política de la estrategia

global se tradujo en apoyar democratizaciones restringidas para impedir la inestabilidad que a largo plazo resultaron de la implantación de dictaduras militares anti-comunistas, apoyadas por Washington durante el transcurso de la Guerra Fría.

Un factor omnipresente en el diseño estratégico hacia la región fue la consideración de que, bajo las dictaduras, los grupos radicales de oposición adquieren el papel de interlocutores. Por ello, la preocupación de Washington por la democracia en América Latina se deriva de su interés de que estos sectores no sólo pierdan protagonismo, sino que su representatividad disminuya al perder las principales banderas de lucha que permitieron su florecimiento. La aplicación de esta política, sin embargo, depende de las características propias del país en cuestión, ya que de la fortaleza de los grupos contestatarios y su posición frente a Washington es lo que determina el apoyo de E.U. a la democratización. En este sentido, los procesos electorales se convierten en el espacio idóneo para la ofensiva de E.U., porque es allí donde pueden concentrar recursos y hombres en el momento en que los pueblos responden a sus intuiciones políticas y, por tanto, influir o determinar sus resultados. La necesidad de evitar situaciones como la del triunfo del socialista Salvador Allende en Chile en elecciones libres en 1970 está presente en este diseño.

Bajo esa perspectiva, lo importante para E.U. no es que los procesos electorales sean auténticamente limpios y democráticos, sino que muestren características que los hagan aparecer como tales. De esa manera, Washington también proporciona, antes y durante los procesos electorales, apoyo financiero y logístico a distintos grupos políticos locales afines a sus intereses globales. En esta política, a E.U. le resulta efectivo utilizar sus redes de comunicación y a todas las organizaciones con pretensiones de imparcialidad, tales como los comités bipartidistas del Congreso, o para el caso, la OEA.

En su estrategia global, lo que cuenta para E.U. no es la legitimidad de los procesos electorales, sino el grado de vinculación de las agrupaciones que las conducen — o los que a través de ellos tienen más oportunidades de llegar al poder — con los objetivos de la Casa Blanca. Las "elecciones libres" tienen dos propósitos en la política exterior de E.U.: reducir los

sentimientos antiintervencionistas en casa, así como servir de vehículo para apoyar a sus candidatos, quienes deben resultar electos para sacralizar su alianza con E.U. ante los ojos de la opinión pública norteamericana.[48] Así, al llevar a cabo las elecciones, E.U. minusvalora la capacidad real de los grupos aliados de sostenerse a sí mismos, ya que para ello estos pueden contar con el apoyo económico y militar de Washington.

En este sentido, las agrupaciones políticas que difieren de la visión de E.U. sobre las particularidades regionales o mundiales no encuentran la certificación democrática del gobierno federal norteamericano ni de su sociedad, en la medida que esta última tiende a perder su capacidad crítica y deja en manos de los "líderes de opinión" las decisiones sobre dichos grupos. Independientemente de lo liberal o democrático de las propuestas de los grupos a los que E.U. considera "contrarios" a su causa, Washington, durante la administración Reagan y la de Bush, les reservó los adjetivos de "terroristas" o "narcoterroristas", o al menos, de "antidemocráticos". De ahí que el aplastante triunfo electoral en 1990 de movimientos como el Frente de Salvación Nacional que derrocó a Ceaucescu en Rumania, y el del Partido Socialista Búlgaro, ambos compuestos por ex-comunistas, haya sido severamente cuestionado por voceros del Departamento de Estado.[49] Y de ahí también la preferencia en Panamá por la oposición conservadora al régimen de Noriega, aunque en sus orientaciones básicas no difieran de las que el gobierno panameño tenía, desde 1984, en relación con Washington.

El interés de E.U. por la democracia se deriva además de la necesidad de encontrar pilares fuertes donde descansar su estrategia global. En el pasado, esta estrategia dependió del grado de entrenamiento y del acerbo bélico de las fuerzas armadas de otras naciones que respondían como subsidiarias del Pentágono. La necesidad de incorporar un eje político-ideológico al esquema hegemónico estadounidense, sin embargo, hizo que la política pro-democratización se convierta en parte esencial de la estrategia de seguridad de E.U. Es decir, la búsqueda de legitimidad para grupos que antes desempeñaron o se beneficiaron del poder ejercido por las fuerzas armadas contribuye a restarle posibilidades a los grupos contesta-

tarios de cualquier índole, que antes se abrieron espacios señalando las fallas, crímenes y corrupción que fueron compañeras del autoritarismo que E.U. apoyó. Así, Washington pretende encontrar en la sociedad civil, más que en las instituciones militares o burocráticas, el pilar que sostendrá en el largo plazo los intereses norteamericanos.

Consecuentemente, diferentes organizaciones de la sociedad civil — sindicatos, clubes cívicos, organizaciones empresariales o de pequeños y medianos productores, de educadores y de estudiantes — que muestren capacidad de liderazgo, son objeto de la atención norteamericana en ésta década. El interés está en inducir a estas organizaciones patrones de conducta para hacer de ellas las fuerzas que librarán las batallas político-ideológicas a favor del proyecto norteamericano, tanto en los actuales escenarios de crisis como los que todavía habrán de venir. Con ello, E.U. pretende formar democracias tuteladas que reduzcan la necesidad del uso de fuerzas coercitivas — si bien nunca descartables — para el control de las poblaciones. En ella, además, cobran singularidad las políticas destinadas a reducir el tamaño y la capacidad reguladora del estado, ya que perciben a éste como el origen de las ideologías contrarias a E.U. En la medida que ésta estrategia encuentra asideros en diversos grupos anteriormente socialdemócratas o liberal-conservadores, Washington logra así una coherencia y consistencia en su estrategia global que no había alcanzado mediante medidas estrictamente militares.

La política pro-democratización de E.U. frente a Panamá es un ejemplo claro de éstas consideraciones. El régimen de Noriega perdió gradualmente todas sus bases de apoyo en la sociedad, así como su habilidad para motivar a segmentos de la población cuando la ofensiva diplomática de Estados Unidos se prestó para ello. En consecuencia, E.U. decidió trasladar su apoyo a los grupos políticos opositores cuando Noriega ya no podía garantizar los intereses norteamericanos en el istmo, ya que el interés estratégico definió las políticas hacia Panamá. Precisamente en este contexto, el secretario de la Defensa, Richard Cheney, dijo que "*porque el Canal de Panamá será un importante bien estadounidense hasta el fin de siglo, Washington usaría su influencia para urgir el desarrollo de la democracia en Panamá*".[50]

Con la política antidrogas, Washington también pudo llenar una serie de expectativas internas y cubrir con nuevas formalidades sus necesidades de conservar su presencia en el exterior. La drogadicción es un problema real en la sociedad norteamericana. Sin embargo, las medidas indispensables para frenar su demanda interna — relacionadas con la capacidad regulatoria y financiera del estado — han sido relegadas a un segundo plano. La drogadicción pretende enfrentársele por medio del combate directo a productores y traficantes en el exterior o por medio del entrenamiento a ejércitos extranjeros, llenando con ello el espacio antes acaparado por el "combate al comunismo".

Pero a pesar de lo escasamente efectiva que esta política ha sido para combatir un problema esencialmente interno, las presiones de varias organizaciones para que Washington frene el consumo de drogas contribuye a hacer popular la estrategia militar. De ahí que la amplia mayoría de la sociedad estadounidense haya aplaudido la invasión a Panamá, ya que ésta fue presentada como una acción que asestaría un duro golpe contra el tráfico internacional de estupefacientes. En efecto, la reunión que Bush sostuvo en la Casa Blanca con un equipo de altos funcionarios el 19 de diciembre de 1989 para afinar los detalles de la invasión a Panamá fue convocada oficialmente para discutir "*el uso de la fuerza militar en la guerra contra el narcotráfico*".[51]

El uso que Washington hace de los temas de la democracia y el narcotráfico deben verse como tácticas destinadas a cumplir con un objetivo estratégico fundamental. Desde que E.U. define el problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional en 1986, algunos oficiales del Pentágono preveían que la "amenaza soviética" no les serviría en el futuro para asegurar la proporción del presupuesto que el Congreso asigna al rubro militar. En este sentido, un estratega estadounidense, analizando el escenario estratégico para el próximo siglo, respondió a esta interrogante planteando que el deber de Washington está en el "*reconciliar los nuevos desafíos con el requisito de* [obtener] *apoyo interno de un pueblo que ya no está convencido por, o apoya a, un razonamiento menos que global para identificar y defender intereses de E.U., donde sea que éstos estén amenazados*".[52] Con ésta intención, la estrategia del combate

a las drogas se popularizó para asegurar parte de los fondos presupuestales previamente asignados para enfrentar a lo que se habia denominado como la "amenaza soviética".

La acción militar como via para combatir el narcotráfico resulta útil para continuar desarrollando el eje militar de la estrategia global norteamericana. No es casualidad que Washington haya empezado a acusar a las guerrillas latinoamericanas de haber forjado alianzas con los traficantes de droga precisamente cuando se reducían las percepciones negativas sobre la Unión Soviética a raíz de los cambios emprendidos por Mijail Gorbachov en 1986. Entre otros, el Cnel. John Waghestein, antiguo jefe de los asesores militares norteamericanos en El Salvador, sostuvo que la vigorosa acción del Pentágono contra el narcotráfico lograria "contrarrestar la narcoguerrilla terrorista en este hemisferio" dándole asi al Pentágono una "posición moral inobjetable" para contrarrestar "los grupos eclesiales y académicos" que han resistido la intervención norteamericana en Centroamérica.[53]

Panamá en las transformaciones del escenario internacional

La distensión producida por los cambios en la Unión Soviética redefinió las hipótesis sobre las cuales se habia establecido el diseño estratégico global de E.U. Debido a las posturas conciliatorias de Moscú, Washington tuvo que relegar uno de los principales escenarios convencionales de la estrategia global: la eventualidad de una confrontación con el Pacto de Varsovia en Europa Occidental. Así, los entonces previsibles acuerdos entre ambas potencias para reducir sus respectivos arsenales nucleares indujeron a que Estados Unidos reevaluara la guerra convencional. Y en la medida que se desarrollaban nuevas relaciones entre las superpotencias, los estrategas del Pentágono empezaron a preveer que los escenarios de las posibles confrontaciones del futuro estarían en el Tercer Mundo.

En este sentido, el Comandante de las fuerzas norteamericanas en el Golfo Pérsico, Norman Schwarzofpf — también veterano de Vietnam — explicó en el contexto de su participación en medio oriente que la doctrina militar de su país estaba

"ante un cambio... casi revolucionario en la manera como nuestro pensamiento militar ha sido conducido en los últimos cuarenta años. Me llegué a convencer de que estábamos llegando al momento donde los principales puntos de contención en el mundo no serían entre E.U. y la Unión Soviética y que debíamos empezar a pensar cómo hacer las cosas diferentemente. Cuando fui Comandante en Jefe (del Comando Central de E.U. en Noviembre de 1988), me senté y me pregunté cuál sería la más probable confrontación en el que las fuerzas de E.U. podrían involucrarse... llegué a la conclusión de que desde un punto de vista estratégico... [este sería] *un conflicto regional".*[54]

Como consecuencia de estas reformulaciones estratégicas, Panamá retomó la posición que tuvo como punto estratégico-militar en previos diseños globales norteamericanos. Durante principios de la década, E.U. aumentó sus capacidades de inteligencia en el país a tal punto que desde sus instalaciones en el istmo podía monitorear todo Centroamérica y gran parte de Sudamérica. En este contexto, un general del ejército norteamericano que participó en la Invasión a República Dominicana en 1965, Bruce Palmer, afirmó que "*el Canal en su estado presente no es vital para la defensa de E.U.*" porque éste ha perdido gran parte de su utilidad. Sin embargo, "*en un contexto más amplio... el área antes llamada Zona del Canal continúa siendo un importante sitio de avanzada estratégica para el apoyo de actividades, en situaciones de crisis, que afecte el interés nacional en cualquier parte de la Cuenca del Caribe o Sudamérica*". Según Palmer, la pérdida de los derechos de base en el área canalera se traduciría en "*costos tangibles e intangibles que no podrían ser aceptables para E.U.,...* [en la medida que] *como nación y como pueblo quiere mantenerse como una superpotencia*".[55]

Precisamente por estas consideraciones, analistas políticos y estrategas militares estadounidenses sostenían para fines de la década del ochenta que la salida de Noriega como Comandante en jefe de las FDP ayudaría a E.U. a alcanzar estos objetivos. Desde marzo de 1987, meses antes del estallido de la crisis panameña, el subsecretario de estado para asuntos legislativos e intergubernamentales de E.U., J. Edward Fox, en carta dirigida al Senador ultraconservador Jesse Helms, dijo que "*el Departamento de Estado comparte su punto de vista de*

que cuando los Tratados Torrijos-Carter sean renegociados, deberá traerse a discusión la prolongación de la presencia militar de E.U. en el canal de Panamá para después del año 2000".[56] Para éste efecto, el Gral. John Galvin, en discurso de despedida al ser trasladado de la Jefatura del Comando Sur a la comandancia de la OTAN en 1986, reiteró que E.U. podía entregar a Panamá la administración del Canal con diez años de anticipación (31 de diciembre de 1989), a cambio de que Panamá acceda a que algunas de las principales bases militares de E.U. permanezcan en su territorio hasta el año 2015. El subsecretario, basando su análisis en que era necesario que E.U. reforzara su presencia en la región debido a la amenaza insurgente, concluyó con que *"se tomarán los pasos necesarios para resolver"* estas necesidades.[57] No obstante, en la medida que en 1990 los panameños pasarían a ejercer la mayoría de la administración de la Comisión del Canal, la Casa Blanca consideró que debía apresurar los cambios en Panamá que le permitirían lograr sus fines.

En territorio panameño, E.U. cuenta con una serie de instalaciones estratégicas y logísticas cuyo traslado — señalado por los Tratados Torrijos-Carter para fines de siglo — debería ocurrir irremediablemente. Aupados bajo la cobertura de la supuesta defensa del canal, E.U. ha mantenido en Panamá la sede del Comando y Ejército Sur de E.U., órganos militares con responsabilidades estratégicas hacia el sur de sus fronteras. Según el Gral. Fred Woerner, Jefe del Comando Sur hasta septiembre de 1989, entre los objetivos primordiales del Comando Sur el de defender el canal de Panamá está entre los últimos en la agenda de prioridades. Según Woerner, los objetivos del Comando Sur eran (en este orden) el de afianzar los intereses nacionales de E.U. en latinoamérica, para lo que tenía asignado apoyar las operaciones de contrainsurgencia en El Salvador, revertir la influencia soviética, cubana y nicaragüense; ejecutar los objetivos de la política exterior de Washington; realzar la influencia militar de E.U. en la región; y, entre otros motivos, defender el Canal de Panamá[58]

En Panamá, E.U. también instaló los instrumentos electrónicos que han hecho del istmo un centro vital para cualquier escenario de Guerra General Termonuclear. La potencia del norte tiene en la base Howard de Panamá uno de los instru-

mentos esenciales del sistema Mystic Star Network (dirigido directamente por el presidente de E.U.), un mecanismo que tiene un lugar fundamental en el sistema de lanzamiento de armas nucleares; y un punto de entrada terrestre del centro de mando de emergencias nacionales. En el fuerte Kobbee, E.U. también tiene una terminal del satélite AN (GSC-39) que surte a las comunicaciones de la Casa Blanca, mientras que en Semaphore Hill tiene un radar especial que transmite directamente al Pentágono. Por ello, no es de extrañar que la URSS, a pesar de no estar involucrada en Panamá, puso sus tropas en condición de alerta.[59]

Para ampliar su capacidad militar, logística y de inteligencia, E.U. también colocó en Panamá un centro de comunicaciones electrónicas de mando y de control en la Isla Galeta. Allí, el Pentágono estableció en una plataforma submarina un centro de espionaje electrónico que recolecta información de inteligencia, descifra claves y realiza otras operaciones de engaño, interdicción e interferencia. Las condiciones geológicas y magnéticas de la isla facilitan estas operaciones como en ningún otro lugar en el mundo — tiene la capacidad de transmitir bajo frecuencia de trescientos kilohertz, a ochenta pies de sumersión, hacia ambos océanos, facilitando con ello las comunicaciones a través de y entre submarinos nucleares y convencionales.[60] Además, en la ribera oeste del canal E.U. instaló sendos edificios — que alojan el Servicio de Información de Transmisiones Extranjeras (FBIS), oficialmente bajo el Departamento de Estado — que le permite monitorear toda la información proveniente de los países situados en la Cuenca del Caribe, y especialmente su país sede, Panamá.

Si bien la posición estratégica de Panamá habrá sido suficiente fundamento para colocar éstos mecanismos en su territorio, para ésta decisión el Pentágono también tomó en consideración el que, con los pactos canaleros firmados en 1977 y ratificados en 1978, E.U. también firmó un Pacto de Neutralidad con invitaciones a adherirse a todas las naciones del mundo. Aunque el texto del Pacto se refiere exclusivamente a mantener el canal de Panamá abierto a todas las naciones del orbe tanto en tiempos de paz como de guerra, el Pentágono concluyó que tal aceptación por parte de la comunidad internacional resguardaría el Canal de Panamá de ataques militares de

cualquier índole, brindando así una cobertura apropiada a sus instrumentos de guerra.

En la medida que la reformulación doctrinaria estaba en proceso en el primer lustro de la década de 1980, Washington consideró suficiente la cooperación de los jefes militares panameños con los intereses de E.U. De hecho, *en 1981*, el entonces Teniente Coronel Noriega se reunió en Washington con el Director de la CIA, William Webster, para discutir "los problemas de Centroamérica" y las vías por las que el militar panameño podía continuar su colaboración con los servicios de inteligencia de E.U.[61] Definitivamente, Panamá todavía era una pieza clave dentro del diseño estratégico de E.U. para la región.

Pero en el segundo lustro de la década, *en la medida que* el escenario internacional se transformó y E.U. reevaluó a Panamá en su estrategia global, la potencialidad de que la institución militar istmeña mantuviera posiciones independientes — tal como lo había hecho bajo Torrijos en la década de 1970 — impulsó a Washington a promover una serie de políticas destinadas a reducir la capacidad del estado panameño de usufructuar económica y políticamente de lo que debía ser su creciente papel en la administración del canal. Washington impuso medidas tendientes a desconocer la participación panameña en el canal. Pero aunque violatorias de los Tratados Torrijos-Carter y permanentemente denunciadas por los panameños, estas nunca lograron tener la fuerza y la consistencia que denuncias como ésta tuvieron en la década de 1970, porque eran ya distintas las voluntades y los intereses en las altas posiciones del Estado: desde la muerte de Torrijos, Noriega fraguó una estrecha relación con la Casa Blanca que condicionó las orientaciones políticas del gobierno panameño. De hecho, Noriega se vanagloriaba de ello: "*Torrijos intentó separar a los ejércitos* [de ambos países], *pero yo los he unido aún más*".[62]

La premura con que E.U. buscaba cumplir con sus objetivos estratégicos en el istmo provocó que Washington adoptara medidas mucho más contundentes. Reflejando el sentir del Pentágono, el citado Gral. Palmer sostuvo que, a pesar de que el control del canal de Panamá deberá pasar a manos panameñas el mediodía del 31 de diciembre de 1999, "*los E.U. no*

tienen el lujo de tener una década para resolver el problemas de Noriega. Al principio de 1990, el administrador estadounidense debe ser reemplazado por un panameño que [según la interpretación de Washington del tratado], *también debe ser aprobado por el Senado de E.U., que tiene la capacidad de rechazar cualquier candidato propuesto por un gobierno controlado por Noriega... a menos que E.U. encuentre una vía para afinar la situación... mayores movimientos militares pueden hacerse necesarios*". Vaticinaba Palmer que, "*una vez que el problema Noriega sea resuelto, E.U. tarde o temprano debe... proponer una enmienda que le permita derechos mínimos de base y una pequeña presencia [militar] en el área del canal.*"[63]

Para ello, orientados por el diseño alcanzado por la doctrina militar, E.U. utilizó en Panamá los mecanismos y las dimensiones planteadas para ejecutar su diseño estratégico. Así, en el proceso de reevaluación continua y de afianzamiento de las capacidades logísticas, militares y políticas de Washington, Panamá se convirtió en el primer caso destinado a probar y a afinar toda la gama de instrumentos políticos y militares de la estrategia global de E.U. — aunque parte de las medidas económico-políticas ya habían sido tomadas contra Nicaragua desde 1981, y las militares contra Grenada en 1983.

Para obtener sus objetivos a corto plazo, E.U. encontró la oportunidad de iniciar su ofensiva a mediados de 1987, cuando expresiones tanto interesadas como legítimas de protesta contra el régimen del Presidente Eric Arturo Delvalle y del General Noriega trajeron el clima propicio para ello. En este ambiente, el fin principal de E.U. era el de transformar las instituciones políticas panameñas para que éstas se ajusten al papel que la Casa Blanca esperaba para ellas. Así, Washington concentró su atención en las FDP, ya que era éste el pilar de la relativa autonomía interna e internacional del país, aunque sobre la base de un sistema político ya no reformista, pero potencialmente independiente de E.U. Por eso, en un inicio la Casa Blanca buscó destituir a Noriega, comandante en jefe de la institución militar y depositario del poder real del país, especialmente cuando su segundo al mando y posible sucesor había pasado a retiro — el Cnel. Roberto Díaz Herrera, visto por el Departamento de Estado como cabecilla de la supuesta ala izquierda de las FDP.

La política de E.U. consistió en hacer el régimen más represivo. La táctica inicial fue la de fomentar la actividad política de organizaciones cívico-empresariales contra Noriega. Antes de los sucesos de junio de 1987 — Díaz Herrera acusó públicamente a Noriega de crímenes y fraudes electorales — que impulsaron las protestas y las demandas contra el régimen, ya el Instituto Nacional Demócrata (brazo internacional del Partido Demócrata de E.U.) invitó en abril a dirigentes empresariales panameños a Filipinas, a fin de que conocieran el proceso que facilitó la salida del dictador Ferdinand Marcos.[64] Asimismo, con la intención de repetir en Panamá el éxito relativo con que E.U. se desembarazó de su antiguo aliado en Filipinas, el Departamento de *Estado trasladó* a su embajada en Panamá como subjefe de misión a John Maisto, *quien* había desempeñado un papel primordial en Manila. Mientras, otras agrupaciones conservadoras panameñas ya se preparaban para intentar acaparar las protestas que para septiembre de ese año se vaticinaban con motivo de una serie de leyes destinadas a reducir las prestaciones del Seguro Social que el Presidente Delvalle y la mayoría oficialista en la Asamblea estaban por aprobar.[65] Posteriormente, al encontrar una situación de inestabilidad, el régimen de Noriega y su Presidente nominal, Eric Delvalle, optaron por reprimir las protestas que éstas organizaciones encausaban contra él.

La salida de Noriega de la Comandancia de las FDP era un objetivo primordial de la política de E.U. hacia la región porque ésta era vista sólo como el paso inicial para avanzar hacia otros objetivos estratégicos. En este sentido, para que la posible salida de Noriega no causara una situación en Panamá que luego no les permitiera conseguir los objetivos planteados, la administración Reagan "gestionó" la cooperación del Presidente Delvalle a fines de febrero de 1988. En momentos en que prosperaba una "iniciativa latinoamericana" para encontrarle una salida política a la crisis istmeña — encabezada por los expresidentes Daniel Oduber de Costa Rica, Alfonso López Michelsen de Colombia, y Carlos Andrés Pérez de Venezuela — el Subsecretario de Estado Elliot Abrams y otro dirigente de la oposición residente en Washington presionaron a Delvalle para que proceda a destituir al "hombre fuerte" panameño.[66] A pesar de ello, Delvalle fracasó en el intento y, a instancias de Noriega, fue destituido por la Asamblea Legislativa.

Con esta medida, no sólo se evidenció que el poder real residía en Noriega, sino que se evitó que Panamá llegara a una solución negociada entre sus sectores políticos, de manera tal que Noriega saliera de la Comandancia de las FDP y que ello no significara la capitulación de la institución militar frente a las obvias demandas de E.U. Según James Keagle, miembro de un equipo de política y estrategia sobre Panamá formado por el Comando Sur, facilitar la salida de Noriega del escenario istmeño era apenas el primer paso de "*una estrategia de largo plazo... que apunta a aumentar la temperatura política y militar en América Latina a fin de disminuir el flujo de drogas y armar el escenario para reconstruir las economías del área*".[67]

La salida de Noriega de la jefatura de la institución armada panameña era el primer paso para procurar su transformación. En ese sentido, Roger Fontaine, uno de los firmantes del Documento de Santa Fe que delineó una serie de políticas que Estados Unidos debería seguir para la década de 1980 (entre ellas la "reversión" del régimen panameño) destacó que "*la clave para una intensa cooperación futura es la transformación de las propias FDP*". Así mismo, solicitaba que "*para que estén más en armonía con nuestros valores y preocupaciones, los E.U. tendrán que asumir un papel mucho mayor en su entrenamiento y formación. Esto va mucho más allá de perfeccionar las capacidades profesionales*" de la institución. Fontaine además prescribía que ello "*significa cambiar la naturaleza básica del cuerpo de oficiales... al igual que en El Salvador*". Sin embargo, debido a las dificultades para atender estas necesidades, Fontaine presagió maniobras políticas y militares de envergadura al observar que "*las FDP no desean ahora ni es probable que lo vayan a desear, una relación estrecha y cooperativa con el establishment de defensa*" norteamericano.[68]

De la misma manera, analistas políticos y estrategas militares de E.U. consideraban en ese contexto que no sería suficiente para los objetivos planteados la salida de Noriega de la Comandancia de las FDP. En ese sentido, el Comité de Santa Fe aludido (con pocos cambios en su membresía) redactó un nuevo documento en el que sostienen que "*la expulsión de Noriega y la realización de elecciones no serán suficientes... E.U. tendrá que concentrarse en ... la reforma de las FDP*". Fundamentalmente, pidieron que "*una vez en el poder un régimen*

democrático, E.U. y Panamá deberán empezar a planificar seriamente la adecuada administración del Canal... [que] deberá incluir la retención por parte de E.U. de un número limitado de instalaciones en Panamá".[69]

Invocando el Decreto de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, a raíz del fallido intento de Delvalle por deponer a Noriega, Reagan impuso nuevas sanciones a Panamá. Destinadas a privar al estado panameño de los recursos necesarios para el mantenimiento de un mínimo programa de inversiones que le permita incidir positivamente sobre una economía en deterioro, y para fomentar reacciones de la sociedad panameña contra Noriega, E.U. eliminó programas de asistencia, impidió que Panamá participara en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, y cortó la cuota de importación del azúcar panameña. A estas se añadieron la retención de todo pago proveniente del usufructo del Canal, pagos de ésta y otras empresas norteamericanas por la utilización de servicios públicos y los impuestos sobre la renta al personal panameño empleado en la Comisión del Canal de Panamá, así como la congelación de todos los fondos estatales panameños que se encontraban en bancos en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, supuestamente estas medidas provocarían un rechazo mayor a Noriega, quizás lo suficientemente fuerte como para que los aliados de E.U. lo canalicen y ganen la fuerza necesaria para encabezar un escenario sin Noriega. Un primer efecto de la acción combinada de las sanciones y la determinación de Washington por derrocar a Noriega fue el intento de golpe aupado por la Casa Blanca en marzo de 1988 que fue frustrado por fuerzas leales al controversial militar.

En estas circunstancias, la intervención militar norteamericana para dilucidar rápidamente el caso panameño no era considerada factible por las autoridades militares del Pentágono y del Comando Sur porque no estaban dadas las bases para ello. Pero en oposición a la dirigencia militar, el subsecretario Abrams propuso secuestrar a Noriega y llevarlo ante la justicia de E.U. para que enfrentara los cargos por narcotráfico imputados por la Casa Blanca. El plan delineado para ese entonces contra el narcotraficante Ramón Mata Ballesteros en Honduras para el mes de abril de 1988 tendría su primera utilización en Panamá. Abrams planteó además es-

tablecer en Panamá un gobierno paralelo en territorio de la antigua Zona del Canal, en alguna de las bases militares de E.U., pero el Pentágono se opuso porque esta opción hacía necesario aumentar considerablemente el número de tropas situadas en Panamá para proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos que allí viven.[70] Para ese operativo era necesario conocer minuciosamente el paradero de Noriega, algo que a pesar de las instalaciones logísticas y de inteligencia del Pentágono en el istmo, no era fácil obtener. Además, los militares norteamericanos temían la reacción de los gobiernos y pueblos de América Latina ante la resurrección del intervencionismo estadounidense — lo que a corto y mediano plazo resultaría contraproducente para los intereses de Washington en el hemisferio — como la posibilidad real de que, ante un intento de esa envergadura, Noriega fuera tentado a tomar rehenes de la población norteamericana acantonada en Panamá.

En sus aspectos generales, esta última posición era consistente con la determinación del Pentágono de no usar tropas norteamericanas para obtener objetivos de política exterior, especialmente cuando estos objetivos no eran muy claros.[71] Lanzar una intervención militar en Panamá en estas condiciones no prometía resolver lo que Estados Unidos se disponía tratar a corto plazo: el gobierno que debía reemplazar al de Noriega, y la estabilidad política que debía seguirle para tener el espacio adecuado para negociar en mejores condiciones un acuerdo de renovación de su presencia militar en Panamá. Entre el más belicoso e ideológico Departamento de Estado y el más pragmático Departamento de Defensa, existía una brecha momentáneamente insalvable en cuanto a la política hacia Panamá. En este sentido, el jefe de estado mayor conjunto de las fuerzas armadas norteamericanas indicó que las decisiones tomadas en esta época por Elliot Abrams fueron ingenuas en sus formulaciones y temerarias en cuanto al empleo de las fuerzas militares, porque no evaluaba objetivamente la situación panameña.[72]

Así, la imposibilidad de emprender una acción armada empujó a la Casa Blanca a buscar un acuerdo con Noriega que lo llevara a su salida de la Comandancia de las FDP. Antes de la destitución de Delvalle, Washington inició un plan cuyo vocero fue el entonces asesor de Noriega, el Ing. José Blandón, para

lograr su salida del poder. En mayo, cuando fue evidente que las sanciones no habían producido el efecto de provocar levantamientos populares inmediatos contra Noriega, Washington inició un segundo intento por negociar su renuncia. Para ello, la Casa Blanca envió a Michael Kozak, asistente del Secretario de Estado, con un plan que incluía un soborno por veinte millones de dólares que serían transferidos a través de un banco colombiano vinculado al lavado de narcodólares.[73] El plan además incluía retirar las sanciones a Panamá, reconocer al Presidente Manuel Solís Palma — un antiguo opositor a Torrijos nombrado por Noriega después de la destitución de Delvalle — mientras que Noriega anunciaría su retiro en una grandiosa ceremonia el 12 de agosto, cuando cumplía cinco años como Comandante de la institución castrense. Al hacerlo, Washington mostraba la primacía de sus intereses estratégicos en las decisiones tomadas hacia Panamá.

Para justificar esta opción ante las críticas que se le hacían por estar negociando con Noriega, Reagan declaró estar opuesto a la extradición del General aduciendo que ello violaba la Constitución Panameña, y que ésta era la mejor opción por que la fuerza no debía ser empleada para evitar tener que empezar a "contar cuerpos", en clara referencia al síndrome de Vietnam.[74] Noriega, siempre preocupado por su seguridad personal, buscaría inicialmente asilo en España. Washington le otorgaría inmunidad para evitar que sea procesado y tampoco se opondría, según el plan aprobado por la Casa Blanca, a que él volviera a Panamá y fuera candidato presidencial para las elecciones de 1989.[75] A pesar de que Noriega estuvo dispuesto a aceptar los términos logrados con la administración Reagan, este plan no se concretó porque mandos medios de la institución militar panameña presionaron a Noriega para que no hiciera concesiones a lo que ellos consideraban maniobras que eventualmente conducirían a mayores capitulaciones. Los mandos medios conocían que las negociaciones también estaban destinadas a retirar de las FDP a parte de la oficialidad que Washington consideraba indeseable, por lo que este plan tampoco fue de su agrado.

De éste temor daba fe un documento confidencial elaborado el 27 de octubre de 1987 por el Departamento de Estado: *"Noriega no es el único problema, ni siquiera el principal. Si Noriega se va y el "Grupo de los Seis" toma las riendas de la situación, las cosas pueden empeorar. Por eso debe sacarse del país a Córdoba, Del Cid, Madriñán, Benítez, Cleto Hernández y los (Hnos.) Porcell. Su acceso al poder debe ser bloqueado. Deben ser aislados".*[76] En la medida que E.U. se encontraba en un proceso electoral, y además se avecinaba otro en Panamá que prometía ser útil para los propósitos norteamericanos, Washington no emprendió otras iniciativas sino hasta la llegada del sucesor de Reagan a la Casa Blanca en enero de 1989, un período en que, como mencionamos anteriormente, no debían darse escenas que demostrasen el fracaso de E.U. en Panamá para no debilitar las posibilidades electorales del Partido Republicano en el poder.

Incurrir en negociaciones con Noriega no implicaba que E.U. alterara su política hacia Panamá. Para impulsar las posibilidades de que la oposición a Noriega venciera en las elecciones generales del 7 de mayo de 1989, la administración Bush canalizó alrededor de diez millones de dólares a los grupos que formaban parte de la coalición conservadora contra Carlos Duque, candidato oficialista y socio de Noriega. En efecto, los recursos estadounidenses fueron utilizados para que sus aliados prepararan funcionarios electorales, entrenaran contingentes tanto en Panamá como en Costa Rica y Venezuela en institutos pertenecientes a los Partidos Demócrata Cristianos, y durante el proceso electoral, para sobrepasar el dinero ofrecido por los candidatos oficialistas para la compra de votos, llegando a ofrecer hasta cien dólares por cada uno. La intención real tras la ayuda monetaria a la agrupación opositora, sin embargo, no era la de confiar en el proceso electoral para incidir en la crisis panameña, sino para *"forzar a Noriega a tomar medidas crudamente fraudulentas"*, según dijo Bush.[77] La intervención de E.U. en el proceso electoral panameño era consecuente con la política de hacer al régimen más represivo. Miembros del Comité Selecto de Inteligencia de la Casa de Representantes del Congreso de E.U. juzgaron ésta política como contraria con el objetivo declarado de apoyar la democratización de Panamá.[78]

A la vez que Washington inició varias tentativas para que Noriega renunciara a la jefatura de las FDP, en varias ocasiones grupos del Congreso estadounidense y personalidades

militares y políticas de Washington se pronunciaron por derogar o alterar los Tratados Torrijos-Carter. El 4 de marzo de 1988 el Senador Jesse Helms propuso en el seno del Congreso que el Presidente de E.U. le informe al gobierno panameño la intención de *suspender* la aplicación de los Tratados si fuese necesario para defender los "*supremos intereses de seguridad nacional de Estados Unidos*", especialmente cualquier provisión de los acuerdos que ordenen la salida del personal militar acantonado en el istmo o el cierre de cualquiera de las bases militares establecidas en las orillas del Canal de Panamá, "*a menos que Noriega sea extraditado en treinta días*".[79]

En este sentido, el 10 de agosto del mismo año un grupo de congresistas encabezados por el Representante Republicano Philip Crane, le propusieron a ambas Cámaras del Congreso una Resolución en la que urgían cancelar los tratados canaleros y toda la legislación relacionada con éstos. Lo paradógico de la proposición está en que los argumentos utilizados para fundamentarlo destacan la supuesta *inconstitucionalidad* de la parte panameña en su firma, aludiendo a que el Gral. Torrijos no era ni Presidente de ese país ni una autoridad de un gobierno *debidamente elegido*, tal cómo lo requiere la Constitución panameña sancionada en 1972. Entre sus fundamentaciones también se encontraba el que los tratados que rigen la Neutralidad Permanente del Canal, uno de los acuerdos firmados por Torrijos y Carter en 1977, están sujetos al repudio panameño por las seis modificaciones que el Senado le impuso después de su firma y a su ratificación por un plebiscito en Panamá. Dichos congresistas también citan el que, ni el Tratado ni sus Enmiendas incluya alguna provisión legal que le confiera a E.U. el derecho de "*mantener fuerzas defensivas o entrar en Panamá... para defender el canal más allá del año 1999*".[80]

Obviamente, la preocupación de este grupo de congresistas por la legalidad de la parte panameña era simplemente una táctica para promover su derogación: en 1978 — en el contexto de la campaña de la administración Carter para aprobar los acuerdos — el Congresista Philip Crane sostuvo que "*políticamente hablando, Panamá es una moderna creación artificial surgida por su posición estratégica más que por cualquier rasgo distintivo de la cultura panameña, lenguaje o tradición.*"[81]

Durante 1989 afirmaciones hechas en éste tenor vendrían a confirmar los verdaderos intereses de E.U. en Panamá. A raíz de la anulación de las elecciones generales del 7 de mayo en Panamá, la senadora republicana por Florida, Connie Mack, dijo que redactaría la legislación necesaria para abrogar los Tratados sobre la base de que E.U. "no debería entregar el Canal a un loco como Noriega." Si bien este tipo de reflexiones podrán ser potestad del Congreso de E.U., también resalta el señalamiento que hizo bajo las mismas circunstancias Sol M. Linowitz, uno de los principales negociadores de los Tratados Torrijos-Carter y co-director de la organización Diálogo Interamericano, quien dijo que "E.U. podría *demorar* la entrega del canal si concluye que tal acción es necesaria para proteger la seguridad y neutralidad de la vía acuática".[82]

Con la misma intención, un grupo de congresistas propusieron una enmienda a dichos tratados — once años después de aprobados — "*para asegurar que habrá en Panamá un gobierno democráticamente electo antes de que sea nombrado un nuevo administrador de la Comisión del Canal de Panamá*".[83] El aplauso de Republicanos y Demócratas a la invasión muestra mas bien que su preocupación no era la institucionalidad democrática, sino otra: mientras que el congreso proponía lo anterior, el Consejero para asuntos públicos de la Embajada de E.U., Terence Kneebone, afirmó en Panamá que Washington estaba dispuesto a "negociar las catorce bases militares que tiene en éste país si Noriega se va y se establece un gobierno democrático". Y estas afirmaciones se daban en el contexto en el que las fuerzas armadas de E.U. maniobraban por territorio panameño cuando una delegación de la OEA participaba como mediadora entre el gobierno y la oposición a Noriega, logrando con ello — según voceros de la misma organización interamericana — frustrar el logro de un acuerdo político nacional.[84]

Para que la crisis panameña se resolviera a favor de E.U., Washington preparó la invasión y la posterior ocupación del istmo. Para ello, los estrategas del Pentágono evitaron participar en cualquier desarrollo que interfiriera con estos planes. Por ello el Pentágono optó por no participar en el intento de golpe contra Noriega el 3 de octubre de 1989. En esta circunstancia, oficiales de la administración Bush declararon que "el experimento con la diplomacia multilateral ha fa-

llado".[85] La respuesta la dio poco tiempo después el vocero del Pentágono, Pete Williams, al sostener que, aún cuando no se habían registrado enfrentamientos entre las fuerzas armadas de ambos países, E.U. y Panamá estaban involucrados en un Conflicto de Baja Intensidad.[86]

A su vez, a mediados de octubre agentes del gobierno estadounidense conversaron por última vez con Noriega para que éste abandone "voluntariamente" el poder.[87] En la medida que los planes para invadir Panamá ya estaban listos para ser puestos en práctica y el Pentágono se había negado a prestarle ayuda a los oficiales rebeldes que intentaron deponer a Noriega semanas antes, estas "conversaciones" deben verse más como una táctica orientada a estudiar la disposición de Noriega para continuar enfrentando a los E.U. Washington empleaba así toda la gama de posibilidades que el espectro de su doctrina militar planteaba. La cercanía del 31 de diciembre de 1989, fecha en la que la administración del canal debía pasar a manos de panameños nombrados por el gobierno nacional, impuso el límite de tiempo para que Bush cumpliera con sus objetivos.

En la aplicación de la estrategia global de E.U. en Panamá, Washington logró esconder las motivaciones estratégicas que lo inducían a considerar diversas políticas para conseguirlos. En ese sentido, la administración Bush concentró en la figura de Noriega la atención que le permitiría lograrlos, porque al hacerlo, pudo presentar al público norteamericano una política loable y elemental que resultara mas beneficiosa que la de explicarle los factores reales que hacía a E.U. interesarse en ese país. Al concentrar la atención del público en la figura de Noriega, Washington les mostró la causa de todos sus males: el narcotráfico y sus secuelas, para E.U., y la grave crisis económica y la represión política, para los panameños. Así, hacer desaparecer a Noriega de su posición de poder haría que todos esos problemas supuestamente se solucionaran. Al hacerlo, sin embargo, la administración Bush no necesitó de muchos "trucos sucios" o gastar grandes cantidades de recursos para sufragar una campaña psicológica que empujara al pueblo panameño contra Noriega, ya que por sí solas, este tipo de acciones habrían resultado insuficientes pero positivas dentro de una serie de tácticas destinadas a lograr el triunfo de la estrategia.

La táctica de concentrar en la figura de Noriega y esconder tras él los objetivos reales de corto y mediano plazo hacia Panamá, resultaron efectivas para E.U. porque esta se refería a una poderosa realidad: el desgaste e impopularidad de Noriega, como de las FDP como institución que controló las riendas del poder político desde 1968, y el *impasse* del escenario interno en el que sus partidos, líderes y otras agrupaciones nacionales no lograron mantenerse dentro de senderos nacionales. En el transcurrir de la evolución de la estrategia global de E.U., quizás nunca se le presentó una circunstancia tan favorable para ejecutar sus intereses estratégicos en Panamá como la que encontró con el régimen de Noriega: la derrota militar que sufrieron las fuerzas armadas panameñas con la invasión de E.U. el 20 de diciembre de 1989 fue posible sólo porque antes de ésta se había producido la derrota política de la comunidad panameña.

Notas

1. Ricaurte Soler, *Panamá: historia de una crisis*, (México, D.F.: Siglo XXI eds., 1989), p. 20.
2. Citado en Archivo Histórico Diplomático Mexicano, *Las Instrucciones de Henry Clay*, (México, D.F.: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1985), Prólogo de Leopoldo Zea. Citado también por Jorge Conte Porras, *Del Tratado Hay-Bunau Varilla a los Tratados Torrijos-Carter*, (Panamá: Banco Nacional de Panamá, 1981), p. 9.
3. El aislacionismo aludido mostró ser más selectivo que total. La tendencia hacia el expansionismo de Estados Unidos no le llegó sin antes haber hecho uso de tratados, guerras, invasiones o cualquier otro instrumento de su política exterior, particularmente, pero no únicamente en la región mesoamericana. Especialmente hacia América Latina Estados Unidos demostró sus capacidades como potencia mundial, aún antes de llegar a convertirse en ella.
4. Walter La Feber, *The New Empire: An interpretation of american expansion, 1860-1898*, (Ithaca, N.Y.: Oxford University Press, 1963), p. 150.
5. Walter La Feber, *The Panama Canal: the crisis in historical perspective*, (New York: Oxford University Press, 1978), p. 15.
6. Walter La Feber, "Setting Up the System", en *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*, (Nueva York: W.W. Norton & Co., 1984), p. 31.

7. Para dar cuenta de esos fenómenos, la historiografía norteamericana también muestra la influyente obra de Alfred Thayer Mahan, *The influence of sea power upon history*, en el que detallaba —también a fines del siglo XIX— la creciente relación del impulso a la presencia económica estadounidense en el exterior y el imperativo de ostentar un poderío naval que se ajuste a la primera.
8. Ver a Luis Maira, "La evolución de la política norteamericana hacia América Latina", en *Temas de política exterior latinoamericana: el caso uruguayo*, (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1986), pp. 86.
9. Ricaurte Soler, *Panamá: Nación y Oligarquía, 1925-1975*, (Panamá: Ediciones de la revista Tareas, 1976), p. 27.
10. Michael J. Hogan, *The Panama Canal in American Politics: Domestic Advocacy and the Evolution of Policy*, (Carbondale y Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1986), p. 66.
11. Ricaurte Soler, *Formas Ideológicas de la Nación Panameña*, (San José, C.R.: EDUCA, 1972), p. 12.
12. Russell Fitzgibbon, *Latin America: A Panorama of Contemporary Politics*, (New York: Apple-Century Crofts, 1971), p. 217.
13. John E. Fagg, *Latin America: A General History*, (New York: Mac Millan Press, 1963), p. 805.
14. La Feber (1978), *op. cit.*, p. 31.
15. Alain Rouquié, "Revolutions militaires et indépendence nationale en Amérique Latine", *Revue Francaise de Science Politique* (Paris), (1971), vol. 21, No. 5, p. 1067.
16. Hogan (1986), *op. cit.*, p. 65.
17. Soler (1986), *op. cit.*, p. 27.
18. Hogan (1986), *op. cit.*, p. 67.
19. Thomas John Bossert, "Panama", en *Confronting Revolution: Security through Diplomacy in Central America*, ed. por Morris J. Blackman, William M. Leogrande y Kenneth E. Sharpe, (Nueva York: Random House, 1986), p. 185.
20. Los políticos que tomaron el poder mediante la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989 se refieren al período anterior a 1968 como un período harmónico y democrático en la vida política del país. Sus organizaciones políticas fueron precisamente las que fueron impedidas de continuar manejando el país como lo hicieron entre 1903 y 1968.
21. Jilma Noriega de Jurado, *Verdad y Miseria de nuestros partidos políticos*, (Panamá: Editora renovación, 1978), p. 4.
22. Ronald Mc Donald, "Multi-party Loose Systems: Venezuela, Brazil, Panama and Ecuador", en *Party Systems and Elections in Latin America*, (Chicago, IL: Markham Publishing Company, 1971), p. 80.
23. Institute for the Comparative Study of Political Systems, *Panama Election Factbook, May 12, 1968*, (Washington, D.C.: Operations and Policy Research, Inc., 1968), p. 14.
24. El interés de la intelectualidad estadounidense por entender dichas transformaciones provocó una literatura substancial destinada a indagar sobre algunas de sus causas y consecuencias. Ver por ejemplo a Tad Szulc, *The Winds of Revolution*, (New York: Praeger, 1965); Peter Nenemkis, *Latin America: Myth or Reality*, (New York: Knopf, 1964); y, entre otros, Hohn P. Powelson, *Latin America: Today's Economic & Social revolution*, (New York: McGraw-Hill, 1964).

25. Estas elecciones fueron elogiadas posteriormente como una de las más "libres" de la historia nacional por ser la segunda vez — la primera fue en 1932 después de un golpe de estado promovido por sectores medios — que un candidato opositor triunfaba en unas elecciones presidenciales y era reconocido por el gobierno saliente. Sin embargo, para que ello sucediera fue fundamental que tanto el Presidente saliente como el entrante compartieran amplios vínculos como productores y distribuidores del azúcar, respectivamente. En otras sucesiones presidenciales ocurría lo mismo, con la salvedad de que la vinculación comercial se daba entre socios que a la vez formaban parte de las mismas coaliciones en el poder.
26. Citado por Daniel Goldrich, *Sons of the Establishment: Elite Youth in Panama and Costa Rica*, (Chicago, IL: Rand Mc nally and Co., 1966), p. 36.
27. Institute for the Comparative Study of Political Systems, *op. cit.*, p. 30.
28. Goldrich, *op. cit.*, p. 36.
29. Ibid, p. 55.
30. Goldrich, op. cit., pp. 25, 51.
31. Institute for the Comparative Study..., *op. cit.*, p. 14.
32. Goldrich, *op. cit.*, p. 28.
33. Manuela Semidei, "Panama, les Etats-Unis et la Zone du canal", *Problemes D'Amerique Latine*, (Notes et Etudes Documentaires), vol. XXIX (29 novembre 1973), p. 8.
34. Dinges, *op. cit.*, p. 103.
35. David N. Farnsworth y James W. Mc Kenney, *U.S. Panamanian Relations, 1903-1978*, (Boulder, Colorado: Westwiew Press, 1983), p. 1.
36. Ver a Vincent Mc Donald, "The Panama Canal for Panamanians", *Military Review* vol. LV, No. 12, diciembre de 1975, pp. 7-16.
37. James Busey, *Political Aspects of the Panama Canal: The Problem of Location*, (Tucson, Arizona: The University of Arizona Press, 1974), p. 16.
38. La cita forma parte de un documento de revisión de la doctrina militar de E.U. formulada en 1986 para el Proyecto Conjunto de la Armada de E.U. sobre Conflictos de Baja Intensidad, "Analytical Review of Low-Intensity Conflict", (Fort Monroe, VA: Comando de la Fuerza Armada para el Entrenamiento y la Doctrina, s/f). Citado por Raúl Sohr, *Para Entender la Guerra*, (México, D.F.: Alianza Editorial Mexicana y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991), p. 46.
39. Ver "Panamá, el Senado de los Estados Unidos y América Latina", *La Prensa* (Panamá, Panamá), 9 de abril de 1987.
40. Según el entonces Embajador panameño en Washington, Aquilino Boyd. Citado por Dinges, *op. cit.*, p. 113.
41. Citado por Thomas Mc Cormick, *America's Half-Century: United States Foreign Policy in the Cold War*, (Baltimore y Londres: The John Hopkins University Press, 1989), p. 181.
42. Citado en "Lines in the Sand", *U.S. News & World Report*, vol. 109, No. 13, 1 de octubre de 1990, p. 30.
43. Luis Maira, "Estados Unidos y América Latina: ¿Perspectivas de cambio bajo la administración Carter?", en *Carter y la Lógica del Imperialismo*, tomo II, ed. por Hugo Assman, (San José, C.R.: EDUCA, 1978), p. 53.
44. Harry G. Summers, Jr., "Tactical Victory, Strategic Defeat", en *On Strategy: A Critical Analysis of the Vietnam War*, (New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1982), pp. 21-29.

45. "Lines in the Sand", *op. cit.*, p.32.
46. Ver a Woodward, *op.cit.*, p. 177. Ver también a Lilia Bermúdez, *Guerra de Baja Intensidad: Reagan contra Centroamérica*, (México, Siglo XXI eds., 1989, segunda ed. corregida), pp. 12-13.
47. Según Lilia Bermúdez, estos elementos fueron parte de una guerra contrarrevolucionaria prolongada para "*enfrentar a los movimientos de liberación y a los gobiernos definidos como enemigos en el Tercer Mundo*". Ver Bermúdez, *op. cit.*, loc. cit.
48. Ver Edward Herman y Frank Brodhead, *Demonstration Elections: U.S. Staged Elections in the Dominican Republic, Vietnam and El Salvador*, (Boston: South End Press, 1984), p. 20.
49. El tema del papel de la democracia en la política exterior de E.U. lo desarrollamos en "La transición a la democracia en América y Europa", *La Nación*, (Buenos Aires, Argentina), 26 de marzo de 1991. Serie de cinco artículos sobre "La democracia que vuelve".
50. "Charges of Fraud Mar Panama Vote", *The New York Times*, lunes 8 de mayo de 1989, pp. 1A, 11A.
51. Kempe, *op. cit.*, pp. 32-33.Ver especialmente a Michael Gordon, *The New York Times*, domingo 24 de diciembre de 1989.
52. Thomas H. Etzold, "The Strategic Environment of the Twenty-First Century: Alternative Futures for Strategic Planners", *Strategic Review*, (primavera 1990), p. 24.
53. Citado en Michael Klare, "A Blueprint for Endless Intervention", *The Nation*, 30 de julio-6 de agosto, 1988.
54. "How the Top Cop in the Gulf sees his Job", *U.S. News & World Report*, vol. 109, No. 13 (1 de octubre de 1990), p. 34.
55. Gral. Bruce Palmer, *Intervention in the Caribbean: The Dominican Crisis of 1965*, (Lexington, Kentucky: The University Press of Kentucky, 1989), pp. 174-175, 181.
56. Tomar en cuenta que no existían negociaciones formales entre ambos países, si bien dentro de los círculos cercanos a la Presidencia y a la Comandancia de las FDP se anticipaba dicha intención. Ver reimpresión de una fotocopia de dicha carta en "Anexo" en Nils Castro, *Objetivos Estratégicos de Estados Unidos en Panamá*, (San José, C.R.: Comité de Solidaridad con Panamá, 1988), pp. 21, 22-23. Ver también a The Independent Commission of Inquiry on the U.S. Invasion of Panama (ed.), *The U.S. Invasion of Panama: The Truth Behind Operation 'Just Cause'*, (Boston: South End Press, 1991, p. 20.
57. Esta observación ya la había planteado el Jefe del Comando Sur en diciembre de 1985, sin que ello, al igual que en ésta última ocasión, haya sido solicitado oficialmente por la parte norteamericana. Pero de cualquier manera, refleja los motivos básicos de las acciones de E.U. en Panamá a partir de entonces.
58. Gral. Fred Woerner (1989), *op. cit.*, p. 22.
59. John Saxe-Fernández, "Las razones estratégicas", *Excelsior*, martes 26 de diciembre de 1989, pp. 7-8.
60. La base Howard de E.U. en Panamá es la mayor base aérea de ese país al sur de sus fronteras. Según un ex-asesor de las FDP, Nils Castro, esta base es capaz de recibir y acomodar todos los sistemas aéreos estratégicos, nucleares y convencionales, tanto del actual inventario como los que están en desarrollo; y tiene instalaciones logísticas con la capacidad de apoyar

operaciones aéreas prolongadas. Según el citado analista, E.U. tiene en el Fuerte Sherman el centro de entrenamiento en la selva más importante, en el que se entrenan las fuerzas norteamericanas destinadas a participar en operativos cuyos escenarios vayan a ser selváticos e incluso, algunos astronautas. Ver Nils Castro, *op. cit.*, pp. 9-11.
61. Según un documento legal preparado por la defensa de Noriega para detallar las relaciones entre el ex-líder militar y el gobierno de Estados Unidos. Ver a Pedro Enrique Armendares, "North", *La Jornada*, jueves 4 de julio de 1991, p.1.
62. Palabras de Noriega ante el Subsecretario de Estado Richard Armitage en noviembre de 1987, cuando E.U. pedía la salida del militar panameño de la jefatura de las FDP. Ver a Kempe, *op. cit.*, p. 328.
63. Palmer, *op. cit.*, p. 189. Cursivas nuestras.
64. A su regreso, los dirigentes empresariales crearon una organización que "vigilaría" — dos años después — las elecciones de Mayo de 1989.
65. Giancarlo Soler Torrijos, "Panamá: primero, soberanía", *Nueva Sociedad* (Caracas, Venezuela), No. 97, septiembre-octubre de 1988, pp. 12-18.
66. Jorge Ritter, *Los secretos de la Nunciatura*, (Bogotá, Colombia: Editorial Planeta, 1990), pp.77-79.
67. Ver declaraciones de Keagle en la edición del viernes 6 de enero de 1990 al *Miami Herald*.
68. Roger Fontaine, "El Canal de Panamá: Los temas del futuro", ponencia reimpresa por la revista *Tareas* No. 69, Junio-Agosto de 1988, editada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Panamá.
69. Comité de Santa Fé (II: Roger Fontaine, Gordon Summer, David C. Jordan), "Una Estrategia para América Latina en la década de 1990", Propuesta No. 10, reimpresa en la revista *Tareas* No. 72, Mayo-Agosto de 1989.
70. Kemp (1990), *op. cit.*, p.423.
71. Richard Halloran, "U.S. Troops to Go Slowly Into Panama", *The New York Times*, viernes 12 de mayo de 1989, p. A8.
72. "Fracasó el Bloqueo Económico y Político a Panamá: W. Crowe", *Excelsior*, martes 17 de octubre de 1989, pp. 2-A, 27-A.
73. Kempe, *op. cit.*, pp.439-440.
74. Kempe (1990), *op. cit.*, p. 434.
75. Buckley, *op. cit.*, pp. 140-145. Sobre este momento político ver también a Giancarlo Soler Torrijos, "Panamá: Los retos del movimiento popular frente al impasse de la crisis", *Coyuntura Centroamericana* (México D.F.), agosto-septiembre de 1988, pp.16-19.
76. Documento del Departamento de Estado titulado *Thoughts on a Panamanian Political Solution*. Citado en "Panamá: intervención y soberanía", en *Coyuntura Centroamericana* (México, D.F.), año 1, Nos. 6-7, febrero-marzo de 1988, p. 21.
77. Stephen Engelberg, "U.S. Officials Say Senators Balked at Noriega Ouster", *The New York Times*, lunes 24 de abril de 1989, pp. 1A, 11A.
78. Stephen Engelberg, "C.I.A. funnels Aid to Noriega's Elections Foes", *The New York Times*, domingo 23 de abril de 1989, p. 11A.
79. Ver los comentarios del Senador Helms transcritos en la edición del *Congressional record* del 4 de marzo de 1988, pp. S1949-S1951. Es obvio que los congresistas aspiraban más bien a cancelar los tratados canaleros, porque no existe tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos.

80. Ver edición del 10 de agosto de 1988 del citado *Congressional record*, p. S11476.
81. Crane, *op. cit.*, p. 56.
82. Citado en Robert Pear, "Canal pacts: U.S. Looking at Dire Results", *The New York Times*, miércoles 10 de mayo de 1989, p. 11.
83. Ver la edición del 19 de julio de 1989 del *Congressional Record*, pp. S8238-S8241.
84. "Negociará EU sus bases si Noriega se va", *Unomasuno* (México, D.F.), 7 de septiembre de 1989, p. 1. Ver también a Robert Pear, "U.S. Faulted on Military Maneuvers in Panama", *The New York Times*, jueves 24 de agosto de 1989, p. A5.
85. Pear, *Ibid.*, loc. cit.
86. "E.U. y Panamá, involucrados en un "conflicto de baja intensidad": el vocero del Pentágono", *Unomasuno*, 20 de octubre de 1989, p. 21.
87. José Manuel Nava, "Seguirán las tropas en Panamá el tiempo que sea necesario: Bush", *Excelsior*, jueves 22 de diciembre de 1989, p. 10.

"...los Estados Unidos siguen siendo los abanderados de todas las causas injustas del hemisferio".

Omar Torrijos

3

Trasfondo histórico de una derrota política: una reinterpretación necesaria

En casi nueve décadas de historia independiente, el Estado panameño nunca pretendió separarse de los límites de la estructura colonial impuesta por Estados Unidos con la fuerza y efectividad con que lo hizo a partir de 1968. En este año, el estamento militar tomó las riendas del poder para impulsar el proceso que, al suspender el Estado oligárquico, logró reformular las bases contractuales de la subordinación de Panamá a Estados Unidos. Sin embargo, la restauración definitiva de la estrecha relación que Estados Unidos mantuvo con la oligarquía panameña por más de seis décadas realmente se estableció aún antes de que las tropas de este país colocaran a Endara, Arias y Ford frente a las riendas del poder político el 20 de diciembre de 1989. Si bien el régimen que culminó bajo la intervención de Estados Unidos tuvo sus orígenes con el golpe militar de 1968, del mismo emergió el gobierno que restructuró el país de tal forma que colocó a Panamá entre los países con voz en el concierto internacional y estableció las bases sobre las que fue posible, por dos décadas, mantener la independencia del istmo.

El gobierno que surgió del golpe militar de 1968 en Panamá tampoco era único en su tipo. El registro de la historia latinoamericana ya había dado señas de que estamentos militares se pronunciaran contra el *statu-quo* oligárquico cuando después de un proceso de profesionalización — a manera de evitar la excesiva y violenta represión destinada a coartar las demandas populares por reformas sociales — éstas toman el poder para llevar a cabo los cambios necesarios y evitar ejercer el papel represivo asignado por las oligarquías. Ante los ojos de cualquier observador, esta posibilidad en Panamá era casi imposible por la poderosa presencia del ejército norteamericano, y por la subordinada relación de Panamá a Estados Unidos, desarrollada desde que este último país se impuso a su tierra de manera vitalicia a partir de 1903. Para que las fuerzas armadas panameñas surgieran con un discurso autónomo y nacional, no obstante, fue necesario que concurrieran varios factores relevantes. En general éstos los podemos buscar en la evidente crisis de 1968, en el papel del Gral. Omar Torrijos en esa historia y en la misma evolución de la institución armada. En su conjunto, estos factores permitieron coyunturalmente el inicio de un período de afirmación nacional que a su vez constituyó un esfuerzo importante en la transformación del Estado panameño y en la inclusión en él de una agenda fundamental de reformas.

La trayectoria personal del Gral. Omar Torrijos muestra los valores presentes en la oficialidad joven de la Guardia Nacional en el momento del golpe de Estado del 11 de Octubre de 1968. En este sentido es relevante mencionar su formación como educador y su trayectoria de activista estudiantil en su provincia natal. En la Escuela Normal, debido a que los maestros del país se rehusaban a ir al lejano pueblo de Santiago donde fue fundada, el presidente Juan Demóstenes Arosemena contrató los servicios de maestros inmigrantes chilenos (del Chile del Frente Popular) y españoles republicanos, los que proyectaron en sus estudiantes sus valores políticos y sociales. Más tarde, en su formación como cadete en una escuela militar salvadoreña, Torrijos asistió al ascenso y caída de un gobierno militar "revolucionario" dirigido por oficiales militares jóvenes. Ya graduado y como oficial militar en Panamá, en 1955 las autoridades militares le encargaron por varios meses la seguridad

personal del Gral. Juan Domingo Perón, recién expulsado y exiliado de Argentina, entonces en exilio en Panamá. Estas experiencias contribuirían a dejarle a Torrijos aspiraciones reformistas y nacionalistas.[1]

Al igual que otros oficiales jóvenes, a principios de la década de 1960 Torrijos fue promovido y entrenado en cursos de contrainsurgencia y administración de operaciones militares en la Escuela de las Américas, situada en la Zona del Canal — escuela que fue el principal instrumento de Estados Unidos para la formación de cuadros en las instituciones militares del continente. No obstante, esta condición no convirtió a este grupo de oficiales en formación en un grupo uniforme y monolíticamente hostil a las reformas, o completamente indiferente a las luchas por la independencia nacional. Al contrario, este entrenamiento contribuyó a que de estos grupos militares una parte de ellos percibiera la vinculación entre el desarrollo nacional y la seguridad interna, para el que, en su momento, utilizaron la maquinaria del Estado con el objeto de forjar un nuevo patrón de relaciones políticas.

En efecto, después de la Revolución Cubana de 1959 los nuevos programas de contrainsurgencia enseñados en esta escuela incluyeron estudios basados en los escritos de Mao Tse Tung, sobre diversas estrategias de guerra de guerrillas, y sobre la trayectoria de aquellos líderes que fueron capaces de destruir ejércitos regulares. Torrijos recordó que algunos de estos oficiales, entre los cuales se incluía, empezaron a cuestionarse sobre las razones que empujaban a los pueblos a rebelarse, y así se "*dieron cuenta que no formaban parte de un ejército nacional, sino de unas fuerzas armadas de ocupación que obedecían a los intereses de una clase gobernante completamente impermeable a todo tipo de cambios*".[2] Junto a otros oficiales que también fueron entrenados bajo los programas de Acción Cívica delineados previamente por la "Alianza para el Progreso" — un programa de reformas políticas y sociales impulsados por la administración Kennedy como respuesta a la Revolución Cubana — esta formación contribuyó a empujarlos a tomar el poder y fomentar desde él varias políticas reformistas.

En la medida que fue la institución militar istmeña la que condujo el golpe de Estado de 1968, la naturaleza y los orígenes

de la Guardia Nacional — denominación de la fuerza armada panameña hasta su cambio de nombre en 1985 — es crucial para entender el cambio en su papel después de 1968. Por décadas Panamá contó con una fuerza policial mínima no conocida en ningún otro país centroamericano. Poco después de la independencia de Panamá en 1903, Estados Unidos desarmó las fuerzas armadas locales para evitar que obedecieran a cualquier otro interés interno que no fuera el norteamericano. Esta fuerza policial sirvió pricipalmente para resolver problemas callejeros menores, mientras que las crisis mayores fueron resueltas directamente por las fuerzas armadas de Estados Unidos acantonadas en Panamá. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial — en el contexto de la Guerra Fría y de la abolición del artículo constitucional que sancionaba la intervención militar norteamericana — esta pequeña fuerza policial fue convertida en una Guardia Nacional. Desde su incipiente impulso como Policía Nacional, a fines de la década de 1940, nació la Guardia Nacional estrechamente vinculada a una inducida profesionalización, no al desarrollo de un proyecto de la oligarquía, tal como el de una clase terrateniente que requiere un ejército fuerte y represivo para mantener una fuerza laboral dócil. Subsecuentemente, la Guardia Nacional mostró ciertos grados de autonomía respecto a la clase oligárquica local.

Con el paso del tiempo esta autonomía contribuyó a que la institución armada adoptara posiciones políticas. Si por definición la Guardia Nacional estaba encargada de la defensa de la nación, entonces su profesionalización, inducida por Estados Unidos, llevaba las semillas de la politización. Los principales recursos económicos — el Canal y las plantaciones de Banano — eran propiedad de extranjeros, y había escasas industrias nacionales que proteger o enemigos extranjeros con quien pelear. En esencia, en 1968 la Guardia Nacional se encontraba estructuralmente inactiva, lo que impulsó a sus oficiales a buscar una amplia presencia y reformular su papel en la sociedad panameña.[3]

Desde su creación en 1953, la Guardia Nacional panameña empezó a cambiar su papel como fuerza policial tradicional a otra con mayores funciones profesionales. En la década de 1960 un número creciente de oficiales jóvenes tenía entrena-

miento en academias militares, un pequeño grupo de ellos en Perú, conocido por sus escuelas militares con orientación independiente y desarrollista. Así, el resultado inmediato de estas condiciones llevaron a algunos oficiales jóvenes a cambiar sus percepciones sobre su papel en la sociedad. Mientras que la creciente ayuda militar norteamericana contribuía a esta profesionalización, oficiales jóvenes — entre ellos Torrijos — empezaron a sentir que la oligarquía sólo causaba problemas que después la Guardia Nacional tenía que resolver por medios violentos. Torrijos más tarde recordó que en los tiempos en que fue comandante de un contingente de tropas especiales destinadas a mantener el orden público, "*la justicia no estaba de parte de los grupos hacia quienes nuestras bayonetas apuntaban*".[4] Entonces —recordó Torrijos después en una carta al Senador Edward Kennedy — "*los procesos electorales... en su gran mayoría han sido versiones modernas de los tiempos romanos de pan y circo, con la diferencia de que ahora estos episodios han sido fuertes en circo y débiles en pan*".[5] Torrijos caracterizaba los gobiernos civiles de la época como "*matrimonios entre las fuerzas armadas, la oligarquía y malos curas, y como los matrimonios eclesiásticos no admiten divorcio, esa trilogía de antipatriotas parecía indisoluble*".[6]

Los orígenes sociales del grupo de militares que comandan el golpe de Estado de octubre de 1968, son cruciales para comprender las razones que provocaron el aludido cambio frente a Estados Unidos y la oligarquía local. Los dos comandantes que la Guardia Nacional tuvo desde su creación hasta 1968 tenían lazos familiares cercanos con la oligarquía urbana gobernante. El coronel José Remón Cantera, quien también fue presidente de la República desde 1952 hasta su asesinato en 1955, era primo hermano del presidente Roberto Chiari Remón (1960–1964), quien a su vez fue seguido en la presidencia por un pariente de este último, Marco A. Robles (1964–1968). La familia Chiari es una de las aproximadamente 20 familias que concentraban el poder económico en Panamá.[7] El comandante Bolívar Vallarino, quien dirigió la Guardia Nacional hasta su retiro en 1968, era además miembro de una de estas veinte familias.

Por otro lado, la mayoría de la oficialidad joven no tenía lazos directos con los clanes oligárquicos y, por la presencia de

las bases militares norteamericanas y las varias décadas en que Panamá funcionó sin una institución militar, las élites tradicionales panameñas ni cultivaron lazos con estos oficiales ni enviaron a sus hijos a formar parte de esta institución. Este error, desde el punto de vista de la oligarquía, fue reconocido públicamente dos décadas después por Ricardo Arias Calderón, vice-presidente del triunvirato civil impuesto por las tropas invasoras en 1989. En 1968 la mayoría de estos oficiales provenían de los sectores medios urbano y rural y de los sectores populares.[8] Dadas estas circunstancias, la situación interna de la institución militar fue proclive a la emergencia de un grupo que pretendió desvincularse de esta oligarquía tradicional.

La crisis de 1968 y el golpe de Estado

La combinación de varios factores presentes en la coyuntura de 1968 prepararon las condiciones para que este grupo de oficiales llevaran a cabo un movimiento militar contrario al *statu-quo* político. Recordemos que por seis décadas Panamá experimentó gobiernos oligárquicos casi ininterrumpidos. Estas pocas familias dominaron la política panameña desde la independencia en 1903 hasta el golpe militar de 1968. Ello es fácilmente palpable al observar la lista de presidentes, vicepresidentes y candidatos presidenciales en la historia del país. La lista revela que todos, con la excepción de Belisario Porras — en la segunda y tercera década del siglo — y Arnulfo Arias — que si bien tuvo su primer y único momento nacionalista en la Presidencia de 1941, más tarde se alió a los intereses que decía combatir — pertenecían a un pequeño grupo de familias con fuertes lazos entre sí y que también controlaban gran parte de los recursos económicos del país. Al final de la década de 1960, sin embargo, la oligarquía estaba dividida en torno a las políticas estatales que querían impulsar, a raíz de los frustrados intentos reformistas del presidente Chiari (1960–1964) y del presidente Robles (1964–1968), ambos del Partido Liberal. En este sentido, en 1967 la Cámara de Comercio — organismo empresarial que juega un papel ultraconservador y pro-intervencionista en la historia del país — propone la liberalización

de la economía y la ampliación del sector comercio y servicios a la vez que ataca al Partido Liberal en el poder por impulsar estrategias proteccionistas.[9] Los sucesos pre-electorales de 1968 — en el que cambian las alianzas intraoligárquicas a tal punto que en un momento dado hay dos presidentes constitucionales — son muestra de ello.

La desorganización política de la oligarquía después de que el país había transcurrido por un período de crecimiento económico no distribuido — a raíz del auge integracionista centroamericano de la década de 1960- - y las continuas presiones de los sectores medios y populares, crearon un vacío político para las elecciones de 1968. El sindicalismo urbano organizado y los sectores medios se habían incrementado numéricamente como producto de la industrialización.[10] Sin embargo, el sindicalismo no estaba incorporado o asociado a ningún partido político, y su división entre una fuerza laboral empleada en la Zona del Canal y otra en Panamá, provocó que este sector no pudiera elaborar un proyecto alternativo conjunto. Además, un sector empresarial dedicado a actividades financieras había surgido con las nuevas leyes bancarias de corte liberal decretadas al final de los cincuentas, pero su fuerza todavía no adquiría organicidad. En general, la existencia de organizaciones de los sectores medios, intelectuales y grupos estudiantiles que por varios años demandaban reformas económicas y sociales y particularmente, la renegociación de las relaciones de Panamá con Estados Unidos, es muestra de la existencia de grupos sociales que estaban dispuestos a apoyar una nueva clase gobernante que estableciera un programa estatal que cubriera estas demandas. Otros grupos rurales que por décadas habían permanecido fuera del manejo político y económico del país, fueron los grupos con los que la nueva clase gobernante pudo contar para balancear el poder de la oligarquía urbano-comercial políticamente derrotada con el golpe de Estado. Miles de panameños habían combatido la presencia de Estados Unidos en la Zona del Canal en enero de 1964, pero para 1968 ningún partido o movimiento había canalizado este sentimiento nacionalista.

La confluencia de estos factores hizo posible el surgimiento de un régimen militar con una agenda de reformas fundamentales. El régimen de Torrijos alteró las relaciones entre el

Estado y los sectores populares a través de un sistema medianamente institucionalizado. Al asumir el poder, el nuevo grupo gobernante encontró a los sectores populares con bajos niveles de organización, participación, e ideologización, e intentó su incorporación a través de organizaciones de masas fomentadas por el Estado. Los intelectuales, el entonces excepcional y políticamente poderoso movimiento estudiantil y los sectores medios que iban en ascenso y reclamaban organicidad, se unieron al proyecto de Torrijos y a su intención de establecer el control panameño sobre la Zona del Canal.

Ya formada esa base social, el Estado promovió un desarrollo interno con relativa autonomía tanto de Estados Unidos como de sus cipayos locales. Estos cipayos, sin embargo, si bien fueron desplazados del poder político con el golpe de Estado de Torrijos, lograron mantener su dominio sobre los recursos económicos. Mientras, una reforma agraria mínima y gradual, la nacionalización de algunas empresas extranjeras, la creación de empresas estatales externas, conformaron la estrategia de Torrijos para ampliar las bases tanto sociales como económicas de su gobierno. En ese proceso, el gobierno militar adoptó una ideología reformista, prohibió las instituciones políticas del pasado, expandió el papel del Estado hacia grupos específicos, e incrementó su capacidad planificadora y reguladora. Pero para mantener el equilibrio de esa extraña coalición, el régimen también promovió políticas que respondieron al apetito del capital foráneo y, eventualmente, la fracción financiera de la oligarquía que más tarde se unió al gobierno sin perder su independencia. Estas medidas se dirigieron a expandir el papel tradicional de Panamá como centro de tránsito de mercancías y capitales, que implicaron un acrecentamiento del Centro Bancario Internacional, y de la Zona Libre de Colón, así como otras políticas de promoción de exportaciones.

No obstante la congruencia de estos factores para crear el escenario que dominó el país durante la siguiente década, es necesario notar que otros factores derivados de la conducta política de los grupos adversarios al golpe contribuyeron a hacerlo posible. Primero, el hecho de que el presidente Arnulfo Arias, depuesto el 11 de octubre de 1968 por la Guardia Nacional, once días después de haber llegado al Palacio de Las

Garzas, demostró no tener ninguna habilidad política cuando llegó al poder. A pesar de todos los pactos que forjó con la jerarquía de la Guardia Nacional y con varios partidos políticos que en el pasado se habían opuesto a su figura, Arnulfo Arias optó por no limitarse por estos acuerdos. El apoyo masivo con que Arias contaba, alimentado por su aureola nacionalista del pasado, podría haberlo ungido como el que llevara a las masas panameñas a apoyar cualquier reformulación contractual con Estados Unidos.

El grueso de la oligarquía apoyaba a Arias en 1968, quien para este momento ya había perdido toda orientación populista o nacionalista, aunque conservaba un cuantioso caudal electoral. La oligarquía se sumó a Arias después de haberlo combatido por varias décadas, con la intención de impedir que se llevaran a cabo las mínimas reformas impulsadas por las previas administraciones liberales aupadas por la Alianza para el Progreso. La reafirmación nacional panameña había dejado de ser parte del programa de Arias. En su discurso de toma de posesión, Arias destacó que "*la providencia ... ha decretado la evolución y en épocas determinadas decreta hondas modificaciones para una restructuración evolutiva y perfeccionada ... (que me) acompañan a ... colocar la primera piedra del faro luminoso de la redención de nuestro pueblo y la fraternidad de las Américas*".[11] El gobierno de Estados Unidos, que temía desbordamientos nacionalistas como el de 1964 y posibles seguidores del militar egipcio Gamal Abdel Nasser (quien nacionalizó el Canal de Suez), confiaba en la figura de Arnulfo Arias para lograr la aprobación de los tratados canaleros que le reservaban el derecho de permanecer en el istmo por cien años más y que, por la coyuntura electoral panameña, desde 1967 habían sido impugnados por amplios sectores de la sociedad que combatían el entreguismo oficial. El rechazo o confirmación por parte de Panamá dependería del manejo que de esto tuviera el gobierno de Arias, el más capacitado para neutralizar las expresiones anti-yanquis y antioligárquicas de la época. Sin embargo, al haber sido depuesto después de pocos días en el poder, Arias no llegó a institucionalizar esa aquiescencia popular a su favor.

Un elemento importante del momento es que la emergencia del pequeño grupo de oficiales reformistas pudo haber

sido percibida y efectivamente neutralizada por la todavía conservadora alta jerarquía militar. Pero tal cosa no sucedió, y el pequeño grupo de oficiales jóvenes pudo entonces tomar ventaja de la situación y tomar el poder. Más tarde, para permanecer al mando de las riendas del estado y perseguir sus objetivos de corto y mediano plazo, el régimen de Torrijos impulsó una serie de reformas que le ampliaron su base social y una legitimidad sustancial, más directa y coherente, derivada de los sectores medios y populares del país.

Tomando en cuenta la evolución de estos factores pueden distinguirse tres períodos en la historia del ascenso y consolidación del régimen de Torrijos. El primero, de 1968 a 1971, caracterizado por luchas por el poder, por ciertas dosis de represión y por la experimentación en la construcción de una coalición de gobierno. El segundo período, de 1972 a 1975, es el período en el que se sientan las bases para su consolidación. En este se observa la evolución de una alianza que primero incluyó a sectores medios y populares y que después invitó a algunos sectores empresariales. El apoyo al gobierno militar empezó a institucionalizarse mientras que Torrijos intentaba acomodar la oposición doméstica y la norteamericana, a medida que las condiciones económicas se turnaban desfavorables. El período entre 1975 y 1978 se caracterizó por la unidad nacional que llevó a la firma de los tratados del Canal en septiembre de 1977 y su posterior ratificación popular. Una fase de transición después de 1978 marcó el retorno de la política electoral y la transición hacia una acomodación con pequeños grupos oligárquicos previamente desplazados. En este sentido, el asesinato de Omar Torrijos en 1981, marca el punto de inflexión hacia la caída final del reformismo militar. Antes de ello, sin embargo, el país pasó por una restructuración de alianzas que llevaron a algunos grupos oligárquicos al poder en la coyuntura electoral de 1984, y por una grave crisis política acentuada por la intervención de Estados Unidos entre 1987 y 1989, que fueron pasos previos a la plena restauración oligárquica.

La oficialidad joven de la Guardia Nacional, que llevó a cabo el incruento golpe de Estado, mostró sus motivaciones detrás del derrocamiento de Arias poco después de tomar el poder. La rebelión fue inicialmente bienvenida por algunos grupos de la

oligarquía que se habían opuesto a Arias o que querían asegurar ciertas direcciones en las políticas del Estado. El comunicado de los oficiales golpistas anunciaba la disolución de la Asamblea Nacional, la prohibición a toda actividad partidista, y la formación de una Junta Provisional que también se reservaba los poderes legislativos. El "Movimiento para la Restauración de la República" fue proclamado más tarde postulando una "revolución sin dictadura y libertad con orden". Los postulados incluían el tradicional "repudio absoluto al comunismo" de los golpistas de otros países del continente, un llamado a la erradicación del nepotismo y la corrupción, la separación de la Guardia Nacional de la política, la reducción de la burocracia gubernamental, y un anuncio sobre posibles elecciones generales después de que la maquinaria gubernamental haya sido "moralizada" y "depurada".[12] Las motivaciones declaradas más bien indicaban los diferentes intereses que cada fracción de la oficialidad tenía y el intento por otorgarle legitimidad a sus acciones.

Las acciones tomadas por el nuevo gobierno militar incluyeron varias reformas administrativas, fiscales y agrarias mínimas, que sin embargo fueron impuestas junto a una fuerte represión. El gobierno, aunque no contaba con algún plan definido, empezó a tomar medidas destinadas a incrementar el poder del Estado. Entre ellas destaca la expropiación de ciento ochenta mil hectáreas no cultivadas de la transnacional Boston Coconut Company.[13] A la vez, el nuevo gobierno reprimió toda oposición: todos los partidos políticos fueron proscritos, la Universidad Nacional fue cerrada, y los sindicatos fueron perseguidos. De allí que amplios sectores civiles de todas las tendencias políticas, muchos de ellos anti-oligárquicos, reclamaban el regreso a un gobierno "constitucional".

El gabinete nombrado por la Junta Provisional que asumió el poder incluyó miembros de la oligarquía tradicional y otros civiles conservadores allegados a ellos. Para salvaguardar la legitimidad inmediata del golpe, la jerarquía de la Guardia Nacional nombró en el gabinete a personas tales como el presidente de la Cámara de Comercio, un abogado de una poderosa firma y miembro de una de las familias oligárquicas, un candidato a vicepresidente de la coalición presidencial de Arias para las elecciones de 1968 y al presidente de la Aso-

ciación Nacional de Ganaderos. Con esta composición, el gabinete reafirmaba los intereses de los sectores dominantes y los del reacio Estados Unidos, que optó por reconocer al nuevo gobierno sólo después de que éste aseguró que cumpliría con los convenios internacionales.[14] El que la institución militar haya realizado en Panamá un golpe de Estado sin la previa venia de la Casa Blanca causaba aprehensión en E.U.

Pero el curso reformista adoptado por la Guardia Nacional se debe particularmente a la evolución que tomaron las luchas por el poder dentro de la institución. Este proceso culminó aproximadamente un año después de haberse realizado el golpe. Los simpatizantes de Arias fueron expulsados de la Guardia Nacional, mientras que el liderazgo del Estado Mayor se mantuvo dividido en torno a la dirección que debía tener el régimen recién establecido. Un grupo de ellos, liderado por el mayor Boris Martínez, se ganó la enemistad de las organizaciones populares y sus líderes y de funcionarios de la anterior administración acusados de corrupción. Martínez sostenía que el país vivía una "tragedia comunista",[15] y que sólo a través de su represión el país podría "avanzar".

Otro grupo comandado por el Coronel Omar Torrijos se mostró flexible e intentó establecer contactos con miembros de la previa administración liberal, así como con las organizaciones de masas para crear una base alternativa de poder. Su ventaja estaba en que dentro del escalafón menor de la Guardia Nacional, Torrijos contaba con un apoyo mayor del logrado por los otros oficiales golpistas. Consecuentemente, el proyecto de Torrijos para gobernar el país fue conformado por políticas flexibles, reformas, y por la búsqueda de independencia frente a los grupos de la oligarquía tradicional. Un tercer grupo con escaso poder — por haber sido colocados en su puesto por la oficialidad joven — representado por ambos miembros de la Junta Provisional, basaban su posición en los fuertes lazos que ambos ostentaban con las fuerzas armadas norteamericanas.

Empero, la oposición al recién instalado régimen llegó a ser un desafío real para la Guardia Nacional. Un foco guerrillero en la frontera con Costa Rica y una resistencia urbana y rural armada se hacían sentir. Estados Unidos, temiendo la repetición del fenómeno Nasserista egipcio en Panamá, mostró su insatisfacción suspendiendo la asistencia militar. Las masas

en general demostraban su antimilitarismo. Ante esto, la creciente sensación en las barracas de que la oligarquía causaba problemas mientras que las masas demandaban legítimas aspiraciones, le señaló al grupo de Torrijos que otro tipo de relaciones podría y debía constituirse. Así, la habilidad para percibir las condiciones a su alrededor, y la voluntad para buscar un nuevo tipo de relación con diversos grupos de la sociedad y cambiar la conducta de la Guardia Nacional consecuentemente, hizo al grupo de Torrijos el más apto para dirigir el gobierno si la crisis política debía ser resuelta oportunamente. Poco después, el grupo del Mayor Martínez fue disuelto por la alianza coyuntural entre Torrijos y la jerarquía conservadora que ambos colocaron como miembros de la Junta de Gobierno. No obstante, la lucha por el poder continuó a medida que Torrijos impulsaba políticas de inclusión social.

Después de disolver el grupo de Martínez, Torrijos tuvo éxito en alterar las bases de apoyo del Estado. Torrijos empezó a establecer una serie de medidas para reducir las tensiones entre los grupos populares organizados y el gobierno. Intelectuales, antiguos diputados, líderes laborales y estudiantiles, y varios dirigentes de la guerrilla fueron liberados e invitados a formar parte de su gobierno. En este período clave para el futuro desarrollo del país, Torrijos incluso logró atraer el apoyo del sindicalismo organizado, a tal punto que para el primero de mayo de 1969 los sindicatos de las plantaciones de banano y los campesinos que trabajaban para éstas aclamaron al General Torrijos en su visita a esta región.[16] Así, Torrijos comenzó a distanciarse de la oligarquía nombrando intelectuales y otros activistas de izquierda para puestos gubernamentales, ganando adeptos para el proyecto nacional-reformista. Las relaciones personales construidas a lo largo de su carrera con oficiales de similar rango y con sus subalternos permitirían que cuando la Junta Provisional intentó deponerlo en diciembre de 1969, gran parte de la oficialidad y las tropas de la Guardia Nacional se mantuvo leal al Gral. Torrijos.

Después del intento del golpe contra Torrijos el 16 de diciembre de 1969, Torrijos avanzó firmemente hacia reafirmar la autonomía del gobierno de los grupos económicos tradicionales. El papel de estos grupos y el de Estados Unidos en el intento de golpe movieron a Torrijos a buscar y consolidar una

base alternativa de legitimidad. Motivadas en parte por sus propias convicciones sobre el curso a tomar, Torrijos implementó una serie de políticas de corto plazo para ampliar el apoyo político con que contaba. A la vez, estas estrategias incrementaron el poder del Estado para lidiar con sectores políticos y económicos antagónicos, creando así la base con que el gobierno contaba para otras políticas de largo plazo, tanto para la política interna como para enfrentar el desafío de renegociar la presencia de Estados Unidos en el país.

En ese sentido, la arena diplomática fue el espacio fundamental en el cual Torrijos se movilizó después de consolidar su figura al frente del régimen. La medida fundamental con la que inauguró su accionar internacional fue la cancelación en 1970 de un acuerdo de arriendo que Estados Unidos tenía con Panamá sobre la base aérea de Río Hato, a la vez que condenó los proyectos de tratados canaleros que Estados Unidos había venido proponiendo con la anuencia de la anterior administración, proyectos de tratado que ya habían sido rechazados por amplios sectores nacionales en 1967. Después de 1970 los objetivos de política exterior del gobierno consistían en obtener el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía panameña sobre el canal y sobre su territorio adyacente, a fin de obtener los recursos que aportaba la explotación de dicha vía interoceánica. Pero el deseo de cambiar el status de la presencia de Estados Unidos dada la necesidad de establecer credibilidad frente a las masas, y del potencial desafío proveniente de miles de panameños que se habían lanzado a las calles para oponerse a la presencia estadounidense en enero de 1964, provocó que el gobierno militar forjara una política exterior independiente. Después del golpe de 1968, las negociaciones bilaterales con Estados Unidos fueron suspendidas, si bien varias cartas de protesta fueron enviadas en relación con la competencia comercial desleal que realizaban compañías estadounidenses localizadas en territorio canalero y sobre el destino de criminales panameños que escapaban a territorios ocupados.[17] Estados Unidos todavía consideraba como no negociable la cuestión relativa a su control sobre la Zona del Canal y su derecho a intervenir militarmente de manera unilateral para salvaguardar la operación del Canal, dos factores que serían las principales fuentes de conflicto entre ambos países.

Al observar lo limitado que habían resultado las previas negociaciones bilaterales sobre el futuro del Canal, Torrijos introdujo dos innovaciones a la política exterior panameña. Primero, el proceso negociador adquirió dimensiones nacionales. Se promovieron foros de discusión, y se tomaron acciones simbólicas anti-norteamericanas tales como el establecimiento de una semana anual anti-imperialista, cuyo ímpetu sólo disminuyó hasta después de la firma de los tratados. En segundo lugar, el proceso negociador fue multilateralizado. A pesar de que el patrón general de relaciones diplomáticas permaneció orientado hacia el bloque occidental, Panamá pronto se inscribió en las filas del Movimiento No-alineado, firmó acuerdos de cooperación y amistad con otros países que expresaron su apoyo a la causa panameña y más tarde abrió relaciones con Cuba y otros países del bloque soviético. En cada foro internacional Panamá demandó de Estados Unidos la descolonización de la Zona del Canal y la abrogación de los tratados canaleros de 1903. En esto, Torrijos advirtió frecuentemente que la continuidad del control norteamericano de la Zona del Canal resultaría inevitablemente en la erupción de nuevas olas nacionalistas en el istmo, violencia que, según dijo, él mismo encabezaría si E.U. no reconocía la soberanía incondicional de Panamá sobre la totalidad de su territorio. Pero como la administración Nixon no respondía a las demandas panameñas, Torrijos decidió impulsar una política exterior aún más agresiva.

En el plano doméstico, a partir de 1970 el gobierno panameño empezó a diseñar y establecer una organización política dirigida a movilizar y canalizar el apoyo de las masa panameñas. Torrijos le dió una atención especial a la creación de organizaciones de base que podrían constituirse en fuentes alternativas de apoyo. Los primeros de ellos fueron los comités de salud, creados con el asesoramiento de técnicos y sociólogos.[18] Más tarde la unidad administrativa del corregimiento fue la base para la organización política y administrativa del país. Los corregimientos, la unidad administrativa más pequeña del Estado había sido la base local del gobierno a principios del siglo, pero había desaparecido con la creciente centralización del gobierno nacional. A través de una organización gubernamental encargada de ello, la Dirección General para el

Desarrollo de la Comunidad (DIGEDECOM), el Estado promovió proyectos de desarrollo comunitario a la vez que reorganizó estas pequeñas unidades y las involucró en diferentes planes gubernamentales. El Estado inició con ello una serie de reformas que sirvieron para establecer una amplia coalición con sectores populares, rurales y urbanos.

Al formar esta coalición, Torrijos colocó al sindicalismo en la arena política, algo sumamente novedoso para la historia panameña. A partir de 1969 el gobierno promovió la formación de sindicatos y creó el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social como una entidad separada. De hecho, la tasa de sindicalización se incrementó entre 1969 y 1972: se formaron 55 sindicatos con 16,396 miembros, mientras que entre 1964 y 1968 se habían formado 27 sindicatos con un total de 4,203 trabajadores.[19] El gobierno de Torrijos favoreció a los trabajadores al decretar varias leyes y regulaciones, entre las cuales estuvo la ley que puso en práctica — antes letra muerta — el salario mínimo. En diciembre de 1971, el gobierno militar además sancionó un nuevo Código Laboral favorable a los trabajadores.

Sin embargo, los programas destinados al sector rural encontraron dificultades para su ejecución. Existía una situación precaria por la insuficiencia de la producción agraria, la falta de una infraestructura rural, una desigual concentración en la tenencia de la tierra, y la inexistencia de la mayoría de los servicios estatales. Para la mayoría de la población campesina, poco había cambiado desde principios de siglo. En 1970, fuera de los capitales provinciales, sólo cinco aldeas panameñas tenían acceso al agua potable.[20] Dado que la mayor parte de las tierras en Panamá eran propiedad del Estado — recordemos el carácter urbano comercial de la oligarquía panameña — la mayoría de los campesinos habitaban tierras públicas. Privada del acceso a los servicios del Estado, esta población campesina tampoco formó parte de la economía nacional "formal". Por ello, había un espacio en el campo que Torrijos empezó a cubrir.

En su temprana búsqueda por extender el apoyo rural hacia el Estado, Torrijos tomó en cuenta su potencial. Con esta política, logró separar a gran parte la población rural de la égida clientelista de familias rurales poderosas. Torrijos fue el

primero y el único Jefe de Estado en la historia panameña en hacer un esfuerzo sostenido para situarse en contacto directo con las masas a través de innumerables presentaciones *in situ* dirigidas a demostrar la accesibilidad y responsabilidad de su gobierno con y para las demandas populares. Torrijos viajó incesantemente a través del país urgiendo a la población a que le comuniquen directamente sus problemas y aspiraciones. Así, largas filas de personas que presentaban sus demandas y querían hablar personalmente con Torrijos pudieron ser observadas por varios años frente a su residencia en la ciudad capital, en su residencia en la playa de Farallón, como donde quiera que él se encontrara. En sus excursiones, Torrijos escuchaba pacientemente y anotaba las solicitudes de que el gobierno llevara a cabo mejoras menores y daba órdenes inmediatas a los oficiales locales y oficiales regionales de la Guardia Nacional para que les dieran atención y cumplimiento. Tales prácticas contribuyeron a darle una enorme popularidad personal a Torrijos, desarrollándose una identificación de estas poblaciones con su líder. "*Torrijos fue un campesino vestido de General*", manifestó una vez un líder campesino.[21] Niños por todas partes saludaban el paso de su helicóptero al divisarlo. Tomando la actitud de Torrijos como una indicación de lo que debía ser el gobierno, los campesinos se agrupaban ante las puertas de los dirigentes distritoriales y provinciales para demandar atención a sus problemas.

Así como durante este período quedaron establecidas las bases sociales de apoyo del gobierno, también quedaron establecidas las relaciones antagónicas del gobierno con la oligarquía y con el resto de los sectores empresariales. En sus relaciones con los empresarios panameños, Torrijos optó por cooptar algunos de los grupos e individuos que se oponían a su gobierno, para obtener al menos su apoyo parcial a cambio de concesiones limitadas. Sin embargo, el obstáculo de ese tipo de relación estaba en que, según confirmó lustros más tarde el Cnel. Díaz Herrera, Torrijos y el Estado Mayor de la Guardia Nacional percibían la situación como una en la que no debían permitir que tuviera cabida una oposición a su gobierno. Su accionar, sostenía el Estado Mayor de la Guardia Nacional, podía debilitar las perspectivas para alcanzar un nuevo Tratado canalero.[22] A través de una serie de políticas para ampliar

el papel de Panamá como Centro Financiero Internacional y otras políticas de diversificación de la plataforma tradicional de exportación, a la vez que se financiaron planes de desarrollo con capital norteamericano, se consiguió sino el apoyo, al menos la complacencia de algunos sectores de la "empresa privada" y la misma oligarquía que se dedicó a atender sus negocios. De esa manera, Torrijos pudo cooptar el ala reformista de la oligarquía otorgándole parte de los nuevos contratos para la construcción de viviendas urbanas a firmas asociadas con estos grupos.[23]

El régimen de Torrijos debe entenderse a partir de su papel articulador de un proyecto de afirmación nacional relativamente estructurado. Este surgió de un orden social oligárquico en decadencia: las clases medias pasaban de una pasividad relativa a una cierta rebeldía, las que al subir Torrijos al poder tomaron la conducción política del gobierno. No obstante, las perspectivas reales de profundizar en las tareas de afirmación popular fueron relegadas porque la imperatividad de reformular la relación contractual con Estados Unidos *vis-a-vis* la Zona del Canal así lo requería.

El programa torrijista planteó un proyecto nacional bajo conducción militar, basado sin embargo en un agente histórico incapaz de llevar a cabo las tareas de reorganización nacional del Estado panameño: el capital extranjero estaba supuesto a llevar a cabo las tareas transformadoras de la estructura económica y social panameña, porque el capital nacional, acaparado por la oligarquía, no lo había logrado ni tenía intenciones de intentar hacerlo. El papel otorgado a la clase financiera como sostenedora de aquel proyecto significó a su vez presentar una distancia insuperable entre el proyecto nacional y la capacidad real de este bloque político de ofrecer un modelo alternativo de sociedad.

En efecto, la naturaleza del sector financiero — sin raíces nacionales — conllevó el germen desnacionalizador y antireformista que caracterizó la política económica del gobierno después de 1978. Así, en la medida que la institución militar gozaba de un papel de mediador entre los grupos que se cobijaron bajo su gobierno, se crearon las bases para que en el futuro la evolución política nacional también estuviese subordinada a los manejos de la institución militar. En la medida

que la capacidad de la institución armada para prolongar su papel mediador dependía a su vez de que Estados Unidos procediera a reformular su estrategia hacia Panamá, la conducción militar demostró sus limitaciones para rechazar los intereses absorbentes provenientes de la potencia del norte, no logrando a su vez mantener y ampliar sus bases dentro de los sectores que una vez fueron pilar del torrijismo.

El gobierno militar limitó sus posibilidades transformadoras al reformismo, con la intención de que "lo viejo" desaparezca sin impulsar las acciones necesarias para destruir definitivamente el pasado oligárquico y las estructuras económicas que lo hicieron posible. A pesar de que la concentración de los recursos económicos quedó en manos de la oligarquía local, Torrijos nunca tomó decisiones que fraccionaran el poder financiero de la oligarquía. Y aunque Torrijos intentó disminuir las tensiones entre ambos, la oligarquía tradicional nunca se reconcilió con él. La oligarquía nunca le perdonó transferir el centro de toma de decisiones del aristocrático Club Unión a los cuarteles de la Guardia Nacional.

Los clanes oligárquicos desconocían el desarrollo político istmeño, por lo que en esta ocasión reaccionaron desproporcionadamente ante el gobierno militar. Las cúpulas empresariales, por ejemplo, propagaron rumores que lograron poco en su afán por reconquistar el poder político. Así, en el tercer aniversario del "proceso revolucionario" en 1971, la oligarquía esparció el rumor de que Torrijos estaba por declarar el socialismo como régimen de gobierno. En este contexto, a pesar de que la reforma agraria no llegó a expropiar grandes cantidades de tierra a ningún terrateniente, el presidente de la Asociación de Ganaderos advirtió que estallaría la violencia si el gobierno continuaba llevando a cabo las reformas planteadas.

El esfuerzo reformador del gobierno de Torrijos implicó construir una coalición para mantener su independencia de la oligarquía y de Estados Unidos. En términos de su magnitud y rapidez de movilizaciones e innovaciones políticas durante estos años, esa fase del régimen de Torrijos no tiene paralelo en la historia panameña. La necesidad de encontrarle solución a la cuestión canalera — en la medida en que la política interna de Estados Unidos hacía previsible una demora adicional para conseguirlo — indujo a Torrijos a procurar institucionalizar el apoyo existente y consolidar la base social ya conseguida.

El torrijismo fue el conjunto de las ideas difusas que destacaban la necesidad de reformas estructurales que habian surgido mucho antes pero que fueron recogidas por el gobierno militar en las políticas del Estado. Era "*un reformismo con aspiraciones revolucionarias*",[24] lo cual presentó el inigualable problema de destacar la necesidad de emprender cambios estructurales pero sin llevar a cabo las acciones pertinentes para ello. Aunque Torrijos denunció que Panamá era un país ocupado y que los problemas panameños tenían su origen en la "oligarquía vendepatria" que gobernó al país, el gobierno panameño buscó coexistir tanto con ésta como con Estados Unidos. Esto se tradujo en un proyecto reformista conducido por la institución militar que además apeló a la especificidad nacional, rechazó todo imperativo ideológico — para evitar obligaciones concretas — y la existencia de una división de la sociedad panameña cuya unidad requiriese una vigorosa desintegración de poderosos intereses económicos.

Torrijos manifestó no creer en la lucha de clases, aunque afirmó ser partidario de la lucha en el salón de clases, correspondiendo así a la idea de que a través de la educación y otras medidas similares podrían lograrse las transformaciones sociales de su país. Obviamente, enfrentar a la oligarquía más allá de lo político implicaba enfrentarse también con el imperio, con el que habría de renegociar los tratados canaleros, un enfrentamiento innecesario a corto plazo, pero profundamente necesario desde el punto de vista de las necesidades de establecer las bases para consolidar una nación independiente.

La Constitución de 1972 fue la forma contractual como el régimen institucionalizó el apoyo obtenido y reafirmó el poder del Estado. Basada en una Asamblea de Representantes de Corregimientos (la unidad administrativa mínima anteriormente mencionada), los constituyentes de 1972 designaron a la Guardia Nacional como un activo participante en todas las ramas del gobierno, ramas que debían actuar "en armónica colaboración con la fuerza pública". El artículo 207, transitorio en su naturaleza, nombró al Gral. Omar Torrijos como el "Líder Máximo de la Revolución" y como jefe de Gobierno por seis años. Además de nombrarlo como Comandante en jefe de la Guardia Nacional se le otorgaba el derecho de nombrar el

Gabinete, los jueces de la Suprema Corte, al Procurador y el Contralor — en realidad, poderes disfrutados en la práctica por los presidentes anteriores en su ejercicio del poder. La creación de una infraestructura administrativa también formó parte de este esfuerzo de consolidación.

La multilateralización de la política exterior panameña cobró fuerza gracias a la unidad nacional que Torrijos logró en torno a su figura. La celebración de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la ciudad de Panamá en marzo de 1973 para tratar la cuestión canalera dio frutos cuando todas las naciones excepto Estados Unidos (y la abstención de Gran Bretaña) apoyaron la causa panameña. Sin embargo, para 1974, a pesar de la oposición doméstica, Estados Unidos estuvo dispuesto a abolir la cláusula a perpetuidad del anterior tratado canalero. Torrijos realizó una serie de viajes a través de Europa, Norte de Africa y Medio Oriente con el fin de obtener apoyo para la causa panameña. Para el mismo período, una misión enviada a Panamá por el Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de los Estados Unidos concluyó que si el Tratado de 1903 no era reemplazado por un nuevo contrato entre ambas naciones, los intereses norteamericanos en América Latina en general y en el Canal en particular estarían en riesgo.[25]

A partir de este período, un patrón específico para la resolución de conflictos dominó el proceso político panameño. Lo "extraño" sobre el caso panameño es que desviaciones considerables de política ocurrieron bajo el liderazgo continuo de una sola figura. En general, estos cambios tuvieron como constante dos factores. El primero, el tema del Canal, al que se le otorgó prioridad en la agenda de reformas, mientras que diversas políticas económicas y sociales fueron promovidas para expandir y mantener el apoyo de las varias clases y grupos que concordaban con las orientaciones básicas del régimen, especialmente con el objetivo de la renegociación de los tratados canaleros. El otro factor fue el liderazgo carismático de Torrijos, que fue el elemento principal para mantener esa coalición heterogénea en el poder. La idealización grupal de Torrijos como "Líder de la Revolución" unificó al pueblo panameño y redujo la posibilidad de que graves desacuerdos surgieran dentro de su base social. Mas bien, la composición

heterogénea de esta base social llegó a ser la fuente de fortaleza del régimen, ya que con ésta reafirmó su autonomía de la élite política tradicional y contó con un respaldo legitimador y poderoso para negociar las relaciones de Panamá con Estados Unidos.

Torrijos logró imponer un equilibrio entre las distintas agrupaciones sociales y políticas de diferentes maneras. Primero, el gobierno utilizó un patrón de cooptación y control, en el que los grupos disidentes e individuos fueron absorbidos obteniendo de ellos un apoyo, al menos parcial, a cambio de concesiones limitadas. De hecho, la apelación al nacionalismo que Torrijos realizó, junto a su carisma personal, logró trascender todas las clases sociales. Torrijos pudo convencer a sus seguidores de la necesidad de mantenerse unidos y para conseguirlo se proclamó no ser "ni de izquierda ni de derecha". Al hacerlo, el régimen le otorgó autonomía a los grupos sociales que lo apoyaron, mientras que éstos a su vez fueron capaces de promover políticas que obedecían a sus propios intereses. Así, mientras que los Ministerios de Planificación, de Hacienda y de Comercio e Industrias imponían políticas económicas tradicionales, las carteras de Educación, Salud y Vivienda perseguían políticas sociales y "progresistas." El Estado reguló la velocidad y la extensión de estas políticas lo suficiente como para que éstas atrajeran el apoyo popular y lo mantuvieran, permitiendo con ello grados manejables de insatisfacción provenientes de la oligarquía tradicional y los sectores "empresariales" subordinados a ésta última.

En este sentido, toda la política gubernamental estuvo sujeta a modificación tan pronto como la constancia y plausibilidad de los objetivos de política exterior fueran alterados. Esto significó retroceder en algunas políticas mientras que se ampliaban otras, de acuerdo a la situación económica y política en general. A través del tiempo ocurrieron más retrocesos en las políticas redistributivas que avances. Si bien el gobierno fue el eje en que se articuló el bloque heterogéneo que apoyaba a Torrijos, el capital extranjero fue el encargado de proveer la liquidez que el Estado necesitaba para establecer sus proyectos de desarrollo e infraestructura.

Restructuración de alianzas

A mediados de 1970, Panamá experimentó diversas condiciones económicas y sociales que señalaron la necesidad de cambiar algunas orientaciones del Estado. Recordemos que como impacto inmediato de la crisis del petróleo, Panamá también mostró altas tasas de inflación. Torrijos intentó en un primer momento ponerle un alto a los efectos negativos que estos sucesos generaron en los salarios de la población. Entre estas medidas estuvieron el congelamiento de los arriendos de vivienda, lo cual movió a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) a movilizar sus miembros y paralizar la industria bajo el postulado de que el país "*va hacia el comunismo*". Inclusive, sectores de la oligarquía y del empresariado tradicional promovieron la fuga masiva de capitales.[26] En efecto, la inversión privada total bajó de 238.9 millones de dólares corrientes en 1973 a 152.7 para 1975.[27] Por primera vez desde el golpe militar de 1968, la oligarquía y sectores afines se movilizaron y unificaron en torno al Movimiento Cívico Nacional, agrupación que incluyó a la Cámara de Comercio, el Club de Leones, la Asociación Médica Nacional y la efímera Asociación de Amas de Casa. A partir de esta coyuntura, las asociaciones empresariales y asociaciones cívicas hicieron causa común en sus disputas contra el gobierno.

Para enfrentar dicha situación, Torrijos intentó equilibrar la tendencia negativa de la economía incrementando las inversiones públicas y el empleo en el sector estatal con los fondos que brindaron préstamos millonarios de la banca extranjera. En este sentido, entre 1972 y 1975, la deuda externa panameña aumentó en un 110 por ciento.[28] Sin embargo, el papel político del Estado fue condicionado, una situación que alteró — sin retorno — las orientaciones básicas del gobierno. Así, para 1975 un gran segmento del presupuesto estatal se dirigió a pagar el servicio de la deuda, empujando al gobierno a que realice sus programas sociales bajo criterios de racionalidad y de eficiencia económica más que criterios sociales o políticos.[29]

Dadas estas condiciones, y sin perspectivas de alcanzar un acuerdo canalero definitivo con Estados Unidos, a principios de 1975 Torrijos pidió que las negociaciones concluyeran y luego emprendió una estructuración de las alianzas políticas

con las que se había mantenido hasta el momento. En diciembre de 1974 Torrijos impulsó políticas pro-empresariales que incluyeron incentivos fiscales al sector industrial y un programa masivo de construcciones de unidades habitacionales, que "*facilitaron un acercamiento entre el sector público y el sector industrial del país*", según el órgano oficial de este sector productivo.[30] En febrero del año siguiente, el gobierno creó la Corporación Financiera Nacional (COFINA) como una empresa estatal encargada de canalizar fondos al sector industrial y comercial. Empero, Torrijos a la vez acentuó sus llamados a la unidad nacional, amenazando a los sectores oligárquicos de que la aceptaran bajo su conducción: "*si ... en la situación en que nos encontramos ahora ... no mantenemos un frente de unidad nacional, no seremos capaces de garantizarle a las futuras generaciones que ellas no seguirán encontrando los mismos defectos que empujaron a la Guardia Nacional a tumbar a aquellos en el gobierno*".[31] En efecto, los grupos oligárquicos tradicionales reconocieron el papel que podían jugar en este contexto: en torno al posible papel del sector privado en las negociaciones canaleras, uno de sus líderes advirtió que "*la radicalización del proceso [revolucionario] puede ser un obstáculo en el intento de recuperar el canal a través de medios diplomáticos*".[32] Luego, un abogado ligado al Consejo Nacional de la Empresa Privada, y un embajador en Washington bajo una de las administraciones liberales de la década de 1960 fueron nombrados en posiciones prominentes dentro del grupo panameño negociador de los tratados del Canal.

En esta coyuntura, el gobierno torrijista inició un proceso de restructuración de alianzas entre las fuerzas sociales del país. Esta restructuración implicó incluir varios de los intereses que habían sido marginados de la base social del régimen de Torrijos. Pero para que no se resquebrajara la unidad nacional que Torrijos buscaba — como precondición para mantener la estabilidad durante las negociaciones canaleras — el gobierno elaboró políticas para aminorar el descontento de esos sectores. Torrijos justificó esta transición explicando que "*estamos negociando ... pero necesitamos un clima de tranquilidad para que nuestro equipo negociador no sienta que nuestro pueblo quiere cualquier tratado*".[33]

A pesar de las desmejoradas condiciones económicas,

hasta este momento Torrijos mantuvo una política de no confrontación con el "sector privado". Sin embargo, su equipo de gobierno tenía la convicción de que, a medida que se complicaba el desafío de prolongar el esfuerzo de unidad nacional para dar coherencia al proceso negociador, el resentimiento de estos sectores debía atenderse para que esta unidad nacional pueda mantenerse. Para ello, con la manifiesta intención de sumarlos al proyecto de unidad nacional, el gobierno promovió diálogos directos entre figuras gubernamentales y dirigencias sectoriales empresariales, hasta ese momento evadidas por Torrijos.

Pero para concretar ese esfuerzo, el gobierno se vio obligado a dar mucho más que concesiones limitadas. A principios de 1976 Torrijos envió al exilio a un grupo de dirigentes del sector privado que intentaban "desestabilizar" el país justamente antes de un proyectado viaje a Cuba, y puso bajo control gubernamental las oficinas de la APEDE (Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa). Estos eventos fueron conocidos en Panamá como el "oligarcazo" y fueron ampliamente publicitados por la prensa panameña — controlada por el Estado — y aplaudidos por sectores profesionales y agrupaciones políticas afines. Al hacerlo, Torrijos ejerció su poder de mediación en momentos en que su gobierno ya daba pasos para acomodar los intereses económicos empresariales como un elemento de la política estatal.

En efecto, más tarde un dirigente del sector privado pidió que sus representantes fueran incluidos en la Comisión Nacional de Legislación, organismo cuya membresía era decidida por Torrijos, y solicitó que representantes del CONEP fueran incluidos como consejeros dentro del Ministerio de Planificación y en el de Educación.[34] Si bien estas últimas demandas no fueron atendidas, con estas peticiones las organizaciones empresariales dieron uno de sus primeros pasos para acaparar espacios previamente vedados en la fase inicial del régimen de Torrijos. Estas demandas iniciales fueron lo suficientemente efectivas como para que a principios de 1976 los industriales se convirtieran en uno de los principales aliados de Torrijos. En ese momento el presidente del SIP fue nombrado Ministro de Planificación. Por cinco años los industriales se habían opuesto a las políticas gubernamentales, pero para el octavo

aniversario del golpe de Estado de 1968 el SIP incluso se unió a la celebración. Ese año, "Pacto Social", "diálogo", "todos los panameños", "desarrollo de la patria", y "justicia social", fue la fraseología de *Industria*, la revista mensual del SIP, reemplazando frases como "la necesidad de diálogo entre el sector público y el sector privado", y otras críticas directas e indirectas a la política económica y social del gobierno.

Bajo el mismo contexto, los terratenientes también fueron objeto de la búsqueda de apoyo del gobierno istmeño. En reuniones con voceros gubernamentales, la Asociación Nacional de Ganaderos criticó el Programa de Reforma Agraria de Torrijos y el programa de conversión de tierras para la producción hacia el mercado interno y pidieron que su "tranquilidad mental" fuese restaurada por la vía de incluir sus "puntos de vista" en la política gubernamental.[35] Como resultado de esta petición, la Oficina de Regulación de Precios autorizó aumentos al precio de la carne y ofreció mejorar las facilidades de crédito para la cría de ganado. El Programa de Reforma Agraria que había aminorado su ímpetu desde 1972 empezó a ser manejado bajo criterios de racionalidad económica.

A pesar de ello, ni las condiciones económicas ni políticas mejoraron. En septiembre de 1976, obreros y algunos grupos estudiantiles participaron en una huelga por cerca de tres semanas como protesta por el incremento de los precios de la carne y del arroz. Las disyuntivas creadas por esa situación movieron al Gral. Torrijos a atribuir la huelga a Estados Unidos, como un supuesto plan de desestabilización.[36]

Debido al período electoral en Estados Unidos, las negociaciones canaleras se encontraban en un punto muerto y, dadas las dificultades económicas, ningún símbolo político podía ser utilizado efectivamente para ampliar o mantener la base de apoyo del gobierno. Para contrarrestar esta situación, Torrijos optó por aumentar la agresividad de sus proclamas. En marzo de 1976, Torrijos declaró que Panamá pasaría a una "etapa violenta" si las negociaciones no llegaban a su objetivo en el corto plazo. En junio, Torrijos afirmó en conferencia de prensa que su "*paciencia termina en 1977*".[37] Para acaparar un mayor apoyo internacional, Torrijos realizó una serie de viajes que incluyeron varios países latinoamericanos, Libia, Yugoslavia, Egipto, Israel, y varias naciones europeas.

En el plano interno, sin embargo, su gobierno emitió varias leyes y regulaciones para mantener cuando menos una aquiescencia parcial de los sectores antagónicos. Estas políticas, a su vez, disminuyeron el papel de los sectores populares — cuyo apoyo ya estaba comprometido — como principal fuente de legitimidad del gobierno. Para asegurar sino el apoyo, al menos la inactividad de los grupos empresariales que se oponían a su gestión, el gobierno les concedió la Ley noventa y cinco, un retroceso del Código laboral de 1971.

Desde que se aprobó el Código en diciembre de 1971, todas las agrupaciones de la empresa privada lucharon infructuosamente para revisarlo y alterarlo a su favor. No obstante, el gabinete de Torrijos sintió la necesidad de mantener la alianza multiclasista que estimaban indispensable para mantener la estabilidad política y continuar con las negociaciones. Por ello, en el contexto del desmejoramiento económico, el gobierno de Torrijos revirtió las políticas gubernamentales que favorecían al sindicalismo. Así, en octubre en 1976 Torrijos nombró una comisión encargada de "revisar" el código, cambio que según el entonces Ministro de Trabajo, no ocurriría sin primero consultar con las organizaciones laborales. Posteriormente, en noviembre, los dirigentes de todas las centrales sindicales del país se reunieron y afirmaron que no permitirían cambio alguno. No obstante, el mes siguiente el gobierno aprobó la Ley noventa y cinco sin consultar con los sectores laborales, reduciendo con ello varios de los beneficios consagrados en el Código laboral. El equilibrio dentro del heterogéneo bloque social torrijista debía, sin embargo, mantenerse hasta que la renegociación canalera alcanzara su fin. Por ello, para asegurar que su orientación a favor del sindicalismo no había cambiado, voceros gubernamentales declararon inicialmente que la promulgación de la Ley 95 era transitoria en tanto mejoraran las condiciones económicas.

Lo singular del caso es que la mayor confederación sindical panameña (CNTP) culpó al sector privado y a intereses foráneos por la promulgación de la Ley noventa y cinco. Algunos líderes obreros incluso sostuvieron que no era adecuado protestar en ese momento. Sin embargo, aquellos que sí lo hicieron se aseguraron de que se entendiera públicamente que no protestaban contra Torrijos. En este sentido, dirigentes

sindicales de las plantaciones de banano movilizaron sus trabajadores contra los cambios a las leyes laborales, para lo que afirmaron que: "... *no podemos tomar acciones que puedan poner en peligro el proceso revolucionario ... ellos* [los empresarios] *quieren ponernos a pelear con Omar ... tenemos que acabar con el intruso extranjero*".[38] A pesar del retroceso, los líderes sindicales evitaron conscientemente escalar sus protestas con el fin de no obstaculizar las negociaciones canaleras.

Pero la capacidad transformadora del torrijismo — un Estado que se mostró independiente de la oligarquía y de Estados Unidos — fueron truncadas definitivamente con el proceso de unidad nacional. De hecho, la composición de la base social del torrijismo probó ser contradictoria con los objetivos renovadores, si bien no lo fue para neutralizar temporalmente el orden oligárquico. No obstante, en el orden de prioridades nacionales era indispensable hacerlo, si Panamá habría de crear las bases necesarias para establecer una independencia que a su vez permita, teóricamente, que las luchas políticas y sociales internas se resuelvan bajo la égida de imperativos nacionales condicionados por el nivel de organización y lucha de su población.

De ahí que, a pesar del discurso revolucionario de Torrijos, la naturaleza "tradicional" de la economía-política istmeña, (hacia donde se dirigen los beneficios de su estructura económica heredado de la oligarquía) permaneció básicamente igual. Sin embargo, debido a que el torrijismo aspiraba a su prolongación en la vida política del país, la eficacia para realizar aquellas transformaciones estuvo dada por la manera como la base popular de éste facilitara la articulación de sus demandas. En el período que llega hasta 1978, estas fuerzas sociales populares fueron vistas por la dirigencia oficialista como grupos antagónicos con diferencias reales pero secundarias al objetivo de afirmación nacional.

Mientras que Panamá reabría las negociaciones con la administración Carter en enero de 1977, otros sucesos aseguraron al sector empresarial tradicional un mayor espacio en las orientaciones gubernamentales. En este sentido, un representante gubernamental aseguró que CODEMIN, una corporación gubernamental recientemente creada para explotar los yacimientos de cobre del país, sería privatizada en el futuro. Así,

personalidades gubernamentales se reunieron con dirigentes de la Asociación Panameña de Aseguradores, señalando en ésta que el Estado no absorbería las funciones tradicionales del sector privado, y con representantes de la industria del zapato y textiles, para tratar problemas que los afectaban. Además, miembros del Ministerio de Comercio e Industrias se reunieron con representantes del CONEP, para discutir "nuevas estrategias" para la promoción de exportaciones, y con la Asociación Nacional de Ganaderos para autorizar la exportación de ganado. A medida que se acercaba la fecha en que Panamá y Estados Unidos firmarían el acuerdo (durante los meses de junio, julio y agosto de 1977), representantes gubernamentales continuaron reuniéndose con los sectores de la construcción y con comerciantes y vendedores al por menor.[39] La restructuración de las alianzas políticas ya había concluido.

El momento culminante de varios años de negociaciones y de más de setenta años de las relaciones Panamá-Estados Unidos llegó en 1977, cuando la contraparte estadounidense le dio prioridad a las negociaciones canaleras con Panamá. En agosto de 1977, el Presidente James Carter anunció que las negociaciones habían finalizado, y en septiembre Carter y Torrijos firmaron los nuevos tratados en la sede de la OEA en Washington. Las provisiones de los acuerdos que reemplazan el Tratado de 1903 incluyó el pleno reconocimiento de la soberanía panameña sobre todo su territorio, la transferencia gradual de la administración del Canal a Panamá y otros acuerdos paralelos que incluían varios préstamos y donaciones por un total de 345 millones de dólares. Panamá debía recibir entre 50 y 70 millones de dólares al año a manera de ingresos procedente del Canal. No obstante, un acuerdo paralelo de "Neutralidad" otorgaba a Estados Unidos el "derecho" a defender el Canal indefinidamente.

Con la firma de los Tratados Torrijos-Carter, la lucha por su promulgación apenas empezó. En Panamá, Torrijos y sus negociadores promovieron los tratados entre amplios sectores de la sociedad panameña. Al hacerlo, el gobierno impulsó una apertura política a los partidos y otras asociaciones tradicionales. A los opositores al tratado se les otorgó tiempo pagado en diarios, la radio y televisión, a la vez que no se tomaron medidas abiertas para restringir sus actividades.[40] Si

bien el mes siguiente se realizó el plebiscito en Panamá en el que fueron aprobados los tratados, el Senado de Estados Unidos tomó varios meses para ratificarlos. Por lo tanto, Torrijos percibió que era indispensable mantener la unidad nacional alcanzada para evitar cualquier tipo de disenso interno que podría ser utilizado por los opositores al tratado en los Estados Unidos, lo que condicionó nuevamente el contenido y la dirección de las políticas estatales.

En ese contexto, en noviembre de 1977 Torrijos anunció, sin consultar con su gabinete, un Plan de Emergencia que prometía darle empleo a miles de desempleados en la burocracia estatal. Torrijos también sostuvo que el costo de la energía eléctrica sería reducido cuando se ratificaran los tratados canaleros; que a los niños necesitados del país se les daría dos pares de zapatos a cada uno; que entre uno y un millón y medio de uniformes escolares serían distribuídos gratis a los niños de las escuelas públicas; y que los libros de texto serían vendidos al costo de producción.[41] Este anuncio, si bien nunca concretado, fueron medidas populistas destinadas a ampliar las expectativas populares hacia el tratado canalero y así disminuir las posibilidades de un disenso de su parte en un momento crucial de la historia panameña. El producto de esta maniobra, sin embargo, tuvo repercusiones mucho más allá del momento: con ésta Torrijos logró la reformulación contractual de las relaciones Panamá-Estados Unidos.

Pero más importante que ello, la efectiva renegociación de los tratados canaleros creaba el germen sobre el cual nacía una nueva relación Panamá-Estados Unidos. El nuevo vínculo contractual significó, en lo inmediato, la descolonización del país para transitar a una relación distinta pero más a tono con las formalidades inherentes a las relaciones internacionales de la época. Pero desde el punto de vista interno, éste también lograba disolver el elemento más conflictivo de las relaciones entre los dos países. Este logro tuvo como consecuencia que los sectores de la oligarquía y el empresariado se fortalecieran a medida que los sectores populares plegados a la conducción militar no volvieron a retomar su activismo de antaño.

El año de 1978 marca un punto histórico de inflexión en el proceso de afirmación nacional panameño. Si bien la evolución del proceso político istmeño demostró que las posibilidades

reformistas llegaron a su fin desde mediados de la década, es a partir de este año cuando el proceso de restauración política oligárquica avanzó hacia un curso que, si bien entonces no era posible preveerlo, fue definitivo. Después de la ratificación de los Tratados Torrijos-Carter por el Senado norteamericano, Torrijos preparó el terreno para la instauración del partidismo tradicional. La reforma política recreó las instituciones democrático-formales, mientras que la coalición torrijista pasó a formar una organización partidaria "policlasista": el Partido Revolucionario Democrático (PRD) que gobernó el país hasta 1989. Desde el punto de vista del liderazgo en el poder, era necesario tolerar el juego partidista a fin de permitir la larga transición hacia el perfeccionamiento nacional que vendría con el definitivo traslado de la presencia física imperial fuera del istmo en el año 2000, como lo señalaban los pactos recién firmados.

Obviamente, la llegada de los partidos y figuras políticas de antaño al escenario doméstico no trajo una profunda reorganización de la sociedad. El resultado político de no haber erradicado la concentración del poder económico oligárquico se avizoró en el renacimiento de los partidos políticos tradicionales con los mismos líderes, símbolos, y discursos reminiscentes de la década de 1960. En efecto, en este período regresó al país Arnulfo Arias, depuesto en 1968 por la Guardia Nacional, quien más tarde anunció la formación de su Partido Panameñista, que describió como "*un círculo de influencias rodeadas de energía cuya fuerza esotérica es la señal de un triunfo inexorable*".[42] El dirigente del Partido Demócrata Cristiano y miembro prominente de la oligarquía tradicional, Ricardo Arias Calderón, atacó al gobierno y sostuvo que este favorecía "*doctrinas comunistas*".[43]

El apoyo incondicional que los sectores populares prestaron a Torrijos se hizo sentir en su incapacidad para invocar su voluntad e intereses colectivos. Por ello, el gabinete de Aristides Royo, nombrado Presidente por la Asamblea de Representantes en este año, reflejó el bloque social último expresivo del reacomodo entre la institución militar y la fracción "moderna" del sector productivo. Este incluyó un antiguo director del Citibank, dos ex-presidentes del CONEP, un miembro de las familias oligárquicas tradicionales y menos miembros de las

capas medias que habían caracterizado anteriores gabinetes. En este contexto, Torrijos lanzó un "regreso a los cuarteles": se alejó de las riendas del poder político, pero mantuvo el control de la Guardia Nacional.

Estos hechos demostraron que el retroceso parcial del "proceso revolucionario" iniciado diez años antes continuaba irrefrenablemente. La mínima reforma agraria permaneció estancada. La supuestamente temporal Ley 95 continuó sin ser discutida. En el escenario político, el gobierno de Royo procedió con el inicio del desmantelamiento del estado torrijista, modificando las leyes que regulaban la formación del poder legislativo. A raíz de esos cambios, dos años más tarde se formó una Asamblea en la que un tercio de sus miembros fue elegida a través de elecciones proporcionales directas; y en 1984 el próximo presidente de la República sería elegido por elecciones populares directas.

Ya para 1979 el régimen cívico-militar perdió toda capacidad de iniciativa en el escenario doméstico: el frente opositor que reunía la mayoría de los partidos recién creados, amparados por la jerarquía católica, y otras asociaciones igualmente políticas, condujeron exitosamente una huelga nacional de maestros y médicos en demanda de incremento de salarios y otras prestaciones. Entre éstas incluyeron una demanda por la revocatoria del programa de reforma educativa iniciado en 1970 junto al proceso torrijista. El gobierno de Royo no solo accedió a todas las demandas sino que mantuvo inalterado el proceso de reacomodo con algunos grupos oligárquicos.

Desde la Guardia Nacional, sin embargo, el Gral. Torrijos logró impulsar un proyecto cuyo resultado debería tener efectos favorables a largo plazo. Según Dunkerley, después de 1968 Torrijos llegó a ser el "*más consistente y serio defensor del reformismo militar y el nacionalismo en la región (centroamericana), si bien el fuerte de sus políticas estuvo siempre en las relaciones exteriores*".[44] Si observamos a Torrijos como el "individuo en la historia" que encabezó el aludido proceso de afirmación nacional frente a Estados Unidos, en este periodo era evidente que la agenda de transformaciones que quiso impulsar no habían sido realizadas. Torrijos había demostrado en sus discursos y en el ejercicio del poder que la política electoral tradicional no era de su agrado. No obstante, la

agitación internacional, a través de la cual se había tratado la cuestión canalera, proveyó una esfera de acción para el logro de los objetivos gubernamentales. Específicos escenarios regionales e internacionales, en diversas coyunturas de la historia panameña, habían influido significativamente sobre su evolución. En este sentido, si el proceso político panameño habría de desarrollarse favorablemente, había que asegurar un entorno regional adecuado para su desenvolvimiento.

Por ello cobra sentido el apoyo político y material de Torrijos a movimientos de liberación nacional de la región centroamericana y su incesante búsqueda por incidir en los desarrollos políticos regionales. En efecto, sugirió Guillermo Ungo, dirigente del Frente Democrático Revolucionario salvadoreño, "*Torrijos comprendía muy bien como los factores externos se internalizan con la política nacional ... él comprendía que ... la evolución (en la región) afectaría la situación en Panamá y en la Zona del Canal ... (quería) un desarrollo político favorable para que no* [se] *perjudicara el desarrollo político panameño*".[45]

En Nicaragua, la dinastía Somoza había probado su oposición a todo desarrollo regional que divergiera del modelo político autoritario implantado por las tropas norteamericanas desde la década del veinte. En efecto, durante la década del setenta, Anastasio Somoza Debayle mostró su oposición al proceso político panameño e incluso se mostró reacio a apoyar la firma del Tratado Torrijos-Carter.[46] De ahí que cuando en 1975 se le presentó la oportunidad a Torrijos para apoyar al Frente Sandinista de Liberación Nacional que lideriza la lucha armada contra el somocismo — varios años antes de que su lucha fuera apoyada por amplios sectores de la región y del mundo — él haya optado por impulsarla, de manera encubierta en primera instancia.[47] La relación entre dicho movimiento y Torrijos se amplió y fue pública con el paso del tiempo, al punto de que a pesar de los problemas que ello le podría causar para la ratificación de los Tratados por el Senado de Estados Unidos tal relación no disminuyó. No obstante, las cordiales relaciones con la administración Carter permitieron que el Departamento de Estado norteamericano incluso afirmase que "*Panamá continuará impulsando su interés nacional así como nosotros promovemos el nuestro*",[48] ya que percibía el papel de Torrijos en la región como uno con funciones moderadoras en la convulsionada Centroamérica.[49]

Hacia El Salvador, Torrijos se aproximó con intenciones similares. Sin embargo, las condiciones que encontró en este país fueron totalmente diferentes. La estructura del poder político y militar del régimen salvadoreño era distinta de la somocista, la cohesión de la oposición en armas era precaria, el apoyo internacional a los grupos insurgentes era mucho menor, así como existían mínimas posibilidades de que la administración Carter — después de la Revolución Nicaragüense, y la Iraní, que derrocan viejos gendarmes regionales de la seguridad nacional norteamericana — permitiera otra revolución. En efecto, la administración Carter conocía el papel de Torrijos, pero éste, al encontrar condiciones diversas, promovió la aceptación de una Junta de Gobierno "estilo panameño".[50] Precisamente con la muerte del Gral. Omar Torrijos, la Guardia Nacional panameña suspendió estas acciones.

La desaparición de Torrijos del escenario político provocó que algunas de las instituciones creadas bajo su dirección fueran desmanteladas mientras que otras empezaron a ser utilizadas para fines distintos de aquellos para los que fueron creadas. Con la muerte repentina del General Torrijos el 31 de Julio de 1981 se fracturó el equilibrio interno del cual él había sido el eje.[51] Sus sucesores en la Guardia Nacional — a partir de 1984, Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) — ni lograron ni tenían la voluntad política para mediar entre los diversos sectores políticos y sociales situados bajo su control. No obstante, estas organizaciones sociales quedaron subordinadas a las fuerzas armadas que le dieron origen y conducción, mientras que los sectores medios que no aceptaban la conducción militar empezaron a desplazar su apoyo hacia sectores de la oposición tradicional y oligárquica.

A partir de la muerte de Torrijos, los intereses de sus sucesores en la Guardia Nacional y de la Casa Blanca empezaron a converger: mantener el poder castrense sobre la sociedad, pero alterando su orientación. Esta nueva situación se hizo patente varios meses después. En marzo de 1982, el Estado Mayor retiró forzosamente al sucesor inmediato de Torrijos, el Cnel. Florencio Flores. En el mes de julio siguiente, en el primer aniversario de la muerte de Torrijos, éstos también forzaron la renuncia del Presidente Royo. Este hecho llevó a la posición de comandante al coronel Rubén Darío Paredes, quien

a partir de entonces compartió el poder real dentro de la institución con el Cnel. Manuel Noriega (jefe de inteligencia militar desde 1970) y el Cnel. Roberto Díaz Herrera. Ya eliminado el centro sobre el cual giraba la autonomía político-militar panameña, la cooperación entre Estados Unidos y la Guardia Nacional no tardó en llegar. Precisamente en este momento histórico un vocero de la oligarquía panameña consideró que gobierno y oposición ya no eran enemigos, sino adversarios.

Al morir Torrijos, la Guardia Nacional perdió toda capacidad de mediación con los sectores políticos del país. Por ello, a partir de entonces ésta buscó apoyo en quienes detentaban la mayoría de las riquezas del país y en Estados Unidos, que se convirtieron en sus principales bases de apoyo. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) creado por Torrijos en 1978 llenó entonces el espacio político creado con este vacío.

El PRD se convirtió en el frente de masas de la Guardia Nacional. A partir de entonces la cúpula militar manejó al partido con base en sus intereses políticos e incluso personales y de negocios, lo que implicó cederle espacios a los sectores empresariales con los que la Guardia Nacional empezó a formalizar relaciones cordiales. Como consecuencia de estos manejos, la Guardia Nacional le restó a ésta organización política la capacidad de privarle a los sectores oligárquicos tradicionales de algunas de sus posibles bases sociales de apoyo.

Empero, al dotar de una base social al "sector empresarial", emergente inclusive dentro de las filas del partido torrijista, el empresariado nacional fue tomando las riendas del país. Estos adquirieron la posibilidad de modernizarse al vincularse con un sector social que requeriría ciertas concesiones mínimas para mantenerse aletargado. Sin embargo, a medida que la eapacidad de regulación del Estado disminuía, las capas medias empezaron a desplazar su apoyo hacia los grupos políticos tradicionales para darle sustento a las banderas coyunturales democráticas de los sectores más conservadores de la sociedad. En la medida que el PRD dependía del apoyo financiero del Estado, la evolución del PRD estuvo dada por su relación de subordinación a la institución castrense, que mantuvo las riendas del gobierno.

Bajo estas circunstancias los grupos civiles que habían

apoyado la gestión de Torrijos desplazaron su apoyo hacia los partidos y agrupaciones políticas de antaño. El torrijismo sin Torrijos subestimó el alcance de la ofensiva oligárquica, así como las repercusiones que sus políticas económicas y sociales tendrían sobre sus bases de apoyo. El liderazgo militar se preocupó más por mantener el poder, que por realizar las políticas necesarias para conservar el apoyo de los sectores medios y populares que todavía veían el gobierno como sucesor de Torrijos.

El golpe contra Royo se produjo después de que éste había prolongado la política exterior independiente iniciada con el General Torrijos. Entre la muerte de Torrijos y la salida de Royo como Presidente un año después, Panamá se opuso públicamente a la intervención norteamericana en El Salvador, depló·ó el programa de entrenamiento militar salvadoreño por la potencia del norte y defendió la Declaración Franco-Mexicana que reconoció, a pesar de la oposición de Washington, la beligerancia y representatividad de las fuerzas insurgentes de El Salvador. En ese período Royo también apoyó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la posición Argentina frente al conflicto Británico-Argentino sobre las Islas Malvinas — en un contexto en el que se abstuvieron China, la URSS, Polonia y España.

En efecto, esta evolución en particular contribuyó enormemente a crear el escenario para el retorno parcial de la oligarquía tradicional al poder del Estado en 1984. A partir de 1983, gobierno y partidos políticos tradicionales acordaron apoyar unas reformas constitucionales tendientes a suprimir el papel político de los Representantes de Corregimiento, para otorgárselo a una Asamblea Legislativa cuyos miembros serían elegidos mediante campañas electorales tradicionales: una restructuración completa del que había sido el sistema político-institucional del estado torrijista.

Empero, la continuidad de este esfuerzo fue salvaguardada mediante un "Pacto Secreto" entre el comandante Paredes y los coroneles Noriega y Díaz Herrera. En un principio, Paredes se comprometió a su retiro voluntario meses antes de las elecciones generales de 1984, mientras que el Estado Mayor de la Guardia Nacional se comprometió a ayudarlo a activarse políticamente y obtener para ello la postulación oficialista para la

contienda electoral de 1984 y su "triunfo categórico". Noriega asumiría el cargo inmediatamente después y continuaría en él hasta el mes de julio de 1987. Noriega se retiraría dejándole el puesto de comandante a Díaz Herrera, quien permanecería en él por un año hasta el mes de julio de 1988. El cronograma denominado "Plan Torrijos" planteaba que "*sólo se alterará ... por razones impostergables de sucesos inesperados (fallecimientos ó incapacidades físicas o mentales graves) o por renuncia voluntaria y libre*".[52]

De hecho, la Guardia Nacional jugó un papel determinante en la evolución política del país durante el siguiente lustro. La evolución interna de la institución militar, más que reflejar los acontecimientos nacionales, proyectó las luchas y proyectos de la institución hacia el escenario político nacional. En efecto, la evolución del proceso político del país estuvo atada a la concepción de la dirigencia militar sobre el acontecer nacional, y a la manera como esta jefatura se condujo de cara a sus intereses estamentales y las ambiciones personales de sus comandantes.

El entonces Coronel Noriega tomó las riendas de la institución castrense en agosto de 1983, y a partir de ese momento impuso sus concepciones sobre varias particularidades nacionales a su Estado Mayor. El retiro del apoyo oficialista al Gral. Rubén D. Paredes meses después de que pasara a retiro, la forzada renuncia del presidente Ricardo De La Espriella en febrero de 1984, la escogencia de Nicolás Ardito Barletta como candidato oficial para la Presidencia en el mismo, y la "separación" también forzada de éste último el año siguiente, son algunas muestras de ello. En la mayoría de los casos, los ascensos se decidían sobre la base de la cercanía y obediencia a Noriega más que sobre la base de criterios profesionales. Así, aún los superiores de aquellos de menor rango pertenecientes al círculo personal de Noriega tenían que respetar dicha construcción. Asimismo, este círculo cercano al controvertido militar maniobró para que los comités ejecutivos nacionales de los partidos afines — particularmente el PRD, aunque con el transcurso del tiempo esta práctica se extendió hacia otras agrupaciones políticas — se constituyeran sobre la base de los lazos familiares y otros particulares con Noriega y el Estado Mayor.

De la misma manera, la dirigencia política del Estado estuvo formada por miembros que debían mostrar su incondicionalidad con el Estado Mayor. Incluso, algunas posiciones de mediano rango en la burocracia se adjudicaban con el mismo criterio. Lo paradójico de ello es que aquellos más capaces para conducir un proceso político en proceso de desestabilización quedaron relegados a posiciones de menor importancia en el aparato de toma de decisiones. Si bien ésta práctica demostró ser efectiva para que Noriega se mantuviera en el poder por varios años, a pesar de las fuertes presiones internas y externas que se dieron contra su figura, no lo fue para establecer las condiciones que permitieran la construcción de un marco político nacional que le diera cabida a las crisis diversas por la que pasó el país.

La "cooperación" de la institución militar con Estados Unidos pronto le rindió frutos a la administración Reagan y a las ambiciones de poder de las FDP. El comandante Noriega le permitió a la CIA la construcción de instalaciones para entrenar a la contrarrevolución nicaragüense, la que debía permanecer secreta "a cualquier costo".[53] En ese contexto, el líder de la Minoría en el Senado, Robert Byrd, declaró en marzo de 1984 que los Tratados del Canal de Panamá estaban "pagando a Estados Unidos" en la región centroamericana por la "relación cercana y cooperativa mutua con los panameños".[54] Incluso, en 1984 el presidente Ronald Reagan solicitó al Congreso aumentar la ayuda militar a Panamá en unos diez millones de dólares para ese año, y unos veinte millones de dólares para el año siguiente.

La breve gestión del Dr. Jorge Illueca — que asumió la Presidencia tras el golpe "constitucional" contra el sucesor de Royo, el banquero Ricardo De La Espriella, que a su vez fue forzado a renunciar cuando mostró señales de independencia de la cúpula militar frente al proceso electoral que se avecinaba — impidió que esa cooperación no se tradujera en una mayor presencia militar de Estados Unidos en el istmo. Durante los meses de febrero a septiembre de 1984, el presidente Illueca reclamó el respeto a la autodeterminación de Nicaragua, e incluso rechazó firmar los acuerdos que en ese período se preparaban entre la Comandancia de las FDP y el Comando Sur para extender la presencia norteamericana en la Escuela

de las Américas que vencía días antes de que expirara su término en el Palacio de las Garzas. De allí que el Estado Mayor haya ventilado su remoción presionando para ello a la Asamblea de Representantes. Aunque esta medida no cristalizó, los militares sí lograron que la Asamblea nombrara como asesor del presidente a un hermano del general, Carlos Noriega, a quien le encargaron vigilar al presidente.[55] A fin de no malograr sus buenas relaciones con Washington, Noriega permitió el traslado de parte de las funciones de La Escuela de las Américas a una Academia Interamericana de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y a una Escuela de Entrenamiento Técnico e Instrucción sobre Naves Pequeñas de la Marina norteamericana situadas en Panamá.

Este proceso de acercamiento entre Panamá y Estados Unidos, sin embargo, no ocurrió sin contradicciones. Una de las características de esta evolución fue, por un lado, la creciente cooperación de Panamá con los objetivos estratégicos de Washington y, por otro, el desarrollo de una política exterior panameña relativamente independiente. Como parte de la región centroamericana, Panamá no podía desentenderse del conflicto que amenazaba encausarse hacia una confrontación generalizada. Según los analistas políticos panameños, esta posibilidad inducía a que Estados Unidos pretenda retroceder en lo acordado en los tratados canaleros, con el fin de utilizar el territorio istmeño para sus fines estratégico-militares regionales. Por ello, a pesar de las estrechas relaciones de los militares panameños con Washington, el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezó los empeños para lograr, junto a otros países del área, negociaciones para la pacificación centroamericana. En enero de 1983, Panamá se sumó a los esfuerzos pacificadores desarrollados por México, Venezuela y Colombia, a través del Grupo de Contadora. Para impedir todo obstáculo a la gradual y creciente participación de Panamá en el manejo del Canal, mantener una política exterior de corte multilateral implicaba aumentar la capacidad negociadora del país, frente al siempre posible intento de Estados Unidos de suprimir algunas cláusulas del Tratado canalero. En este contexto, el Gral. Noriega anunció que la Guardia Nacional participaría en las maniobras militares que Estados Unidos estaba por realizar en mayo de 1984 en Honduras. Sin embargo, Noriega luego

se retractó y dijo que Panamá "*comparte los esfuerzos de Paz de Contadora*", después que la Cancillería rechazó la invitación de Estados Unidos.[56]

El reencuentro con Estados Unidos... y con la oligarquía

El proceso electoral de 1984 le dio la oportunidad a la institución armada panameña y a la Casa Blanca de estrechar los vínculos entre ambos países. En efecto, la cúpula militar panameña concertó con el Departamento de Estado de Estados Unidos la candidatura del PRD a la presidencia: el Dr. Nicolás Ardito Barletta, entonces vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, antiguo ministro de Planificación durante el gobierno de Torrijos y discípulo, cuando fue estudiante de Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, del secretario de Estado norteamericano, George Schultz. Para ello el Estado Mayor impuso al PRD a Ardito Barletta como candidato a la Presidencia de la República, así como la alianza que ató la evolución de dicha organización política durante el siguiente lustro.

Bajo la figura de Ardito Barletta, la cúpula militar logró concertar una coalición con parte de la oligarquía tradicional, concediéndole un espacio político dentro de la coalición oficial formada para aquellas elecciones: la Unión Nacional Democrática (UNADE). La imposibilidad de la UNADE de superar el caudal electoral que persistía tras el misticismo de la figura del octogenario Arnulfo Arias, tras quien se organizaron los partidos políticos tradicionales de la oligarquía no cooptada por los militares, empujó a la jefatura militar y a sus agrupaciones aliadas a maniobrar para impedir el triunfo electoral de Arias e instalar en el Palacio de las Garzas al candidato oficial. Ardito Barletta vino así a expresar el maridaje entre un segmento de la oligarquía y la institución castrense, pero no logró resolver los problemas políticos y sociales que debía enfrentar como Presidente.

A partir del proceso electoral de este año Panamá entró en una profunda crisis de la cual no logró salir. El gobierno no fue capaz de legitimarse ni de encontrar consensos que le permitieran superar la crisis. Esta situación se reflejó con el nuevo

golpe "constitucional" contra el presidente Nicolás Ardito Barletta, quien no logró establecer consenso alguno entre quienes le dieron su respaldo inicial, ni con la jefatura militar, especialmente después de que intentó ejercer su escaso poder ante ellos, al nombrar una comisión "independiente" encargada de profundizar en las investigaciones sobre el asesinato del Dr. Hugo Spadafora. Spadafora había sido viceministro de Salud en el gobierno de Torrijos, después guerrillero contra la dictadura de Somoza en Nicaragua y luego aliado a los grupos "Contra" de ese país. Spadafora había mencionado meses antes de su muerte, públicamente, la existencia de fuertes vínculos del Gral. Noriega con el narcotráfico. A pesar de la oposición del Departamento de Estado a la destitución de Barletta, Noriega no retrocedió y mostró con ello que podía ejercer su independencia de los dictámenes de E.U.

Pero la destitución de Ardito Barletta no contribuyó a estrechar los lazos cordiales que ya existían entre Washington y el gobierno panameño. De hecho, las FDP habían llegado a tener una relación cercana con Estados Unidos unos meses antes, cuando las FDP realizaron la más extensa y duradera gama de ejercicios militares combinadas con las fuerzas militares estadounidenses (enero-mayo de 1985). Sin embargo, con la destitución de Ardito Barletta en septiembre de 1985, el enojo de la Casa Blanca se manifestó a través de la cancelación de un flujo de fondos de asistencia. Para contrarrestarlo, el nuevo presidente, Eric Delvalle, y el Gral. Noriega, contrataron una firma de relaciones públicas en Washington allegada al presidente Reagan. No obstante, a mediano plazo esta decisión resultó infructuosa para aminorar las acusaciones contra Noriega el año siguiente.

Noriega dirigió un esfuerzo sostenido para evitar una ruptura con sus mentores en Washington. El militar panameño intentó contrarrestar las campañas que se hacían en su contra, haciéndose indispensable para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Así, el Comandante panameño señaló ante la reunión bienal del Consejo Interamericano de Defensa — en el contexto de los esfuerzos latinoamericanos para lograr la pacificación de Centroamérica — que las negociaciones de paz en la región no tenían sentido porque primero

debía enfrentarse "*la grave amenaza comunista*".[57] Ya en agosto de 1985 Noriega señaló públicamente que "la frontera entre Panamá y Costa Rica no termina en Paso Canoas, sino en Peñas Blancas" (en la frontera con Nicaragua), en obvia referencia belicista contra el sandinismo. La cooperación entre Washington y Noriega llegó a un punto tal que, en marzo de 1986, el presidente Reagan se sintió con suficiente entereza como para solicitarle al gobierno panameño — y asumir como aceptada al tratar el tema directamente con Noriega — que le otorgara asilo permanente al depuesto dictador filipino Ferdinand Marcos, antiguo aliado y gendarme regional de la estrategia global estadounidense en el sudeste asiático.

La reconsideración de Panamá en la estrategia global norteamericana todavía no llegaba a su completa definición, por lo que 1986 no fue el año en que Estados Unidos impulsó la ruptura con el gobierno panameño. Por ello, hasta principios de 1987 la posición oficial de Estados Unidos fue ambigua. Ante las audiencias senatoriales impulsadas por el senador Jesse Helms sobre Panamá, el subsecretario de Estados Unidos para asuntos interamericanos, Elliot Abrams, dijo que su gobierno no estaba dispuesto a "*catalogar a Panamá como una democracia*", pero que había que tomar en cuenta que con los dirigentes panameños "no ha habido disputa por la presencia de las fuerzas militares norteamericanas en Panamá". En otra ocasión, él mismo señaló que las relaciones entre Panamá y Estados Unidos eran "muy buenas" y destacó que la administración Reagan tenía "*un gran respeto para con el gobierno panameño y sus altos dirigentes civiles y militares*".[58]

Estados Unidos no estaba preparado para forzar una ruptura con uno de sus más fuertes aliados en la región. De hecho, antes de aquellas audiencias Abrams contactó a Helms para intentar convencerlo de que no se llevaran a cabo tales discusiones porque consideraba que "*no es el momento adecuado para ello*"; Noriega había prometido colaborar con el esfuerzo estadounidense contra el gobierno de Nicaragua.[59] Durante los meses siguientes a la destitución de Ardito Barletta, la dirigencia panameña buscó impedir lo que en ese entonces percibieron como un claro intento de un sector de la administración Reagan por suprimir las concesiones acordadas con Panamá en los tratados canaleros de 1977. Así, la OEA, la

ONU, los No-alineados y otras instancias multilaterales respaldaron el gobierno panameño ante esta situación. En septiembre del mismo año, cuarenta y seis senadores votaron en contra de una disposición de Helms de solicitarle a la CIA que investigue el papel de las FDP en el narcotráfico. Posteriormente un asistente de Abrams afirmó ante el Comité Selecto sobre Narcóticos de la Cámara de Representantes que "*no creemos que nuestros intereses serán servidos agregando especulaciones públicas sobre este asunto*".[60] La administración Reagan inicialmente buscó una posición conciliatoria para impedir que su relación con Panamá llegara a extremos probablemente riesgosos.

En Panamá, todavía no estaban creadas las condiciones para provocar una ruptura con el régimen Delvalle-Noriega. En efecto, aún el 18 de mayo de 1987 el congresista Broomfield por Michigan pidió una resolución para "*felicitar al gobierno panameño por su apoyo y cooperación con los Estados Unidos en la batalla contra las drogas*". Según el congresista, "*gracias a la ayuda de Panamá, la más extensa y más exitosa investigación secreta en la historia de la aplicación de la ley federal de Estados Unidos fue llevada a cabo*".[61] Sin embargo, ya para 1988 las condiciones variaron de tal forma que el subsecretario Abrams se destacó entre los firmes defensores de enviar las tropas norteamericanas a Panamá. La ruptura fue posible más tarde cuando después de varias oportunidades, se presentó la coyuntura necesaria para fundamentar el retiro de Noriega de la Comandancia y del gobierno panameño.

Dadas las circunstancias aludidas, entre 1987 y principios de 1988 Washington revaloró la posición de Panamá dentro de su estrategia global. En este período, los estrategas norteamericanos empeñados en ampliar el nivel de subordinación panameña encontraron varias oportunidades para imponer sus objetivos a este país. La sucesión de varios acontecimientos favorecieron potencialmente la concreción de estos intereses. En enero de 1987 murió el Director de la CIA, William Casey, quien había fungido como principal aliado de Noriega en la administración Reagan. Casey fue director de esta organización de inteligencia desde el 28 de enero de 1981, que presidió en momentos en que el general Torrijos murió en un pretendido accidente aéreo a mediados de 1981 — hecho

señalado por Noriega muchos años después como un atentado de esta agencia del gobierno estadounidense. En efecto, el primer intento para utilizar la acusación de que Noriega colaboraba con el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos fue contrarrestado en septiembre y octubre de 1986 por Casey y por el Cnel. Oliver North (conocido por su vinculación directa en el escándalo Irán-Contras). Para ayudar a Noriega, North contrató una agencia publicitaria para aminorar los efectos de la campaña en su contra, ante promesas de éste de que programaría un plan para asesinar la totalidad de la dirigencia sandinista.[62] En la medida que los vínculos de Noriega con la CIA por tres décadas ya han sido señalados y reconocidos tanto por su antiguo jefe, el presidente George Bush, como por él mismo — a través de los abogados encargados de su defensa ante el proceso judicial en Florida — es explicable que cuando Casey desaparece del escenario político en Washington, las riendas sobre el caso panameño hayan sido tomadas por otros sectores de la administración Reagan con menores o escasos vínculos con el General Noriega.

Por sí sola, la desaparición de Casey no era suficiente para que Washington emprendiera la ruptura con el régimen panameño. El hecho detonante para ello surgió de las declaraciones públicas del Cnel. Roberto Díaz Herrera a principios de junio de 1987 en Panamá. En éstas, el recién retirado militar acusó a Noriega de diversos cargos que incluyeron el fraude en las elecciones de 1984, el supuesto papel de Noriega en la muerte de Torrijos, y otros actos de corrupción generalizada. En lo inmediato, las acusaciones contra Noriega causaron una serie de protestas que fueron encabezadas principalmente por miembros prominentes de las organizaciones empresariales.

Ante la realidad del poder detentado por Noriega, poco antes de las declaraciones de Díaz Herrera, estas agrupaciones habían actuado para encontrar la vía para reconciliarse con la institución militar. De hecho, en conferencia convocada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa en abril de 1987, los empresarios panameños discutieron el tema de "*el papel de los militares en la defensa y la recuperación de Canal*", que culminó con la aprobación del papel de las FDP.[63] No obstante, cuando se produjo el retiro del Cnel. Díaz Herrera — visto por estos grupos y por Estados Unidos como supuesto

cabecilla del "ala izquierdista" de la institución — los grupos empresariales manifestaron su beneplácito, sosteniendo que las FDP podrían "despolitizarse" gracias a su retiro. Sin embargo, con las declaraciones de Díaz Herrera, las agrupaciones empresariales decidieron manejar el descontento y se desvincularon políticamente de la conducción militar. La *partidocracia* oligárquica, por otro lado, ya preparaba planes para provocar hechos de esta índole para el mes de septiembre, cuando en la Asamblea Legislativa — dominada por el oficialismo — se empezaría a discutir una serie de leyes fondomonetaristas que obviamente provocarían protestas populares que las organizaciones empresariales y los partidos afines esperaban canalizar.[64]

Los llamados radiales, de una periodista con amplia audiencia en el país, para que la población manifestara su repudio a la dirigencia gubernamental provocaron protestas cuyas imágenes recorrieron el mundo.[65] Estas, concentradas principalmente en las áreas residenciales de los sectores sociales pudientes, mostraron también la inexistencia de espacios por donde canalizar el cúmulo de rechazos hacia el gobierno — espacios a los que no acceden ni la oligarquía tradicional ni los sectores populares. Aunada a la ínfima presencia de grupos objetivos orientadores de la opinión pública que encausaran dichas protestas hacia un papel constructivo, ante el terreno abonado por la política desmovilizadora y antipopular del régimen desde 1984, la dirigencia empresarial formó un grupo denominado Cruzada Civilista que encabezó dichas manifestaciones.

A pesar de que Noriega intentó identificarse con los sectores populares mediante discursos grandilocuentes, éstos no se identificaron con él. La propaganda cruzadista y norteamericana logró proyectar en estos sectores la imagen de Noriega como la de un gobernante que emanaba "malos sentimientos", por lo que el General no podría actuar sino por "bajos intereses" o "maldad". Ante esta circunstancia, Noriega también trató de ubicarse como sucesor de Torrijos, y como defensor de la causa nacionalista panameña. No obstante, por su papel como eje del régimen que había sido ineficaz para atender las demandas populares, por la efectividad de la campaña opositora y por lo vacío de sus discursos, ningún sector social se sumó a sus llamados.

Ante la desestabilización del régimen panameño, Estados Unidos encontró que tal situación era la indicada para forzar la ruptura con Noriega y así proyectar en Panamá sus objetivos. Para una incursión militar de la magnitud como la que fue ordenada el 20 de diciembre de 1989, no estaban dadas las condiciones. Los analistas en Washington sentían que mediante algunas presiones fundamentadas bajo la situación de crisis que se engendró en el país, lograrían remover a Noriega y a un grupo de oficiales aparentemente contestatario dentro de las filas de la institución castrense. Así, entre junio y diciembre del mismo año tomaron lugar las diversas negociaciones entre Noriega y Washington. Su fracaso empujó a Estados Unidos a cambiar de táctica, por lo que a principios de febrero de 1988 fiscales del sistema judicial de Estados Unidos hicieron públicas las acusaciones por narcotráfico contra Noriega.

Tras un encuentro con Abrams pocos días después de que las acusaciones fueron dadas a conocer, el presidente Delvalle pretendió destituir al General. Pero al no contar con el respaldo de la dirigencia oficialista ni militar, esta medida fracasó cuando bajo presión de Noriega, la Asamblea Legislativa se reunió y destituyó bajo cargos poco elaborados de "traición a la patria" al presidente de la República. Manuel Solís Palma, ministro de Educación, antiguo aliado de los grupos políticos que para este momento enfilaban sus esperanzas de llegar al poder mediante alguna intervención norteamericana, fue nombrado como ministro encargado de la Presidencia. Por el resto del período presidencial hasta el primero de septiembre de 1989, Solís Palma tampoco logró alterar el cauce por donde fluía la crisis.

Noriega concibió la crisis emanada de las declaraciones de Díaz Herrera como un juego entre élites políticas divergentes que podía ser reprimido mediante acciones destinadas a neutralizar adversarios, vía concesiones o movimientos de fuerza. De hecho, muchos de los líderes empresariales y de otras organizaciones políticas menores que se sumaron a la lucha política, recibieron de las FDP medidas represivas de coacción, exilio, e incluso, violación carnal a sus líderes o participantes de menor rango político.[66] Durante los meses que fluctuaron entre las declaraciones de Díaz Herrera y el intento del presidente Delvalle por deponer a Noriega en febrero de 1988, en varias ocasiones Noriega le ofreció a algunos miembros allegados a la dirigencia opositora formar parte del gobierno. Para ello, Delvalle saldría de la Casa Presidencial y se formaría una Junta de Gobierno. En ese tenor resaltan las ocasiones en que Noriega fijó fecha para su salida de la Comandancia, condicionándolo a que Estados Unidos no lo persiguiera oficialmente. Obviamente, al contar con el apoyo de Estados Unidos, la dirigencia de la Cruzada Civilista se sintió con más fuerza de la que tenía y nunca aceptó los ofrecimientos del General Noriega.

La concepción política de Noriega sobre el poder y sus usos limitó enormemente su capacidad para atender la crisis istmeña. En un documento que el general Noriega escribió para ser utilizado en entrenamientos de inteligencia, dijo que "*las masas tienen una gran debilidad: su escasa o inexistente habilidad para pensar... han abdicado ese poder, dejándolo en manos de las élites*". En consecuencia, escribió Noriega, "*podemos hacerles creer lo que deseemos y movernos en la dirección que queramos*".[67] Esa idea sobre el poder determinó que, en un intento por contrarrestar el uso propagandístico que la oposición hacía de la piña como el símbolo representativo de su persona — su cara está marcada por el acné — el controvertido militar le ordenó a sus subalternos en un momento dado en 1987, comprar todas las piñas que existían en el mercado. Con la misma idea, para contrarrestar el papel de la jerarquía de la Iglesia Católica aliada de los grupos oligárquicos y empresariales, Noriega invitó al líder religioso evangelista Jimmy Swaggart a Panamá en los momentos álgidos de la crisis, a su vez promoviendo la presencia en el país de grupos religiosos asociados al tele-evangelismo. El haber deportado a una monja de una escuela para niñas por haber reprobado a la hija de su amante, viene a corroborar las limitaciones de Noriega en su uso de las instituciones del poder.

A pesar de su manejo discursivo antimperialista, en su manejo de la crisis Noriega antepuso sus intereses personales a los intereses del país. En efecto, el Gral. Noriega reconoció en sus discursos las causas reales de la confrontación Panamá-Estados Unidos. En ese sentido advirtió que "*lo que busca instalar* (Estados Unidos) *es un gobierno obediente, una admi-*

nistración subalterna", y reconocía que en el istmo no había "una oposición con suficiente fuerza ni para la toma del poder ni para gobernar en paz".[68] En ello, sin embargo, Noriega fue contradictorio. Mientras que en sus discursos reconoció el terreno sobre el que Estados Unidos intentaba reinstalar a Panamá como país enteramente subordinado a la estrategia global norteamericana, en la práctica mostró su inconsecuencia con ello. Ninguna acción de Noriega para enfrentar internamente a los grupos opositores, portadores de los intereses de seguridad norteamericanos, fue exitosa para contrarrestarlas. A medida que transcurrió el tiempo la Cruzada y los partidos de la oligarquía tradicional perdieron su capacidad de convocatoria de las masas panameñas. Sin embargo, al no intentar incluir a estas masas en un proyecto orgánico que más tarde significara concesiones políticas y sociales a los sectores populares, Noriega nunca pudo salir del marco de lucha impuesto por Estados Unidos.

En consecuencia, Noriega, más preocupado por su devenir personal que por el nacional, no presentó proyecto alternativo coherente para que el país en su conjunto fuera capaz de superar los intentos absorbentes que se imponían sobre él. Siendo un militar que se había preparado para escalar hacia las posiciones más altas del poder, su ineptitud para percibir los acontecimientos más allá de peleas grupales coyunturales lo hizo buscar una estrategia "conspirativa" desprovista de sustento social, con el objetivo de contrarrestar lo que para él siempre fue sólo una "conspiración" norteamericana. Al optar por medidas de fuerza, sin embargo, Noriega mostró su debilidad más que su fortaleza.

Ante la incapacidad del régimen por edificar un proyecto alternativo para el país, la Cruzada logró acaparar las atenciones internas y externas para crear así una atmósfera de supuesta unanimidad contra Noriega. Para ello, la estrategia política de la Cruzada incluyó el uso de elementos simbólicos cuya fuerza sólo decreció hasta después de la invasión estadounidense. El uso y ondeo de pañuelos blancos como símbolo de lucha por la "verdadera paz y la justicia", el uso de velas en procesiones nocturnas, y el caceroleo aprendido de sus símiles que derrotaron la democracia chilena en 1973, crearon un ambiente de supuesta pureza y heroísmo. Al pedir "*evitar el vandalismo y proteger la propiedad privada*" los propagandistas cruzadistas limitaron su convocatoria a los sectores sociales propietarios. De esa manera, la propaganda cruzadista adquirió fuerza al combinarse con elementos procedentes de la fe religiosa y la anticomunista: "*reza por el empleado público*", "*la victoria está cerca*" unida a su pedido, a gritos, de una intervención norteamericana — el mesías rubio que vendría del norte a arreglarle sus problemas — y la "prueba" de que el gobierno era comunista porque permitió la llegada de aviones de la línea aérea soviética Aeroflot.[69]

Consecuentemente, el uso efectivo de volantes y rumores por su parte coparon el espacio que no llenaron los medios periodísticos y televisivos controlados o influenciados por el régimen. En efecto, la manipulación de la información a través de los medios masivos de comunicación permitidos, los turnó dóciles y acríticos, intensificando la fuerza con que circularon y se aceptaron las visiones de la oposición. En ese sentido, la incesante repetición de acusaciones contra Noriega y su régimen — independientemente del grado de veracidad de sus afirmaciones — lograron así "convencer" a las masas de la certeza y validez de los reclamos de la Cruzada, al no esperar de ella lo que sí se esperaba de las figuras gubernamentales.

En este contexto, la estrategia política de la Cruzada Civilista fue más efectiva en la medida que como grupo tuvo una mayor capacidad de convocatoria. Si bien ésta inicialmente encontró el apoyo activo de muchos sectores de la población, éstos, al igual que el gobierno, nunca convocaron a su organicidad para los objetivos que deseaban plasmar. Así, desde sus inicios hasta la invasión norteamericana, sólo los sectores empresariales mostraron un activismo relevante. El resto de la población no organizada que en varios momentos decidió darle su apoyo, lo hizo, sin embargo, pasivamente.

En efecto, al establecer la incondicionalidad como requisito para la actividad política electoral en las filas de los partidos aliados, Noriega contribuyó a la visión de que en Panamá sólo se podía estar con él o contra él. La escogencia de las figuras que representaron las fuerzas políticas de la coalición oficialista para el proceso electoral de mayo de 1989 fue realizada por el Estado Mayor con base en la afinidad de éstos con sus intereses. En este caso, un socio de Noriega en varias empresas

y con escasa trayectoria política fue ungido para la candidatura de Presidente; un cuñado de Noriega y gestor del enriquecimiento de sus allegados como su primer Vicepresidente; y como segundo Vicepresidente, un ex-embajador en Washington en cuya trayectoria estaba la de haber tenido contactos cercanos con el Presidente de Estados Unidos, George Bush, y cuya candidatura estaba destinada a aplacar las presiones norteamericanas contra el General.

Incluso, para intentar dividir a la oposición, el Estado Mayor de las FDP maniobró para que la dirigencia del Partido Panameñista Auténtico (PPA), heredero del decadente populismo del difunto Arnulfo Arias y el partido que tenía una mayor presencia dentro de las masas, quedara en manos de miembros con los que se podrían llegar a arreglos políticos. La maniobra, sin embargo, fue vista por gran parte de los miembros del PPA como un intento por hacer de este partido una agrupación oficialista, lo que contribuyó a engrosar las filas del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que bajo el liderazgo de Ricardo Arias Calderón — fiel exponente de la oligarquía panameña que asumió la vicepresidencia gracias a las tropas norteamericanas — resultó ser más beligerante y más coherentemente subordinado a las propuestas de Estados Unidos.

Para Noriega y sus allegados era indispensable que ningún grupo, de los que formaban parte de las agrupaciones políticas aliadas o subordinadas, intentaran huir del marco unipersonal que Estados Unidos le dio al conflicto istmeño. Hacerlo implicaba también que los diversos proyectos en pugna — independencia vs. autodeterminación — saldrían a relucir, haciendo así obvio que la figura de Noriega no era indispensable para ninguno de ellos. Apoyado por sectores políticos nacionales que demostraron un antiimperialismo más pasional que objetivo, Noriega logró así atar los destinos del país a su destino personal. Definitivamente, la política de E.U. mostró con ello que era efectiva.

De allí que las elecciones nacionales de mayo de 1989 hayan sido percibidas por la población que acudió a emitir su voto como una de aprobación o improbación al citado militar. Con la celebración de elecciones, el oficialismo norieguista pretendía calmar las expectativas de cambio, legitimando en el escenario doméstico su manejo del Estado, para así desarmar

tanto los embates opositores como la escalada intervencionista norteamericana. El énfasis en el nacionalismo en uno — desprovisto de base social sustancial — y la democracia en el otro — subordinada a los intereses estratégicos de Estados Unidos — tuvieron la virtud de utilizar en ambos lados propagandas electorales vacías, compra de votos y de jurados, coacción de la libertad de información — para lo cual la oposición utilizó redes norteamericanas acantonadas en Panamá — y el uso indiscriminado de recursos millonarios — estatales en uno, extranjeros en el otro — que implicaron, desde su inicio, la imposibilidad de que el proceso electoral aportara solución alguna a la crisis. En la medida de que la población en general no tuvo organización que representara sus intereses generales, los votantes respondieron mas bien a sus aspiraciones coyunturales, votando contra la grave situación económica, la corrupción estatal y el desgaste total de la dirigencia civil y militar del oficialismo.

La magnitud de la derrota sufrida por el grupo civil que le dio cobertura al régimen de Noriega determinó que el estamento militar impulsara la anulación del resultado general de las elecciones. Este hecho constituyó una derrota política para el oficialismo, porque el desarrollo de este proceso electoral intervenido por Estados Unidos no podía dar cabida a ningún tipo de negociaciones. En efecto, la capacidad para manipular las cifras sobre los resultados electorales no tenía sentido, desde el momento en que la aparente contundencia de la derrota electoral no dejaba espacios para hacer efectivo el pequeño espacio posiblemente adquirido a través de un sector quizás no mayoritario, pero sí plural, que hubiera manifestado su apoyo a los candidatos oficialistas al poder legislativo.

La posibilidad de ser derrotados en las elecciones formaba parte de las previsiones de la inteligencia militar estamental. Pero en la medida que en este grupo de las FDP habían miembros que reconocían el papel de Noriega en la crisis, optaron por no hacer valer sus informes para que el resultado contrario a Noriega en las elecciones contribuyera a recomponer el frente interno del ejército (más tarde, ante evidencias de la participación de miembros de la inteligencia a favor de los candidatos opositores, Noriega cesó a varios de ellos). No obstante, según el entonces canciller Jorge Ritter, la posibili-

dad de ser derrotados no formaba parte de las previsiones del propio Noriega y las figuras de la jerarquía política estatal, quienes creían firmemente que su candidato ganaría las elecciones, por lo que prosiguieron con la decisión de continuar el proceso electoral a pesar de las múltiples evidencias de la intervención de Estados Unidos en él.[70] La anulación del resultado de las elecciones es producto de ello. Así, los varios intentos del oficialismo por formar un gobierno en el que participarían tanto las fuerzas opositoras como las oficialistas a partir del cambio de mando señalado por las leyes panameñas para el primero de septiembre, muestran mas bien la falta de previsión que imperó en la jerarquía oficialista ante el proceso electoral.

La imposibilidad de llegar mediante una gestión conciliadora de la Organización de Estados Americanos a una solución "nacional" a la crisis significó una nueva derrota política para el régimen de Noriega. El oficialismo no logró incorporar a ningún sector político en su intento negociador, al ofrecer sólo un poder compartido tanto con ellos como con Noriega, quien se mostró reacio a abandonar su posición de Comandante en Jefe. No obstante, el activismo internacional proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño fue congruente con la búsqueda de aquella "solución nacional". Para ello, el canciller Jorge E. Ritter y otros asesores denunciaron ante el Consejo de Seguridad y ante la OEA las acciones militares norteamericanas que lesionaban la autonomía panameña. En efecto, la pluralidad de los países latinoamericanos se mostraron favorables a una medida que permita una "solución nacional" mediante un régimen compartido, aunque ello implicase aceptar la anulación de las elecciones de mayo. Incluso para estos países, Estados Unidos fue el obstáculo principal para llegar a cualquier arreglo concertado, así como también coincidieron en señalar, mediante resolución de la OEA, su condena al militar panameño por los "abusos en la crisis y en el proceso electoral de Panamá (que) podrían desatar una intensificación de la violencia con los siguientes riesgos a la vida e integridad de las personas".[71] Según un diplomático latinoamericano citado por un periodista estadounidense, "*la idea es reafirmar nuestra solidaridad en contra de Noriega para mostrar que asumimos una actitud cada vez más seria, y que la situación no es simplemente la de Noriega contra Estados Unidos*".[72] A pesar de que con ésta resolución latinoamérica se sumaba a la estrategia estadounidense, su contenido también creaba un espacio por el que el país podría transitar para superar la crisis siempre y cuando se tomaran acciones políticas concretas destinadas a ello.

Preludios de la invasión

La conducta del gobierno que tomó las riendas del Palacio de las Garzas a partir del primero de septiembre de 1989 creó el umbral que acentuó la derrota política del gobierno. En efecto, el período que va desde este momento hasta la invasión de Estados Unidos mostró el drama de un régimen que, a pesar de conocer los intereses que intentaban imponérsele, buscó desesperadamente un acuerdo con sus detractores en Washington. El gobierno provisional de Francisco Rodríguez, que asumió dicha posición el 1 de septiembre de 1989, no contó con el apoyo de los sectores populares, medios, e incluso sectores del empresariado que una vez tuvo el torrijismo. Tampoco contó con un respaldo interno fuerte capaz de hacerlo emprender acciones que le permitieran solventar políticamente su derrota general, ni tampoco un mínimo de respaldo internacional — obtenido meses antes mediante la gestión de la OEA — o el respaldo condicionado de varios países de América Latina que en un principio optaron por condenar en mayor grado el intervencionismo estadounidense que el autoritarismo militar.

Aún, las medidas emprendidas para agilizar la actividad económica estancada por efectos de la crisis política y la intervención norteamericana, contribuyeron a acentuar los derroteros por los que el régimen transitó hacia su derrota militar: se impuso un proyecto económico conservador junto a un proyecto político de "liberación nacional" cuya compatibilidad era posible sólo mediante crecientes dosis de autoritarismo. En este sentido, el gobierno de Rodríguez se empeñó en fortalecer al sistema bancario, y restaurar el "*clima de confianza que aliente la inversión*". De allí que, comparando al régimen de Noriega con el que impuso Estados Unidos sobre la base de la orientación de la política económica, haya habido poca

distancia, pero una distancia que jamás se hubiera acortado sin la intervención de las tropas invasoras. Incluso, la sola posibilidad, aunque lejana, de que el gobierno panameño fuera congruente con los discursos que destacaban la necesidad de avanzar hacia la "liberación nacional" quedó definitivamente relegada para las futuras generaciones de panameños al darse la invasión de Estados Unidos.

Mientras que Washington inflexiblemente buscó doblegar la dirigencia panameña para implementar de una vez por todas sus planes para el istmo, el régimen panameño buscó las condiciones que le permitieran un entendimiento con él. La cúpula militar panameña pensó que tarde o temprano la potencia del norte tendría que negociar la paz sin que hubiera cambios de por medio en la dirección de la jefatura militar. Por ello, "tácticamente" este grupo quiso crear las bases sobre las cuales se facilitaría tal arreglo: estableció con Rodríguez un gobierno de centro-derecha encargado de aminorar las presiones de la oligarquía mediante un proyecto de liberalización económica tradicional que incluso buscó el beneplácito del FMI. Así, el gobierno empujó a las masas a su pauperización mientras no ocurriera el pretendido arreglo. En efecto, Rodríguez promulgó una serie de medidas de "rectificación torrijista" impulsada por los sectores "progresistas" subordinados a la conducción militar, congelando algunos precios de productos básicos. Sin embargo, dada la magnitud de la crisis, estas medidas no lograron alterarla en lo más mínimo. Por eso, lo que el gobierno denominó "Nueva República" fue simplemente uno de los últimos pasos del proceso de recomposición del poder que culminó con la plena restauración oligárquica a partir de la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989.

El inicio del capítulo final de la derrota política del proyecto nacional de la institución militar — que en sus inicios en 1968 afirmó la nación panameña y su capacidad para enfrentar crisis internas y los intereses externos — se materializó a partir del frustrado intento de golpe contra Noriega el 3 de octubre de 1989. En este, un sector de la oficialidad joven creyó contar con el suficiente apoyo interno y con el de Estados Unidos para deponer a Noriega y así conducir la crisis por otros derroteros, probablemente no populares, pero al menos nacionales. El

fallido intento de golpe, sin embargo, no provocó alteraciones sustanciales en la manera como se condujo el régimen. Por el contrario, impulsó medidas autoritarias adicionales basadas en lo que Noriega llamó la política de "Las tres P": "Plomo" al enemigo, "Palo" al indeciso, y "Plata" para el amigo". En términos políticos eso se tradujo en una mayor represión y una mayor corrupción.

Así, el gobierno intentó subsanar la crisis fiscal del Estado mediante unas "leyes de guerra" que sirvieron para despedir miles de empleados estatales. El régimen también dejó sentir una continua intolerancia para con aquellos que, rechazando la intervención norteamericana, discrepaban de la conducción militar. De ahí que uno de los directores de la revista mensual *Opinión Pública*, publicada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Panamá, haya sido acusado de ser un "*sedicioso recalcitrante*" por uno de los medios periodísticos gubernamentales, y que un dirigente popular de una organización que lucha por los derechos humanos en Honduras se le haya negado el visado para su entrada al país. Asimismo, Noriega restringió todavía más las expresiones independientes emanadas de algunos periodistas: a raíz del frustrado intento de golpe, el gobierno deportó al periodista español Antonio Caño tras haber escrito un artículo titulado "el general en su laberinto", así como amonestó al jefe de redacción de un diario propiedad de uno de sus aliados.[73] En este sentido no es de extrañar que, a pesar de la gravedad de la coyuntura, el Gral. Noriega mantuvo conductas destinadas a apropiarse de fondos del Estado mediante la venta de medicinas adulteradas a la Institución del Seguro Social de Panamá por medio de una empresa de su propiedad en México.[74]

Acorralado por Estados Unidos y por la incapacidad política de su gobierno para responder efectivamente a las necesidades del país, el General Noriega quiso desesperadamente encontrar la forma para llegar a un arreglo con sus adversarios en Washington. Para aplacarlos, Noriega le ordenó al presidente Rodríguez renegociar las bases militares con Estados Unidos. Rodríguez anunció en conferencia ante la ONU el 3 de Octubre su disposición a renegociar la presencia militar norteamericana y ofreció a Panamá como sede para una base de operaciones de una fuerza multinacional contra el

narcotráfico.[75] Luego Noriega inició otra ronda de conversaciones con enviados del Departamento de Estado, para encontrar una salida política para sí. Así, Noriega buscó los elementos que le posibilitarían negociar con Estados Unidos: se hizo procesar secretamente por la Corte Suprema panameña por los cargos que en Florida le habían sido sindicados, para intentar hacer valer el principio universal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo cargo.[76] Según destacó posteriormente Ritter, "*para ese momento Noriega sólo estaba empeñado en dar una serie de pasos que le proporcionaran recursos procesales en los Estados Unidos, o cartas para negociar con el gobierno de ese país*". En ese sentido, su proclamación como jefe de Gobierno el 15 de diciembre siguiente tenía el objetivo de "*darle fachada de reclamo popular a una investidura cuyo único propósito era dotarlo de inmunidad*". Según Ritter, el objetivo de hacerse nombrar como jefe de Gobierno era el de que "*Estados Unidos ha depuesto a muchos jefes de Estado, pero nunca había secuestrado a ninguno*".[77]

De allí que de la conducción unipersonal del Estado como premisa de la derrota política de aquel proyecto militar nacional a la incapacidad para enfrentar militarmente las tropas norteamericanas no haya existido un proceso sustancial de por medio. Esta conducción — acentuada apresuradamente en lo formal el 15 de diciembre de 1989 cuando Noriega se hizo proclamar jefe de gobierno — desprovista de base social y de apoyo y legitimidad nacional e internacional, no logró articular una defensa del país, ni siquiera provocar fuera de Panamá una condena al invasor que fuera más allá de tímidas condenas discursivas. Por ello, cuando el 20 de diciembre de 1989 las tropas norteamericanas invadieron Panamá, se inició con ella una nueva etapa en la historia del país sin que se transformaran radicalmente las estructuras económicas y sociales sobre la cual el régimen de Noriega había gobernado. Así, el proceso mediante el cual desde 1978, pero más decididamente desde 1984, se les concedió a los sectores oligárquicos del país cuotas crecientes del poder político, tuvo su lógico desenlace con la plena restauración oligárquica acaecida y hecha posible militarmente por la ocupación norteamericana, y políticamente, por los vaivenes de un proyecto nacional-militar que se tornó cada vez más autoritario.

Notas

1. Giancarlo Soler, "Surgimiento del reformismo militar, evolución y crisis", en Soler, G., et. al., *Fuerzas Armadas y Cuestión Nacional*, (Panamá: Taller de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Panamá, 1988), pp. 10–11.
2. Omar Torrijos, *La Batalla de Panamá*, (Panamá: M.V. Publishing Co., 1981), p. 26.
3. Giancarlo Soler, *Ibid.*, (1988), p. 15.
4. Omar Torrijos (1972), "Carta al Senador Edward Kennedy", en *op. cit.*, (1981), p. 102.
5. *Ibid.*, p. 100.
6. *Ibid.*, p. 101.
7. Marco A. Gandásegui, h., "La concentración del poder económico en Panamá", en Soler, Ricaurte, *Panamá: dependencia y liberación* (San José, Costa Rica: EDUCA, 1974).
8. Renato Pereira, *Fuerzas Armadas y Política*, (Panamá: Universidad de Panamá, 1979): 112.
9. William Hugues, "1968: un golpe pro-imperialista?", *Diálogo Social*, Octubre 1983, p. 21.
10. Guillermo Castro Herrera, *Panamá 1977* (Panamá: CELA, 1978), pp. 10-11. En este caso, el número de sindicatos aumentó de tres organizaciones laborales en 1945 a sesenta y cinco en 1965.
11. Discurso de Arnulfo Arias en su toma de posesión, transcrito en Ricaurte Soler (ed.), *Pensamiento político en Panamá en los siglos XIX y XX*, (Panamá: Biblioteca de la Librería Cultural Panameña, vol. 6, 1988), pp. 378-379.
12. Humberto Ricord, *Los clanes de la oligarquía panameña y el golpe militar de 1968*, (Panamá: editorial no definida, 1983), pp. 137–138.
13. Ricaurte Soler, "Panamá: nación y oligarquía", en *América Latina: historia de medio siglo*, vol. 2, (México, D.F.: Siglo XXI eds., 1981), p. 439.
14. Farnsworth & Mc Kenney (1983), *op. cit.*, p. 71.
15. Pereira, *op. cit.*, p. 121.
16. Rómulo Escobar Bethancourt, *Torrijos: colonia americana no*, (Panamá: M. V. Publishing Co., 1981), p. 95.
17. Germán Muñoz, "Panamanian Political Reality" The Torrijos Years", Disertación doctoral, Universidad de Miami, 1981, p. 254.
18. Ricaurte Soler, "Panamá: la autonomía universitaria de 1968 a 1978", en *Tareas*, (abril-septiembre 1981), p. 71.
19. Giancarlo Soler Torrijos, "The Rise and Fall of Military Reformism in Panama: The Torrijos Regime, 1968–1981", Tesis de grado para optar por el título de Bachelor of Arts in Development Studies de la Universidad de California en Berkeley, Mayo de 1987.
20. Pierre Gilhodes, (1978), *Paysans du Panama*, (París: Fondation National des Sciences Politiques), p. 198.
21. Michele Labrut, *Este es Omar Torrijos*, (Panamá: Litografía Enan, 1982), p. 3.
22. Roberto Díaz Herrera, *Las vallas del silencio. Panamá: a los 18 años del golpe militar*, (Entrevista por Norma Núñez Montoto, Panamá: Fuerzas de Defensa de Panamá, 1986), p. 16.

23. Steve Ropp, *Panamanian Politics: From Guarded Nation to National Guard*, (New York: Praeger Publishers, 1982), p. 62.
24. Giancarlo Soler, "Surgimiento del reformismo militar ...", *op. cit.*, p. 25.
25. Comité de Relaciones Internacionales del Congreso (E.U.A.), *A New Canal Treaty: A Latin American Imperative. Report of a Study Mission to Panama*, November 21–23 1975, (Washington: Oficina de Prensa del Gobierno de Estados Unidos, 1976).
26. Miguel Montiel, "El Oligarcazo del 20–24 de Enero de 1976", *Tareas*, (diciembre-febrero 1976–1977), p. 4.
27. Germán Muñoz, *op. cit.*, p. 147.
28. Salomón Padilla y Hugo Varhas, "El financiamiento público externo en Panamá y sus implicaciones económicas 1950-1975", *Tareas*, (octubre-diciembre 1977), p. 16.
29. Xavier Gorostiaga, "La Zona del Canal y su impacto en el movimiento obrero panameño", *Tareas*, (julio-agosto 1975), p. 42.
30. Revista *Industria*, órgano del Sindicato de Industriales de Panamá, 1976, p. 20.
31. Omar Torrijos, "Discurso del General Omar Torrijos Herrera", *Lotería*, (octubre 1975), p. 102.
32. Citado por Luis Guagnini, "Modelo panameño. La estructura de poder en Panamá y el balance entre la izquierda y la derecha", *Tareas*, (julio-agosto 1975), p. 7.
33. Omar Torrijos, "Discurso ...", *op. cit.*, p. 103.
34. Orlando Núñez Soto y Carmen Guevara, "Desarrollo y contradicciones del proceso panameño, *Tareas*, (octubre-diciembre 1978), p. 48.
35. Muñoz, *op. cit.*, pp. 147–148.
36. Farnsworth, *op. cit.*, p. 153.
37. *Ibid*, p. 152.
38. Citado en Soto y Guevara, *op. cit.*, p. 53.
39. "Intercambian cariño en gira nacional", *Diálogo Social*, (diciembre 1977), pp. 53–54.
40. Farnsworth, *op. cit.*, p. 159.
41. "Anuncia Torrijos al Pueblo: Guerra contra el desempleo y la pobreza", *La Estrella de Panamá*, 2 de noviembre de 1977.
42. Raúl Leis, *Radiografía de los partidos*, (Panamá: Centro de Capacitación Social, 1984), p. 63.
43. Ibid, p. 11. Una institución de análisis político basada en Washington destacó en 1968 que Arias Calderón, embajador ante Estados Unidos bajo la administración Robles (1964–1968), candidato a la segunda vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano para las elecciones de 1968, e hijo de Ricardo Arias Espinosa, quien sirvió dos veces como Presidente de la República en décadas anteriores, pertenecía a una "familia de la aristocracia tradicional". Ver Institute for the Comparative Study of Political Systems, *Panama Election Factbook*, op. cit., p. 24.
44. James Dunkerley, "Central America: Collapse of the Military System", en *The Political Dilemmas of Military Regimes*, editado por Christopher Clapham y George Philip, (Londres: Croom Helm, 1985), pp. 176–177.
45. Entrevista inédita con Guillermo Manuel Ungo, dirigente del Frente Democrático Revolucionario (FDR) de El Salvador. Panamá, 23 de diciembre de 1986.

46. Soler Torrijos, "The Rise and Fall... ", *op. cit.*
47. José de Jesús Martínez, *Mi General Torrijos*, (La Habana: Casa de las Américas, 1988). Existen otras ediciones en Costa Rica, México y España.
48. Brandon Grove, "Panama's relationship to the Nicaraguan Crisis", *Department of State Bulletin*, (agosto 1979), pp. 62–63.
49. Entrevista telefónica al ex-presidente James Carter, Berkeley, California, marzo de 1986. Publicada en Giancarlo Soler Torrijos, "No hemos tenido el apoyo adecuado de Washington para el proceso de Contadora. Entrevista a James Carter", *Diálogo Social*, (septiembre 1986), p. 47.
50. Marcel Salamín, *El Salvador: sin piso ni techo*, (Bogotá: Editorial La Oveja Negra, 1980), p. 68.
51. Si bien todas las circunstancias que condujeron a la muerte de Torrijos no han sido totalmente esclarecidas, la revisión de las investigaciones sobre la muerte del líder panameño muestran que el "avionazo" en que perdió la vida no pudo haber sido un accidente. Habían personas cercanas a Torrijos que estaban interesadas en su pronta dasaparición. Un ex-oficial de las FDP y experto en explosivos, luego de observar el avión con que se "estrelló" Torrijos y su comitiva, elaboró un informe que sus superiores en la entonces Guardia Nacional impidieron su difusión. En este detallaba que habían pruebas fehacientes de que se había producido una explosión en la cola, cuando en ese tipo de aviones (un Twin-Otter de manufactura canadiense) no hay nada que pueda explotar; el combustible del avión va en las alas, no en la panza del avión. Sin embargo, él encontró la cola del avión *a varias horas de camino* del lugar en donde se encontraban los restos. Ello indica que el avión no estalló por haberse estrellado — la versión oficial — porque la cola no podía parar tan lejos. Según el amigo personal de Torrijos, Rory González, a principios de 1981 el líder panameño quería retirarse pero desconfiaba de la capacidad de sus seguidores. Planeó retirar a todo el Estado Mayor de la Guardia Nacional porque sus integrantes no permitirían consolidar el régimen civil. Según Jaime Arias Calderón (hermano del presidente del Partido Demócrata Cristiano), *en junio de 1981*, un mes antes de que Torrijos muriera, el líder panameño dijo que "*antes tengo que hacer algo con la GN. No puedo permitir que quienes siguen en la línea de mando se hagan cargo de la institución.*" Ver a Kempe, *op. cit.*, p. 164-165.
52. El contenido del paréntesis en el original, cursivas son nuestras. Este acuerdo fue develado por Díaz Herrera en junio de 1987 cuando en medio de una crisis emocional al ver frustradas sus ambiciones personales lanzó ataques verbales contra su antiguo compañero de armas.
53. Bob Woodward, *Veil: The Secret Wars of the CIA*, (Nueva York: Simon & Schuster Inc, 1987), p. 233.
54. Citado en G. Russel Evans, *The Panama Canal Treaties Swindle: Consent to Disaster*, (Carrboro, Carolina del Norte: Signal Books, 1986), p. 256.
55. María Eliana Castillo, "Después del canal: nuevos desafíos en la política exterior de Panamá", en *Las políticas exteriores latinoamericanas frente a la crisis*, compilado por Heraldo Muñoz, (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1985), p. 291.
56. *Ibid.*, p. 293.
57. Citado en Dinges, *op. cit.*, p. 293.
58. Ricardo Urrutia, "Panamá: las crecientes tensiones con Estados Unidos",

en *Las políticas exteriores de América Latina y el Caribe: continuidad en la crisis*, compilado por Heraldo Muñoz, (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1986), pp. 412–413.

59. Dinges, *op. cit.*, pp. 287–288.
60. Urrutia, *op. cit.*, pp. 414, 417.
61. Ver la edición del *Congressional Record* del 18 de mayo de 1987.
62. Dinges, *op. cit.*, pp. 305, 313.
63. *Ibid*, p. 313.
64. Giancarlo Soler Torrijos, "Panamá: primero, soberanía", *Nueva Sociedad*, No. 97, septiembre-octubre 1988, p. 14.
65. La periodista era Omayra "Mayín" Correa, una legisladora por el Partido Laborista, un partido de derecha dominado por empresarios allegados a Noriega y que servía a su vez para canalizar fondos del estado para personas y agrupaciones que el Estado Mayor y algunos de los familiares de Noriega desearan beneficiar. Correa fue una aliada coyuntural del General Noriega, mientras éste mantuvo relaciones cordiales con Estados Unidos. Al romperse esa relación, Correa encabezó, exiliada en Miami, los grupos que solicitaban la intervención de Estados Unidos para derrocar al General.
66. En este sentido ver las anécdotas de Samuel Lewis Galindo, Ministro de Hacienda y Tesoro del gobierno de ocupación en *900 días: colapso de una dictadura*, (Panamá: Arte Sistema Panamá, S.A., 1990).
67. Tte. Coronel Manuel Antonio Noriega, *Operaciones Psicológicas*, (Panamá: Guardia Nacional, 1975), Citado por Kemp (1990), op. cit., p. 487.
68. Afirmaciones del General Noriega, en previa entrevista con Gregorio Selser y Juan M. Martín Medem, "Un nuevo tipo de guerra de anexión", *La Jornada*, Sábado 23 de diciembre de 1990.
69. Ver la recopilación en dos volúmenes de las cartas, caricaturas, panfletos y volantes que grupos afines a la Cruzada hicieron circular durante esos meses en Mayín Correa, *La gran rebelión blanca*, (Miami, Florida: SIBI, 1987), vols. I y II. Ni el gobierno ni las agrupaciones políticas antioligárquicas lograron emprender un esfuerzo en el mismo sentido.
70. Ritter, *op. cit.*, p. 127.
71. "México y la resolución de la OEA sobre Panamá", *El Día*, (México, D.F.), jueves 25 de mayo de 1989.
72. John Mc Clintock, "Comenzaron a presionar a Panamá E.U. y sus principales aliados de América Latina", *Excelsior* (México, D.F.), domingo 29 de octubre de 1989, pp. 36A, 38A. Traducción de artículo publicado originalmente en *The Baltimore Sun*. Según un politólogo estadounidense que ha seguido la evolución de la política panameña en las dos últimas décadas, Steve Ropp, la forma como la OEA llevó a cabo las negociaciones puede haber impedido encontrar la deseada solución política. Ropp sostiene que la misión de la OEA estaba destinada a fallar debido a la forma como se estableció la delegación que tenía a cargo las negociaciones en Panamá. Así, en vez de seleccionar un mediador principal que permanecería en Panamá hasta tanto terminaran las negociaciones, una misión de cuatro hombres fue enviada en varias ocasiones. Sin embargo, esta delegación no tenía una coordinación ni una continuidad en sus actividades en Panamá. Ver a Steve Ropp, "Military Retrenchment and Decay in Panama", *Current History*, vol. 89, No. 543, enero de 1990, pp. 17–20, 37–40.

73. "Deportó el gobierno panameño al corresponsal de El País español", *La Jornada*, (México, D.F.), domingo 15 de octubre de 1989, p. 27.
74. Samuel Salanueva Camargo, "Detuvo la Interpol mexicana a presunto socio de Noriega", *La Jornada*, miércoles 11 de octubre de 1989, p. 15.
75. "Ofensiva de Panamá para evitar el aislamiento político", *Excelsior*, (México, D.F.), sábado 28 de octubre de 1989, pp. 2-A, 21A.
76. Ritter, *op. cit.*, p. 174.
77. *Ibid.*, p. 166.

"Por ningún motivo debimos haber abandonado nuestra lucha.... Les hubiera tomado seis o doce meses para acabar con nosotros... pero teníamos a la población en contra...."

Testimonio de un oficial de las FDP,
actualmente miembro de la Fuerza Pública.

4

Estrategia y tácticas de Estados Unidos en la invasión a Panamá

La invasión de E.U. a Panamá debe entenderse primordialmente sobre la base de los intereses estratégicos de Washington en el istmo. Estos intereses, renovados a la luz de los cambios en el escenario internacional, indujeron a éste país a buscar la forma como intervenir en Panamá para subordinarla a su esquema de dominación global. La estrategia de Washington hacia Panamá incluyó declaraciones, movimientos políticos y militares para establecer la conexión entre el objetivo perseguido y los medios a su alcance. En fin, ésta consistió en delinear la vinculación entre las acciones por desarrollar con el compromiso de conseguir los objetivos previamente marcados: las tácticas que formaron parte de la estrategia político-militar hacia el istmo, que se tradujeron en el operativo militar con que se invadió Panamá.

Las tácticas que formaron parte de la estrategia político-militar hacia Panamá debían responder a varias interrogantes: las concernientes a los objetivos estratégicos de la incursión militar y los métodos necesarios para conseguirlos, aquellas que se refieren al escenario político del operativo militar, y las pertinentes al operativo en sí. En primer lugar, la estrategia

debía tener muy claro el objetivo de todas las acciones por desarrollar, partiendo de que este, cualquiera que sea, es un objetivo realizable. Las actividades políticas y bélicas por desarrollar en territorio istmeño debían llevar a Estados Unidos a implantarse en territorio panameño de manera tal que le sea factible, a corto o mediano plazo, renovar su presencia militar en el istmo más allá del año 2000. Así pues, los métodos utilizados para perseguir ese objetivo tenía que haber sido estudiado suficientemente bien como para reconocer las acciones necesarias para lograrlo y para que en el proceso de su ejecución no surjan inconvenientes que provoquen consecuencias distintas de las previstas en el desarrollo del operativo.

En segundo lugar, también era necesario conocer de antemano qué tipo de acciones lograrían moldear el escenario panameño a fin de obtener el objetivo. Es decir, establecer qué y quiénes debían ser destruidos, neutralizados o intimidados para que no obstaculicen el proyecto. En el caso panameño, el Gral. Noriega, como comandante de las FDP, debía ser trasladado a territorio estadounidense para justificar el operativo militar. En consecuencia, la totalidad del liderazgo de la institución armada panameña debía ser reemplazada, si bien en ese esfuerzo tendrían que intentar dejar en pié a la mayoría de sus tropas. Porque ello contribuiría a dejar en Panamá una mínima fuerza de seguridad ya entrenada, que posteriormente reemplazaría a las tropas norteamericanas en las funciones represivas del nuevo Estado. En tercer lugar, los medios disponibles tenían que considerarse en función del terreno en el que tendrían que operar. Así, el armamento utilizado, la disposición guerrera tanto de las tropas propias como de las adversarias, la relación de las huestes invasoras con la población panameña, la cronología de acciones específicas y el manejo de la información fueron componentes fundamentales de la estrategia bélica hacia Panamá.

En ese tenor, la coyuntura de la invasión debe observarse como el producto de la acumulación histórica de los intereses estadounidenses sobre Panamá y la manera como éste último país buscó desenvolverse ante esos intereses. Así, mientras que el accionar estadounidense en Panamá el 20 de diciembre de 1989 constituyó el más alto grado de refinación de su

estrategia global, la respuesta de Panamá respondió a la capacidad que sus agrupaciones internas desarrollaron para confrontar los intereses que se impusieron sobre ella. Para el caso, desde el punto de vista estratégico, cobró una singular importancia la manera como Estados Unidos instrumentó el despliegue de las fuerzas encargadas del aspecto humano y material del operativo militar, ya que ésta es la que en términos militares definió el éxito de la operación. El manejo de las otras variables que determinan la percepción pública sobre la evolución de la acción bélica — la prensa, las reacciones panameñas y las norteamericanas, y en último lugar, las internacionales — definieron el grado de éxito del operativo desde el punto de vista político. Así, el manejo militar y el manejo político de la situación fueron dos partes sustanciales de una misma estrategia para llevar a cabo los objetivos reales que impulsaron a E.U. a emprender la masiva incursión militar sobre el territorio, las instituciones y la población panameña.

A pesar de la particular evolución que mostró la crisis panameña y la forma como E.U. se apoyó en ella para impulsar sus intereses sobre Panamá, la invasión como opción para atender sus imperativos globales no era la única de ellas. Antes de la invasión, las negociaciones para lograr la renuncia de Noriega de las FDP y su salida del escenario panameño había sido un elemento fundamental en el diseño de la política de Washington hacia Panamá. En efecto, entre los meses de octubre y noviembre de 1989, todavía el Departamento de Estado envió emisarios a Panamá con el objeto de negociar la renuncia de Noriega. Por definición, la guerra encubierta y la agresión indirecta, que E.U. persiguió hasta el momento de la invasión, "*como substituto de la agresión militar abierta o directa pueden obtener más económicamente los objetivos políticos de la guerra. Se parece a la agresión directa en que busca destruir la voluntad y la integridad política del adversario, envolviendo esos objetivos con neblinas de ambigüedad y desinformación*".[1]

Para diciembre de 1989, la agresión indirecta a Panamá a través de las sanciones económicas y del aislamiento diplomático habían creado el escenario para que, tarde o temprano, la oficialidad de la FDP optaran por desplazarlo en un plazo razonable. Así, a raíz de la anulación de las elecciones de mayo, un congresista estadounidense recomendó una serie de pasos

que serían seguidos hacia Panamá: retirar a los ciudadanos estadounidenses de las zonas en los que podrían ser afectados por las maniobras militares y, mientras se mantenían las sanciones, "*a pesar de su inefectividad*" para desalojar a Noriega, "*no hablar sobre la derogación de los Tratados del Canal de Panamá*" y con ello redirigir la atención de la opinión pública.[2]

Ninguna de las tácticas utilizadas para lidiar con el régimen panameño le habían dado al Presidente Bush los resultados deseados. Ni las negociaciones ni la intervención en el proceso electoral istmeño ni los intentos de golpe habían menguado la voluntad del general y de su estado mayor para permanecer en el poder. Inclusive, un intento de canalizar grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico a la oposición panameña se frustró por la falta de coordinación interagencial. En esta ocasión, el enlace panameño, el empresario y ex-socio de Noriega, Carlos Eleta Almarán, fue apresado por la Agencia Antinarcóticos de E.U. (DEA) en Georgia, bajo cargos de conspiración para importar Cocaína y para "lavar" dinero procedente de éste, que aparentemente estaba destinado a financiar la campaña electoral de la oposición en mayo de 1989.[3] En general, para mediados de 1989, Washington avizoraba la falta de resultados concretos a la vez que se produjeron sucesos — como el frustrado intento de golpe del 3 de octubre — que amenazaban con alterar el escenario con que la administración Bush contaba para emprender sus planes para el país.

Si bien E.U. podía permitirse que el curso de los acontecimientos en Panamá siguiera su propia cronología, un factor fundamental condicionó la programación de su política hacia Panamá: los Tratados Torrijos-Carter señalan el 31 de diciembre de 1989 como la fecha en que Panamá debía pasar a ocupar la Presidencia de la junta directiva de la Comisión del Canal de Panamá. Un administrador panameño no supeditado a Washington tendría la capacidad potencial, con apoyo local e internacional, de revertir el proceso de desconocimiento de la autoridad panameña en la administración canalera que E.U. inició desde el principio de la administración Reagan. Optar por desconocer la potestad panameña para nombrar el administrador del Canal podría causarle problemas legales a Washington pues sentaría un precedente que luego incidiría en el cumplimiento de compromisos contractuales con otras naciones del orbe, logrando con ello sacar el tema del contexto regional — desvirtuando el objetivo original de Washington.

Fundamentalmente, tal posibilidad podría provocar un nuevo conflicto que revertiría los logros alcanzados por la Casa Blanca. Desconocer la autoridad panameña de la administración del canal mas bien legitimaría a Noriega, ya que éste siempre argumentó que E.U. buscaba deponerlo como primer paso para desconocer los tratados canaleros. A fines de 1989, grupos allegados al gobierno panameño planeaban una serie de actos simbólicos contra el desconocimiento a los tratados que podían desembocar en la reedición del 9 de enero de 1964, cuando estudiantes panameños que querían izar la bandera panameña sobre el canal murieron a manos de tropas norteamericanas. La consecuente condena internacional contra Estados Unidos amenazaría con revertir los papeles jugados tanto por Washington como por Noriega en la crisis panameña, por lo que para evitarlo la Casa Blanca estimó necesario acelerar la caída del militar.

Hacia Panamá, E.U. no había agotado la gama de opciones de desestabilización. Al contrario, de seguir las medidas coercitivas contra Panamá, y de seguir el impasse político del escenario político panameño y el profundo desgaste de las FDP, era de esperar que tarde o temprano se alterara la balanza a favor del proyecto norteamericano. Sin embargo, la necesidad de que la coyuntura panameña se alterara perentoria y contundentemente favoreciendo los intereses estratégicos delineados por Washington, hizo que la Casa Blanca tomara la decisión de invadir y preparara el terreno para el operativo militar. La premura de la administración Bush para lograr sus objetivos era tan grande que violó algunas de las precondiciones establecidas por el Pentágono para realizar incursiones militares.

Criterios para invadir

A raíz de la revaloración del fiasco en Vietnam, el Pentágono estableció los criterios que debían observarse antes de lanzar

una incursión armada y ordenar el uso de sus tropas.[4] Desde el punto de vista de Washington, en varios de estos criterios la situación panameña era tal como para aconsejar el envío de tropas norteamericanas: la cercanía de Panamá de E.U. determina que, por diseño estratégico, su situación deba atenderse, si los intereses en el país lo ameritan. Además, las fuerzas disponibles en el istmo facilitarían la operación, al disminuir los requerimientos para la movilización de tropas, naves y armamento para la invasión. Además, la existencia de una considerable infraestructura física de apoyo a la intervención armada dentro de las bases militares de E.U. en Panamá también facilitaba el operativo militar. Dada la situación que la Casa Blanca forjó con sus políticas, el Pentágono tenía también la certeza de que contaría con un alto grado de apoyo de la población panameña. Con este apoyo, o al menos, la efectiva intimidación de quienes quisieran resistir, E.U. lograría doblegar la resistencia panameña en el menor tiempo posible.

No obstante, en sus criterios más importantes, la situación panameña no ameritaba el uso de la fuerza militar: en particular, el criterio que se refiere a la importancia de los intereses norteamericanos en juego y el grado de amenaza bajo el que se encontraban. En Panamá, las instalaciones norteamericanas estaban resguardadas por sus fuerzas militares y tampoco el gobierno de Noriega ni las agrupaciones afines atentaban contra la seguridad de estas infraestructuras en las riberas del Canal. Además, la concentración demográfica alrededor de los objetivos militares de la invasión planteaban serios problemas a la aplicación de la fuerza. Siguiendo estos criterios, la naturaleza y el grado del problema en Panamá no requerían el envío de tropas norteamericanas para solucionarlas. En el pasado, situaciones de mayor gravedad, tanto en el medio oriente como en Centroamérica, no fueron tratados de la misma manera. Incluso, la vida y libre circulación de ciudadanos norteamericanos nunca estuvo en peligro por el régimen de Noriega. Sin embargo, a pesar de los factores que no aconsejaban invadir, la administración Bush decidió enviar a sus hombres a invadir Panamá, con el fin de apuntalar su presencia militar en el país. Así, Bush utilizó algunos criterios y desatendió otros con tal de llevar a cabo sus intereses políticos de corto plazo, más que para tratar algún desafío militar real.

En este sentido, las otras opciones posibles para atender el objetivo establecido fueron descartadas en la medida que tardaba la concreción de los planes de la administración Bush hacia Panamá. No era factible operar a través de una guerra de tipo contrarrevolucionaria — armando, financiando, y apoyando logísticamente a una fuerza como la "contra" utilizada contra el sandinismo en Nicaragua. El tiempo necesario para que estas fuerzas irregulares fueran efectivas era excesivo —había tomado una década en Nicaragua. Y la administración Bush no podía esperar porque se acercaban las fechas en que debía posesionarse el administrador panameño de la Comisión del Canal de Panamá. Además, el entrenamiento contrainsurgente de las fuerzas armadas panameñas hacían poco posible el que este tipo de fuerza irregular tuviera algún grado de éxito en un corto plazo. Además, las naciones centroamericanas se encontraban dando grandes pasos hacia la paz y el Congreso de E.U. ya mostraba poca disponibilidad para financiar fuerzas irregulares como para querer confiar en esta alternativa.

En ese tenor, Washington también tuvo que descartar la posibilidad de asestar un "golpe quirúrgico" dirigido exclusivamente a secuestrar o asesinar al Gral. Noriega. Realizar un operativo de esta magnitud tenía como condición indispensable conocer de antemano la ubicación precisa del jefe militar panameño. Sin embargo, Noriega demostró tener la habilidad de escabullirse del seguimiento de los servicios de inteligencia norteamericanos. En marzo de 1988, el subsecretario de Estado Abrams había propuesto que las fuerzas militares de su país fueran utilizadas para secuestrar a Noriega y llevarlo a territorio estadounidense para ser procesado judicialmente, pero el Pentágono cuestionó esta opción porque había cerca de cuarenta y seis mil ciudadanos estadounidenses residiendo en o cerca de la ciudad capital panameña, y para evitar que algunos de ellos fueran tomados como rehenes, deberían ser relocalizados antes de emprender esta acción.[5]

El Pentágono también temía que Noriega iniciara una guerra de guerrillas en las montañas panameñas al ser atacado por sus tropas. De darse esta posibilidad, esto repercutiría negativamente en el escenario político panameño y alargaría la

estadía de las tropas estadounidenses en el país, ya que estas no podrían irse hasta tanto Panamá no alcance una estabilidad política.[6] Y por añadidura, existía la posibilidad de que, aún siendo exitosa la medida, la Comandancia y el gobierno panameño cayeran en manos de quienes no desearan subordinarse a los intereses estratégicos de Washington. Todas estas consideraciones fueron la base para descartar la "operación quirúrgica" de la agenda de opciones hacia el caso panameño.

Para obtener sus objetivos en el tiempo límite determinado, desde mediados de 1989 el presidente Bush ordenó preparar el Plan que después se usaría para invadir Panamá. Según el Gral. Carl Vuono, el plan para invadir Panamá tenía la virtud de que "*alcanzaría el objetivo de aniquilar las FDP... Panamá, al contrario de Vietnam, tenía que realizarse completamente y con la suficiente fuerza como para asegurar que no se atollaran las tropas...*".[7] Woerner, jefe del Comando Sur, había programado un plan para invadir Panamá en el que se utilizarían principalmente las tropas acantonadas en dicho país, se prevendría el saqueo generalizado de los comercios de la ciudad mediante el despliegue de tropas estadounidenses y se instalaría a la terna presidencial opositora a Noriega que reclamaría el triunfo de las elecciones de mayo de 1989. Sin embargo, Woerner argumentó que el objetivo — remover a Noriega — no valía el costo de la invasión a Panamá, ya que "*el primer y más obvio objetivo militar era la Comandancia, que sería atacada con artillería pesada*". Según Woerner, esta acción hacía "*inevitable que todo el Chorrillo* [el barrio popular que circundaba al cuartel central] *se prendiera por el fuego*" — y su población considerablemente diezmada.[8]

Si bien gran parte del plan Woerner para invadir Panamá había sido detallado desde mediados de 1988, el Gral. Collin Powell encontró algunas limitaciones y promovió su revisión tan pronto como fue nombrado como Jefe del Estado Mayor Conjunto a principios de octubre de 1989. En este sentido, Powell enfatizó una reformulación del plan que incluyera el factor sorpresa, operaciones nocturnas, velocidad en el despliegue de tropas, y el uso de la tecnología furtiva o Stealth.[9] Para ponerlo en operación, el Gral. Maxwell Thurman modificó algunas de las premisas del plan a partir de su nombramiento como jefe del Comando Sur el primero de octubre de 1989.

Principalmente, Thurman se encargó de reducir las limitaciones que el plan original establecía para el uso del poder de fuego de sus tropas — lo que se tradujo en el uso indiscriminado de éste hacia la población civil panameña. Consecuentemente, los cuidados con la población y con las propiedades panameñas fueron relegadas en el plan definitivo. Según Buckley, el 3 de noviembre de 1989 — 45 días antes del suceso coyuntural que utilizó Bush para justificar la invasión — se le instruyó a Thurman estar listo para ejecutar el plan tan rápido como sea posible.[10]

Para su mayor efectividad, el operativo militar de la invasión tenía que fundamentarse en que las varias tácticas del plan fueran llevadas a cabo con la fuerza y en el momento programado para cada una de ellas. En primer lugar, las tropas norteamericanas tendrían que tomar y retener la iniciativa, manteniendo la seguridad propia en el teatro bélico y consiguiendo la superioridad con todos los medios a su disposición en los lugares y en los momentos decisivos para alcanzar los resultados esperados. Ello implicaba destacar el éxito de sus operaciones y ocultar sus fracasos para minar la disposición del enemigo de continuar con la resistencia.

En segundo lugar, el plan de la invasión asignó el mínimo necesario de fuerzas para cuestiones consideradas como secundarias para alcanzar los objetivos estratégicos. En el operativo de la invasión los estrategas militares de E.U catalogaron como secundarios prevenir el saqueo generalizado, proteger la vida de la población residente en áreas circundantes a los objetivos militares, y la seguridad de los conciudadanos no residentes en las bases militares. La unificación del comando bajo la responsabilidad de un comandante aseguraría la imposibilidad de duplicar esfuerzos y contribuiría a determinar una meta común para todas las tácticas. En este sentido, el Pentágono ordenó proseguir con flexibilidad los planes para aumentar la habilidad de que cada unidad reaccionara independientemente ante movimientos imprevistos. Cada una de éstas tácticas estaba supuesta a contribuir al alcance del objetivo estratégico para el que la invasión estaba por ponerse en marcha. Sin embargo, para iniciar las hostilidades contra Panamá Washington consideró necesario emprender una serie de movimientos militares, informaciones y

contrainformaciones para incrementar la eficiencia de las tácticas que formaban parte de la estrategia de la invasión.

Movimientos y reacciones previas

En esencia, la estrategia de la invasión consistió en hacer lo que fuese necesario para deponer a Noriega, destruir las FDP y sentar las bases para prolongar su permanencia militar en el país. Para ello, no sólo las tácticas del operativo militar de la invasión debían tener como resultado éstos objetivos, sino también los movimientos de tropas y armamentos, declaraciones y entrenamientos previos a la fecha de la invasión. De allí que las semanas que le siguieron al intento de golpe el 3 de octubre, E.U. empezó a introducir en Panamá equipo militar pesado de carácter ofensivo, incluyendo "*cuatro tanques y helicópteros Apache ... equipados con ametralladoras de alta velocidad capaces de saturar de balas un campo de fútbol*".[11]

Si bien los pormenores de este plan eran desconocidos para gran parte de las tropas que habrían de enfrentar a soldados panameños, la administración Bush dio inicio a una serie de iniciativas legales destinadas a reducir las restricciones administrativas que podrían obstaculizar el desenvolvimiento de sus tropas. Entre ellas estuvo la referente al apoyo de E.U. a golpes de estado "potencialmente violentos". En ese sentido el director de la CIA le pidió al Congreso una mayor libertad para que sus agentes puedan apoyar golpes de estado y "derrocar a dictadores de otros países". Los cambios propuestos, sin embargo, supuestamente no debían alterar la prohibición de participar en asesinatos políticos en el extranjero".[12] Con la misma intención, el Departamento de Justicia autorizó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) detener "*fugitivos en el extranjero sin el consentimiento del país afectado*" para llevarlos ante los tribunales en suelo norteamericano. Con esta medida no sólo se permitía la aplicación extraterritorial de las leyes norteamericanas, sino que se reducían la gama de restricciones para la acción de E.U. en Panamá.[13]

Para el mejor desempeño de las órdenes destinadas a poner en marcha la invasión, la administración Bush sustituyó a los oficiales que se encontraban en los puestos clave para la toma de desiciones militares. En junio de 1989 Washington nombró

al Gral. Marc Cisneros como comandante del Ejército Sur en Panamá. Poco tiempo después, Cisneros declaró ser partidario de la opción militar. En julio, Bush decidió el retiro de Woerner de la jefatura del Comando Sur sin consultar con el Almirante Crowe, jefe del Estado Mayor Conjunto, que estaba fuera del país, ni con el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Según admitió Cheney, ésta "*fue una decisión puramente política*".[14] La decisión de invadir había sido tomada por Bush desde mediados del año, por lo que para prepararse para ello el Pentágono estimó necesario reemplazar a las figuras que no estuviesen completamente de acuerdo con lanzar la incursión militar.

Woerner había forjado lazos de comunicación con miembros de las FDP y, en general, se oponía a la opción de invadir Panamá. Woerner había sido jefe del Comando Sur desde enero de 1986 y todavía no terminaba el período para el que se le había comisionado esta posición. Pero por oponerse al operativo militar, la Casa Blanca lo removió. El primero de octubre, Woerner fue reemplazado por el Gral. Maxwell Thurman, un ex-miembro de los servicios de espionaje en Vietnam que había llegado a la edad de retiro obligatorio. Para completar el cuadro formado por quienes se encargaron de la invasión a Panamá, en octubre Bush también reemplazó a Crowe, quien fue sustituído por Powell en la posición de jefe del Estado Mayor Conjunto.[15]

Durante los meses previos a la invasión, la opinión pública panameña y la internacional ya habían sido familiarizadas con la idea de una incursión militar norteamericana. Para insensibilizar a las tropas panameñas sobre la presencia de soldados norteamericanos en el país, desde 1988 el Comando Sur ordenó ejercicios militares unilaterales a través del istmo, maniobras que antes del diferendo Noriega-Washington las tropas estadounidenses acantonadas en Panamá realizaban conjuntamente con las FDP. Especialmente a raíz de la anulación de las elecciones de mayo, Washington aumentó el número de sus tropas en Panamá y ordenó llevar a cabo ejercicios militares en varias ciudades del país. En el mes de agosto éstas maniobras incluyeron la detención arbitraria de pobladores de las áreas periféricas a la ciudad capital, un operativo de simulación de defensa a la Embajada estadouni-

dense mediante el despliegue de cincuenta marines y siete helicópteros, la toma de la central potabilizadora de Chilibre (en las afueras de la ciudad de Panamá), y el cerco a uno de los edificios de las FDP en Amador (segundo en importancia después del Cuartel Central). Respecto a ello no fueron pocas las denuncias que emitieron el gobierno y grupos independientes de la sociedad panameña, pero que encontraron escasa resonancia en la comunidad internacional.

Pero al igual que la comunidad internacional, Noriega y su Estado Mayor minusvaloraron esa posibilidad y no prepararon a sus tropas ni a la oficialidad para enfrentarla, a pesar de las múltiples evidencias en torno a la inminencia de la invasión. En las semanas que precedieron al operativo militar, algunos asesores de Noriega subestimaron los reportes de inteligencia que indicaban que los E.U. preparaban una acción armada contra el país. El día 19, cuando Noriega y su Estado Mayor tuvieron las primeras noticias sobre la inminente intervención, consideraron que no era posible una invasión masiva porque "*lo que nos llegaba estaba caracterizado por un cúmulo de desinformaciones, lo cual es lógico y natural.*" Según el Cap. Eliécer Gaytán, quien estuvo junto a Noriega en esos momentos, la desinformación iba dirigida más bien a Noriega y sus mandos militares para engañarlo acerca de los verdaderos objetivos de la incursión militar.[16]

Entre los miembros del Estado Mayor hubo algunos que incluso le entregaron a Noriega reportes falsos que negaban la inminente invasión, ya que apostaban que Washington había optado por una "operación quirúrgica" y contaban con que ello les llevaría, al acabar con Noriega, a tomar las riendas del poder.[17] Ese 19 de diciembre circulaban muchos rumores entre la oficialidad de las FDP. El rumor que más les inquietaba era el de un inminente reajuste en el Estado Mayor para fortalecer con oficiales jóvenes a las FDP y así garantizar una transición nacionalista a la crisis. De hecho, se habían estado produciendo cambios en los mandos de los diferentes cuarteles. Según Gaytán, "*se sospechaba que miembros del Estado Mayor, del G-2 (inteligencia) y del G-3 (armas) del ejército, ante su inminente desplazamiento, habían hecho infidencias al ejército y los servicios estadounidenses*".[18]

Otros miembros de los servicios de inteligencia de Noriega

notaron que un ochenta por ciento de los empleados de la Embajada de E.U. — contrariamente a su rutina — mostraron tener planes para salir del país con motivo de las festividades de fin de año. Pero más que advertirlo, ellos también planearon salir de Panamá.[19]

Como señales evidentes del operativo, durante todo el día del martes 19 de diciembre aterrizaron en las bases de E.U. en Panamá aviones cargados con grupos numerosos de soldados que luego tomarían parte en la invasión. Incluso, la Cía. Bravo de la 82 Aerotransportada ensayó ataques en las inmediaciones de Cerro Tigre, lugar donde se encontraba un centro militar de las FDP.[20] Todavía, Noriega recibió información fehaciente sobre la inminente operación entre el 18 y el 19 de diciembre, pero sin que ello provocara algún cambio sustancial en las actividades gubernamentales. En efecto, Noriega fue informado desde E.U. sobre la inminencia del operativo militar, según información que logró recabar las instalaciones de la agencia de seguridad nacional de E.U. en Panamá, misma que recogió información pertinente al tamaño de las unidades panameñas y el tipo de armamento desplegado a raíz de ésta información.[21]

Durante el 18 y el 19 de diciembre, Noriega recibió múltiples informes que destacaban la inminencia del operativo militar. Un ex-agente de los servicios de inteligencia israelies y asesor de Noriega, Mike Harari, partió en un avión de carga C-130 israeli, horas antes de la invasión, llevándose los documentos que mostraban los vínculos de Noriega con el gobierno de ese país.[22] Asimismo, tres horas antes de la invasión un oficial del círculo personal del Gral. Noriega se comunicó con una reportera de un diario neoyorquino para decirle que las FDP estaban esperando la llegada de las tropas norteamericanas.[23] En Río Hato, uno de los objetivos militares de la invasión, la oficialidad conocía desde las siete de la noche que la Cía. Aerotransportada había salido de Estados Unidos con destino a Panamá.[24] Además, horas antes del inicio del operativo algunos efectivos militares estadounidenses le comunicaron a algunos residentes de El Chorrillo que sus viviendas entrarían dentro de los objetivos militares del inminente operativo militar. Y, según documentos en poder del ejército de E.U., Noriega también supo de la invasión cuando miembros de su servicio de inteligencia escucharon a un soldado estadou-

nidense llamar por teléfono a su madre y quejarse de que la acción bélica iba a interferir con sus vacaciones.[25] Por ello, la inacción de Noriega ante tales reportes muestra que o decidió deliberadamente no enfrentar la invasión y esperar que sus tropas dieran la batalla o su capacidad analítica se diluyó repentinamente ante estas circunstancias.

De allí que cuando el comandante de operaciones de la invasión a Panamá, el Gral. Carl Stiner, supo entrada la noche de aquel martes 19 que elementos de las FDP emitían por radio advertencias en las que destacaban la inminente entrada de tropas norteamericanas y que la invasión estaba supuesta a iniciar una hora después de medianoche, para mantener el factor sorpresa intentó adelantar la hora en que estas empezarían la operación.[26] Así, mientras que algunos soldados panameños se preparaban para combatir a las tropas invasoras, los más tarde impuestos como gobernantes del país estaban fuertemente resguardados en la base norteamericana de Fort Clayton en espera de juramentar allí sus nuevas funciones ante personal de segunda categoría de la embajada de E.U., varios oficiales militares norteamericanos, y dos ciudadanos panameños de una organización de derechos humanos que más tarde se encargaría de encubrir el número de víctimas causadas por la invasión.[27]

En consecuencia, la colaboración — directa o indirecta — de un segmento del Estado Mayor de las FDP con los planes de la administración Bush y la incapacidad política tanto de Noriega como de sus seguidores inmediatos para enfrentar las condiciones imperantes, crearon las bases para el inicio de un nueva etapa de la crisis iniciada treinta meses antes: el inicio del operativo militar, y con él, la ocupación de Panamá por tropas estadounidenses.

El instrumental en la estrategia de la invasión

El peso fundamental para el logro de los objetivos estadounidenses recayó en el sofisticado armamento militar utilizado durante la invasión. E.U. empleó en Panamá arsenal militar inicialmente diseñado para su uso en escenarios de guerra convencional entre las fuerzas de la OTAN y el Pacto de Varsovia, cuyo desarrollo fue producto de varias décadas de investigación por parte del complejo militar-industrial norteamericano. Asimismo, E.U. empleó estrategias de guerra mejoradas desde su derrota en Vietnam ya probadas en Grenada en 1983 y reformuladas para su uso contra el gobierno sandinista en Nicaragua en la década de 1980. De allí que una vez tomada la decisión de invadir tres meses antes, el plan del operativo militar haya tenido que concentrarse mas bien en la adecuación de éste a las condiciones del terreno que habría de recibir a sus fuerzas.

Parte integral de ésta operación militar fue la utilización del avión Caza F-117 Stealth. La noche del 19 de diciembre seis F-117 despegaron de su base en Tonopah Test Range en Nevada, volaron en dirección sureste y sin hacer escala alguna llegaron la medianoche del 20 de diciembre para iniciar la parte medular de la invasión.[28] El grupo de aviones se dividieron en tres pares — uno que ataca y otro que respalda — para dirigirse contra tres de los principales objetivos militares: el Cuartel Central y el Cuartel de Panamá Viejo, ambos en la ciudad de Panamá, y la base militar de Río Hato, que resguardaba también la Escuela Militar Gral. Tomás Herrera para cadetes y sub-oficiales, una Compañía de Expedicionarios y el Batallón especializado Machos de Monte.[29] Como parte de esas incursiones, los F-117 lanzaron una bomba de una tonelada cada una lo más cerca posible de estos cuarteles, para preparar el terreno para un asalto heliotransportado. Sin embargo, lo sorprendente de su uso no fue el que, tal y como lo habían previsto los planificadores de la operación, éste arrojó su mortífera carga esa noche contra los objetivos antes señalados y sus alrededores, sino su extrema sofisticación frente al tipo de armamento con que contaban las fuerzas panameñas.

En efecto, las capacidades del Stealth son únicas: ninguna otra aeronave en el mundo puede penetrar las defensas aéreas de otro país sin ser detectado, lanzar municiones con la certera guía de rayos láser, y todavía regresar con una cinta de video que muestra el objetivo atacado, gracias a un instrumento colocado oportunamente en la punta de la aeronave que le permite guardar información vital sobre su misión.[30] La tecnología Stealth o furtiva con la que fue construida está destinada a incrementar la capacidad del conjunto de armamentos

utilizados en una incursión militar de cualquier índole en cumplimiento de su misión. El conjunto de sus capacidades hace casi imposible que sea percibido y retrasa la posibilidad de que sea seguido cuando se de la ocasión de que sea detectado,[31] aunque según sus diseñadores esto es poco probable. Todavía no se ha construido el radar que pueda detectar esta aeronave. Ineludible y cubierta con una pintura negra especialmente desarrollada para evitar reflejos, la capacidad de evitar del Stealth F-117 es mayor en noches sin luna y en determinados tipos de clima que le permiten utilizar su capacidad furtiva perfectamente.

El desarrollo de esta sofisticada tecnología es producto de varias décadas de investigación, desarrollo y espionaje. La idea de construir una aeronave militar más efectiva de tal manera que sea menos detectable fue desarrollada inicialmente por los diseñadores aeronavales que trabajaron para Adolf Hitler en el último año del Tercer Reich. Ellos lograron concebir, diseñar y en sus últimos modelos, construir, la serie *Horten Ho*, cuya esencia y forma contribuiría al desarrollo del actual F-117 Stealth.[32] Antes de ser usado por primera vez contra un objetivo militar, E.U. logró con ésta tecnología penetrar exitosamente el espacio aéreo soviético sin ser detectado,[33] superando con ello intentos similares — uno en 1960 que terminó con el derribo de la unidad en plena incursión sobre territorio soviético y las protestas airadas de éste, y otro sobre Cuba en 1962 durante la llamada *crisis de los misiles.*

Definitivamente, el pleno desarrollo del caza-bombardero Stealth es producto de la necesidad de superar los escollos que había encontrado en el pasado la operatividad de la doctrina militar norteamericana. Cuando en 1969 el Pentágono empezó a poner en práctica la idea del Stealth, esta unidad estaría supuesta a sobrevivir la detonación de armas nucleares en su inmediata vecindad. De allí que la administración Reagan, que preparaba a su país para una confrontación nuclear con la Unión Soviética, le haya dado prioridad a su construcción.

El armamento que esta nave contiene es guiado por láser y por sensores infrarrojos que producen imágenes de alta resolución de objetos distantes. Es, además, respuesta a un escollo particular con el que E.U. se encontró durante la guerra de Vietnam: la necesidad de aumentar la efectividad del conjunto de bombarderos. Estrategas de la Fuerza Aérea de E.U. observaron que durante la campaña de bombardeos en Vietnam entre 1965 y 1968, se lanzó un enorme tonelaje de bombas y que gran parte de ellas le atinaron a objetivos no importantes.[34] Revelada su existencia en noviembre de 1988 por la Fuerza Aérea de E.U., su desarrollo por la Lockheed fue ordenado por la administración Carter en 1978, con el objetivo de encontrar una aeronave precisa para ser usada en ataques encubiertos contra objetivos de alto valor estratégico, provocando un mínimo de daños colaterales. No obstante, el primer modelo Stealth voló por primera vez hasta junio de 1981 obteniendo resultados positivos en diversas pruebas y llegó a ser operacional hasta 1983 — por lo que no pudo estar listo cuando en 1980 el presidente Carter lo necesitó para el rescate de los rehenes estadounidenses en Irán.[35]

La tecnología que esta aeronave utiliza cambia radicalmente la forma como se efectúa el enfrentamiento en las guerras, ya que otros aviones no pueden hacer sus operaciones por sorpresa. Así, un operativo militar basado en la tecnología Stealth requiere de una menor cantidad de aeronaves, tiempo y hombres, ya que no se necesitan muchos de estos para un efecto devastador sobre las filas enemigas. Durante la invasión, la presencia del Stealth — hecho de una aleación de aluminio con algo de titanio — no fue detectada siquiera por los radares de las bases norteamericanas en el istmo. Además, nunca aterrizaron en territorio panameño, ya que fueron abastecidos en vuelo por aviones cisterna. El avión, mantenido en secreto desde su construcción, según el Departamento de Defensa fue utilizado por primera vez durante la invasión, "fundamentalmente por su capacidad para realizar operaciones nocturnas."[36] A pesar de que en su oportunidad el secretario de Defensa, Dick Cheney, se esforzó en demostrar la precisión milimétrica del bombardero F-117, durante su operación — según reconoció él mismo después que un fotógrafo de *The New York Times* fotografió un cráter de bomba muy alejado del objetivo militar — por lo menos uno de ellos falló completamente el blanco.[37] Aparentemente, el piloto debe conocer con exactitud el objetivo y saberlo reconocer en las pantallas del avión a través del cual dirige sus municiones. Sin embargo, al experimentar condiciones para las que no estaban

entrenados — humedad y neblinas — los pilotos de estas aeronaves no lograron la precisión que deseaban en su bombardeo al Cuartel Central, lo que se tradujo en el "error" que condujo a la destrucción de varios edificios-habitación circundantes: El Chorrillo.

Para los que lograron verlo durante la invasión, su extraña forma y el tipo de armamento que esta aeronave contenía les impidió reconocer lo que se cernía sobre la población panameña que habitaba el barrio aledaño al Cuartel Central. Según un testigo, *del vientre de aquella extraña nave salió de pronto una enorme lengua de fuego derritiendo todo lo que se encontraba a su paso. No,no echaba abajo los edificios — de eso se encargaron los bombarderos pesados que le precedieron. Este, en cambio, penetraba los muros, consumía mobiliario, maquinaria, vidas humanas sin hacer un sólo boquete... familias enteras quemadas, calcinadas, o quien sabe cómo pueda llamarse a lo que ocurrió con sus cuerpos que se deshacían entre los dedos cuando se pretendía recogerlos.*[38] Otros testigos oculares que presenciaron o realizaron la autopsia sobre los cadáveres provenientes de las áreas en que éstas aeronaves lanzaron su carga, revelaron que con éstas fue probada un nuevo tipo de arma que destruía órganos internos sin causar fracturas de huesos o abrir agujeros en la piel.[39] Inclusive, testigos presenciales mencionaron casos en que un cuerpo que había recibido un proyectil se prendió al tener contacto con el agua, y otro en el que el cuerpo aparentaba estar entero pero al tocarlo se desintegraba completamente.[40]

La incapacidad de la población panameña afectada de precisar sobre la nave que las atacó se debe a la forma como esta nave está construida, nunca vista por aquellos que afrontaron la invasión: el F-117 está formado por un conjunto de superficies perfectamente planas — para controlar la manera como el cuerpo dispersa las ondas de radar. Vista desde su frente, muestra una forma piramidal: de alas puntiagudas y con su cola en forma de "V", vista desde abajo aparenta un murciélago de acero. Desde el punto de vista del Pentágono, su uso fue un éxito rotundo, tanto que varias de éstas naves fueron utilizadas para combatir las fuerzas iraquíes en el conflicto del Golfo Pérsico en 1991. En esta última intervención, no es casual que se haya iniciado en una noche de luna nueva, precisamente cuando los Cazas Furtivos tienen su mayor efectividad.

A los caza-bombarderos F-117 le siguieron aviones C-141 y C-130, tampoco detectados por el radar. Aviones Supersónicos SR-71, Helicópteros CH-47, OH-58, Blackhawks, Hueys y Cobras utilizados ampliamente en el operativo militar, se encontraban en territorio panameño desde el lunes 18 de diciembre, custodiados por las tropas estadounidenses acantonadas en sus bases militares en el istmo.[41] A una altura de sólo doscientos metros y sostenidos en redes *Kevlar* (un material delgado y ultrarresistente que reduce los riesgos de muerte), los soldados estadounidenses saltaron sigilosamente sobre territorio panameño. Con un nuevo sistema de visión nocturna a base de radiación infrarroja, estrenado por Inglaterra en la guerra por las Malvinas, las tropas de E.U. pudieron movilizarse ágilmente. Once helicópteros Apache AH-64 (construidos por la Mc Donnell Douglas Corp.) cuyo costo asciende a catorce millones de dólares cada uno, armados con misiles Hellfire y cañones de fuego rápido de 30mm, apuntaban a sus objetivos con rayos láser desde una altura aproximada de mil metros, permitiéndoles ver a sus pilotos como si fuera de día, para entonces disparar sus cañones sobro todo lo que se movía. Dado que éstos helicópteros poseen un visor infrarrojo para operaciones nocturnas, sus acciones resultaron eficaces para evitar, en la medida de lo posible, la guerra cuerpo a cuerpo — y reducir en lo posible las bajas propias.

También participaron aviones-ametralladora Spectre, repletos de cañones de tiro rápido y otros aparatos de precisión similarmente sofisticados, "*con capacidades de observación nocturna tan avanzadas que pueden discernir sobre los individuos en tierra y distinguir formaciones en números exactos.*" Cuando el Spectre dispara, puede lanzar más de dieciciete mil municiones por minuto, "*pulverizando cada una de las pulgadas cuadradas de tierra en un área del tamaño de un campo de fútbol* (americano) *en tiempo récord.*"[42] Tanques Hummer, "Jeeps" modernos y toda clase de vehículos artillados y blindados durante el operativo de la invasión recorrieron las calles de ciudades y pueblos para ocupar así, perentoria y contundentemente, la totalidad del territorio nacional.

Con este armamento, E.U. empleó su más alto grado de desarrollo tecnológico-militar en la invasión. Estratégicamente, sin embargo, era absolutamente innecesario el uso de

tan sofisticada tecnología para derrotar a las *tropas* panameñas. Panamá no contaba con una aviación que *tuviera* la capacidad al menos de menguar el poder de fuego de los aviones regulares de la Fuerza Aérea de E.U., mucho *menos* de los que utilizó durante el operativo militar. Incluso, *una* de las primeras medidas tomadas por el Pentágono al *inicio de la* invasión consistió en inutilizar las pocas aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea panameña. *En efecto*, haber hecho uso de las colinas circundantes al canal era suficiente para impedir que las fuerzas panameñas localizaran las naves regulares adversarias: en el período anterior a la invasión los radares panameños no sólo no operaban de noche normalmente, sino que la mitad de ellos no podían usarse debido al embargo estadounidense a las piezas de repuesto destinadas alas FDP.[43]

El empleo de armamento sofisticado contra una institución militar panameña que tenía una muy reducida capacidad para enfrentar el poderío bélico estadounidense debe entenderse como la vía que el Pentágono usó para pretender resolver dos asuntos que consideró fundamentales. De hecho, incluso el uso del F-117 Stealth en una eventual intervención a Panamá había sido planeada en 1988, ya que desde el punto de vista de Washington, "*en la medida que la lista de opciones disponibles para tratar con el régimen del general Manuel Antonio Noriega decrecían, la lista de opciones militares del Pentágono empezaron a crecer...* (por ello) *estrategas de la Fuerza Aérea de E.U. con acceso al Senior Trend* [programa de desarrollo del Stealth] *estuvieron envueltos en el proceso e identificaron una gama de objetivos que el F-117 podría atacar*".[44] El uso del Caza Furtivo estaba supuesto a servir fundamentalmente para evitar el combate cuerpo a cuerpo en el mayor grado posible.

El ideal de toda guerra es el de causar el mayor número de bajas posible a las filas enemigas y el de reducir las propias. Este ideal reconoce que en medio del combate, seres humanos propios y adversarios están sujetos a tensiones en cualquier momento, lo que puede menguar su voluntad para pelear y así repercutir negativamente en la consecución de los objetivos estratégicos. Así, el uso de armas sofisticadas le otorgó a los estrategas militares la seguridad de que fallas humanas no puedan incidir contrariamente en los objetivos del conjunto de la misión militar. Además, dada la cercanía de las fechas para las cuales el presupuesto del año fiscal de 1990 era enviado al Congreso, el uso de todo el poderío bélico estadounidense estaría supuesto a que éste, que buscaba reducir las partidas militares para reducir el enorme déficit fiscal, apruebe las *partidas* para el desarrollo de armamento todavía más complejo.

El manejo de la información dentro del operativo militar

Parte primordial del operativo de la invasión consistió en observar un meticuloso cuidado sobre la información que se daba a conocer de lo acontecido. Como táctica primordial de la estrategia de guerra, esta disposición se origina en la percepción sobre el papel de los medios de comunicación en el conflicto de Vietnam: la idea de que frente a la participación bélica de E.U. en el sudeste asiático la cobertura televisiva y periodística sobre los muertos estadounidenses y sobre los estragos causados a la población civil vietnamita restringieron el uso de las acciones necesarias para la victoria estratégica. Según el mayor Cass D. Howell, la televisión fue el instrumento que cambió el sentimiento nacional de su país con respecto al papel de sus tropas en Vietnam, de un fuerte apoyo al esfuerzo de guerra a pensar que la participación en Vietnam no sólo era un error, sino que era inmoral. Según Howell, "*la gran diferencia entre la guerra de Vietnam y sus precursoras está no en la forma cómo se llevó a cabo, sino en su imagen, una imagen formada por... la televisión*". De allí que el militar concluya que lo que las futuras guerras necesitan no la libertad de prensa, sino libertad de la prensa, y vaticinó que "*en nuestra próxima guerra, las cámaras de televisión deben permanecer en casa*",[45] tal y cómo sucedió en la invasión a Panamá y en el Golfo Pérsico. Similarmente, un estratega militar concluyó que "*el derecho del público*" estadounidense a la información es secundario al "*derecho a ganar*".[46] Los estrategas de Washington concluyeron que uno de los imperativos estratégicos de la confrontación es el de impedir que se conozcan tanto el número real de las bajas propias como de las adversarias — amén de

las inocentes víctimas civiles — así como las formas como E.U. lucha por sus objetivos, porque ello influye negativamente en el apoyo que su sociedad le da a su participación en conflictos bélicos, y así, a sus tropas.

Siguiendo estas disposiciones inherentes a la información las tropas invasoras acosaron y acribillaron a los periodistas que pretendían cubrir la invasión desde Panamá. Tropas estadounidenses asesinaron al fotógrafo español y reportero de *El País* de Madrid, Juan Antonio Rodríguez, durante el segundo día del operativo militar, aún después de que él se había identificado cuando cubría el desarrollo de la invasión frente al Hotel Marriot en la ciudad de Panamá. A la vez, fueron detenidos por más de una hora tres corresponsales de la agencia española EFE, cuyas instalaciones además fueron cañoneadas por el ejército.[47] También fue arrestado el jefe de de la agencia Prensa Asociada (AP) para Centroamérica y Panamá, y heridos otros fotógrafos de las agencias Sigma y Reuter. Esto cobra mayor significado si lo vemos a la luz de la oposición del gobierno y prensa españolas a la invasión de Estados Unidos a Panamá.

Con el mismo objetivo de reducir la información sobre el desenvolvimiento de la invasión, al conjunto de la prensa norteamericana traída a Panamá para que reportase los sucesos, no se le permitió salir hacia donde se llevaban a cabo los combates y otras acciones militares sino habían finalizado la mayor parte de estas operaciones. Recordemos que también fue encontrado sin vida en el Hotel Marriot el productor de la cadena CBS de televisión poco después de la muerte del fotógrafo español en sus inmediaciones — hecho que si bien no puede serle atribuido directamente a las tropas de E.U., su parte de la responsabilidad en los hechos debe ser destacada, porque dicho hotel (al igual que otros en la ciudad) estaba ocupado y custodiado por tropas y oficiales estadounidenses.

Además, a pesar de que no se le permitió a la prensa estadounidense cubrir los acontecimientos que habían ido a reportar, en lugar de protestar gran parte de estas mas bien colaboraron con las maniobras manipuladoras del Pentágono. En este sentido, cuando sólo habían transcurrido unas horas del inicio del operativo militar, la prensa norteamericana la consideró un éxito total, absteniéndose de presentar las imágenes que demostraban los daños causados a la población civil y exhibiendo únicamente las imágenes que mostraban a grupos de panameños en la ciudad capital festejando la incursión armada. Sólo habían pasado ocho horas desde el inicio de la invasión cuando un reportero de la cadena televisiva ABC describió la situación reportando que "*todo parece bajo control... y aunque todavía se nota alguna resistencia y no se sabe el paradero de Noriega, parece que hay una calurosa bienvenida*" por parte del pueblo panameño a las tropas invasoras.[48] Un locutor de un noticiero en Estados Unidos intentó hacer un análisis de lo acontecido en Panamá y fue sumariamente silenciado mientras estaba en el aire.[49]

La suspensión de las transmisiones de videos sobre la invasión que ordenó el Pentágono una vez iniciado el operativo militar tuvieron el mismo objetivo de controlar la información sobre el desarrollo del mismo. Las cadenas de televisión mostraron visiones que contradecían las afirmaciones de los altos jefes militares norteamericanos sobre las muertes de sus soldados y la devastación producida por sus fuerzas en Panamá. Entre las más significativas estaba una toma filmada sobre un camión 10 ruedas atacado en Río Hato por la resistencia panameña que logró volarlo junto a sus aproximadamente treinta tripulantes; y otra que mostraba episodios en que decenas de soldados norteamericanos que caían en paracaídas fueron alcanzados por el fuego cruzado.[50]

El Pentágono manipuló la información sobre los pormenores de la intervención para obstaculizar la formación de opiniones adversas a su participación militar en el istmo. La percepción que tuviera el pueblo estadounidense sobre la intervención de sus tropas en Panamá era esencial para justificar el uso de la fuerza que la Casa Blanca decidió utilizar para lograr sus fines estratégicos, mientras que la visión de la población panameña era fundamental para obtener su apoyo o aquiescencia al régimen instalado. Para ello, la administración Bush vendió la imagen de que la invasión era una operación antinarcotráfico, destinada a atrapar a un narcotraficante.

Durante el operativo de la invasión, la Casa Blanca repitió continuamente que su objetivo en Panamá era el de llevar al general Noriega a territorio de E.U. para ser enjuiciado por cargos relacionados con el narcotráfico. Pocas horas después que se inició la invasión — un momento preciso para este tipo

de anuncios — la administración Bush anunció que había enviado agentes del FBI y de la DEA a Panamá para buscar supuestos narcotraficantes.[51] Obviamente, no encontraron ninguno. Posteriormente, el Comando Sur incluso anunció que las tropas norteamericanas encontraron envolturas con droga en la residencia de Noriega, unos cincuenta kilos de cocaína. Esta evidencia, sin embargo, más tarde resultó haber sido inventada: según reportó el Pentágono, estas envolturas no eran sino tamales de maíz envueltos en hojas de la planta del plátano. Consistentemente con la táctica propagandística, el desmentido se produjo semanas después, cuando la información vertida ya había surtido efecto.

De allí también que una de las primeras medidas del operativo de la invasión fue el control de los medios de comunicación panameños. Así, las tropas norteamericanas avanzaron y tomaron los canales de televisión, a través de los cuales emitieron sus propias proclamas y especialmente, un símbolo del Departamento de Estado, y bombardearon Radio Nacional, que había estado emitiendo proclamas antiintervencionistas de la resistencia. Asimismo, las tropas estadounidenses cortaron, durante el operativo, el sistema de cable-TV. Ostensiblemente, esta medida estaba destinada a impedir que los panameños conocieran la reacción internacional contraria a la invasión que se transmitía por el canal mexicano. Mientras duró el operativo, los panameños sólo tenían acceso al Canal 8 de Televisión, manejado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde una de sus bases en territorio panameño.

Una vez estabilizada la situación en la ciudad capital, el Comando Sur adjudicó el conjunto de diarios antes oficialistas —Editora Renovación — a incondicionales del nuevo gobierno para evitar que en el futuro estos difundieran información contraria tanto a E.U. como al gobierno inaugurado en Fuerte Clayton. Por varios años estos diarios habían estado en la mira del Comando Sur: según el Cnel. Ronalds Sconyers, los titulares de estos diarios eran "*representativos de la guerra que está siendo librada en Latinoamérica...* (producen) *una evidente desinformación... que sirve para distorsionar las impresiones sobre los E.U.*".[52]

Para ocultar los objetivos reales para los que el Pentágono emprendió la invasión a Panamá, el Comando Sur propagó el

rumor de que en horas de la madrugada no especificadas su canal de televisión (Canal 8) pasaba filmes encontrados en oficinas o en residencias de Noriega. Supuestamente, en éstos aparecían Noriega con otros funcionarios o personalidades de ambos sexos en sesiones orgiásticas. Con ésta desinformación, E.U. logró dirigir la atención de un considerable segmento de la población panameña hacia la televisión y hacia la versión de E.U. sobre Noriega, en momentos en que sus tropas acribillaban panameños y ocupaban el país. Pocos días después, el Comando Sur dio a conocer un video — pasado una infinidad de veces por las cadenas de televisión nacionales que colaboraron con el esfuerzo estadounidense, en los que mostraban posesiones de Noriega que ellos consideraron como "exóticas": el lujo de sus residencias, los instrumentos que éste utilizaba para sus prácticas de vudú, un retrato o estatuilla de Hitler, un busto de Napoleón, ropa interior roja y revistas pornográficas.

La táctica desinformativa del Comando Sur fue tan efectiva que pocos en Panamá vieron estas afirmaciones a la luz de las intenciones que E.U. tuvo con emitirlas. Vistos comparativamente, el "lujo" enseñado se equipara o es menor al lujo de las residencias de los personeros del régimen instalado por las tropas invasoras. Asimismo, las prácticas esotéricas de Noriega no son significativamente distintas de la no menos estrecha relación del ex-presidente Ronald Reagan y su esposa con una astróloga cuando fungió como jefe de la Casa Blanca.

Lo que trasciende es una táctica propagandística para concentrar la atención de la población panameña sobre la figura de Noriega y anteponer a ella la supuesta virtud e inocencia del soldado norteamericano. Y en el más puro estilo de los Western, fundamentar la diferencia entre Noriega y los "buenos" norteamericanos que se sorprenden con lo encontrado. Esto contrasta con la información vertida por el Washington Post, a pesar de la censura del Pentágono, respecto a la conducta de las tropas norteamericanas en el Golfo Pérsico, quienes veían películas pornográficas antes de emprender las misiones de bombardeo en la guerra contra Irak.[53] Además, un bombero panameño que pidió no ser identificado dijo que vio cómo miembros de las tropas invasoras se drogaban con cocaína antes de emprender una acción contra la resistencia pana-

meña en el Aeropuerto Internacional Omar Torrijos.[54] Según médicos panameños, algunos muertos llegaron a hospitales de la ciudad con sus genitales destruidos por armas cortantes.[55]

El Comando Sur también actuó con riguroso cuidado para ocultar las pruebas sobre el número de muertos causados a Panamá y sobre los que le infligió la resistencia panameña. Durante la invasión, los cuerpos o restos de las víctimas panameñas no fueron identificadas ni entregadas a instancias médicas o a sus familiares. Estos últimos tampoco conocen a cuál de los destinos conocidos fueron a dar sus muertos: fosas comunes, incineración *in situ*, o si terminaron en las aguas de los océanos. Médicos del Hospital Santo Tomás, en la capital, reportaron haber recibido alrededor de quinientos muertos durante el primer día del operativo militar.[56] A pocos días de la invasión, el ex-procurador de Justicia de E.U. durante la administración de Lyndon B. Johnson (1963-1969), Ramsey Clarke, denunció en Panamá que en efecto existía "*una conspiración de silencio*" para ocultar el número real de muertos, ya que ninguna institución médica nacional o norteamericana daba cifras oficiales.[57] Pero un enterrador del Cementerio Amador, en la ciudad capital, informó haber recogido él mismo 200 cuerpos en el área del Cuartel Central, y haber recibido como pago seis dólares por cada cuerpo de parte de las tropas estadounidenses.

A medida que agrupaciones preocupadas por el costo real de la invasión en términos de vidas humanas y pérdidas materiales han continuado con esta investigación, la información recabada sobre el número real de muertos panameños ha mostrado ser mayor. Esta tarea es, sin embargo, difícil, porque el Comando Sur removió todos los registros oficiales de los hospitales y morgues panameños, y el gobierno que juramentó en Fuerte Clayton no está interesado en dar a conocer la magnitud de lo que fueron cómplices. A partir de la invasión, grupos de derechos humanos no oficialistas han destacado cifras que van entre mil y cuatro mil panameños muertos como resultado del operativo militar. En el mes de marzo de 1990, la Cruz Roja reportó extraoficialmente alrededor de dos mil panameños contabilizados como muertos durante el operativo de la invasión.[58] En este sentido, un documento oficial firmado por el mayor Joseph A. Goetzke, jefe de la División de Reclamos

Especiales del Pentágono, describe que "*un estimado de mil bajas civiles es lo aproximado. Parte murió en la sección de El Chorrillo de la ciudad de Panamá, donde diez bloques de casas de alta densidad poblacional fueron destruidos como resultado de nuestras operaciones...*".[59]

Y todo esto contrasta con las cifras dadas a conocer por el Comando Sur estadounidense — aparentemente el único organismo en Panamá con potestad para emitir declaraciones al respecto — a la cual se sumaron avalándola la jerarquía de la iglesia católica y un grupo de derechos humanos que se ha manifestado a favor de la intervención: aproximadamente 300 militares y 250 civiles panameños. A pesar de los informes que muestran lo contrario, y consistentemente con su táctica informativa, posteriormente el Comando Sur destacó que la cifra real de panameños muertos fue todavía menor: cincuenta bajas militares, una sexta parte de la cifra antes mencionada.[60] Desde el punto de vista táctico, la verdad podrá ser dada a conocer cuando ello ya no afecte sus intereses en el país.[61]

Teniendo en cuenta que todas estas cifras se refieren principalmente a los muertos caídos durante la invasión, aún esas cifras resultan sólo una porción del total del número de muertos caídos después que pasó gran parte del operativo, ya que habría que incluir a los carbonizados por el fuego que surgió en El Chorrillo a raíz del ataque a la Comandancia de las FDP, a los que fueron cremados, los que murieron en combate en algunas zonas semimontañosas cercanas a la capital y en el interior, los que murieron a manos del ejército norteamericano por desafiar el toque de queda impuesto por ese país cuando inició la ocupación, y los que todavía serán contabilizados al abrir las fosas comunes construidas por el ejército norteamericano y cuya existencia no ha sido revelada por ahora. Quizás nunca puedan contabilizarse las varias centenas de muertos que, según informó una fuente de la Brigada 193 de Infantería, fueron enviados para su entierro secreto en una base aérea de E.U. en Honduras.[62]

El número de muertos ha sido manipulado, con el beneplácito del gobierno impuesto por las tropas invasoras, para impedir que se conozca la magnitud real de la devastación. La divulgación de tal información va en contra de la imagen en la cual se basó el operativo militar: su contundencia inmediata y

su bajo costo en vidas humanas. En ese aspecto, las *fuerzas* armadas norteamericanas no sólo han procurado *ocultar la* cifra real de los muertos causados a Panamá, sino que han logrado esconder la cifra real de muertos que la resistencia panameña les provocó. Según el ex-jefe del Comando Sur, Fred Woerner, esta discusión es muestra de que hay "gato encerrado": "*en una sociedad que ha hecho casi un fetiche de la precisión estadística, la* [falta de una contabilidad sobre los muertos] *exacerba las sospechas de que hay algo que esconder*".[63]

Varios testimonios y hechos apuntan a que el número de bajas mortales inflingidas por los panameños fue mucho mayor. Durante las primeras horas de la invasión, soldados panameños lograron derribar un helicóptero Cobra y su tripulación, cuya foto habría de aparecer en el vespertino panameño *La República*, en edición del mismo 20 de diciembre. Recordemos también los soldados que descendían en paracaídas en Río Hato durante las primeras horas de la invasión, muchos de los cuales fueron acribillados por la resistencia panameña — que ya conocía de su llegada — antes de llegar a tierra.[64] En este sentido, también hay que evaluar las consecuencias de que, por dos días consecutivos, la resistencia panameña logró combatir a las tropas norteamericanas en su propio centro de operaciones, en la ribera del Canal. Un testigo ocular del enfrentamiento que se dio en el Aeropuerto Internacional Omar Torrijos mencionó que sólo durante la primera hora del suceso, personalmente contabilizó dieciocho bajas mortales a las tropas invasoras, y que en las horas siguientes cayeron muchas más antes de que el resto de las fuerzas estadounidenses lograra controlar el aeropuerto.[65] Según el Cap. Eliécer Gaytán, las tropas panameñas mataron al menos 375 soldados y "*un buen número de heridos*".[66] Las cifras dadas por los panameños resultan creíbles en la medida que las tropas conocían la fecha y la hora del inicio — si bien no necesariamente de su magnitud — del operativo estadounidense al menos dos horas antes, por lo que es factible que estuvieran esperando la llegada de las tropas norteamericanas para enfrentarlas, y esto le haya causado al ejército invasor un número de bajas mucho mayor del admitido.

La capacidad del Pentágono para ocultar el número real de bajas mortales tiene varias vertientes. Recordemos primero que Collin Powell expresó públicamente durante el primer día de la invasión que no estaba a gusto con la cantidad de muertos estadounidenses provocado por la resistencia panameña, lo que sugiere que este número era mucho mayor que lo esperado. Sólo durante este primer día, el Comando Sur reportó dieciséis bajas mortales,[67] y a mediodía del segundo, diecinueve. Pero a raíz de las declaraciones de Powell, el Comando Sur puso un alto al número de bajas aceptadas como tales. Las cifras debían alterarse para impedir que el apoyo de la sociedad norteamericana a la invasión a Panamá aminorara al conocer el número de muertos que esta tenía en la medida que se ampliaban los plazos para dar por terminada la operación. A esto ayudó la colaboración de los medios de información norteamericanos con el esfuerzo de guerra de su país, y el casi total acriticismo con el que cumplieron su labor de portavoces del Pentágono. Una posibilidad es que Estados Unidos haya empleado mercenarios nicaragüenses y cubanos para el operativo, cuyas bajas obviamente no se contabilizan como bajas estadounidenses, ya que no figuran en las listas de las tropas norteamericanas enviadas a Panamá.[68]

El Pentágono no ha dado a conocer públicamente los nombres de todos los soldados muertos. Hacerlo implicaría permitir que los familiares de los que no aparecen en lista protesten públicamente, y de esa manera hacer conocer que el número real de bajas estadounidenses es mucho mayor. Recordemos que E.U. es una nación de una gran extensión territorial y con una población de más de 220 millones de habitantes. Esto facilita la labor del Pentágono de ocultar las cifras, ya que la procedencia de cada una de estas bajas es distinta en la mayoría de los casos: hay además una nula relación entre los familiares de las víctimas, se diera el caso de que estos quisieran investigar o ir más allá de lo manifestado por las autoridades militares de ese país. Y a esto añadamos que los soldados enviados a Panamá fueron en un veinticinco por ciento mexicano-americanos,[69] generalmente de familias pobres que no tienen otra oportunidad para desarrollar una profesión que no sea el ejército, seleccionados como reclutas sin rango, a los que podemos atribuirles poca experiencia y poca voluntad para cuestionar las directrices militares. De

haber una investigación exhaustiva sobre estos acontecimientos, ésta revelaría que el número real de las bajas estadounidenses es mayor que las reconocidas por el Comando Sur en la invasión a Panamá.

Por ahora, las posibilidades de profundizar en la investigación son mínimas. Aludiendo a la desinformación que circundó el operativo militar, el congresista por Nueva York Charles Rangell destacó que los medios estadounidenses realizaron una cobertura superficial y acrítica tanto sobre la invasión como sobre sus causas y consecuencias. El Pentágono no accedió a ninguno de sus pedidos de una mayor información, un vacío que "*la prensa estadounidense no ha hecho nada para llenar*". Incluso, el Pentágono se ha rehusado a proporcionar las cintas filmadas tanto por sus efectivos como por las naves de sofisticada tecnología,[70] ya que éstas podrían desmentir gran parte de la información sobre la que el Comando Sur basó su fundamentación de la estrategia de la invasión.

La secuencia de las tácticas

Durante la invasión, el factor tiempo — duración y secuencia de las tácticas — fue vital para consumar la victoria estratégica. La doctrina militar estadounidense designa que, si bien la estrategia establece los objetivos que se deben lograr, es en el "nivel operativo de la guerra que las varias piezas tácticas tienen que juntarse para crear las condiciones militares que hacen alcanzar los objetivos estratégicos". Así, el nivel operativo "*se encuentra entre estrategia y tácticas en la secuencia de la guerra*".[71] Consecuentemente, cada táctica aumenta su capácidad de influir los acontecimientos de tal manera que el éxito relativo de la incursión armada dependa del momento en que se pone en práctica. Por ello, planificar la operación para que ésta tome el menor tiempo posible es fundamental para evitar que surjan conflictos sobre las tácticas o sobre la capacidad de controlar previstos e imprevistos en la secuencia del operativo. La importancia del factor tiempo hizo a la Casa Blanca invadir Panamá antes del 31 de diciembre de 1989, así como ordenar el ataque masivo contra Irak ante la crisis del Golfo Pérsico. Como ejemplo, tenemos que en éste último caso,

mientras el Gral. Collin Powell — quién aseguró que la invasión a Panamá era la única opción para tratar el caso Noriega — ante la capacidad bélica de Irak propuso una estrategia de "*estrangulamiento económico-diplomático*". Sin embargo, Bush respondió a favor de una guerra porque no había "*tiempo político para esa estrategia de contención*".[72]

Por ello, los comandantes de la invasión ordenaron a sus tropas asegurarse de que los ataques a los objetivos estratégicos sean hechos simultáneamente. La simultaneidad de los ataques tanto a Panamá como a Río Hato tuvo la virtud de lograr que todas las unidades de las FDP dispuestas a luchar, defendieran sus respectivos centros militares y no pudieran unificar sus esfuerzos defensivos con otras agrupaciones civiles y militares. De la misma manera, la simultaneidad de los ataques le permitió a Washington alcanzar la victoria estratégica lo más rápido posible, al concentrar el mayor número de tropas y armamentos en distintos escenarios y lograr con ello la respuesta — y su aniquilamiento o neutralización — de las tropas panameñas a la ofensiva militar.

En este tenor, los bombardeos a los cuarteles Central y Panamá Viejo no tenían el objetivo de alcanzar a Noriega, ya que la inteligencia del ejército estadounidense, si bien no conocía su paradero, sabía al menos donde no estaba. El ataque a los cuarteles respondía más bien a la necesidad de destruir o capturar el armamento que pudiera estar en estos e impedir su uso por parte de las FDP. Además, estos ataques pretendían destruir las bases desde las cuales la resistencia panameña podía operar. Según el analista militar Lorenzo Crowell, el plan bélico de E.U. estaba diseñado para "derrotar las FDP tan decisivamente que aquellos leales a Noriega estarían completamente desmoralizados como para organizar una resistencia antes de que Endara fuera instalado y de que pudieran ser convencidos los panameños de que su futuro estaba en la cooperación con Washington, no en la resistencia".[73]

Así, la juramentación al triunvirato encargado nominalmente de la Presidencia panameña tuvo que darse precisamente poco tiempo antes de que se iniciara el operativo de la invasión. Con ella, la administración Bush pudo obstaculizar, política y legalm[illegible] cualquier denuncia sobre las atrocidades

cometidas durante la invasión, al justificarlas como consecuencia de una solicitud de los gobernantes panameños. Un gobierno formado por nacionales panameños fue preferible a un gobierno directo desde E.U., porque el establecimiento del primero le permite a Washington evadir las críticas tanto de la sociedad norteamericana como de los gobiernos tanto aliados como adversarios, así como deslindarse de las responsabilidades y críticas adversas derivadas de la irresolución de problemas que surgieron tras la invasión.

Siguiendo lo planificado para la secuencia operativa de la invasión, a las siete de la mañana del 20 de diciembre el presidente George Bush tenía preparada una conferencia de prensa en la que había programado anunciarle al mundo el rotundo éxito de la acción militar. Sin embargo, contrario a lo previsto, solo afirmó que, para esas horas, no existía resistencia organizada a la invasión. Más tarde, ante la adversa realidad, voceros del Pentágono y medios de prensa desmintieron lo aseverado por la Casa Blanca, pues aún existía una fuerte resistencia en el país. En E.U., algunos medios expresaron su sorpresa por la respuesta de los panameños: un reportero de la cadena televisiva NBC comentó que "*el Pentágono fue sorprendido por el tremendo nivel de apoyo que hay aquí para Noriega*".[74] El general Maxwell Thurman entonces reconoció que la oposición a las tropas norteamericanas es organizada, y que no sería fácil acabar con los llamados Batallones de la Dignidad.[75] A esto el mismo día se añadían declaraciones sobre la imposibilidad de controlar al Batallón 2000 y la Unidad Machos de Monte previamente entrenadas por E.U. para la defensa de las instalaciones canaleras.

Empero, el problema principal estuvo cifrado en la incapacidad de la inteligencia norteamericana de localizar a Noriega, objetivo declarado de la invasión. La perspectiva de una victoria inmediata que denotara su contundencia se diluía a medida que, tras varios asaltos, redadas y búsquedas casa por casa en diversos lugares de la capital y del interior del país, Noriega no era interceptado. Todavía, el jefe militar panameño fue capaz de enviar mensajes radiales a sus tropas exhortándolos a que sigan con sus actividades de resistencia. En una transmisión por Radio Nacional la noche del 20, Noriega pidió ayuda material y humana para la resistencia, y la noche del 21 y la tarde del 22 se escucharon otros de sus mensajes radiales.

Por la incapacidad de las tropas estadounidenses para encontrarlo, Bush tuvo que realizar un viraje táctico en su posición. Si bien antes de esta situación él había dicho que el objetivo de la invasión era la captura de Noriega, a partir de los nuevos desarrollos Bush planteó un orden distinto de prioridades: proteger a los treinta y cinco mil co-nacionales en Panamá, restaurar a las legítimas autoridades panameñas, ejecutar la obligación de proteger la vía canalera, y en último lugar, poner a Noriega a disposición judicial.[76] El 22 de diciembre, el Pentágono comunicó que su objetivo en Panamá era el de "hacer al país seguro para la democracia".

Por lo mismo, el Pentágono amplió los plazos para dominar la situación: de tres días pasó a cinco, y de cinco a diez. También mencionó la posibilidad de que fuera un mes. La disyuntiva de un empantanamiento empezaba a preocuparle a militares y congresistas. Ante la incertidumbre, Bush ofreció una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que contribuya a dar con el paradero de Noriega.

La premura con que las tropas invasoras necesitaban capturar a Noriega radica en que de esto dependía la rapidez con que E.U. lograría controlar el escenario bélico y así, evitar toda posibilidad de verse envueltos en un atolladero del que sus tropas no podrían salir. El Cnel. Bill Bennet, Jefe de Operaciones de Contingencia del Comando Sur, reconoció que la captura de Noriega sería decisiva para "*restablecer el orden... [ya que] mientras* (Noriega) *pueda hacer grabaciones como las que hizo ayer, no faltarán algunos leales intransigentes... Sin Noriega como punto de referencia, muchas de las unidades que se han mantenido indecisas nos llamarían para decirnos que respaldan al gobierno democrático*".[77] Ciertamente, Noriega se constituyó en el punto de referencia de la resistencia panameña, pues declarar la captura del General como objetivo primario de la invasión contribuyó a que así lo vieran los panameños que confrontaban la intervención extranjera. De allí que el jefe de la CIA haya estado en contra de esto, ya que para él Washington estaba sobreestimando la importancia de la captura de Noriega durante la invasión a Panamá.[78]

De cómo las tropas norteamericanas capturaran al General —vivo o muerto — dependía el futuro de los esfuerzos de la resistencia que gestaban los subordinados de Noriega. Recor-

demos que a raíz de la invasión, una parte sustancial de la tropas de las FDP dejaron los cuarteles y comenzaron a reagruparse en otros lugares para continuar la lucha. De ser capturado muerto, permanecería el simbolismo que envolvió la lucha contra el invasor, lo que podría convertirse en el ingrediente que encendería la llama de la lucha militar a nivel de una guerra de guerrillas durante un tiempo considerable. Esto no sólo pondría en aprietos al gobierno impuesto por las tropas invasoras, sino que alargaría el tiempo en el que soldados estadounidenses estuvieran envueltos en el conflicto panameño, desvirtuando así tanto los objetivos declarados como el apoyo doméstico e internacional que para ese entonces Washington había logrado. Los estrategas del ejército de E.U. observaban que el conflicto panameño, programado en teoría como una acción relámpago, podría alargarse por mucho más tiempo de lo previsto, y que aún en el caso de que Noriega muriera en combate, nada hacía esperar que la resistencia panameña fuera a relajar su lucha ante tal eventualidad. Un mes antes, pensando en ésta coyuntura, una fuente cercana a la planificación del operativo afirmó que quería ver a Noriega "*vivo en Estados Unidos o muerto*".[79]

En este contexto, una fuente militar nicaragüense (sandinista) dijo que Washington debía enfrentarse al dilema de una operación que no salió como se estimaba: "*el fantasma de Vietnam no está muerto... a medida que los cadáveres de los soldados estadounidenses vayan llegando a su país, la opinión pública y el consenso bipartidista que apoyaron la invasión comenzarán a resquebrajarse irremediablemente*".[80] Capturarlo vivo *preferiblemente*, implicaba acabar inmediatamente con esa posibilidad y lograr reafirmar la imagen del operativo militar como un instrumento para capturar un narcotraficante que debía enfrentar un proceso judicial por delitos contra la salud en territorio estadounidense.

En efecto, la preocupación por la posibilidad real de que las tropas invasoras se vieran envueltas en un escenario de donde no pudieran salir por un tiempo indefinido estuvo presente en el transcurso de los primeros días del operativo, a medida que no lograban alcanzar sus objetivos. No tener a Noriega en sus manos le causaba al Pentágono varios problemas cuya resolución no llegaría hasta que no fuese capturado. El más grave era el tiempo que le tomaría a sus tropas tener un completo control sobre el país. A medida que los plazos se alargaran, las tropas panameñas tendrían más tiempo para reagruparse e iniciar una resistencia aún mayor. El segundo problema radicaba en que, al prolongarse la resistencia, gran parte de las tropas panameñas podrían ser aniquiladas en enfrentamientos contra soldados norteamericanos. Esto último significaría una permanencia de sus tropas aún mayor, al no existir un cuerpo militar entrenado que pueda ser cooptado para reemplazar al ejército invasor como sostén del gobierno instalado. Asimismo, con el paso del tiempo también serían mayores las posibilidades de enfrentar una oposición considerable tanto dentro de Panamá como dentro de E.U. y en diversos foros internacionales. Fue en éstas circunstancias cuando el Arzobispo de Panamá, Marcos Gregorio Mc Grath, previno a la Casa Blanca que los panameños se opondrían a la ocupación si E.U. decidía prolongarla.[81] Si ello ocurriera, los objetivos políticos para los que la administración Bush lanzó la ofensiva militar contra Panamá estarían en riesgo.

En el tercer día del operativo de la invasión, el Pentágono consideró que cientos o miles de tropas fieles a Noriega habían ingresado a la selva y que necesitarían un esfuerzo prolongado para sacarlos.[82] Refiriéndose a ésta eventualidad, el Cnel. Charles Stowe, ex-comandante de las fuerzas militares norteamericanas en Panamá, advirtió que dudaba que las FDP hayan sido inmediatamente destruidas como aseguraban las versiones oficiales, ya que dos años antes los militares panameños habían mostrado tener planes de contingencia para enfrentar una invasión de E.U. En estos planes, las FDP había incluido una defensa del país mediante tácticas guerrilleras.[83]

Múltiples razones hacían prever que el operativo militar en Panamá tomaría mucho más tiempo del que se tenía planeado. El 22 de diciembre, las tropas panameñas atacaron la sede del Comando Sur y el palacio Presidencial. El Comando Sur anunció que el canal de Panamá no sería abierto hasta nuevo aviso, con lo que mostraron no estar en control del país. Bush le dijo al Congreso que las tropas estadounidenses permanecerían en Panamá "*el tiempo que sea necesario.*" El recién instalado Vicepresidente Ricardo Arias Calderón escapó de un intento de asesinato. El noticiero CNN anunció que los Bata-

llones de la Dignidad eran dueños de la ciudad. La OEA votó 20 votos a favor, uno en contra, solicitándole a E.U. que retire sus tropas de Panamá. Un analista militar entrevistado por CNN sostuvo que las tropas norteamericanas necesitarían al menos diez días más para controlar la ciudad de Panamá. El 23 de diciembre en la tarde, las tropas panameñas volvieron a atacar la sede del Comando Sur. Ante ello, Bush anunció el envío de 2,000 tropas adicionales a Panamá.

En ese tenor, prolongar el operativo militar para destruir la resistencia de las filas de las FDP podría tener como resultado el aniquilamiento de estas, una situación no contemplada dentro de los planes originales de la invasión. La doctrina militar prevaleciente en E.U. aconseja entender las consecuencias políticas de las acciones militares específicas tomadas en diversos escenarios. En el caso panameño, diezmar a la mayoría de las fuerzas militares adversarias crearía un vacío que sólo podría ser llenado por las tropas estadounidenses que serían llamadas a sustituirlas, lo que haría todavía más evidente la ocupación de E.U. del país. Sin embargo, la posibilidad de que un segmento de las FDP quedara ileso y formara más tarde la nueva fuerza militar que instalaría E.U. era motivo de preocupación para la oligarquía. En este sentido se pronunció Arias Calderón, quien se expresó a favor de que las milicias invasoras sustituyeran la totalidad de las fuerzas panameñas, en momentos en que se iniciaba como vicepresidente y ministro de Gobierno en el Palacio Legislativo.[84]

Para Washington, sin embargo, no era motivo de preocupación la formación o vocación reformista o antioligárquica que todavía puedan tener gran parte de las tropas y la oficialidad de las fuerzas armadas panameñas después de la salida de Noriega. En el pasado, esa tendencia les fue fácil de controlar en países como Guatemala después del golpe contra Arbenz en 1954, en El Salvador después del golpe de estado de 1979, y en Honduras en general en la década de 1980. En éste último país cabe recordar el papel de la CIA en la cooptación de jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas Hondureñas que en 1985 pretendían dar un golpe contra el jefe de su institución militar, en rechazo a la subordinación de ésta a E.U. En esa ocasión, los jóvenes oficiales destacaron querer "emular el papel que Torrijos jugó en la década de 1970".[85] De allí que el ataque de E.U.

a las FDP haya sido más selectivo que generalizado, porque el propósito era el de diezmar sólo a los grupos nacionalistas que se dispusieron a combatir las tropas invasoras. Aquellos intimidados constituirían más tarde la fuerza de seguridad encargada de prestar sus servicios al gobierno de Endara.

Otra de las tácticas fundamentales del operativo de la invasión fue el tratamiento que las tropas invasoras debían tener respecto a la población panameña. A los soldados de E.U. se les impuso una serie de reglas supuestas a minimizar el riesgo a la vida de los civiles, siempre y cuando "*ello no ponga en peligro el éxito de la misión*". Una de esas reglas ordenaba que "*si le parece que le dispararán, abra fuego en defensa propia*". Según dijo después un suboficial estadounidense que participó en la invasión, el problema con éstas reglas del juego era que "términos como *defensa propia* y *parece* eran poco familiares y requerían explicación". En este sentido, el citado suboficial consideraba que "*quizás un curso de seis semanas habría sido suficiente, pero el tiempo no nos permitió ese lujo...*". Por ello, las reglas establecidas para la conducta del soldado que tenían el propósito de evitarle a la población civil sufrimientos innecesarios, "fueron echadas a un lado. Todo se resumió a *nosotros o ellos* y seguramente... no seríamos nosotros. Nos preocuparíamos por las ramificaciones legales después."[86] Obviamente, el gobierno que tomó el poder gracias a la invasión no ha tenido entre sus prioridades averiguar la manera como murieron los panameños ni solicitar indemnización para las víctimas civiles del operativo militar.

El Comando Sur le ordenó a sus tropas evitar a toda costa los posibles efectos colaterales de la operación militar sobre la población panameña porque quería impedir que ésta, por resentimiento, se sumara al esfuerzo de la resistencia. El bombardeo de E.U. a los barrios de El Chorrillo y San Miguelito no contradice, sin embargo, éste requisito táctico, porque su aplicación también debía ser selectiva: estos barrios concentraban los sectores de la población civil que, si bien no se sumaron a la resistencia, mantenían grados de cooperación con sus "vecinos" militares y definitivamente no eran partidarios activos de las agrupaciones opositoras a Noriega. El operativo con las aeronaves Stealth contra el Cuartel Central se rea[illegible] a pesar de que los estrategas del Comando Sur cono-

cían los posibles estragos sobre la población *residente* en El Chorrillo, a tal punto que "la detonación de bombas y balas rastreadoras prendieron fuegos que eran claramente visibles desde el otro lado de la ciudad". Según un ex-corresponsal de la revista *Newsweek* en Vietnam que cubrió la invasión, "*estructuras de madera ardieron y se desplomaron, y cuando la gente corrió hacia las calles, muchos cayeron bajo el torrente de descargas que venían del cielo...*".[87]

Por contraste recordemos el operativo para destruir las posibles vías de escape de Noriega. En particular, su avión personal y otros que se encontraban en los hangares destinados para su uso en el aeropuerto de Paitilla — situado en la periferia circundante a los barrios donde residen la clase social de mayor poder adquisitivo. Originalmente, los comandos de tierra-mar-aire estaban supuestos a destruir el avión privado de Noriega, utilizando el poder de fuego a distancia. Sin embargo, *los planes fueron cambiados.* El Comando Sur alteró el programa y ordenó que, en vez de destruirlo, éste fuese incapacitado para volar, porque así las residencias "*cercanas no quedarían bajo el fuego de rondas extraviadas*" de municiones. Supuestamente, al Comando Sur le preocupaba las residencias diplomáticas situadas en las cercanías de Punta Paitilla[88] que, sin embargo, se encuentran a no menos de un kilómetro de donde estaba situado el avión. Para inutilizar el avión de Noriega — un objetivo secundario — Estados Unidos envió tropas para neutralizar el uso posible del avión o del aeropuerto por parte de las fuerzas de la resistencia, mientras que la destrucción del Cuartel Central se llevó a cabo utilizando tanto su arsenal ligero como el pesado. Lo que refleja mas bien una selectividad en el uso del armamento basada en la importancia que algunos grupos de la población tenían para los planes de Washington hacia Panamá.

A medida que pasaban los días y las huestes invasoras procedían con la secuencia de las tácticas del operativo, la posibilidad real de que el contexto incierto de la invasión continuara por tiempo indefinido era un motivo fundamental de preocupación para los estrategas militares del Pentágono. El conjunto — necesariamente inseparable — militares-pueblo-gobierno de E.U. en el esfuerzo de guerra en Panamá empezó a mostrar indicios de resquebrajamientos que, aunque

mínimos, podrían ampliarse a medida que no se resolvía la *coyuntura* istmeña.

En este sentido una encuesta presentada por un programa periodístico televisivo en E.U. el día posterior al inicio de la invasión mostró que un ochenta por ciento de los entrevistados apoyaba la intervención en Panamá, pero este apoyo cambiaba radicalmente si las tropas norteamericanas no atrapaban a Noriega y por ende quedaba en libertad.[89] Asimismo, un tercio de los encuestados por el diario *Los Angeles Times* mostró su preocupación sobre la posibilidad de que en Panamá "*pueda repetirse una situación similar a la que se registró en Vietnam*".[90] El diplomático Sol Linowitz, negociador estadounidense de los Tratados Torrijos-Carter que se había pronunciado por suspender la aplicación de los tratados canaleros si Noriega permanecía en el poder, sostuvo en este contexto que el régimen impuesto por las tropas de su país no tenía poder real alguno y que las fuerzas de ocupación tendrían que permanecer por muchos meses si este habría de gobernar.

Los expertos en propaganda de la Casa Blanca se habían anotado un triunfo al hacer que en el transcurso de los meses previos a la incursión armada, se incrementara considerablemente la adhesión de la población estadounidense a una eventual intervención militar en Panamá. En la primera quincena de mayo de 1989, una encuesta del semanario *Newsweek* mostró que un cincuenta y nueve por ciento de la población de E.U. estaba en contra de una invasión para derrocar a Noriega.[91] Sin embargo, las opiniones expresadas a favor pasaron de un treinta por ciento antes de la invasión a un ochenta y un por ciento en los primeros días de ésta, según una encuesta del diario *USA Today*.[92]

A pesar de este avance, el problema que representaba no hallar a Noriega alteraba las previsiones sobre el operativo. Ante estas circunstancias, los propagandistas de la administración Bush admitieron que "*con todo el gran éxito allá abajo, no hemos hecho una labor suficientemente buena para vender ésta acción al público norteamericano*". Si no se resolvían los tres problemas inmediatos (encontrar a Noriega, instalar a Endara y procurar que las tropas y otras fuerzas panameñas no capturen rehenes estadounidenses) los expertos en propaganda señalaban que "*dentro de una semana esto no se verá*

tanto como un triunfo sino como una derrota".[93] En efecto, un cuarenta y dos por ciento de los encuestados condicionaba su apoyo a que Noriega fuera atrapado, un cincuenta y cuatro por ciento a que cesaran las bajas norteamericanas, y un sesenta y seis por ciento a que la incursión en Panamá no se alargara por más de un año.[94] La preocupación del pentágono por la opinión pública era tal que, para exacerbar sentimientos nacionalistas cuando el operativo militar no mostraba frutos concretos, el Gral. Carl Vuono, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, condecoró con una medalla otorgada únicamente a quienes han sido heridos en combate, a un soldado dado de baja a causa de su sufrimiento ante el intenso clima caluroso panameño.[95]

En estos primeros días de la invasión, los estrategas militares estadounidenses expresaron su sorpresa por el nivel de respuesta de los militares panameños. De ahí que el cálculo sobre la contundencia inmediata de la invasión haya sido erróneo, según manifestaron después oficiales del Estado Mayor del Ejército de E.U.: "*pensábamos que los hombres de las FDP eran mercenarios, no gente que servía en el ejército por deberse a su propio país... pensábamos que si dábamos unos golpes en la puerta, ellos se escaparían por la puerta de atrás*".[96] No obstante, el Pentágono se vio forzado a reconocer que la resistencia panameña sí era organizada, desmintiendo con ello el discurso de Bush de la mañana de la invasión, en el que sostenía que estas respuestas eran mas bien desorganizadas. Thurman, comandante de las fuerzas de ocupación, dijo en el segundo día de la intervención que la resistencia era organizada y expresó su sorpresa por el poderío de las FDP. "*Los combates son algo más serios de lo que esperábamos al comienzo*", dijo Thurman, mientras que otro oficial del Pentágono en Panamá reconoció que la ferocidad de los Batallones de la Dignidad había sorprendido a los estrategas militares de E.U.[97] Otro oficial del Pentágono explicó que si bien "*hay algunos panameños que detestan a Noriega...* (ellos están) *más furiosos con E.U.*".[98] Así, por ejemplo, un comerciante panameño dijo en entrevista telefónica con la cadena de televisión CBS que E.U. le había causado "*más daño en dos días del que Noriega* (le) *causó en dos años.*"[99] Una mujer residente del lujoso barrio Punta Paitilla se quejó asimismo que "*la gente tendrá que salir del país.*"

Y a esto había que agregar la posibilidad de que movimientos guerrilleros de la región u otros que pudieran agruparse destinasen parte de sus fuerzas a combatir directamente las tropas norteamericanas en suelo latinoamericano. De hecho, la reacción de los pueblos latinoamericanos contra la invasión fue un elemento fundamental para que sus gobiernos la rechacen al menos discursivamente, con la excepción del presidente Alfredo Cristiani de El Salvador. Un embotellamiento de las tropas de E.U. en Panamá también pondría en peligro la amplia gama de intereses estadounidenses en el hemisferio. Esto sin duda presionaba a los estrategas norteamericanos para encontrar vías rápidas para agilizar el operativo. En México, sectores medios y populares expresaron su voluntad para crear una Brigada de Internacionalistas; en Colombia, dirigentes del M-19 sostuvieron que enviarían tropas a Panamá; en Ecuador, el Gral. (R) Frank Vargas Pazos y el Gral. (R) Richelieu Levoyer, junto a la agrupación Alfaro Vive Carajo, discutieron la posibilidad de enviar un contingente a Panamá; y en Cuba, treinta mil soldados cubanos veteranos de la guerra de Angola se presentaron como voluntarios para ir al invadido país a combatir a las tropas de E.U. De allí que simultáneamente a la invasión a Panamá, Washington organizó un bloqueo naval a las costas colombianas — que implicó un bloqueo directo a la costa atlántica panameña — mediante dos buques de guerra con el objetivo declarado de "interceptar el narcotráfico", precisamente cuando fue evidente la posibilidad de un flujo guerrillero desde Sudamérica y el Caribe.

Génesis y derrota de la resistencia militar panameña

Estas consideraciones empujaron al Comando Sur a realizar lo que fuese necesario para atrapar a Noriega. Todo el arsenal militar de E.U. no era suficiente como para que la derrota panameña fuera rápida y decisiva. Sin embargo, al analizar la conducta de la resistencia panameña, era evidente que no tenían dirección, por lo que resaltaba la posibilidad de que Noriega no estuviese tras el esfuerzo antintervencionista. De ahí que haya cobrado validez la idea de que Noriega podría buscar refugio — si no estaba luchando o, al menos, dispuesto

a hacerlo — en alguna embajada. Por ello, las tropas norteamericanas acosaron y rodearon las embajadas de Nicaragua y de Cuba, únicos países donde E.U. no encontraría cooperación con el esfuerzo de guerra. A pesar del rechazo del gobierno español a la invasión, su embajada no fue cercada, pero sí era vigilada de cerca, ya que está situada a sólo unos cuantos metros de la embajada de Cuba. Incluso la Nunciatura Apostólica también estuvo vigilada antes de que Noriega apareciera por sus puertas la tarde del 24 de diciembre.

Había razones suficientemente fuertes como para prestarle atención a la Nunciatura. Este era sitio de refugio obligado de varias figuras del gobierno de Noriega, porque todas las embajadas europeas cerraron sus puertas a todo aquél que buscara asilo. Al lado de ella, además, se encuentra un supermercado que atiende la clientela del barrio Punta Paitilla — barrio en el que habita un segmento considerable de los dueños y ejecutivos de empresa del país — y esa zona estaba ya resguardada por efectivos militares. En este tenor el ex-canciller Jorge Ritter coincidió en sostener que "*la Nunciatura era objeto de una rigurosa vigilancia para impedir que ingresaran otros oficiales y para regular las salidas de los que ya estaban adentro*".[100] En efecto, el día 24 de diciembre en la mañana, habían acudido a la sede eclesiástica el mayor Carlos Arosemena King y el teniente coronel Daniel Delgado Diamante, quienes habían estado organizando parte de la resistencia a la invasión hasta ese día. Residentes de las áreas circunvecinas a la Nunciatura notaron que la tarde de ese día, gran parte de las tropas norteamericanas se retiraron de las inmediaciones, para luego aparecer cuando Noriega estaba dentro de las seguras paredes de la sede apostólica.

Estos hechos hacen necesario notar una serie de detalles que amplían la comprensión del impacto inicial del escape de Noriega a la Nunciatura y sus repercusiones posteriores. La sede de la Nunciatura se encuentra en plena Avenida Balboa, a dos kilómetros de la fuertemente custodiada embajada de E.U. Para el 24 de diciembre, esta avenida también estaba sigilosamente vigilada para evitar que mediante un carro-bomba u otros medios se cometieran atentados contra la sede diplomática estadounidense. No obstante la intención declarada de capturar a Noriega, su entrada a la Nunciatura debía

ser permitida a fin de evitar una confrontación al intentar apresarlo, misma que podía implicar capturarlo muerto o provocar su inmolación. Ello no era deseable para los estrategas del Pentágono, porque ello significaba mantener viva la llama simbólica de la resistencia a la intervención.[101] Antes de su entrada a la Nunciatura, Noriega contactó al Nuncio, Monseñor Sebastián Laboa, quien además había mantenido estrechos contactos con el Comando Sur durante el transcurso de la invasión (según Laboa, antes de la llegada del perseguido militar, no pudo contactarlo).[102] Luego, Noriega se vistió de cura, y *en un auto con placas diplomáticas enviado por el Nuncio*, entró a la sede de la Nunciatura.[103]

En la estrategia de guerra de E.U. no caben "descuidos" de este calibre. Minutos después de su entrega, la casona estaba rodeada por blindados norteamericanos. Según el Cap. Gaytán, quien acompañó a Noriega a la Nunciatura, lo rápido de la llegada de los norteamericanos muestra que "*o bien los yanquis estaban monitoreando el desplazamiento o alguien lo había denunciado*".[104] Ese supuesto descuido hay que verlo mas bien a la luz de sus resultados: la entrada voluntaria de Noriega a la sede apostólica la tarde del 24 de diciembre conformó la derrota psicológica y moral para la resistencia y la victoria estratégica para Washington.

Noriega y su Estado Mayor, con su posterior entrega a las autoridades militares de E.U., traicionaron a sus tropas. Con ello, sin embargo, mantuvieron hasta este último momento la inconsecuencia que demostraron para con la crisis durante los treinta meses de intervención norteamericana. Durante dos años y medio, Noriega no evidenció la menor intención de separarse de su cargo, supuestamente porque estaba interesado en que Panamá escapara de la crisis por una vía que le diera respuesta a las necesidades básicas de la población del país, o al menos, una solución nacional que evitara la creciente intervención de Washington. En este tenor, Noriega pronunció un sinnúmero de discursos, entre los cuales manifestó que las FDP, junto a él como su comandante, continuarían la resistencia hasta ese entonces desarrollada "*por el tiempo que sea necesario, cualesquiera sean las circunstancias que nos impongan desde el exterior*".[105] Por lo mismo, los gastados lemas de Noriega sobre no dar "*ni un paso atrás*" en la defensa de la sobe-

rania y otros de índole similar debían traducirse en lo concreto de la lucha militar contra las tropas invasoras, cuando se diera el caso, o al menos, en un intento por alterar las vías — dar soluciones alternativas que salvaguardaran la soberanía panameña — por donde se conducía la crisis panameña.

Por ello, aún algunos de sus opositores esperaban con cierto grado de seguridad que Noriega comandaría las tropas que combatirían las tropas invasoras, o al menos, moriría en el intento. Y esta seguridad se intensificó y reafirmó cuando Noriega envió un mensaje radial el día de la invasión afirmando estar "*en nuestra trinchera de combate... hay que resistir y avanzar. Nuestra consigna es vencer o morir. Ni un paso atrás y adelante a paso de vencedores*".[106] Así, cuando Noriega buscó refugio en las seguras instalaciones de la Nunciatura, mostrando con ello que tenía poca o ninguna vinculación con la resistencia desplegada por soldados panameños, la desilusión de muchos militares y civiles fue tal que optaron por entregarse o por no continuar con el esfuerzo armado de la resistencia, ante la falta de liderazgo que evidenciaba la entrega de Noriega a la Nunciatura primero y a las tropas estadounidenses después. Para la población panameña y para la audiencia internacional, cuando Noriega ni intentó ser el jefe militar que pretendía ser ni el jefe de Gobierno que se había hecho nombrar, se convirtió efectivamente en el criminal común que las tropas de E.U. habían venido a atrapar.

Definitivamente, la entrega voluntaria de Noriega a las tropas estadounidenses fue el elemento que ultimó todo viso de resistencia. En efecto, las FDP tenían planes de contingencia para enfrentar una acción militar invasora. Doce años antes, ante la posibilidad de que el Senado de E.U. improbara los tratados canaleros, el general Torrijos había dispuesto un plan cuya primera fase consistía en hacer explotar el canal y después iniciar una guerra de guerrillas. Según los cálculos realizados por los militares panameños en ese entonces, a E.U. le tomaría entre dos y cuatro años controlar Panamá, período en el que tendría que enfrentar el respectivo rechazo mundial y probablemente también el doméstico, similar al de Vietnam.

En 1988, después de la destitución de Delvalle por la Asamblea Legislativa, los planes del Pentágono para invadir Panamá fueron obstaculizados por la lectura que sus estrategas militares tuvieron sobre los preparativos de las FDP para armar una resistencia prolongada. Todo esfuerzo militar en Panamá implicaría una guerra medianamente prolongada que E.U. no deseaba tener, por los altos costos políticos que ello conllevaría, mucho menos en el decisivo año electoral de 1988. En 1989 las FDP aún mantenían esos planes para resistir la invasión. No obstante, estos fueron obstaculizados por la cooperación de un grupo del Estado Mayor de Noriega con la estrategia de E.U. hacia Panamá.

En el caso de una invasión, el plan de las FDP consistía en que el Cuartel Central debía defenderse a toda costa para demorar la incursión de las tropas estadounidenses en horas o días y así permitir que el resto de las fuerzas armadas panameñas se agrupe en diferentes partes de la República. A partir de esa reagrupación comenzaría "*un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los norteamericanos... en base a una guerra de guerrillas, urbana o rural*", según dijo después un ex-oficial de las FDP.[107] Supuestamente, este plan ya había sido coordinado con todas las unidades militares de la fuerza armada panameña.

Si bien muchas de las unidades de las FDP actuaron tal como estaba programado para emprender la resistencia, la extensión de su actividad militar fue obstaculizada por disposiciones previas tomadas por el Estado Mayor. Desde el frustrado intento de golpe el 3 de octubre anterior, los soldados panameños estaban acuartelados en espera de una reacción militar de E.U. en el corto o mediano plazo. El Cuartel Central contaba con armamento suficiente como para hacer efectivo el plan de resistir la invasión en su primera etapa — tanquetas y armas antiaéreas. Sin embargo, el diez de diciembre una orden del Estado Mayor dio fin con el acuartelamiento, no obstante que nada hacía pensar que E.U. haya cambiado sus planes hacia Panamá. En los días siguientes, se dieron importantes traslados de los oficiales y mandos medios presuntamente nacionalistas, precisamente en los cuarteles que posteriormente fueron blanco principal del ataque de las milicias invasoras. "*Si ellos hubieran estado, acá hubiera sido diferente el enfrentamiento*", expresó después un ex-miembro de las FDP.[108] Además, se trasladó el armamento antiaéreo y otros misiles anti-tanques del Cuartel Central, la isla de Naos,

el Cuartel de Tinajita y el de Panamá Viejo (objetivos primarios de la acción bélica),[109] a otros cuarteles menos importantes dentro del plan estratégico de defensa.

Con estas medidas no sólo se redujo el armamento disponible para hacerle frente a la eventualidad de la invasión, sino que se bajó el nivel de alerta de las tropas. En efecto, el Estado Mayor ordenó a las tropas del Fuerte José Domingo Espinar de Colón retornar a sus bases desde sus unidades situadas en las montañas; le retiraron armamento importante al batallón 2000; y procedieron con el desminado de las instalaciones, especialmente en Río Hato. Empero, aún observando que desde tempranas horas de la tarde del 19 de diciembre inició la llegada de contingentes estadounidenses que tomaron posiciones ofensivas en algunos puntos periféricos de la ciudad capital (algunos de ellos vestidos y armados como Batallones de la Dignidad), Noriega y su Estado Mayor no dieron la alerta nacional. De hecho, la alarma para los Batallones de la Dignidad fue dada tarde esa noche, vía mensajes televisivos que les compelían a movilizarse hacia los cuarteles, tan tardíos que gran parte de estos no llegaron a ellos porque los soldados norteamericanos ya circundaban los cuarteles panameños. Gracias a infidencias de algunos miembros del Estado Mayor, la mayoría de los planes para afrontar la invasión fueron desmontados aún antes de iniciarlos. "*La traición desarticuló al ejército panameño y evitó operaciones de alto contenido material y psicológico contra instalaciones norteamericanas, que tenían el propósito de asestar un fuerte golpe a las tropas invasoras y cambios en el rumbo de la ofensiva de Estados Unidos*", señaló Gaytán.[110] No es de extrañar que las comunicaciones, el abastecimiento, la logística y otros aspectos militares de envergadura no llegaron a ser puestos en operación. Armas modernas, tanquetas, helicópteros, cañones, morteros, lanzacohetes, miles de fusiles y abundante cantidad de municiones fueron encontrados en su mayoría por las tropas invasoras en contenedores y depósitos todavía sin abrir o en sus envolturas de envío.[111]

Estas medidas tomadas por el Estado Mayor lograron limitar la capacidad de respuesta de la resistencia panameña. A pesar del suceso del 16 de diciembre (la muerte de Paz Fisher), que bajo la lógica — anunciada — estadounidense

podía ser utilizada para lanzar alguna represalia militar, estas órdenes no fueron alteradas. Una versión plausible sobre las razones que tuvo Noriega para emprender repentinamente estas acciones destaca que informes de sus servicios de inteligencia — en connivencia con la CIA — le mostraron que se fraguaba un supuesto golpe de estado en su contra, apoyado por el Pentágono. En esa lógica, reducir las posibilidades de triunfo del golpe requerían trasladar el armamento de las áreas más susceptibles a la injerencia norteamericana, especialmente aquellas que habían servido de apoyo logístico al intento de golpe del 3 de octubre anterior.[112]

A pesar de las limitaciones encontradas, gran parte de los soldados panameños emprendieron acciones destinadas a repeler a las tropas invasoras, en la medida de sus posibilidades. El Cuartel Central fue defendido por unos sesenta y tres hombres, principalmente de la Unidad Machos de Monte, sin armamento que pudiera habilitarlos para rechazar los soldados y las aeronaves estadounidenses. El Batallón 2000, de élite, combatió a las tropas invasoras en Fuerte Cimarrón, y después se dispersó en las zonas aledañas para intentar reorganizarse después. Miembros del Batallón Paz y la Compañía Diablos Rojos se adentraron en zonas montañosas de las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, fronterizas con Costa Rica. En el distrito de San Miguelito, aledaño a la ciudad capital, la guarnición de Tinajita al mando del coronel Daniel Delgado Diamante y otra al mando del TTe. Cnel Carlos Arosemena King también resistieron la invasión. Así también la V Compañía Victoriano Lorenzo defendió el Fuerte Amador, la Unidad Especial Anti-Terror (UESAT) el Cuartel de Panamá Viejo y otros combatientes de la X Zona Militar a Río Hato. Incluso, la resistencia logró acosar mediante ataques relámpago las bases militares estadounidenses de Clayton y de Howard, a Quarry Heights, sede del Comando Sur, y al Palacio Legislativo, sede temporal del gobierno instalado por Estados Unidos, lugares que se convirtieron por algunos días en focos firmes de resistencia a la invasión.

Lo que definió el tiempo y la manera como el operativo militar favoreció a las tropas invasoras fue la imposibilidad de la resistencia panameña para superar las limitadas condiciones que les dejaron sus líderes militares para enfrentar la in-

cursión norteamericana. Las tropas panameñas combatieron con armas inadecuadas, al no contar con el armamento pesado de procedencia estadounidense con el que sí vinieron las tropas enemigas, ni con las municiones suficientes como para prolongar su resistencia. Durante el operativo militar las milicias estadounidenses localizaron y neutralizaron grandes cantidades de armas y municiones que los soldados panameños no lograron acaparar. La cooperación de un segmento del Estado Mayor con el esfuerzo bélico enemigo se hizo sentir en lo inmediato con la rendición, sin combates de por medio, de varios jefes militares provinciales: el mayor Del Cid, en Chiriquí, el mayor De Puy en Veraguas, el mayor Rigg en Coclé y el mayor Martínez en Los Santos. Y a estos se le añadió el Gral. Noriega, que entregó, más que su institución, el país.

La huída de Noriega a la Nunciatura primero, y su entrega a las tropas de E.U. después, llama la atención sobre su papel y el de su Estado Mayor frente a la invasión norteamericana. Un periodista del *Chicago Tribune* reflejó esta consideración al destacar que "*después de todo, las fuerzas armadas* [de E.U.] *tuvieron suerte. Si había un llorón en todo el sórdido episodio* [ese] *fue Noriega. Si él hubiera sido un joven Fidel Castro, Che Guevara o Ho Chi Min, esos batallones de la armada estarían peleando todavía. A ellos les ahorraron este espectáculo bochornoso y costoso con el ratón que se escapó de Panamá*".[113] Si bien es cierto que la huída de Noriega determinó la victoria estratégica de E.U., no es cierto que la figura de Noriega por sí sola fue la clave del triunfo de Washington en el operativo militar.

En primer lugar, consideraciones del tipo descrito por el citado periodista no tienen sentido porque el papel de los individuos en la historia está limitado por las circunstancias que ellos encuentran. En este tenor, la afirmación aludida debe ser revertida: dado el actual desarrollo de la doctrina militar norteamericana, la administración Bush no hubiera optado por lanzar la invasión a un país dirigido por un líder político y militar que encabezara un movimiento arraigado en las aspiraciones de segmentos importantes de su población. Asimismo, si bien un Noriega que hubiera optado por luchar o inmolarse habría podido retardar o alterar el momento y la forma como resultaron victoriosas las tropas norteamericanas, por sí sólo, aunque fundamental para la estrategia de la invasión, no habría cambiado su resultado final.

También es fundamental notar que la derrota panameña tampoco se debió sólo al diferencial derivado del armamento sofisticado utilizado por las tropas estadounidenses. Recordemos que previamente a la derrota militar del régimen panameño, ya se había dado su derrota política. Los planes de las FDP para resistir la invasión dependían de la voluntad de sus miembros para tomar las armas y luchar. Sin embargo, para el 20 de diciembre de 1989 las tropas panameñas habían perdido el espíritu de cuerpo y tampoco tenían liderazgo que les conduciría a combatir fieramente a los soldados norteamericanos. La crisis económica ya afectaba a las tropas, por lo que su capacidad de resistencia a los embates estadounidenses también había decrecido: treinta meses de guerra política habían dejado a las tropas panameñas, al igual que a segmentos importantes de la población, sin la voluntad para resistir. Toda estrategia de guerra que pueda hacer al enemigo abandonar las armas sin gastar los hombres y los recursos para ello es válida y aconsejable. La política de E.U. hacia Panamá logró precisamente eso. Con estas ideas en mente, un militar de E.U. que peleó en Panamá señaló que "*pronto descubrimos que la confianza que desarrollamos en el entrenamiento nos puso en ventaja sobre el enemigo. En muchas ocasiones ellos rompieron filas y escaparon, donde si hubieran peleado tenazmente, el resultado habría probado ser completamente devastador para nosotros*".[114]

Para el 20 de diciembre de 1989, la causa panameña estaba completamente perdida. Noriega no tenía consigo la más confiable de sus fuerzas, y sus aliados — en su mayoría, con vínculos de lealtad derivados de las prebendas obtenidas por el usufructo del poder — no estaban en posición de optar por entrar en lo que seguramente era una posición suicida, pero acorde con las tareas que como fuerza de seguridad nacional debían desarrollar. Noriega, para esta fecha, no había ganado una sola batalla política o diplomática que le hubiera servido para hacer desistir a Washington de enviar sus tropas a Panamá o motivar a las propias a luchar. Arrastrado por la política norteamericana, Noriega llegó a desconfiar tanto de su Estado Mayor que, para el momento de la invasión, estaba creando un Estado Mayor paralelo con la oficialidad intermedia y había dado órdenes de esconder armas en casas de

civiles.[115] El dilema de Noriega en esta acción era que, *si bien* no confiaba en su Estado Mayor como para erigir uno paralelo con oficiales de menor rango, tampoco podía actuar para retirarlo porque ello crearía un precedente por el que, al llegar a posiciones de poder más altas, el nuevo Estado Mayor podía prescindir de él.

En este sentido también fueron fundamentales las premisas sobre las que Noriega y su Estado Mayor construyeron su logística. Ellos aseguraban que E.U. jamás invadiría y que la próxima reacción de Washington tenía que ser un ataque "quirúrgico" destinado a remover a Noriega de su cargo. Es muy posible que el trabajo de los servicios de inteligencia de E.U. haya contribuído a que esta visión haya dominado entre las consideraciones de la jerarquía militar, porque si la oficialidad hubiera tenido una visión más acorde con la realidad, éstas se habrían preparado con mayor efectividad para ello o habrían forzado el traslado del eje del conflicto con la potencia del norte hacia otras áreas, removiendo al Gral. Noriega de su cargo — tal y como lo trataron de hacer algunos mandos medios mediánte el intento de golpe del 3 de octubre anterior a la invasión.

Las masas panameñas pudieron haber alterado la balanza interna para combatir plenamente a E.U. como a sus interlocutores oligárquicos, de haber sido convocados orgánicamente para ello. Sin embargo, el deterioro de la capacidad de mando de Noriega y su falta de confianza para con la población fueron otros factores que condujeron a la derrota militar de la resistencia al poco tiempo que él se entregó. Para sumar a la población panameña al esfuerzo de resistencia político-diplomático era indispensable ofrecerles algo más que discursos grandilocuentes sobre la soberanía panameña y la dignidad del pueblo ante la intervención estadounidense.

Por ello, la derrota militar sufrida por Panamá en diciembre de 1989 fue más bien el capítulo que le siguió a la derrota política sufrida antes de la invasión. Ambas derrotas, sin embargo, crearon la coyuntura que futuras generaciones de panameños tendrán que retomar para llevar a cabo las tareas de afirmación nacional emprendidas en décadas anteriores y reelaborarlas para enfrentar el reto de reconstruír, política y socialmente, un estado independiente. Y asimismo, tomar el compromiso de reconstruir sus relaciones internacionales ante un escenario internacional adverso.

Notas

1. Paul Seabury & Angelo Codevilla, *War: Ends and Means*, (New York: Basic Books, 1989), p. 59.
2. Bill Richardson, "Here's How to Get Noriega", *The New York Times*, jueves 11 de mayo de 1989, p. 29A.
3. Después de la invasión, las autoridades estadounidenses le retiraron todos los cargos a Eleta. Ver además "Drug Arrests Disrupt CIA Operation," *The New York Times*, domingo 14 de enero de 1990.
4. Documento titulado "Analytical Review of Low Intensity Conflict", (Reseña analítica del conflicto de baja intensidad), Virginia, E.U., agosto de 1986. Citado por Raúl Sohr, *op. cit.*, p. 19. Ver también a William J. Crowe, "Elliot Abrams Remains Reckless on Panama", *The New York Times*, lunes 16 de octubre de 1989, p. 20A.
5. Buckley, *op. cit.*, p. 137. Entre las aprehensiones mencionadas estuvo la del temor que otros países con quienes E.U. estaba negociando acuerdos para renovar sus derechos de base podrían utilizar el argumento de que E.U. utiliza sus bases militares para intervenir en los asuntos internos de los países en donde éstas se encuentran.
6. Woodward, *op. cit.*, p. 89.
7. Citado por Woodward (1991), *op. cit.*, p. 163.
8. Citado por Buckley, *op. cit.*, p. 189.
9. Woodward (1991), *op. cit.*, p. 114.
10. Buckley, *op. cit.*, pp. 189.
11. Dinges, *op. cit.*, p. 309.
12. "Pide la CIA "Libertad" para "Apoyar" golpes de Estado", *El Financiero* (México, D.F.), miércoles 18 de octubre de 1989.
13. "Autorizan al FBI a detener fugitivos en el extranjero", *La Jornada*, sábado 14 de octubre de 1989, p. 14; "FBI, policía mundial" (editorial), *La Jornada*, sábado 14 de octubre de 1989, p. 2.
14. Buckley, *op. cit.*, pp. 189-190. Ver también a Woerner, *op. cit.*, p. 96.
15. Con la intención de colocar personas que conocían el terreno panameño al mando de los contingentes que serían enviados a Panamá, Bush también introdujo cambios en las posiciones de mando de la 82 Compañía Aerotransportada, precisamente la compañía militar que jugó un papel determinante en la invasión.
16. Carmen Lira, "Panamá: el rostro oculto de una invasión", suplemento por el octavo aniversario del diario *La Jornada*, jueves 24 de septiembre de 1992, p. 2. Recopilación de entrevistas con el Cap. Gaytán, actualmente en el exilio y buscado por los servicios de inteligencia de E.U. Se presume que está en el Cono Sur del continente.
17. Michael Gordon, "Panama Alerted to Attack, General Says", *The New York Times*, martes 27 de febrero de 1990, p. 15A.
18. Lira, "Panamá, el rostro...", *op. cit.*, p. 6.
19. Buckley, *op. cit.*, p. 233.

20. Briggs, *op. cit.*, p. 48.
21. "Desde Washington se le dio la alerta a Noriega", *La Prensa* (Panamá), jueves 11 de enero de 1990, p. 2-A.
22. "Se evaden pruebas contra Manuel Antonio Noriega", *La Estrella de Panamá* (Panamá, Panamá), domingo 14 de enero de 1990, p. 1.
23. David Brooks, "Podría tardar meses la ubicación de Noriega, reconocen en E.U.", *La Jornada* (México, D.F.), sábado 23 de diciembre de 1989, p. 8; Buckley, *op. cit.*, p. 233.
24. Testimonio anónimo recogido por la Independent Commission of Inquiry on the U.S. Invasion of Panama, *Esta es la Causa Justa*, (San José, C.R. CODEHUCA, 1991), p. 15.
25. "Noriega supo de la invasión por una conversación telefónica", *La Jornada* (México, D.F.), martes 31 de julio de 1990, p. 26.
26. Stiner logró hacerlo sólo con respecto al operativo en Río Hato, pero sólo por 15 minutos. Ver Ross Simpson, "Heroes of Panama", *Soldier of Fortune*, septiembre de 1990, pp. 42-43.
27. Andres Oppenheimer, "Participant: Secret Pact Made Over Inaugural Site", *Miami Herald*, miércoles 27 de diciembre de 1989; Ver también a Gregorio Selser, "Para la Historia de la Infamia: Bush, Endara, Arias y Ford (segunda y última parte)", *La Jornada*, sábado 7 de abril de 1990, p. 25. Con el fin de esconder los pormenores de lo que bajo la Constitución panameña como la de cualquier otro país se considera como traición a la patria, Endara mintió deliberadamente sobre las circunstancias en que accedió al poder. Entrevistado el 4 de enero, dijo que "*la invasión no la pedimos... ni la justificamos. Horas antes de la invasión me invitaron a una cena en la base aérea de Howard. Allí me preguntaron que si me daban una información me abstuviera de salir de esa base y de usar el teléfono. Entonces me dieron la información de lo que iba a pasar. Unas tres o cuatro horas antes de la invasión, en la madrugada del 20 de diciembre* [sic]. *los vicepresidentes Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford y yo fuimos a una casa en Panamá, porque insistíamos en que no queríamos tomar posesión en un fuerte militar norteamericano sino en Panamá... En esa casa asumimos el cargo... Después, nos fuimos al Fuerte Clayton donde estuvimos casi dos días*". Entrevista con Leyla Cattan. "Endara's Goal: To Achieve Reconciliation," *The Arizona Daily Star*, Tucson, domingo 7 de enero de 1991.
28. Bill Sweetman, *Stealth Bomber: Invisible Warplane, Black Budget*, (Osceola, Wisconsin: Motorbook International Publishers, 1989), p. 38.
29. Carmen Lira, "Murieron al menos 3 mil 500", *La Jornada*, miércoles 28 de marzo de 1990, p. 31.
30. Bill Sweetman y James Goodall, *Lockheed F-117A: Operation and Development of the Stealth Fighter*, (Osceola, Wisconsin: Motorbooks International Publishers, 1990), pp. 75-84.
31. Ibid, pp. 89-90.
32. Sweetman, *op. cit.*, pp. 37, 40, 42.
33. J. (Joseph) Jones, *Stealth Technology: The Art of Black Magic*, (Blue Ridge Summit, PA: Tab Books, 1990), p. ix.
34. Sweetman, *op. cit.*, p. 36.
35. Sweetman y Goodall, *op. cit.*, p. 55; Sweetman, *op. cit.*, p. 60.
36. "Mintió la Fuerza Aérea de EU sobre la eficacia de los aviones F-117A: NYT", *Excelsior*, sábado 14 de abril de 1990, p. 14A.

37. Ibid, p. 2; "Erró en el blanco uno de los cazas furtivos en Panamá", *La Jornada*, jueves 12 de abril de 1990, p. 17.
38. Carmen Lira, "Murieron...", *op. cit*, p. 1.
39. Enriqueta Cabrera, "Invasión a Panamá: Una advertencia de Estados Unidos. Entrevista a Ramsey Clarke", *El Día Latinoamericano*, 9 de julio de 1990, p. 3.
40. Ver Independent Commission of Inquiry, *ob.cit.*, 118.
41. Briggs, *op. cit.*, p.43.
42. Ibid, p. 50.
43. David Evans, "Questions from an Invasion: Panama & the Pentagon". Tercero de tres artículos publicados en el *Chicago Tribune*. Reimpreso por solicitud del Congresista Charles Rangel en la edición del 23 de julio de 1990 del *Congressional Record*.
44. Sweetman & Goodall, *op. cit.*, p. 89.
45. Cursivas en el original. Ver Major Cass D. Howell, "War, Television and Public Opinion", *Military Review* vol. LXVIII, invierno 1990, No. 1, pp. 49-66.
46. Dontuso, James F., "Combat and the Media: the Right to Know versus the Right to Win", *Strategic Review*, vol. XVIII, invierno de 1990, No. 1, pp. 49-66.
47. "Atrca la resistencia panameña el cuartel general del Comando Sur", *La Jornada* (México, D.F.), sábado 23 de diciembre de 1989, p. 3.
48. Citado por David Brooks en "Recuento de la acción militar mas grande desde Vietnam", *La Jornada*, viernes 22 de diciembre de 1989, p. 10
49. Según denunció la Independent Commission on Inquiry, *op. cit.*, p. 1.
50. Carmen Lira, "De la noche a la mañana sin nación...", *La Jornada*, jueves 29 de marzo de 1990, p. 26.
51. Brooks, "Recuento...", *op. cit*, p. 10.
52. Cnel. Ronald T. Sconyers, "The Information War". *Military Review*, vol. LXIX, febrero de 1989, No. 2, pp. 44-52.
53. Resumen de información cablegráfica y televisiva sobre la guerra del pérsico: "Llega a 110 kms. la mancha de crudo en el Pérsico, dice E.U.", *La Jornada*, domingo 27 de enero de 1991, p. 3.
54. Independent Commission of Inquiry, *op. cit.*, p. 65.
55. Independent Commission of Inquiry, *op. cit.*, p. 53.
56. "El Ejército de E.U. no ha logrado detener a Noriega", *La Jornada*, jueves 21 de diciembre de 1990, p. 3.
57. Giancarlo Soler, "Los muertos provocados por la invasión", *Opinión Pública* (Panamá, Panamá), febrero de 1990, pp. 6-7; "Miles de víctimas civiles en la invasión a Panamá", *La Jornada* (México, D.F.), martes 3 de abril de 1990, p. 25; Enriqueta Cabrera, *op. cit.*, p. 3.
58. Lira, "De la noche a la mañana...", *op. cit.*, p. 26.
59. Memorandum obtenido por los abogados Kiyonagas Hnos. a través del Acta para la Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA). Citado por Buckley, *op. cit.*, p. 264.
60. Tom Wicker, "Panama and the Press", *The New York Times*, martes 19 de abril de 1990, p. 25A.
61. En este tenor, la participación de la CIA en la matanza perpetrada por el régimen militar de Indonesia en 1965 fue dada a conocer 25 años después. Ver reportaje de Kathy Kadane del 20 de mayo de 1990, en el

San Francisco Examiner y el *Washington Post.*

La pérdida de vidas humanas también fue dada a conocer por el programa de la cadena CBS "60 minutes" el 30 de septiembre de 1990. Sin embargo, ninguna instancia oficial o privada ha profundizado en esta denuncia.

62. Godfrey Harris, "Casualties in Panama", *Los Angeles Times*, lunes 12 de noviembre de 1990. Sección de Cartas al LA Times, en referencia al artículo por Keneth Freed, "Panama tries to Bury Rumours of Mass Graves" (Part A), *Los Angeles Times*, viernes 27 de octubre de 1990.
63. En entrevista aparecida el 21 de diciembre de 1990 en el diario neoyorquino *Newsday.*
64. Un militar panameño que relató sus vivencias a la Independent Commission of Inquiry dijo que en Rio Hato él contó por lo menos 19 muertos estadounidenses. Ver *op. cit.*, p. 118.
65. Testimonio anónimo. "Horas de angustia", *Diálogo Social*, (Panamá, Panamá), año XXIII, nos. 229-230, febrero-marzo 1990, p. 1.
66. Lira, "Panamá: el rostro...", *op. cit*, p. 5.
67. Andrew Rosenthal, "U.S. Troops Gain Wide Control in Panama", *The New York Times*, jueves 21 de diciembre de 1989, p. 1A.
68. Según un ex-miembro del Batallón 2000 de las extintas FDP que pidió no ser identificado, E.U. utilizó mercenarios nicaragüenses como grupos de choque en la invasión. Esta información no ha sido posible corroborarla, si bien la mayoría de los argumentos apuntan que el Pentágono sí ha escondido el número real de bajas propias.
69. "Chicanos, más de 25 por ciento de los soldados de EU en Panamá", *La Jornada*, sábado 23 de diciembre de 1989, p. 7
70. Earl Caldwell, "Enough Questions to Fill Up the Canal", *New York Daily News*, miércoles 1 de julio de 1990. Ver también los comentarios del Hon. Andrew Jacobs, Jr., de Indiana, en la edición del mismo día del *Congressional Record.*
71. Col. William J. Bolt y Col. David Jablonsky, "Tactics and the Operational Level of War", *Military Review*, vol. LXVII, No. 2, febrero de 1987.
72. Woodward, (1991), *op. cit.*, p. 42.
73. Lorenzo Crowell, "The Anatomy of Just Cause: the Forces Involved, the Adequacy of Inteligence and its Success as a Joint Operation", en Bruce Watson y Peter Tsouras, *Operation Just Cause*, (Boulder, CO: Westview Press, 1991), pp. 70-71.
74. Brooks, "Recuento... ", p. 10.
75. Los Batallones de la Dignidad fueron grupos de civiles entrenados por las FDP para servir como grupos de choque ante una posible intervención armada norteamericana. Durante la invasión, los "Batalloneros" tomaron las armas y pelearon contra las fuerzas norteamericanas.
76. "Bush dice ahora que su meta es proteger a estadounidenses", *La Jornada* (México, D.F.), jueves 21 de diciembre de 1990, p. 5.
77. "Sigue la resistencia. La población no respeta el toque de queda", *La Jornada* (México, D.F.), viernes 22 de diciembre de 1989, p. 3.
78. "Inconveniente otorgar asilo a Arosemena, dice Endara", *La Jornada*, jueves 22 de marzo de 1990, p. 21.
79. Robin Wright, "U.S. in New Bid to Oust Noriega", *Los Angeles Times*, 16 de noviembre de 1989, p. 10A.

80. "Nicaragua y EU relajan el cerco a las embajadas", *La Jornada*, sábado 23 de diciembre de 1989, p. 7.
81. "Ataca la resistencia panameña el cuartel general del Comando Sur", *La Jornada*, sábado 23 de diciembre de 1989, p. 3.
82. David Brooks, "Podría tardar meses la ubicación de Noriega, reconocen en E.U.", *La Jornada*, sábado 23 de diciembre de 1989, p. 8.
83. Brooks, "Recuento... ", p. 10.
84. *Ibid*, loc. cit.
85. James Le Moyne, "Leader of Honduran Military Promises He Will Step Down", *The New York Times*, viernes 31 de enero de 1986, p. 6.
86. Briggs, *op. cit.*, pp. 27-28, 50.
87. Buckley, *op. cit.*, p. 240.
88. "Inside the Invasion", *Newsweek*, 25 de junio de 1990, vol. CXV, No. 26, pp. 11.
89. David Brooks, "Recuento...", p. 10.
90. "Estudia EU la posibilidad de enviar más tropas a Panamá", *La Jornada*, sábado 23 de diciembre de 1989, p. 5.
91. "Handling Noriega: A Newsweek Poll", *Newsweek*, vol. CXII, No. 21, 22 de mayo de 1989, p. 13.
92. Citado por José Woldenberg, "Panamá", *La Jornada*, sábado 30 de diciembre de 1989, p. 5.
93. Brooks, "Podría tardar meses...", p. 8.
94. *Ibid*, loc. cit.
95. David Evans, "Vets Boiling Over Medals for Soldier Felled by Heat", Primero de tres artículos publicados originalmente en el *Chicago Tribune* reimpresos a petición del Congresista Charles Rangel en la edición del 23 de julio de 1990 del *Congressional Record*, pp. E2441-E2442.
96. Citado en "México reabre la embajada en Panamá", *La Jornada, sábado 30 de diciembre de 1989, p. 3.*
97. "Reconoce EU que persiste la resistencia a la ocupación", *La Jornada*, domingo 24 de diciembre de 1989, p. 3.
98. "El ejército de E.U. no ha logrado detener a Noriega", *La Jornada*, jueves 21 de diciembre de 1989, p. 3.
99. Comerciante panameño entrevistado por cadena de televisión de E.U. retransmitido a Panamá el 22 de diciembre de 1989 por el Canal 8 de TV, propiedad del Comando Sur y único en funcionamiento durante la invasión.
100. Ritter, *op. cit.*, p. 205.
101. Según el Cap. Jorge E. Gaitán, que acompañó a Noriega en la Nunciatura, de haber matado a Noriega hubiera cambiado el desenvolvimiento de la coyuntura, "Yo pude haber cambiado el final... Hubiera creado un héroe". Ver "Eliécer Gaytán: Si mato a Noriega, lo mando a los altares", *El País Semanal*, sábado 22-domingo 23 de septiembre de 1990, No. 702, (Madrid), pp. 24-32.
102. Kemp (1990), *op. cit.*, p. 49.
103. Lira, "Panamá: el rostro...", *op. cit.*,, p. 4, citando al Cap. Gaytán.
104. Lira, *Ibid.*, p. 4.
105. "Las FFDD y el pueblo panameño resistirán todo el tiempo que sea necesario la agresión de los Estados Unidos", *Crítica*, viernes 8 de septiembre de 1989, p. 15.

106. Transmitido el día 20 de diciembre de 1989 por Radio *Nacional*, radioemisora del estado que fue bombardeada al día siguiente por las huestes invasoras.
107. "Porque somos panameños", *Diálogo Social*, año XXIII, nos. 233-234, junio-julio de 1990, p. 36.
108. Jorge Mombeliard, "Noriega desarmó los cuarteles 10 días antes de la invasión", *Exclusivo* (Panamá, Panamá) septiembre de 1990, pp. 14-15. Revista de escasa circulación que apareció ese año.
109. Guayacán (seudónimo), "La Patria fue Defendida", *El Viejo*, abril de 1990, pp. 4-5. Revista que apareció ese año. De escasa circulación.
110. Cita de Gaytán en Lira, "Panamá: el rostro...", *op. cit.*, p. 7.
111. Ibid, loc. cit.
112. Mombeliard, *op. cit.*, p. 14.
113. Evans, *op. cit.*, loc. cit.
114. Briggs, *op. cit.*, p. 17.
115. Entrevista al ex-legislador por el PRD (1984-1989) publicada en Fernando Martínez, "La invasión sorprendió a Panamá sin organización...", *La Jornada* (México, D.F.), domingo 12 de mayo de 1991, p. 27.

"Aunque la invasión a Panamá difícilmente puede ser considerada como una prueba nacional, es un antídoto a Vietnam. Por lo menos, tendrá un efecto rehabilitador en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos".

Alan R. Golman y Maria E. Biggers,
Operation Just Cause: the U.S. Intervention in Panama.

5

Panamá, génesis del nuevo orden mundial

La invasión de Estados Unidos a Panamá del 20 de diciembre de 1989 representa una lección para quienes en Panamá y en la región luchan y han luchado por alcanzar la aútodeterminación. En Panamá, los intentos por solucionar los problemas internos no pueden soslayar la relación del país con Estados Unidos: la historia panameña muestra que tratar de responder a la dimensión interna separada de la externa ofrece escasas probabilidades de prosperar. El poder de Estados Unidos es demasiado fuerte como para pretender evadirlo exitosamente con discursos grandilocuentes. La situación se torna aún más grave al tratarse de gobiernos carentes de base social, pues disminuye su posibilidad de negociar, con algún grado de éxito, los límites de su autonomía en el escenario mundial.

La historia de Panamá como nación es, a la vez, la historia de las luchas que su población ha librado para construir una institucionalidad nacional e intentar superar así el dominio extranjero. Los esfuerzos por mantener un cierto margen de independencia durante la dominación colonial española confrontaron a Panamá primero con la Metrópoli, pero después

con el centralismo colombiano. Sin embargo, en este siglo, hasta el presente, Washington ha sido su piedra de toque. Mientras que la evolución política del istmo hasta 1968 puede verse como producto de la tendencia absorbente de Estados Unidos — efectivamente ejercida por un sistema oligárquico subordinado a él — el proceso político vivido en Panamá a partir de 1968 constituyó un intento por afirmar la nación sobre el primero. El gobierno del General Omar Torrijos recuperó el canal para los panameños e implementó políticas económicas y sociales que, comparadas con las de sus antecesores y sucesores, favorecieron la democratización del país. No obstante, a pesar de su transformación posterior en un gobierno autoritario militar, pero nacional, mantuvo una autonomía relativa que resultó un obstáculo para los designios estratégicos de Washington.

Tal autonomía militar debía suprimirse para reincorporar plenamente el istmo panameño al plan de la administración Bush para el Nuevo Orden Mundial. En efecto, la invasión militar — con su obvia dosis de destrucción — fue ordenada principalmente para ello, como prerequisito para la remodelación de las instituciones políticas y militares panameñas acorde con el diseño global de Estados Unidos.

El "nuevo orden" ... panameño

De un solo golpe — la invasión del 20 de diciembre de 1989 — las fuerzas militares norteamericanas se apropiaron de la capacidad coercitiva una vez reservada a las fuerzas militares nacionales. A su vez, Washington retomó el poder político del país al instalar en la presidencia al grupo social que en el pasado había sido su fiel aliado: la oligarquía tradicional que Torrijos desplazó del poder político en 1968. Al imponer en el Palacio de Las Garzas a la coalición triunfadora en las elecciones de mayo de 1989, el ejército de E.U. asumió directa e indirectamente las riendas de la administración pública. Tras la invasión, las tropas norteamericanas mostraron haber venido al país para permanecer en él a largo plazo con el fin de moldear la sociedad panameña, sus instituciones estatales y las políticas para hacerlo factible.

La incursión armada de Estados Unidos tuvo como objetivo principal destruir el estado nacional. El robo, por parte de los soldados estadounidenses, del acervo histórico-político del país que se encontraba en los museos panameños — la primera bandera, la espada del Gral. Esteban Huertas (actor importante en la lucha por la independencia), entre otros — es un claro símbolo de ello.[1] Como consecuencia directa de la invasión, el país retornó a los tiempos en que la embajada de Estados Unidos era el centro del poder real en el istmo — factor todavía presente en varios países de Centroamérica y el Caribe. En Panamá, sin embargo, la situación de la ocupación es mucho más abarcadora. Fue el gobierno de Estados Unidos quien ordenó la congelación de las cuentas bancarias de Noriega en el exterior. Asimismo, fueron oficiales norteamericanos quienes asumieron las riendas de los ministerios y de la presidencia tras la invasión. El proyecto inicial del Pentágono para Panamá era el de erigir un gobierno fuerte pero subordinado con el que renegociaría los tratados canaleros para permitirle a sus tropas permanecer en el istmo más allá del año 2000.[2]

La situación post-invasión ha estado caracterizada por una "curiosa" división de funciones en la que el centro real del poder político en Panamá está en la sede de la embajada de Estados Unidos, mientras que sus administradores panameños mantienen oficinas en el Palacio de las Garzas. Fruto de ello es una nota periodística como la siguiente, que denota un fenómeno más típico que ocasional: por iniciativa del Sr. Ernesto Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Colón, se efectuó a mediados de agosto de 1990 una "reunión de trabajo" de la sede de esta Cámara con el Embajador Hinton, en la que "... *se tocaron temas relacionados con problemas y soluciones que tienen que ver con esta provincia, como son la seguridad pública, la vigilancia de las aguas territoriales en nuestras costas, el tráfico de drogas, los secuestros de aeronaves, las áreas revertidas y las que revertirán* (por el desarrollo de los tratados canaleros) *y otros temas de interés común*".[3] Y en esa misma lógica, el Jefe del Comando Sur dictó una conferencia ante un auditorio integrado por miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), a la que asistieron ministros y legisladores del gobierno, "*para explicar la import* 'del Comando Sur), *uno de los diez comandos*

estratégicos que Estados Unidos tiene en el mundo... e hizo una relación pormenorizada de los beneficios de la permanencia de las fuerzas de E.U. en Panamá".[4]

De hecho, para formalizar la "división de funciones", las fuerzas armadas de E.U. retomaron el papel militar y político que antes había ejercido las FDP y ejecutaron lo que puede denominarse como una estrategia preventiva para que la población en general asocie el "progreso" con la llegada de las tropas invasoras. Poco después de la invasión, los soldados norteamericanos repartieron golosinas a los niños que encontraban en las calles en tierras previamente arrasadas, en busca de la aprobación generalizada de su intervención militar y de abonar el terreno para que ésta sea aceptada más fácilmente en el futuro. Las tropas norteamericanas han suplantado totalmente a las FDP en su papel de "acción cívica". Por todo el territorio panameño, los soldados estadounidenses construyen carreteras, "reparan" centros hospitalarios y escuelas rurales. Bajo el nombre de "Grupo Militar de Apoyo", comparten las labores administrativas de los ministerios, particularmente la de aquellos relacionados con los asuntos relativos a la organización de la sociedad — como los de Gobierno, Educación, Salud y Obras Públicas, y otros proyectos en Darién, provincia mayormente selvática y fronteriza con Colombia. Estos grupos "conviven" con las poblaciones locales logrando de ellas cierta cooperación para sus labores. De hecho, su presencia en todos los ámbitos del país es de tal magnitud que armaron carrozas para participar en los carnavales de la ciudad de Panamá, en 1991 y 1992.

En este tenor, el ejército estadounidense también persiguió a diversas organizaciones populares. Reduciendo todas las categorías que la riqueza del sector popular panameño podría mostrar en su espectro ideológico a la de haber sido "norieguistas", las fuerzas militares de Estados Unidos apresaron y persiguieron a dirigentes populares y sus organizaciones. Redadas masivas fueron realizadas — especialmente en los barrios más afectados por la invasión — por las tropas de ocupación acompañadas por miembros de la llamada Fuerza Pública que sustituyó las FDP. Incluso, grupos de cooperativistas agrícolas en el interior de la República fueron acosados y acusados de tener vínculos con Cuba y con la Nicaragua sandinista.[5] El presidente de la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos (CONAC) señaló que cientos de campesinos fueron reprimidos y perseguidos violentamente por las tropas de ocupación estadounidenses, allanando para ello más de cien asentamientos.[6] El ministro de Educación, Marco Alarcón, justificó estos allanamientos sosteniendo que había que "desmantelar" totalmente la "presencia cubana", un argumento indistinto de los de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile o la de los Escuadrones de la Muerte en El Salvador o Guatemala.[7]

En línea con su papel subordinado, los gobernantes panameños se encargaron de vocear en los foros internacionales los proyectos intervencionistas de la administración Bush. En ese sentido, Panamá le solicitó a la OEA que revise el principio de no intervención para darle otro contenido, más afín con las pretensiones intervencionistas de Washington. Asimismo, el canciller del gobierno de Endara, Julio Linares, afirmó que el Grupo de Río — formado por siete países latinoamericanos con el objetivo de encontrar y formular políticas conjuntas frente a los problemas que las aquejan — "debilita" la OEA, porque este grupo trata asuntos que deberían ser considerados en la "máxima entidad regional" en cuyo accionar, salvo escasas excepciones, no han cabido decisiones no compartidas por E.U.[8] Y esto lo sostuvo precisamente cuando el canciller Colombiano pidió la revisión de los parámetros de seguridad hemisférica violados por E.U. con la invasión a Panamá.[9] Ante el Senado de E.U., Endara destacó conceptos sobre dicha materia que el mismo Presidente Bush todavía no había vertido, si bien sí los había puesto en la práctica: *"la causa de los derechos humanos... rompe fronteras y límites y hace obsoletas las nociones tradicionales sobre soberanía nacional".*[10]

El grado de subordinación del gobierno de Endara es tal que la Embajada de Washington y el Comando Sur no se tomaron el trabajo de pedir autorización para incursionar por territorio panameño. En noviembre de 1991, efectivos estadounidenses se llevaron a Miami, Florida, parte de las 15,000 cajas con efectos del General Noriega para ser utilizadas en el juicio al citado militar, sin solicitar el debido permiso de las autoridades panameñas. Y, cuando a principios de diciembre

de 1991 naves aéreas del Ejército Sur violaron el espacio aéreo de la ciudad de Panamá — para tomar fotografías de centros "estratégicos" de la ciudad, tales como la Universidad de Panamá, la presidencia, el palacio legislativo y la cancillería — precisamente cuando se anticipaban movilizaciones populares en el aniversario de la invasión — no sólo la Cancillería panameña no protestó por ello, sino que el Presidente Endara condecoró al antiguo Embajador de E.U. en Panamá. Ante este contexto no es de extrañar que grupos conservadores norteamericanos hayan planteado ofrecerle la "posibilidad" a Panamá de convertirse en colonia de Estados Unidos, mediante el sometimiento a referéndum del status de "Estado Libre Asociado" similar al que tiene Puerto Rico desde 1952.[11]

Para estos menesteres, la administración Bush también contó con la colaboración de un sector de la jerarquía eclesiástica panameña que se comprometió con la intervención militar. Durante la invasión y los primeros meses de la ocupación, estos sacerdotes se abocaron a legitimar la presencia norteamericana en el istmo. Por ello, el Arzobispo de la Ciudad de Panamá, Marcos G. McGrath, declaró públicamente a menos de veinte días de haberse iniciado la ocupación — en el aniversario de la matanza de panameños por soldados norteamericanos acaecida el 9 de enero de 1964 — que la invasión a Panamá y su posterior ocupación significaba "una liberación" para el país. Otros, como el Padre Javier Arteta, se ocuparon de justificar las acciones bélicas del Pentágono. Arteta, por ejemplo, dijo que el fuego que terminó por devastar ese barrio fue producto no de la incursión armada de éste país, sino de la resistencia civil denominada "Batallones de la Dignidad".[12]

La descomposición del régimen

Aunado a esta división de funciones, la inestabilidad política y social ha sido la constante en el escenario posterior a la intervención militar estadounidense. La situación del país, en todos los órdenes, es más grave de la que se vivía antes de la invasión. Según denunció la Presidente de la Comisión Nacional por los Derechos Humanos en Panamá (CONADEHUPA), Olga Mejía, "*en el país existe una sistemática violación de*

los derechos humanos... las autoridades elaboran expedientes con testigos falsos y condenan a presuntos inculpados a pesar de no tener pruebas...".[13] Para el gobierno de Endara, la vida humana es cuestión de intereses monetarios. Mientras que impidió la búsqueda de cadáveres por la invasión, pidió disculpas al gobierno de Japón por el secuestro, el 14 de marzo de 1992, de un empresario japonés que luego fue asesinado. Según Endara, estos delitos "afectan la inversión extranjera en Panamá". Robos por doquier y a cualquier hora, corrupción gubernamental, huelgas, desempleo y bombas han sido elementos recurrentes desde que se inició la ocupación, una situación que además — ante la falta de partidos fuertes y grupos aglutinadores — ha generado el desarrollo de una variedad de cultos evangélicos y esotéricos.

Los principales aliados de la administración Bush son las figuras y agrupaciones políticas que se encargaron de representar los intereses norteamericanos a lo largo de la crisis, y que asumieron el poder formal tras la invasión a Panamá. No obstante, estos grupos han mostrado una profunda debilidad e incapacidad de interlocución al no tener un proyecto sustancial de gobierno que efectivamente agilice la maquinaria del Estado para solventar la crisis que aún domina el escenario doméstico. El corresponsal para centroamérica de la revista británica *The Economist* se refirió a esta situación señalando que "*el Presidente es el más decepcionante de todos. Pocos toman en serio a Guillermo Endara. En los pisos de abajo en el palacio* (presidencial) *oficiales de E. U. hacen tratos con oficiales de seguridad que una vez trabajaron para Noriega. Arriba, el presidente enamorado y su joven esposa se entretienen con juegos de video, saliendo para funciones públicas dándose besos el uno al otro*".[14]

El proyecto de la administración Bush hacia Panamá consistía en desmantelar las FDP y crear una fuerza policial istmeña mínima que resuelva problemas menores en el país para justificar con ello la necesidad de renegociar los Tratados Torrijos-Carter y así permitir la permanencia de sus bases militares. En efecto, Estados Unidos estableció una relación de dependencia orgánica con la Fuerza Pública. Requisó gran parte del armamento que pertenecía a las FDP, y destruyó la mayoría de los cuarteles militares con que el país contaba

hasta antes de la invasión. El *gobierno de Endara* contribuyó a cimentar estas relaciones de dependencia: a escasa semanas de la invasión, pidió a gobiernos extranjeros el cese del entrenamiento militar a panameños que siguieran programas de educación castrense, mientras que los candidatos a sub-oficiales que estaban siendo entrenados en la escuela militar de Rio Hato hasta poco antes de la invasión, fueron enviados a Estados Unidos para que terminen su adiestramiento. Asimismo, Endara le encargó a un agente de la CIA — vinculado con el caso Irán-Contras, con los escuadrones de la muerte de El Salvador, y con la creación de una oficina paralela de inteligencia para el presidente Monge en 1982 en Costa Rica — la creación de un aparato de espionaje y contraespionaje que es dirigido desde la embajada de Estados Unidos.[15]

Pero ante la inestabilidad e ingobernabilidad del país, la invasión dista enormemente de ser un capítulo cerrado. A pesar del tiempo transcurrido desde que las tropas estadounidenses invadieron el país, el régimen de ocupación no logra estabilizarse. Y aunque la primera versión de la historia ya fue escrita por el gobierno de Endara — la aceptación del cuento de que la invasión a Panamá fue llevada a cabo para capturar a Noriega es una prueba de ello — ninguno de los grupos que apoyaron la invasión han logrado echar raíces en el país. El gobierno de Endara ha borrado de los libros de texto, aeropuertos, estadios y parques, el nombre del General Torrijos, y fundamentalmente, los recuerdos de gestas heroicas como la del 9 de enero de 1964 y muchas otras que simbolizan las luchas por la emancipación libradas por ilustres panameños en el pasado. El 20 de diciembre, por ejemplo, ha sido llamado por el gobierno Endara-Arias Calderón-Ford como un "día de reflexión".

La evolución del proceso político panameño da muchas muestras de lo contradictorio que ha resultado el gobierno instalado por las tropas invasoras para los objetivos de largo plazo para los que Washington emprendió el operativo militar. Un comunicado del Comando Sur publicado a un año de la invasión señaló que "*ha pasado un año desde que la Operación Causa Justa devolvió la democracia y la libertad a Panamá. Hoy el pueblo panameño puede mirar hacia el futuro con esperanza.*" Paradójicamente, el comunicado concluyó recomendando que sus tropas acantonadas en Panamá deben evitar viajar fuera de las instalaciones militares de Estados Unidos, a fin de evitar demostraciones y áreas en donde se darán disturbios.[16] El 6 de octubre de 1991, el Departamento de Estado advirtió a sus residentes en Panamá que eviten asistir a bares, discotecas y otros lugares públicos ante la posibilidad de que se produzcan atentados en su contra. El 20 de diciembre de 1991, un grupo de desconocidos lanzó explosivos contra el edificio de la embajada de Estados Unidos. En mayo de 1992, el Comando Sur emitió recomendaciones similares a las anteriores. En noviembre de 1992, los panameños rechazaron abrumadoramente un proyecto de reformas constitucionales entre las cuales se destacaba la abolición del ejército — ya destruido en los hechos por la intervención militar de E.U. Todavía, la incapacidad administrativa y de seguridad del gobierno de Endara se hizo patente cuando el 27 de diciembre de 1992 un atentado dinamitero no reivindicado tumbó cuatro torres de la red eléctrica del país y con ello dejaron sin electricidad a ocho de las nueve provincias del país.

La incapacidad de la oligarquía y los grupos que la apoyaron en las elecciones de mayo de 1989 para forjar una real democratización se traduce en la reedición del autoritarismo, ya no bajo la bota militar nacional sino bajo la extranjera. De una nación ocupada y con un grupo en el Palacio Presidencial que depende de la fuerza militar norteamericana para administrar el país, no puede surgir una democratización sustentada sobre la base de consensos nacionales, mucho menos populares. La democracia en el gobierno de Endara es un elemento de propaganda para el consumo popular. Así, con el lema de "en democracia" se despidieron miles de trabajadores públicos, se fomentó la compra de billetes de lotería o se marcan y promueven bienes de consumo para el mercado interno. En ese tenor, durante los primeros días de la ocupación soldados estadounidenses pegaron afiches con el lema "democracia al fin — después de la tiranía, paz y armonía — apoya el gobierno del Presidente Endara". El objetivo de estos afiches consistía en desplazar la creciente frustración local causada por las tropas de Estados Unidos hacia "renegados de las FDP" y "criminales y matones paramilitares" norieguistas.[17]

Como grupo desplazado del poder en 1968, la oligarquía no

hubiera podido librarse de Noriega con sus propias fuerzas, ya que no tenían más capacidad de convocatoria que no fuese aquella que les fue coyunturalmente otorgada al filo de las emociones y decisiones tomadas en el período electoral de mayo de 1989. Endara, Arias Calderón, Ford y sus aliados subalternos, además, reconocían y no trataron de alterar su dependencia política de Washington. Según reportó Lindsay Gruson antes de las elecciones de mayo de 1989, la efectividad de la política de Estados Unidos hacia Panamá fue tal que, a pesar de que había causado una depresión económica y el colapso de miles de negocios, "*pocos panameños de la clase media y alta culpan a Estados Unidos, la espina dorsal de la oposición a Noriega*". Un banquero sostenía que "*podemos molestarnos con Washington, pero la mayoría del tiempo nos pensamos como Estado cincuenta y uno* [de la unión americana]. *Es algo así como esperar que Seattle se torne antiamericano*".[18] Hoy, al no contar con Noriega como figura contra quien agrupar sectores significativos de la población y generar así una base social, se hace más evidente su dependencia de las tropas invasoras para ejercer labores gubernamentales y para imponer decisiones tanto antinacionales como antipopulares otrora impuestas por el régimen de Noriega mediante mecanismos políticos domésticos.

El descontento para con la administración de Endara y los partidos políticos tradicionales es cada vez más generalizado. Pero para que la población no los vincule con Endara y vean así truncadas sus aspiraciones electorales en 1994, sus antiguos aliados le dan la espalda. El aliado principal del proyecto de Bush hacia Panamá, el Partido Demócrata Cristiano, abandonó la coalición gubernamental desde 1991. El Partido Arnulfista que Endara y familiares del desaparecido ex-presidente Arnulfo Arias — que le da su nombre al partido — organizaron una vez que este llegó a la presidencia, eligió grupos contrarios al Presidente para su Comité Ejecutivo Nacional. Algunos de los personajes que dirigieron la Cruzada Civilista formaron partido político propio y han dirigido sus críticas contra el gobierno. Las agrupaciones de profesionales — maestros, doctores, entre otros — que lucharon contra Noriega, ahora encaminan sus esfuerzos contra las políticas de Endara. Miembros prominentes de la iglesia católica critican la "falta de liderazgo" del ejecutivo. En diversas encuestas, la población ha expresado su repudio al gobierno de Endara.

Lo paradójico de este rechazo es que, al llegar a la presidencia, los grupos que conforman el gobierno tenían una ventaja coyuntural que les habría permitido consolidarse en el poder. Entre los grupos que adversaron a Noriega no surgió ninguno que presentara un proyecto social y económico alternativo que después de la invasión podría haberle disputado al gobierno y al ejército estadounidense la lealtad o aquiescencia de las masas panameñas. Sin embargo, a pesar de ello el régimen no logró estabilizarse. Y ello se debe a que su "ventaja" conllevaba las semillas de su gran desventaja: el programa antipopular y antinacional que implantaron debía ser llevado a la práctica frente a masas que empezaron a despertar y a tener la capacidad de adversarlo. Si bien la administración Bush tuvo a su disposición gran variedad de recursos para apoyar a sus socios menores en el Palacio de Las Garzas, tampoco ostentaba una infinita capacidad de control y sometimiento.

Uno de los obstáculos con que se encontró la administración Bush en la búsqueda de sus objetivos en Panamá se deriva de que el grupo que instaló en el gobierno no es precisamente un adalid de la democracia. Casi todos los miembros prominentes de la administración Endara fueron directores de bancos considerados por la agencia antidrogas de E.U. (DEA) como notorios lavadores de dinero.[19] Endara y el Vicepresidente Ford fueron señalados por informes extraoficiales de la misma agencia como involucrados en el lavado de dinero del narcotráfico. El presidente panameño es además co-dueño de una empresa en Panamá junto al General chileno Manuel Contreras — quien dirigió la policía secreta chilena en la década de 1970, responsable de gran parte de los asesinatos políticos ocurridos en ese país y del asesinato del ex-canciller Orlando Letelier en Washington.[20]

Una aparente solución que Washington vislumbró fue la de encontrar un personaje que recoja algunas demandas de la población, pero que las canalice hacia los intereses de Estados Unidos: un reformismo preventivo y conservador dirigido a pulir los "detalles sociales" de la intervención militar. No obstante, ello requería decisiones — forzar la renuncia de

Endara o promover un golpe de estado — cuyas repercusiones podían poner en peligro los objetivos originales de la ocupación. Y fueron varias las oportunidades en que la administración Bush quiso optar por esta última opción.

En un primer momento, los intentos de golpe tenían el objetivo de formar un gobierno "fuerte" con capacidad política para renegociar lo más pronto posible la presencia de Estados Unidos en el istmo más allá del año 2000. En diciembre de 1990, el ex-comandante de la Fuerza Pública, Cnel. Eduardo Herrera Hassán — arrestado desde agosto de 1990 por supuestas vinculaciones con planes para derrocar a Endara — se escapó de una prisión de alta seguridad y encabezó una rebelión policial contra el gobierno. Según fuentes judiciales y de inteligencia panameñas, al menos cuatro altos militares estadounidenses apoyaron dicha rebelión.[21] Y aunque esta tenía el apoyo de algunos sectores de la administración Bush — el Vicepresidente de E.U., Dan Quayle, fue vinculado a ella — esta fue impedida por la intervención de tropas norteamericanas. Ello refleja mas bien que el Departamento de Estado y el Pentágono no se habían puesto de acuerdo sobre las políticas a seguir hacia Panamá.[22]

En la medida en que — repito — ninguna acción política de envergadura puede ocurrir sin el beneplácito de Washington, estos supuestos intentos de golpe pueden verse también como un mecanismo de presión para que el gobierno de Endara apruebe una serie de medidas que condicionen aún más la independencia panameña, tales como convenios de asistencia legal, una mayor apertura al capital extranjero, el patrullaje de las costas del país por parte de patrulleras del gobierno federal norteamericano, permiso para el retorno de los Cuerpos de Paz (echados del país por Torrijos), y la desaparición del "secreto bancario" sobre el que se fundamenta el Centro Financiero Internacional en el istmo.[23]

Finalmente, el proyecto que sí procedió fue el de fomentar, dentro de las filas de las agrupaciones afines a la administración Bush, a figuras y partidos que puedan asumir dicho papel a partir de 1994, cuando Endara deberá ser reemplazado en la presidencia. Pero para que el proyecto de Washington prospere, los grupos del país que pugnan por encabezarlo primero habrán de sentar las bases para ello. Es por ello que procedió

la ruptura entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC) encabezado por el vicepresidente Arias Calderón, y los partidos que formaban la alianza electoral opositora instalada en la Presidencia por las tropas invasoras. La coalición partidista opositora a Noriega se formó esencialmente para cubrir las necesidades electorales de corto plazo de la oligarquía. Por ello, una vez en el poder, resurgió el divisionismo permanente que caracterizó a ésta antes de 1968, en la medida que cada grupo oligárquico comienza a luchar por sus intereses particulares en el contexto de una crisis económica interminable. Así, el PDC — corriente partidista internacional privilegiada por Washington en la década de 1980 para legitimar los gobiernos represivos centroamericanos — intentó llenar el vacío político mediante su separación temporal de la alianza gubernamental. Así, después de separarse del gobierno en abril de 1991, el PDC sostuvo que pugna porque se cumpla el presupuesto del Estado con "equilibrio entre la atención a la deuda financiera y la deuda social". Asimismo, empezó a manifestarse contra el nepotismo, el "tráfico de influencias", por la "moralidad pública", y por el que las privatizaciones no conduzcan a la "despanameñización". Pero en la medida en que, hasta el momento, este y grupos similares no están dispuestos a impulsar las demandas populares necesarias para obtener un cierto apoyo de la población, ese proyecto que apenas empezó a nacer carece de fortaleza, y por lo tanto, de efectividad.

Panamá hoy

Sociedades que han sido sometidas a ocupaciones extranjeras y que han pasado por crisis políticas agudas han reaccionado a veces contrariamente a lo esperado. En la América Latina contemporánea, los procesos de democratización no han tenido — por lo mismo — resultados homogéneos. Mediante torneos electorales han llegado al poder varios regímenes — si bien no contestatarios de las estructuras sociales ni políticas — y se ha logrado expresar el apoyo plural a proyectos de cambio en países como Brasil, Nicaragua, República Dominicana o Haití. Recordemos que en Europa Central y Oriental de la posguerra, en los países en los que el invasor Nazi

había sido derrotado por el Ejército Rojo, éste fue percibido inicialmente como "liberador". Pero con el transcurso del tiempo, por el régimen represivo que se conformó en aquellas naciones, este ejército "liberador" se convirtió en el ejército de ocupación que impidió que las luchas políticas internas se encaminaran por senderos nacionales. La posible similitud con el caso panameño es más obvia en la medida en que se ha reducido la capacidad de maniobra del gobierno. Muchísimas expresiones populares de protesta, atentados dinamiteros, pero fundamentalmente la existencia de un vacío político que las varias agrupaciones oligárquicas no han podido llenar, son muestra de la grieta que promete ensancharse a corto plazo. En Washington, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos describió esta situación como un clima de tensión social que "puede tener dramáticas consecuencias".[24] Así, en una visita posterior al país — febrero de 1991 — la misma destacó que el gobierno de Panamá "*es incapaz de ejercer el poder sin injerencia estadounidense*".[25]

Nuevas organizaciones, frentes sociales, y líderes populares hoy afrontan las tareas inconclusas que plantea la autodeterminación. Los mártires del 20 de diciembre "han muerto ya de bala". El que éstos no "vuelvan a morir de indiferencia" como planteó el Gral. Omar Torrijos diez años antes, dependerá de la fuerza y consistencia que la comunidad nacional panameña dedique para asumir las riendas de su propio destino.

Como consecuencia de las circunstancias aludidas, los actores que tuvieron un papel importante en el proyecto de la administración Bush han empezado a transformarse. Un sector de la jerarquía de la Iglesia Católica dió un paso en esta dirección al acusar a Estados Unidos de mantener su injerencia en el país, e incluso se retractó de lo anteriormente afirmado sobre la invasión, calificándola como "*una verdadera tragedia en los anales de nuestra historia.*"[26] Incluso algunas voces del régimen de Endara empezaron a reclamar "reparaciones equitativas" a Estados Unidos por los daños causados por la invasión: "*Estados Unidos utilizó su ejército en Panamá por lo que Noriega y las FDP representaban para ellos y no por simple hecho de liberarnos de la dictadura*", puntualizó el canciller Linares.[27]

Un ejemplo de estas "transformaciones" lo constituye el caso de la Sra. Isabel Corro, hoy dirigente de la Asociación de Familiares de los Caídos del 20 de Diciembre. Corro, de 45 años de edad, en época de Noriega vestía de blanco y hacía sonar cacerolas, como todas las mujeres de clase media y alta que participaban en la Cruzada Civilista. Cada año, la Sra. Corro se encargaba de organizar los concursos de belleza "Miss Panamá". "*Me movía en salones de lujo y hoy lo hago en los cementerios. Olía siempre a fragancias francesas y hoy sólo huelo la muerte*".[28]

No ha habido grupo que haya podido canalizar la incredulidad popular ante la insolvencia de la oligarquía. Del régimen sólo se han producido maniobras tipo espectáculo — una huelga de hambre de Endara en supuesta solidaridad con los pobres del país; su boda, a la que invita a reyes europeos (quienes no atendieron la invitación) — que vuelven el país a los "tiempos romanos de Pan y Circo, sólo que con mucho Circo y poco Pan", tal como describió Torrijos los regímenes oligárquicos panameños anteriores al golpe de Estado de 1968. El sistema político que la intervención militar brindó procura limitar las aspiraciones de amplios sectores de la sociedad panameña, y cercar toda esperanza en nuevos proyectos de sociedad. Las esperanzas pueden tener repercusiones transformadoras, por lo que Washington estimó imponerle a éstas un cauce limitado con el fin de aminorar su potencialidad innovadora, una reedición del sistema político imperante en el país entre 1903 y 1968: las agrupaciones oligárquicas en el poder político y las fuerzas armadas norteamericanas como la garante de su estabilidad.[29]

El desarrollo posterior de la crisis aparentemente recaerá sobre otros sectores no comprometidos ni con la ocupación ni con el autoritarismo militar. En una encuesta revelada en agosto de 1990 por el oficialista diario La Prensa, la población panameña expresó que, de haber una inminente elección, casi un cincuenta y dos por ciento votaría a favor de un grupo no vinculado con el anterior o con el actual régimen. Si bien los intereses particulares del gerente del diario matiza sus resultados, en la difusión de la misma encuesta el diario señaló que "*existe espacio para la aparición de una tercera fuerza en el panorama político nacional*", lo que entrañaría "*la posible repetición del fenómeno Fujimori en Panamá*".[30] En el caso

panameño, ya se vislumbran figuras en las que posiblemente recaerá ese respaldo, que encabezan movimientos en formación,[31] pero que deberán forjar amplias alianzas para poder desembarazarse de la ocupación. El desafío, sin embargo, es grande: la real democratización del país será posible sólo mediante la salida de las tropas norteamericanas, el cese total de la injerencia de Estados Unidos, la completa renovación de la institucionalidad política del país, y un profundo reordenamiento social que lleve la democracia más allá del sistema electoral.

Mientras tanto, los instrumentos ideológicos de la recolonización se utilizan y se afinan con base en los intereses estratégicos de Estados Unidos. La intención es darle forma a la sociedad panameña que se habrá de someter a los planteamientos de su estrategia global. Para ello, antes de la invasión y después de ella, la idea que se ha querido grabar en la conciencia panameña es la creencia de que si se van las tropas estadounidenses del país, "vendrá el hambre" y retornará el despotismo — que gracias a la propaganda del Comando Sur y la gubernamental, se identifica con Noriega y con las fuerzas armadas — como si la situación reinante sólo fuese una de sus secuencias colaterales y ellos no tuviesen responsabilidad por ésta.

En este contexto, encuestas dirigidas más a formar opinión que a reflejarla han destacado la "opinión" de la población panameña favorable a llamar "liberación" la invasión a Panamá, a renegociar los tratados canaleros para permitir que las bases de Estados Unidos permanezcan más allá del año 2000, y la supuesta consternación panameña por su propia incapacidad para administrar eficientemente el Canal. Precisamente, el medio de prensa que encarga estas encuestas — el diario *La Prensa* — es el medio en el que el Comando Sur publica periódicamente sus comunicados en los que puntualizan la colaboración que están prestando al desarrollo del país. Como medida preventiva de relaciones públicas, el Comando Sur destacó que el número de muertos causados por su intervención militar "*nunca se pensó que fueran o representarían la cuenta final*".[32] En el noticiero del 18 de diciembre de 1992, una locutora del canal 4 de Televisión destacó ampliamente como "buena noticia" la inauguración de un centro de salud en el interior del país por un General del Comando Sur de Estados Unidos.

¿Se renegociarán los tratados?

En este proceso, la administración Bush se empeñó en ventilar, solapadamente, la renegociación de los tratados canaleros. La posición oficial tanto de Washington como la del gobierno Endara fue la de que no se renegociarán los tratados y que las tropas de Estados Unidos saldrán de territorio panameño antes del año 2000, tal y como está previsto por los Tratados Torrijos-Carter. Sin embargo, la debilidad del régimen panameño es tal que la administración Bush reconoce que no es recomendable negociar con un gobierno sin credibilidad ni reconocimiento internacional un acuerdo que sería severamente cuestionado. A su vez, Estados Unidos tampoco quiso aparecer como el que está detrás de la renegociación, porque ello implicaría admitir que invadió Panamá con ese objetivo.

Mientras, los militares estadounidenses hacen campaña activamente para que, tan pronto como otro gobierno asuma el poder, este sea quien le solicite que las bases militares de Estados Unidos permanezcan en territorio panameño. Por presiones presupuestales y por efectos de la distensión, el Pentágono presentó un programa para cerrar un tercio de sus bases en el extranjero, pero no contempló cerrar alguna en Panamá. Los militares norteamericanos han lanzado una campaña de relaciones públicas sobre la supuesta necesidad de dejar al menos parte de sus instalaciones y sus tropas en Panamá. Así, el actual Jefe del Comando Sur en Panamá, General George Joulman, dijo que a pesar de que no existe en el mundo alguna amenaza militar significativa, el "tránsito de una bipolaridad a una multipolaridad" impone la revalorización de las fuerzas militares convencionales en general, por lo que es necesario que sus fuerzas permanezcan en territorio istmeño.[33]

En este sentido, grupos de congresistas en Washington han mostrado ser menos sutiles. Así, una resolución conjunta del Senado y la Cámara Baja del 21 de marzo de 1991 propuso, "*sobre la base de que el Canal de Panamá es un bien estratégico vital para los E.U. y sus aliados... que existen relaciones amistosas y de cooperación entre ambos gobiernos, que la región tiene una historia* (recurrente) *de gobiernos inestables*

que desafían el futuro operativo del Canal de Panamá", y que Panamá ha disuelto sus Fuerzas de Defensa y no tiene además alguna fuerza capaz de defender el Canal de sus posibles agresores, renegociar los tratados para que las tropas norteamericanas retengan la habilidad de actuar independientemente y más allá del año 2000 para proteger los intereses estadounidenses.[34]

Esta resolución resulta, sin embargo, mucho menos agresiva de la apadrinada por el Congresista Philip Crane, principal defensor de la resolución anterior, quien el 4 de enero de 1991 propuso, con el respaldo de cincuenta y siete congresistas, que se "*abroguen los Tratados del Canal de Panamá, el Tratado de Neutralidad, y el Acta del Canal de Panamá de 1979*".[35] Sin embargo, dada la cooperación que la administración Bush encontró en el régimen panameño, para marzo el congresista aludido observó que "*la situación en Panamá ha cambiado dramáticamente... expertos creen que las actitudes panameñas hacia la continuación de la presencia de las tropas de E.U. en Panamá también han cambiado*". En consecuencia, el Congresista Crane aminoró su "agresividad" en busca de sus mismos objetivos, al notar que "*los personeros del gobierno panameño han aseverado abiertamente que ellos serían receptivos a la idea de negociar un acuerdo sobre el derecho de E.U.*" a dejar sus bases en el istmo.[36]

Para hacerlo factible, la administración Bush y el gobierno de Endara han dejado las bases sobre las que las futuras administraciones de Estados Unidos y de Panamá conducirían las negociaciones respectivas. Por un lado, el Comando Sur ha promovido la idea de que sus fuerzas acantonadas en Panamá hacen grandes contribuciones a la economía del istmo, y de que la vía interoceánica necesita una protección militar que solo sus fuerzas pueden ofrecer — en la medida que Panamá tendría que reconstruir sus fuerzas militares para llenar esa necesidad. Washington cuenta además con otros argumentos que le permitirían tener la mejor parte si se da la negociación. En ese tenor, el presidente del Comité de Operaciones Gubernamentales de la Cámara de Representantes expresó su consternación por la "*inestabilidad de la democracia panameña y por el hecho de que el narcotráfico y el lavado de dinero ha aumentado y está en un nivel peor que antes de que las fuerzas de E.U.*

capturaran a Noriega".[37] En esta secuencia, personeros de la administración Bush ventilaron información sobre la proliferación en Panamá de bandas de narcotraficantes que utilizan el país como centro de operaciones, para apoyar la táctica negociadora de la Casa Blanca. Como aportación a su compromiso con las renegociaciones, la oligarquía y sus representantes intentarán negociar "soberanamente" la cesión de los derechos de base a cambio de retribuciones económicas. Como paso inicial, quisieron abolir de derecho las fuerzas armadas del país con el fin de que estas no se conviertan en una institución que desafíe su poder, así como para que sean las fuerzas armadas de E.U. las que deban encargarse de los menesteres propios a la defensa de las instalaciones canaleras.

El retirado Gral. Bruce Palmer había aconsejado en 1989 que como "*quid-pro-quo* (a estas cesiones), *Estados Unidos deberá financiar las mejoras que el canal necesita y que Panamá no puede sufragar en el presente, o reembolsar a Panamá con algún honorario por el ejercicio de estos derechos de base*".[38] Según el legislador progubernamental Leo González, Panamá perdería aproximadamente 390 millones de dólares anuales y miles de trabajadores quedarían desempleados, si Estados Unidos entrega sus instalaciones militares antes del año 2000.[39] Debido a consideraciones en torno al costo de mantenimiento de las instalaciones en Panamá — en la medida que se quiere reducir el presupuesto destinado a la defensa para aminorar el enorme déficit fiscal — es factible que la renegociación tenga como objetivo un retiro parcial — nunca total — de las fuerzas estadounidenses.

A fin de mantener el control sobre algunas instalaciones de suma importancia para la estrategia global de E.U., el Cnel. William E. Aylsworth de la Fuerza Aérea de E.U. recomendó que a "*cualquier base de E.U. y puertos que permanezcan en Panamá, ahora programados para ser cerrados por el Tratado para el año 2000, deberán serle dados un carácter diferente*". Y con ese propósito, "*tales bases y puertos, que Estados Unidos necesita para cumplir con sus obligaciones*" globales, deberán pasar, a través de nuevos acuerdos, "*a un status de uso combinado*", *con el nombre de la institución policial panameña en la puerta.*[40]

Si se juzga por las actuales contribuciones de Estados

Unidos al gobierno panameño la cantidad que Washington estaría dispuesta a pagar a cambio de la renegociación de los tratados, la plutocracia istmeña no tendrá a corto ni a mediano plazo los recursos que le permitan solventar su gestión burocrática. En efecto, en un principio Estados Unidos ofreció otorgarle a Panamá recursos millonarios para que pueda iniciar su reconstrucción, dada la devastación causada por su política hacia el país. En febrero de 1990, la Casa Blanca propuso una asistencia por 1,035 millones de dólares, de los cuales sólo treinta y cuatro millones estarían destinados al rubro de "asistencia humanitaria" y doscientos millones a un programa de empleo. Si bien los restantes ochocientos millones de dólares beneficiaban directa e indirectamente a empresas y bancos estadounidenses, todavía la disponibilidad de los recursos estaría sujeta a que el régimen istmeño introduzca cambios en su régimen bancario.[41]

Consideraciones presupuestales, en la medida que Panamá constituye un objetivo estratégico ya logrado, hicieron al Presidente Bush reducir la cantidad prometida de 1,000 millones de dólares a 500 millones. Sin embargo, después de una amenaza del Senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara Alta, en el sentido de que Panamá no merecía recibir siquiera la mitad de los 500 millones de dólares prometidos,[42] para el mes siguiente la suma prometida se redujo a cuatrocientos veinte millones. Lo paradójico es que en esta suma se mantuvieron las mismas proporciones de "ayuda" destinadas a las empresas estadounidenses: sólo ciento veinte millones serían puestos a disposición del gobierno panameño.

Fue sólo hasta el mes de abril de 1990 cuando Bush le puso término a las sanciones contra Panamá impuestas desde marzo de 1988. Además, el operativo de la invasión a Panamá le costó al Pentágono la suma de ciento sesenta y tres millones de dólares.[43] También recordemos la devastación causada por sus tropas durante la invasión y el saqueo generalizado iniciado a partir de ésta, que provocaron pérdidas valuadas en no menos de mil millones de dólares — mercancías que en su mayoría tendrían que importarse nuevamente de firmas estadounidenses. Aunado a esto, durante el operativo de la invasión el Comando Sur le decomisó a Panamá armamento

valuado en quinientos millones de dólares,[44] así como diversas naves que pertenecían a la marina nacional, cuyo valor no ha sido determinado.[45] Washington concedió la suma de un millón doscientos mil dólares a sus empleados diplomáticos y militares en Panamá a manera de compensaciones por las pérdidas sufridas a raíz de la invasión.[46] Sin embargo, ninguna solicitud panameña en ese tenor ha sido atendida, porque "*el pago de reclamos relacionados con el combate ... no está entre los mejores intereses del Departamento de Defensa, debido al número potencialmente grande de tales reclamos*", según especificó el Mayor Joseph. A. Goetzke, Jefe de la División de Pequeños Reclamos.[47] El operativo militar le dejó a Estados Unidos más ganancias millonarias que gastos: una ganancia neta tanto monetaria como estratégica.

La génesis del nuevo orden

Consideraciones estratégicas determinaron que Washington impulsara la invasión para reincorporar plenamente a Panamá dentro de su esquema estratégico global. La experiencia y el éxito en esta operación movió a los estrategas militares y a los encargados de la política exterior a valorar la utilización de medios bélicos para impulsar los intereses estratégicos de Estados Unidos en el mundo. El nuevo escenario internacional surgido a raíz de la quiebra política de los regímenes comunistas del este europeo, indujo a Estados Unidos a buscar las formas que le faciliten acaparar los espacios anteriormente reservados para la Unión Soviética, así como destacar maniobras bélicas previamente vedadas tanto por la bipolaridad inherente al poderío soviético, como por los confines que había mostrado el desarrollo de su doctrina militar.

Hoy, Estados Unidos es la mayor potencia militar mundial. Al desmembrarse la Unión Soviética en diciembre de 1991 — un proceso que se inició con la *perestroika* y la *glasnost* cinco años antes — desapareció un factor de estabilidad del escenario internacional. Cayó el Comunismo y se hicieron más evidentes las extremas desigualdades que existen entre el Norte industrializado y el Sur "en desarrollo." En el Sur, naciones apertrechadas por las potencias mundiales de an-

taño — Irán, Irak — y en el Norte, potencias medias o en plena gestación — la Comunidad Económica Europea, Japón — intentan disputar espacios regionales *antes reservados para* Estados Unidos y la Unión Soviética. Los países surgidos al calor de la primera y la segunda guerra mundial se desmembran para redelinear los mapas una vez considerados como inamovibles.

La inestabilidad del escenario internacional es el signo de los noventas, y su secuela, el intento de la administración Bush de convertirse en la única potencia mundial. Según el Coronel Harry G. Summers — quien encabezó los esfuerzos analíticos del Pentágono para superar el síndrome de Vietnam — "*cuando la cortina de hierro se derrumbó en noviembre de 1989... Estados Unidos ya no estaba limitado por el miedo a la confrontación nuclear con la Unión Soviética y pudo esgrimir su poder militar de una manera que no le había sido posible desde la Segunda Guerra Mundial*". Según Summers, "*un Nuevo Orden Mundial está a la mano en el que gran parte del mundo parece balancearse sobre el filo de la anarquía* [por lo que]... *Estados Unidos podrá verse forzado a tener un papel de policía mundial*".[48] La invasión a Panamá de diciembre de 1989, precisamente un mes después del "derrumbe" aludido, fue el primer caso en que Washington ejerció su visión del Nuevo Orden Mundial.

En este escenario, los altos jerarcas del Pentágono desean que su ejército "cause miedo", tal como lo señaló Powell el 4 de febrero de 1992 en Washington. Al inicio de su campaña electoral en febrero de 1992, Bush reiteró la idea de que Estados Unidos es el único líder indiscutible en el mundo. Según un documento del Pentágono dado a conocer por el *New York Times*, el Pentágono quiere evitar que surjan potencias contrarias, en cualquier parte de la Tierra. Para ello incluso prevee "convencer a los competidores en potencia de que no necesitan aspirar a desempeñar un papel mayor (al de) perseguir una postura más agresiva...".[49] Si bien en un documento posterior (aparentemente hecho para aplacar las críticas recibidas por el anterior) el Pentágono aboga por acciones militares colectivas como rasgo clave de su estrategia global, también expresa la decisión de mantener "la capacidad para abordar selectivamente aquellos problemas de seguridad que amenacen nuestros intereses".[50]

En ese contexto, desde que se concibió la invasión a Panamá, ésta podría utilizarse "como *modelo para futuros conflictos que puedan necesitar que los soldados nuevamente actúen en un complejo y rápidamente cambiante escenario de combate*".[51] A raíz de los cambios en el escenario internacional, más que emular al humanismo soviético desplegado con el régimen de Gorbachov, Estados Unidos "*tomaría ventaja de cualquier oportunidad mientras que... ejercita la prudencia y la cautela*", según el curso estratégico definido por el secretario de Defensa Dick Cheney y el Presidente Bush.[52] De allí que el uso de las tropas y todo su arsenal bélico, a partir de la presidencia de George Bush, no vendría a limitarse por consideraciones que no sean estrictamente las estratégicas. Con base en ello el Secretario de Defensa Cheney sostuvo, en el contexto de la ofensiva contra Irak en febrero de 1991, que "*Estados Unidos tiene exigencias definidas*". Por lo tanto, continuó Cheney, "*debemos conservar nuestro control sobre los océanos del mundo... ser capaces de desplegar nuestras fuerzas, tanto en el sureste asiático, como en Panamá, para afrontar situaciones imprevisibles, a fin de defender las vidas e intereses norteamericanos...*".[53] Según Cheney, "*terminada la guerra fría, Estados Unidos debe mantener el músculo militar que le permita defender sus intereses y aliados ante amenazas regionales...*".[54] Por lo tanto, según afirmó el Jefe del Ejército Sur de E.U acantonado en Panamá, Richard Timmons, debido a que E.U. tiene un papel que cumplir en la región, este debe mantener su presencia en el subcontinente.[55]

En sus pasos iniciales, el nuevo escenario internacional de la posguerra fría parecía llevar hacia la consolidación de formas más humanas de convivencia entre las naciones. El fin de la rivalidad soviético-estadounidense creó la posibilidad de que la Unión Soviética permaneciera como poder regional y mundial, y de que, gracias a sus transformaciones políticas y económicas domésticas, surgiría una nueva era de relaciones internacionales si bien no libre de conflictos, sí apta para tratarlos no bélicamente. En este primer escenario, las superpotencias tendrían regiones a su cargo, regiones sobre las que impulsarían sus respectivos proyectos globales. Sin embargo, la incapacidad del régimen soviético de afianzar su maquinaria productiva más tarde trajo un segundo escenario en el que,

más que la transición de un orden mundial bipolar hacia un orden global multipolar que presidiría las riquezas y pobrezas del mundo, su ocaso nos condujo hacia un orden mundial militarmente unipolar, cuya multipolaridad política y económica vendría a subordinarse al primero. Consecuentemente, tanto el discurso sobre el fin de la historia como el del fin de la guerra fría que surgió en este contexto fueron simplemente señales de una transición hacia el inicio de un nuevo ciclo de Pax Americana.

Legados de Bush

El orden mundial que América Latina confrontará para el resto de la década de 1990 es adverso. La administración Bush quiso que su país ejerciera un papel de policía mundial y de imponer sus leyes al resto de los países del orbe, precisamente si estos no son parte del selecto primer mundo. A México le llegó el turno —a pesar de las cordiales relaciones entre ambos países tras las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio Norteamericano— cuando la Corte Suprema de E.U. avaló el secuestro — para su procesamiento judicial en E.U. — del médico mexicano Humberto Alvarez Machain por parte de agentes antinarcóticos estadounidenses.

La administración Bush quiso ejercer el papel de dictaminar quién, cuando, y cómo secuestrar a sospechosos en otros países del tercer mundo. Pretendió reservarse para sí la decisión de cumplir o no con los tratados internacionales de extradición. El gobierno estadounidense optó por ofrecer sendas recompensas — volviendo con ello a los tiempos del viejo oeste americano — a quienes den información que permita la captura de sospechosos o criminales en otras naciones.

En una demanda reciente de una compañía privada estadounidense contra el gobierno hondureño, la Corte Suprema de E.U. nuevamente avaló la potestad de las cortes norteamericanas para juzgar casos ocurridos fuera del territorio estadounidense. Ante ello, los gobiernos de las naciones aludidas esquivan la responsabilidad de afrontar la intromisión. Durante la gestión presidencial de Bush (1988-1992), la ley del

más fuerte volvió a imperar. Washington se caracterizó por una política de venganza pensada por la Casa Blanca, ejecutada por el Pentágono y avalada tanto por el Congreso como por la Corte Suprema: una unidad de criterios para impartir lecciones sobre las premisas del nuevo orden al tercer mundo. Washington tuvo, además, la fuerza de las pasiones de un pueblo que ya no tiene reparos para apoyar la guerra. La invasión a Panamá y la Guerra del Golfo fueron muestras de ello.

A pesar del tiempo transcurrido, las heridas ocasionadas por ambas incursiones armadas no han sanado. Saddan Hussein todavía preside Irak. Las amenazas de Bush — en plena campaña electoral de 1992 — de volver a atacar a dicho país fueron consideradas por su pueblo mas bien como una táctica electoral. Noriega fue declarado culpable — y luego "Prisionero de Guerra" — pero sólo después de que se prohibió ventilar información que lo vinculaban con los servicios secretos de E.U. Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cartel de Medellín, se escapó de la cárcel de Envigado en su país natal cuando se lo propuso. La crisis económica en Estados Unidos, la inestabilidad política latinoamericana y el riesgo de explosión social en Rusia amenazan con dar al traste con el diseño de Washington para los años que vienen. La derrota electoral de Bush en noviembre de 1992 indica que mas bien será su sucesor, el demócrata William Clinton, quien definirá el papel de E.U. en el incierto escenario internacional que deja en pie su antecesor.

La invasión a Panamá y la guerra del Golfo Pérsico fueron presentadas al mundo como ejercicios exitosos de la intervención militar estadounidense. Pero el hecho es que nunca se informó adecuadamente ni los verdaderos antecedentes ni las consecuencias de estas. La actual crisis política panameña es, paradójicamente, una representación de los problemas que confronta el "nuevo mundo" en todas las regiones del orbe.

Las múltiples cumbres regionales que han tomado lugar en los últimos años reflejan la imposibilidad de que el Tercer Mundo ofrezca alternativas propias para el diseño del milenio que viene. A pesar de que en estas ocasiones ya no se acostumbran (tanto) los discursos grandilocuentes de antaño, éstas tampoco han logrado algo más que declaraciones de amistad y cooperación en rubros de poca relevancia. Mientras

que América Latina — de vez en cuando junto a España y Portugal — lleva a cabo reuniones en las que no llegan a acuerdos de importancia, el primer mundo — el grupo de las siete naciones más industrializadas — muestra homogeneidad de criterios.

Panamá, antesala del nuevo orden

La invasión a Panamá fue la cuna del Nuevo Orden Mundial. Con la intervención, Washington puso en práctica los últimos desarrollos de su doctrina y arsenal militar y de los instrumentos políticos de su estrategia global. Para Estados Unidos, la invasión mostró que la fuerza militar puede y debe ser utilizada para confrontar desafíos de cualquier índole provenientes del tercer mundo. En la región centroamericana, la invasión fue uno de los últimos pasos del proceso de reideologización conservadora impulsado por Estados Unidos, que culminó con el triunfo electoral del antisandinismo en febrero de 1990. Frente a latinoamérica, la política de Estados Unidos hacia Panamá mostró su efectividad en la instrumentación de los aspectos concernientes a la democratización y el combate al narcotráfico como elementos fundamentales de su estrategia política hacia el hemisferio. Para el tercer mundo, la invasión a Panamá señaló su incapacidad para responder equiparablemente a la reformulación estratégica y táctica de Estados Unidos. Y ante el mundo, el operativo militar de la invasión probó que Estados Unidos no sólo es la única superpotencia, sino que tiene la voluntad para conducirse como tal.

Las reacciones de la comunidad internacional frente a la invasión a Panamá ilustran este ordenamiento global que — insisto — más que iniciarse con el triunfo de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, se inició en Panamá. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Francia bajo el Presidente socialista Francoise Miterrand y la Gran Bretaña bajo la conservadora Primera Ministro Margaret Thatcher no se diferenciaron en su apoyo a Estados Unidos. El gobierno francés incluso fue más allá que Gran Bretaña y Washington al justificar la invasión norteamericana aduciendo que el caso panameño es "un caso límite" del supuesto "derecho de injerencia", porque "la guerra abierta contra la droga obliga a salirse de la norma". En la asamblea general del organismo multinacional, Italia y Japón no tomaron posturas definidas, mientras que España "lamentó los hechos" y votó por la resolución de condena a la invasión. El gobierno de la República Federal Alemana manifestó que "comprende" a Estados Unidos. El resultado final de la votación sobre la resolución de condena marcó sólo setenta y cinco votos aprobatorios, mientras que cuarenta países se abstuvieron.

En América Latina, la Argentina presidida por el peronista Carlos S. Menem manifestó su "consternación" por la invasión. Venezuela bajo el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez afirmó que "no se justifica la intervención" pero culpó no a Estados Unidos, sino a América Latina. El Perú bajo Alan García desafió los parámetros regionales y amenazó con no asistir a una próxima cumbre antidrogas si Estados Unidos no retiraba sus tropas de Panamá — pero luego asistió a pesar de que Panamá seguía ocupada. Cuba y Nicaragua Sandinista fueron los únicos países que no sólo la condenaron tajantemente, sino que mostraron disposición para continuar haciéndolo en otros foros. La Colombia acosada por Estados Unidos y el México, siempre antiintervencionista — al margen de sus relaciones cordiales con Estados Unidos y a pesar de las abiertas críticas del embajador estadounidense a la posición del gobierno mexicano — persistieron y fundamentaron su posición contraria a la invasión. El resto de Centroamérica y el Caribe la aprobaron o se abstuvieron, con la temporal excepción de Costa Rica, presidida por el Nóbel de la Paz, Oscar Arias, quien "deploró" el uso de la fuerza pero a su vez, al igual que El Salvador bajo el presidente Alfredo Cristiani, se abstuvo de votar a favor de la resolución que condenaba a Washington.[56]

El balance de las reacciones a la invasión demostró el éxito de la administración Bush para atraer a su esfera de influencia a decenas de países que otrora, independientemente de las justificaciones, habrían mostrado posiciones menos ambiguas ante una acción armada de esta envergadura. A su vez, estas manifestaciones fueron sólo el inicio de las felicitaciones, alianzas, e incluso, del financiamiento a acciones de este tipo que la gran mayoría de las naciones del mundo mostraron ante el belicismo estadounidense en el Golfo Pérsico. En éste,

antiguas potencias coloniales, gendarmes regionales y países distantes que sin embargo no querían ser dejados a un lado del reparto global que anticipaban le siguieron, no se diferenciaron en su búsqueda del paraguas del Pentágono y se subordinaron a un proyecto de nuevo orden mundial diseñado por la administración Bush. El Pérsico, cuyo preludio fue Panamá, mostraría que el orden mundial unipolar liderado por Estados Unidos no tiene opositores: "*Hubo un tiempo en que Moscú hacía todo lo contrario a lo que hacía Estados Unidos, pero esos tiempos se acabaron*", destacó en este contexto el vocero de la cancillería soviética, Guenadi Gerassimov.[57] Incluso, poco tiempo antes del desmembramiento de la URSS, Estados Unidos consideró la posibilidad de llevar a cabo maniobras conjuntas entre ambos países.[58]

A partir de su derrota estratégica en Vietnam, las limitaciones encontradas por Washington en la aplicación de su doctrina militar impulsó que sus estrategas redefinieran, mejoraran o ampliaran las tácticas utilizadas para favorecer su estrategia global. En el proceso de aprendizaje, Washington refinó considerablemente sus tácticas políticas y militares, a tal punto que, como potencia inigualable al término de la segunda guerra mundial, impulsó dictaduras militares represivas que habrían de fungir como gendarmes de la seguridad nacional estadounidense. Hoy, cuando sus intereses estratégicos en el mundo se han ampliado, se presenta al mundo como baluarte de la democratización. Asimismo, si como potencia mundial se involucró en guerras — Indochina — invasiones — República Dominicana — y otras múltiples formas de intervención — Cuba, Medio Oriente, Chile, Nicaragua — que le causaron el repudio de amplios sectores del mundo, e incluso, de su propia población. Sin embargo, en su intervención en Panamá, Washington recibió el apoyo de amplias corrientes políticas del mundo, así como el más alto grado de apoyo de su población al uso de su capacidad militar.

Entre la toma de posesión de Bush en enero de 1989 y la victoria estratégica de Estados Unidos sobre Irak en el conflicto del Golfo Pérsico, estuvo como preludio la invasión a Panamá. El éxito con que se llevó a cabo el operativo militar en el istmo, le brindó a sus estrategas suficientes lecciones que le aseguraron un nuevo triunfo catorce meses más tarde. De allí que aún

cuando el sistema internacional no entraba en la antesala del conflicto del Golfo Pérsico, el Presidente Bush haya afirmado que la "*bellamente coordinada*" intervención en Panamá demostró que Estados Unidos, independientemente de las nuevas corrientes mundiales, debe mantener su poderío militar: "*si alguna vez se necesitó una razón para mantener una poderosa defensa, eso se demostró... con el coraje mostrado por nuestras tropas en Panamá*".[59]

Después de la invasión, y para no quedar a la zaga de nuevas "necesidades", cuando aún no se vislumbraba su masiva intervención en el Pérsico, Estados Unidos instaló un nuevo centro de entrenamiento dirigido a instruir a sus tropas sobre las formas de combatir en escenarios urbanos del tercer mundo. Al inaugurar dicho centro, el Comandante de la Infantería de Marina, Gral. A.M. Gray, lo justificó aduciendo que "*en las naciones menos desarrolladas, las ciudades y las capitales realmente controlan la mayor parte, o todo lo que pasa en esos países*". Según el citado oficial, la instalación es necesaria "debido a los problemas únicos que plantea el tener que librar una guerra en una ciudad extranjera, en lugar de hacerlo a campo abierto".[60]

En esta etapa, el esfuerzo de Estados Unidos por el nuevo orden mundial muestra una serie de tácticas políticas y militares que habran de observarse nuevamente en futuros conflictos. Hoy, "el nuevo orden mundial ha pasado su primera prueba", según afirmó Bush a raíz de su victoria en el Pérsico. Para justificar la guerra estratégica que libró en el Pérsico, Bush dijo que las tropas aliadas tenían "el imperativo moral" de poner fin a "las atrocidades iraquíes en el emirato kuwaití.[61] Paradójicamente, Estados Unidos causó la muerte de más de ochenta y cinco mil — en su mayoría civiles — a Irak, probablemente no las últimas que le cause al tercer mundo. Así, pues, en el contexto de su victoria en el Pérsico, y sin añadir las justificaciones pertinentes, la Subsecretaria del Pentágono para latinoamérica, Nancy Dorm, sugirió que "*Cuba podría intentar la desestabilización de América Latina*".

Dada la intervención en Panamá, fue obvio para Estados Unidos que nuevamente podría recurrir a operativos militares similares. El esfuerzo para comprometer sus tropas en escenarios bélicos en el tercer mundo, sin embargo, fue considera-

ble. Cyrus Vance, Secretario de Estado de Carter, señalaba esas limitaciones en 1979 al sostener que "*no puede haber regreso al tiempo en que pensamos que podrían darse soluciones estadounidenses a cualquier problema*". Comprometido con revertir esa tendencia, el presidente Ronald Reagan sostuvo que "*tenemos en nuestro poder empezar el mundo nuevamente*".[62] En esa sucesión, Washington construyó lo que más tarde podría afirmar después de su victoria en el Pérsico: "*nos hemos deshecho del síndrome de Vietnam para siempre*".[63] Con la invasión a Panamá primero, y con la victoria estratégica en Medio Oriente después, Estados Unidos inició la década de 1990 como la única potencia militar con la capacidad y la voluntad para instaurar un ordenamiento global bajo su dominio. El sabor de la victoria habrá de resultar en nuevos conflictos.

Para ello, más que el uso de la diplomacia y otras tácticas políticas para obtener los objetivos que se dispone a conseguir, Washington utilizó la diplomacia para forzar el enfrentamiento armado y así aprovechar las nuevas condiciones mundiales. Refiriéndose a esto, el retirado general Fred Woerner, jefe del Comando Sur hasta septiembre de 1989, criticó al gobierno de su país por "*el fracaso en diseñar una política no violenta para resolver*" el problema panameño: Según Woerner, Estados Unidos optó por la invasión "*en lugar de facilitar que el pueblo panameño buscara una solución panameña*". Woerner destacó que el operativo militar fue hecho por "*consideraciones políticas*".[64] En esa secuencia, el también retirado Almirante William Crowe, jefe del Estado Mayor Conjunto hasta septiembre de 1989 — nombrado asesor militar por Clinton — meses antes del inicio de los enfrentamientos contra Irak — sostuvo que "*personalmente creo que* [las sanciones] *traerán a Hussein a sus rodillas*". "Si, de hecho", enfatizó Crowe, "*las sanciones llevarán a su cometido en doce o dieciocho meses, su uso para evitar una guerra... y las incertidumbres* (de la guerra), *sería más que válido*".[65] De allí que en este contexto Zbigniew Brezinski, secretario de Defensa durante la administración Carter, haya notado que "*la diplomacia estadounidense con frecuencia dió la impresión de estar dedicada a evitar una solución diplomática*" al conflicto del Golfo Pérsico.[66]

Los medios al alcance de los Estados Unidos para consolidar su autodefinido papel de guardián del mundo hoy muestran ser casi infinitos. La guía delineada para el nuevo intervencionismo requiere que, "*si la participación estadounidense es necesaria y justificada, el pueblo y los dirigentes...* (de E.U.) *deben comprender que la guerra de baja intensidad no se ajusta a la noción democrática de táctica y estrategia...* (sino) *el uso de cualquier medio para acceder a la victoria*".[67]

Antes de la guerra en el Pérsico, la invasión a Panamá logró que el Presidente Bush obtuviera el más alto grado de aprobación pública de un presidente en el ejercicio de sus funciones. Esta aprobación llegó a un ochenta por ciento en enero de 1990, cuando en marzo del año anterior sólo treinta y siete por ciento había aprobado el manejo de su política hacia Centroamérica.[68] La reacción de la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos ante la participación de su país en la guerra en el golfo, muestra que, además, Washington también puede contar con la fuerza de las pasiones de un pueblo movilizado para la guerra. Y el acoplamiento del más alto órgano jurídico de ese país a las acciones violadoras del derecho internacional de la administración Bush en el extranjero muestra que Washington puede ejercer el Nuevo Orden a voluntad.

Las varias tácticas político-militares de la invasión fueron, como luego en el Pérsico, tácticas fundamentales de Estados Unidos para el Nuevo Orden Mundial. Su futuro, sin embargo, dependerá de la lectura que la nueva administración en Washington haga sobre el legado internacional de Bush y de las necesidades de reordenamiento económico de Estados Unidos. Y, principalmente, de la interpretación que los líderes del resto de los países del orbe hagan sobre las posibilidades que este orden internacional ofrece para ejercer su autonomía periférica.

Notas

1. "Desaparecen símbolos en Panamá", *Excelsior*, jueves 8 de noviembre de 1990, p. 1-C.
2. La trayectoria de quien fungió como administrador de la ocupación, el Embajador de Estados Unidos en Panamá, Deane Hinton, muestra lo que Washington quería lograr en Panamá. Hinton fue embajador en El Salvador cuando el proyecto de Estados Unidos hacia ese país incluía crear, y después apuntalar, un gobierno "moderado" que sirviera para alejar a la población de los grupos radicales en armas que combatieron la

dictadura militar-oligárquica de ese país. Una de las experiencias relevantes de Hinton es la de haber servido como Embajador en Costa Rica, donde percibió las ventajas que tiene un sistema político conducido esencialmente por dos corrientes de un mismo reformismo conservador — el socialdemócrata Partido de Liberación Nacional y el centroderechista Partido Unidad Social Cristiana — para los intereses de Estados Unidos.

3. "Comerciantes se reunieron con Embajador de Estados Unidos", *La Prensa*, domingo 28 de agosto de 1990, p. 15A.
4. Fernando Martínez, "Beneficiosa para Panamá, la presencia militar de E.U.", *La Jornada*, domingo 24 de febrero de 1991, p. 11.
5. "Descongelará cuentas de ahorro, el gobierno de Panamá", *Excelsior*, miércoles 18 de abril de 1990, p. 13-A.
6. "Fueron exhumados los restos del General Omar Torrijos", *La Jornada*, domingo 18 de febrero de 1990, p. 22.
7. Ver a Fernando Martínez, "Atentan en Panamá contra la oficialista radio KW Continente", *La Jornada*, domingo 7 de julio de 1991, p. 33.
8. Fernando Martínez, "Casi no existen las relaciones de Panamá con México y Cuba", *La Jornada*, martes 2 de abril de 1990, p. 21.
9. "Panamá no volverá al Grupo de Río: Venezuela y Argentina", *La Jornada*, jueves 29 de marzo de 1990, p. 5.
10. Ver edición del 1o. de mayo de 1990 del *Congressional Record*, Vol. 136, No. 51. No es de extrañar que un gobierno como el de Endara, para congraciarse con la administración Bush, se haya pronunciado por aislar aún más a Cuba, e incluso haya arremetido contra los gobiernos que en mayor grado demostraron seguir aquellos principios de no intervención condenando enérgicamente la invasión, como el de México bajo el Presidente Carlos Salinas de Gortari y el de Perú bajo Alan García. Asimismo, el gobierno de Endara prohibió la venta de atún procedente de países sujetos a embargo por E.U. — México, España, Francia — fundamentándose en una decisión judicial de la Corte Federal de Estados Unidos en San Francisco, California.
11. Un proyecto de este calibre fue ofrecido por el Conservative Caucus, una organización conservadora ligada al Partido Republicano en Estados Unidos.
12. Según Arteta, "*... de que lo prendieron ellos y no el bombardeo de eso estoy seguro... yo no he encontrado a nadie del Chorrillo que se haya quejado de la invasión o de los* (norte)*americanos*". Padre Javier Arteta, "El gran incendio del Chorrillo vino a las siete de la mañana del día 20", Suplemento "20 de diciembre de 1989: documentos para la historia", publicado por el diario *La Prensa*, viernes 31 de agosto de 1989, pp. 12–13.
13. Fernando Martínez, "Refuta Endara la acusación", *La Jornada*, 30 de julio de 1991. Entre otras cosas, resalta el caso del periodista Marshall MacKlean, quien fue acusado de hurto luego de denunciar que tropas estadounidenses asesinaron a un soldado panameño al sofocar una rebelión policial el 5 de diciembre de 1990.
14. "Panama likes democracy but wants something else too", *The Economist*, 2–8 de febrero de 1991, p. 39.
15. José Meléndez, "Red de espionaje creará Dimitrius Papas en el País", *Excelsior*, jueves 8 de marzo de 1990.
16. "Panama government sets "Day of reflection", *The Tropic Times*, Panamá, miércoles 19 de diciembre de 1990, p. 1.

17. Briggs, op. cit., p. 108.
18. "For Panama, Old U.S. Ties Still Run Deep", *The New York Times*, domingo 19 de febrero de 1989, p. 15.
19. "Drug Arrests Disrupt CIA Operation," *The New York Times*, 14 de enero de 1990. El primer embajador de Endara en Washington fue Carlos Rodríguez, un panameño que estuvo asilado en Miami en la década de los setenta y que fue candidato a la vicepresidencia en la papeleta de Arnulfo Arias en 1984. Rodríguez y el actual segundo vicepresidente, Guillermo Ford, fundaron el Dadeland Bank en Miami, que se hizo notorio por haber sido implicado en varios casos de lavado de dinero del narcotráfico.
20. Fernando Martínez, "Posible renegociación de los tratados canaleros: Endara a diario de E.U.", *La Jornada*, martes 28 de mayo de 1991, p. 33.
21. El Fiscal Primero Superior de la provincia de Chiriquí, Emilio De León, denunció la participación de los altos oficiales norteamericanos. Ver Vilma E. Figueroa, "Implican a cuatro oficiales de E.U. en complot contra Guillermo Endara", *La Prensa*, domingo 26 de abril de 1992, p. 1A. Según informes de los servicios de inteligencia panameños dados a conocer por la revista *Momento*, los oficiales norteamericanos fueron los Coroneles George Winninger y James Steel, y otros dos altos oficiales de apellidos Pryor y Coy. Ver cable de la Agencia Mexicana de Noticias "Implicados oficiales de E.U. en intentona golpista", del 16 de mayo de 1992.
22. Tanto el gobierno de Endara como el Comando Sur reconocen que la inestabilidad del país no permite la renegociación de los tratados durante la presente administración. Difícilmente Panamá podrá estabilizarse en lo que resta del término de Endara. El Comando Sur reconoció que "Endara ha dicho muchas veces que sería inapropiado para su administración entrar en negociaciones para la continua presencia de las tropas norteamericanas después de 1999". Las declaraciones contrarias a la renegociación de los tratados por parte de Endara y su canciller, Julio Linares, deben verse mas bien en este contexto. Linares remarcó que "la negociación de un tratado tiene que darse en un clima aceptable de estabilidad política, social y económica". Ver "La inestabilidad en Panamá no permite negociar: Linares", *La Jornada*, domingo 21 de junio de 1992, p. 42. (Agencias AP y EFE). Ver también las respuestas del Comando Sur a un cuestionario proporcionado por el Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena". "No estamos hablando sobre bases después del año 2000", *Canal de Panamá Hoy*, boletín bimestral del CELA, diciembre de 1992.
23. Ver Kenneth Freed, "Noisy Feud Over Bank Secrecy Laws Embitters U.S.-Panama Relations", *The Miami Herald*, 30 de diciembre de 1990, p. 3A.
24. "Panamá descongeló cuentas de ahorro por 270 millones de dólares", *La Jornada*, miércoles 18 de abril de 1990, p. 26.
25. Cita textual por Fernando Martínez, "Beneficiosa...", *op. cit.*, loc. cit.
26. "Pide la Iglesia panameña el fin de la ocupación de EU", *La Jornada*, viernes 3 de agosto de 1990, p. 33.
27. "Capturan a dos reos que escaparon de la cárcel donde está preso Manuel Noriega", *Excelsior*, miércoles 5 de septiembre de 1990, p. 2-A.
28. Isabel Corro, entrevistada por Josetxo Saldúa en "Noriega, reemplazado por una dictadura de saco y corbata", *La Jornada*, sábado 4 de julio de 1992, p. 35.
29. La sociedad panameña tiene la potencialidad para desembarazarse del

presente régimen, si bien no necesariamente de los regímenes *oligárquicos* en general. Ninguna agrupación social significativa fuera de la oligarquía apoya activamente al gobierno de Endara. Inclusive, la misma Fuerza Pública creada para reemplazar eventualmente a las fuerzas norteamericanas en su papel policíaco-militar en el país no acudió a defender a Endara del intento de golpe comandado por el mencionado Cnel. Eduardo Herrera — pero sí lo hicieron quienes instalaron a Endara en el palacio presidencial: las tropas norteamericanas.

30. Migdalia Fuentes de Pineda, "Hay lugar para una tercera fuerza política en Panamá", *La Prensa*, lunes 27 de agosto de 1990, p. 2-A.
31. El popular cantante de salsa panameño, Rubén Blades, aspira a ser uno de ellos. Este anunció que quiere entrar en el escenario político istmeño para "buscar una alternativa" a la crisis que padece el país. Blades afirmó que "está prohibido olvidar" lo que sucedió con Noriega en el país, así como la situación que provocó el golpe de Estado de 1968, y que no está de acuerdo con la invasión, ni con el gobierno que surgió de aquél. Ver "Prohibido, olvidar en Panamá", *Excelsior*, 17 de abril de 1990, p. 1-C.
32. Sondeo Gallup citado por cables de prensa en "Grupo paramilitar de Endara se dice amenazado de muerte", *La Jornada*, domingo 13 de mayo de 1990, p. 27. Ver además el artículo publicado por el Comando Sur, "Operación Causa Justa: un año después", *La Prensa*, (Panamá, Panamá), domingo 16 de diciembre de 1990, p. 43A.
33. Fernando Martínez, "Beneficiosa...", *op. cit.*, loc. cit.
34. Ver la edición del 21 de marzo de 1991 del *Congressional Record*, vol. 137, No. 50 y del mismo día, el No. 49, pp. S3930 y H2015.
35. Ver la edición del 4 de enero de 1991 del mismo *Congressional Record*, Vol. 137, No 2.
36. Comentarios del Congresista Philip Crane, de Illinois, "The Panama Canal is of Vital Importance", *Congressional Record*, 22 de marzo de 1991, vol. 137, No. 50.
37. Fernando Martínez, "Preocupa al Congreso de EU la inestabilidad panameña", *La Jornada*, viernes 19 de abril de 1991, p. 29.
38. Gral. Bruce Palmer, *op. cit.*, p. 190.
39. Fernando Martínez, "Repudiaron los panameños 18 meses de ocupación de E.U.", *La Jornada*, viernes 21 de junio de 1991, p. 29. El citado legislador es dueño de empresas cuyos principales clientes son las tropas estadounidenses acantonadas en Panamá.
40. El citado oficial escribe esto antes de la invasión a Panamá. Cnel. William E. Aylsworth, "Assesing Latin America", *Military Review*, Vol. LXVIII, sept. 1988, No. 9, pp. 35–36.
41. Ver detalle en "Plan de ayuda norteamericana a Panamá", *Premisas*, publicación bimestral del Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena" de Panamá, Vol. 3, No. 11, marzo de 1990.
42. "Inconveniente otorgar asilo a Arosemena, dice Endara", *La Jornada*, jueves 22 de marzo de 1990.
43. "El costo de la invasión a Panamá", *La Jornada*, miércoles 19 de septiembre de 1990, p. 46.
44. "Exige Panamá a EU pago por las armas requisadas", *La Jornada*, jueves 15 de marzo de 1990, p. 25.
45. Fernando Martínez, "Propone el gobierno endarista desmilitarizar la fuerza pública", *La Jornada*, viernes 22 de marzo de 1991, p. 30.
46. Ver edición del *Congressional Record* del 18 de septiembre de 1990, pp. H7804-H7805.
47. Memorándum oficial obtenido a través del Freedom of Information Act (FOIA) por los abogados Kiyonaga Hnos. Cita textual en Buckley, *op. cit.*, p. 266.
48. Cnel. Harry Summers, "How to be the World's Policeman", *The New York Times Magazine*, Mayo de 1991.
49. Ver Timothy E. Tyler (The New York Times News Service), "Evitará E.U. que surja una Superpotencia Contraria, en Cualquier Parte del Mundo", *Excelsior*, domingo 8 de marzo de 1992, p. 1, 26.
50. Ver "Modera EU su enfrentamiento con nuevas potencias", cable de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), Nueva York, 24 de Mayo de 1992, citando el documento publicado el mismo día por el *New York Times*.
51. Briggs, *op. cit.*, p. 126.
52. Woodward (1991), *op. cit.*, p. 126.
53. "Reitera EU que los objetivos de sus ataques son militares", *La Jornada*, martes 5 de febrero de 1991, p. 7.
54. Ver cable de Notimex del 5 de febrero de 1992, procedente de Washington.
55. Timmons, al hablar ante la Cámara de Comercio de Panamá, dijo que sus tropas abandonarán el país para el año 2000, en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, pero indicó que en caso de que se considere amenazada la seguridad del Canal de Panamá, estas actuarán en consecuencia para garantizar la seguridad de la vía interoceánica. Ver *Congressional Record* del 18 de septiembre de 1990, pp. H7804-H7805.
56. Hernández Montoya, "Reacciones Internacionales", El Gallo Ilustrado, semanario de *El Día* (México, D.F.), domingo 7 de enero de 1990. Ver también "Repudia la invasión la mayoría de los países latinoamericanos", *La Jornada*, jueves 21 de diciembre de 1989, p. 6; "Justifica Francia la invasión a Panamá", *Unomasuno*, (México, D.F.), sábado 6 de enero de 1990; "Aspera discusión entre Solana y Negroponte sobre la intervención estadounidense en Panamá", *La Jornada*, viernes 29 de diciembre de 1989, pp. 1, 6.
57. "Posible aún, una salida pacífica a la crisis en el Pérsico, cree Moscú", *La Jornada*, domingo 7 de octubre de 1990, p. 25; "La URSS no intervendrá en el Golfo Pérsico si hubiera guerra: D. Yasov", *Excelsior*, domingo 23 de septiembre de 1990, p. 40A, 42A.
58. "Habla Collin Powell de unir fuerzas EU y la URSS para *resolver* crisis regionales", *El Día*, sábado 27 de julio de 1991, pp. 1, 12.
59. "Bellamente coordinada, la acción intervencionista: Bush", *La Jornada*, domingo 14 de enero de 1990, p. 23.
60. "Inauguran ciudad tercermundista para entrenar a las tropas de EU", *La Jornada*, jueves 20 de septiembre de 1990, p. 34.
61. José Manuel Nava, "Quedó Atrás el Síndrome de Vietnam: Bush", *Excelsior*, sábado 2 de marzo de 1991, pp. 1a., 21A; "Pasó su primera prueba exitosa el nuevo orden mundial, afirma Bush", *La Jornada*, domingo 3 de marzo de 1991, p. 6.
62. Mc Cormick, *op. cit.*, p. 191.
63. Nava, Ibid., *loc. cit.*.
64. David Haskel, "La invasión reforzó la dependencia de EEUU", *La Estrella*

de Panamá, (Panamá, Panamá), viernes 14 de diciembre de *1990, p. 1.*

65. Cita textual presentada en "Even the War experts disagree", *Newsweek*, 10 de diciembre de 1990, p. 14.
66. Cita textual en Pedro Enrique Armendares, "EU podría quedar atrapado en el embrollo de Levante", *La Jornada*, miércoles 6 de febrero de 1991, p. 13.
67. Sam C. Sarkesian, "Low Intensity Conflict: Concepts, Principles, and Policy Guidelines", *Air University Review*, vol. 26, No. 2, *1985, pp. 7, 11.* Para una discusión más amplia, ver también a Michael T. Klare y Peter Kombluh, "El nuevo intervencionismo: la Guerra de Baja intensidad durante la década de los ochenta:, en Michael T. Klare y Peter Kombluh (coor.), *Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80*, (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Editorial Grijalbo, 1990), traducción del original en inglés por Argelia Castillo de la edición de Pantheon Books, 1988,
67. Hulker Graham, "Bush Approval Second Highest in Poll's History". *The Gallup Poll Monthly*, No. 292, enero de 1990, *pp. 16–17.*

Bibliografía

- Anónimo. "Horas de angustia". *Diálogo Social*, N°s. 229-230, febrero-marzo 1990, p. 1.
- Archivo Histórico Diplomático Mexicano. *Las Instrucciones de Henry Clay.* México, D.F.: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1985. Prólogo de Leopoldo Zea.
- Aylsworth, William E. "Assesing Latin America". *Military Review*, Vol. LXVIII, sept. 1988, No. 9 pp. 35–36.
- Bermúdez, Lilia. *Guerra de Baja Intensidad: Reagan contra Centroamérica.* México, Siglo XXI eds., 1989, segunda ed. corregida.
- Bermúdez Torres, Lilia, "Bush ante Centroamérica: debate interno, consensos previos y primeras pruebas". Mimeo.
- Bolt, William J. Col. David Jablonsky. "Tactics and the Operational Level of War" *Military Review*, vol. LXVII, No. 2, febrero de 1987.
- Boasert, Thomas John. "Panama". *Confronting Revolution: Security through Diplomacy in Central America.* Ed. por Morris J. Blackman, William M. Leogrande y Kenneth E. Sharpe. Nueva York: Random House, 1986.
- Briggs III, Clarence E. *Operation Just Cause: Panama December 1989.* Harrisburg, PA: Stackpole Books, 1990.
- Buckley, Kevin. *Panama: The Whole Story.* Nueva York: Simon & Schuster, 1991
- Busey, James. *Political Aspects of the Panama Canal: The Problem of Location.* Tucson, Arizona: The University of Arizona Press, 1974.
- Castillo, Maria Eliana. "Después del Canal: nuevos desafíos en la política exterior de Panamá". En *Las políticas exteriores latinoamericanas frente a la crisis*, compilado por Heraldo Muñoz. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1985.
- Castro, Nils. *Objetivos Estratégicos de Estados Unidos en Panamá.* San José: Comité de Solidaridad con Panamá, 1988.
- Castro Herrera, Guillermo. *Panamá 1977.* Panamá: CELA, 1978.
- Correa, Mayin. *La gran rebelión blanca.* Miami: SIBI, 1987, vols. I y II.
- Clausewitz, Carl Von. *On War.* Princeton: Princeton University Press, 1976.
- Cockburn, Alexander. "Noriega fue nuestro compinche". *Tareas* N°74, enero-abril de 1990.
- Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. "No estamos hablando sobre bases después del año *2000*". *Canal de Panamá Hoy*, N°5, boletín bimestral del CELA, diciembre 1992.
- Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de los Estados Unidos. *A New Canal Treaty: A Latin American Imperative. Report of a Study Mission to Panama November 21-23 1975.* Washington: Oficina de Prensa del Gobierno de los Estados Unidos, 1976.
- Comité de Santa Fé II: Roger Fontaine, Gordon Summer, David C. Jordan). "Una Estrategia para América Latina en la década de 1990". Propuesta No. 10. *Tareas* No. *72, Mayo-Agosto de 1989.*
- *Congressional Record*. 18 de mayo de 1987.
- *Congressional Record*, 4 de marzo de 1988, pp. S1949-S1951.
- *Congressional Record*, 10 de agosto de 1988, p. S11476.
- *Congressional Record*, 19 de julio de 1989, pp. S8238-S8241.
- *Congressional Record*, 18 de septiembre de 1990, pp. H7804-H7805.

- *Congressional Record*, 28 de septiembre de 1990, pp. H8391.
- *Congressional Record*, 4 de enero de 1991.
- *Congressional Record*, 21 de marzo de 1991, pp. S3930 y H2015.
- Conte Porras, Jorge. *Del Tratado Hay-Bunau Varilla a los Tratados Torrijos-Carter*. Panamá: Banco Nacional de Panamá, 1981.
- Crane, Philip. "The Panama Canal is of Vital Importance". *Congressional Record*, 22 de marzo de 1991, vol. 137, No. 50.
- Crowell, Lorenzo. "The Anatomy of Just Cause: the Forces Involved, the Adequacy of Inteligence and its Success as a Joint Operation". En Bruce Watson y Peter Tsouras, *Operation Just Cause*, Boulder Westview Press, 1991.
- Davis, Robert B. "Misiones en la inteligencia militar en el siglo XXI". *Military Review*, Vol. LXXI enero-febrero de 1991, No. 1.
- Diaz Herrera, Roberto. *Las vallas del silencio, Panamá: a los 18 años del golpe militar*. Panamá: Fuerzas de Defensa de Panamá, 1986.
- Dinges, John. *Nuestro hombre en Panamá*. México: Lasser Press Mexicana, 1990.
- "Discurso del General Omar Torrijos Herrera". *Lotería* Nº236, octubre 1975, p. 102.
- Dontuso, James F.. "Combat and the Media: the Right to Know versus the Right to Win". *Strategic Review*, vol. XVIII, invierno de 1990, No. 1, pp. 49-66.
- Dunkerley, James. "Central America: Collapse of the Military System". En *The Political Dilemmas of Military Regimes*, editado por Christopher Clapham y George Philip. Londres: Croom Helm, 1985.
- Escobar Bethancourt, Rómulo. *Torrijos: colonia americana No.* Panamá: M. V. Publishing Co., 1981.
- Etzold, Thomas H. "The Strategic Environment of the Twenty-First Century: Alternative Futures for Strategic Planners". *Strategic Review*, primavera 1990.
- Evans, David. "Questions from an Invasion: Panama & the Pentagon", Reimpreso por solicitud del Congresista Charles Rangel en la edición del 23 de junio de 1990 del *Congressional Record*.
- Farnsworth, David y James W. Mc Kenney. *U.S. Panamanian Relations, 1903-1978*. Boulder: Westwiew Press, 1983.
- Gandásegui, Marco A.. "La concentración del poder económico en Panamá". En Soler, Ricaurte, *Panamá: dependencia y liberación*. San José, Costa Rica: EDUCA, 1974.
- Gates, John M. "Problemas del desarrollo de la doctrina". *Military Review* (ed. hispanoamericana) vol. LXVIII, No. 8, agosto 1988.
- Gilhodes, Pierre. *Paysans du Panama*, Paris: Fondation National des Sciences Politiques, 1978.
- Goldrich, Daniel. *Sons of the Establishment: Elite Youth in Panama and Costa Rica*. Chicago, IL: Rand Mc nally and Co., 1966.
- Golman, Alan R. y Maria E. Biggers. "The International Implications". En Bruce Watson y Peter Tsouras (eds.), *Operation Just Cause: the U.S. Intervention in Panama*: Boulder, Colorado: Westview Press, 1991.
- Gorostiaga, Xavier. "La Zona del Canal y su impacto en el movimiento obrero panameño". *Tareas* Nº32, julio-agosto 1975.
- Graham, Hulker. "Bush Approval Second Highest in Poll's History". *The Gallup Poll Monthly*, No. 292, enero de 1990, pp. 16-17.
- Grove, Brandon. "Panama's relationship to the Nicaraguan Crisis". *Department of State Bulletin*, agosto 1979, pp. 62-69.

- Guagnini, Luis. "Modelo panameño. La estructura de poder en Panamá y el balance entre la izquierda y la derecha". *Tareas*32, julio-agosto 1975.
- Heine, Jorge. "¿De la negligencia benigna a la doctrina Bush? Estados Unidos y América Latina en 1989". En Heraldo Muñoz, *Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas 1989-1990: el desafío de los noventa*. Caracas: Nueva Sociedad y Prospel, 1990.
- Herman, Edward y Frank Brodhead. *Demonstration Elections: U.S. Staged Elections in the Dominican Republic, Vietnam and El Salvador*. Boston: South End Press, 1984.
- Hewell, Cass D. "War, Television and Public Opinion". *Military Review* vol. LXVIII, invierno 1990, No. 1, pp. 49-66.
- Hogan, Michael J. *The Panama Canal in American Politics: Domestic Advocacy and the Evolution of Policy*. Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1986.
- "Horas de angustia". *Diálogo Social*, Nºs. 229-230, febrero-marzo 1990, p. 1.
- Hugues, William. "¿1968: Un golpe pro-imperialista?". *Diálogo Social*, octubre de 1983, p. 21.
- Independent Commission of Inquiry on the U.S. Invasion of Panama. *Esta es la Causa Justa*. San José: CODEHUCA, 1991.
- Institute for the Comparative Study of Political Systems. *Panama Election Factbook, May 12, 1968*. Washington, D.C.: Operations and Policy Research, Inc., 1968.
- "Interview: General Thomas Kelly". *Soldier of Fortune*, (septiembre de 1990), p. 45.
- "Jefe del Ejército Sur partidario de la intervención armada en Panamá". *Opinión Pública* Nº19, agosto de 1989, pp. 8-9.
- Jones, Joseph. *Stealth Tecnology: The Art of Black Magic*, Blue Ridge Summit: Tab Books, 1990.
- Kempe, Frederick. *Noriega: toda la verdad*. Bogotá y Barcelona: Grijalbo, 1990.
- Klare, Michael. "A Blueprint for Endless Intervention", *The Nation*, 30 de julio-6 de agosto, 1988.
- Klare, Michael T. y Peter Kornbluh. "El nuevo intervencionismo: la Guerra de Baja intensidad durante la década de los ochenta". En Michael T. Klare y Peter Kornbluh (coor.), *Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Editorial Grijalbo, 1990.
- Labrut, Michele. *Este es Omar Torrijos*, Panama: Litografía Enan, 1982,p.3.
- La Feber, Walter. "Setting Up the System". En *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*. Nueva York: W.W. Norton & Co., 1984.
- La Feber, Walter. *The New Empire: An interpretation of american expansion, 1860-1898*. Ithaca: Cornell University Press, 1963.
- La Feber, Walter. *The Panama Canal: the crisis in historical perspective*. New York: Oxford University Press, 1978.
- Leis, Raúl. *Radiografía de los partidos*. Panamá: Centro de Capacitación Social, 1984.
- Lewis Galindo, Samuel. *900 días: colapso de una dictadura*, Panamá: Arte Sistema Panamá, S.A., 1990.
- Maira, Luis. "Estados Unidos y América Latina: ¿Perspectivas de cambio bajo la administración Carter?". En *Carter y la lógica del imperialismo*, tomo II, ed. por Hugo Assman. San José, C.R.: EDUCA, 1978.

- Maira, Luis. "La evolución de la política norteamericana hacia América Latina". *Temas de política exterior latinoamericana: el caso uruguayo.* Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1986.
- Martínez, José de Jesús. *Mi General Torrijos.* La Habana: Casa de las Americas, 1988.
- Mc Cormick, Thomas. *America's Half-Century: United States Foreign Policy in the Cold War.* Baltimore: The John Hopkins University Press, 1989.
- Mc Donald, Ronald. "Multi-party Loose Systems: Venezuela, Brazil, Panama and Ecuador". *Party Systems and Elections in Latin America.* Chicago: Markham Publishing Company, 1971.
- Mc Donald, Scott. "Panama: At the End of Avalanche". *Mountain High, White Avalanche: Cocaine and Power in the Andean States and Panama.* New York: Praeger Publishers, 1989.
- Mc Donald, Vincent. "The Panama Canal for Panamanians". *Military Review* vol. LV, No. 12, diciembre de 1975, pp. 7-16.
- Montiel, Miguel. "El oligarcazo del 20-24 de enero de 1976". *Tareas* 34, diciembre-febrero 1975-1976.
- Muñoz, German. "Panamanian Political Reality: the Torrijos Years". Disertación doctoral, Universidad de Miami, 1981.
- Navarrete Talavera, Elia. *Panamá: ¿invasión o revolución?.* Madrid: Editorial Planeta, 1990.
- Navas, Luis. Testimonio. Agosto de 1991.
- Noriega de Jurado, Jilma. *Verdad y miseria de nuestros partidos políticos.* Panamá: Editora Renovación, 1978.
- Noriega, Manuel Antonio. *Operaciones Psicológicas.* Panamá: Guardia Nacional, 1975.
- Nuñez Soto, Orlando y Carmen Guevara. "Desarrollo y contradicciones del proceso panameño". *Tareas* Nº41, enero-marzo 1978.
- Padilla, Salomón y Hugo Varhas. "El financiamiento público externo en Panamá y sus implicaciones económicas, 1950-1975", *Tareas* Nº40, octubre-diciembre de 1977, p. 16.
- Palmer, Bruce. *Intervention in the Caribbean: The Dominican Crisis of 1965.* Lexington: The University Press of Kentucky, 1989.
- Pastor, Robert. "Política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica: no más condenado a la repetición", período de preguntas y respuestas ante el Coloquio organizado por el Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América de la Universidad Nacional Autónoma de México (CISEUA-UNAM) y la sede Académica de México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). México, D.F., lunes 23 de julio de 1990.
- Pereira, Renato. *Fuerzas armadas y política,* Panamá: Universidad de Panamá, 1979.
- "Plan de ayuda norteamericana a Panamá". *Premisas,* (publicación bimestral del Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena" de Panamá), Vol. 3, No. 11, marzo de 1990.
- Ricord, Humberto. *Los clanes de la oligarquía panameña y el golpe militar de 1968.* Panamá: ed. no definida, 1983.
- Ritter, Jorge. *Los secretos de la Nunciatura.* Bogotá: Editorial Planeta, 1990.
- Ropelewski, Robert R. "How Panama Worked: Planning, Precision and Surprise led to Panama Successes". *Armed Forces and Society Journal International,* febrero de 1990.

- Ropp, Steve. "Military Retrenchment and Decay in Panama". *Current History,* vol. 89, No. 543, enero de 1990, pp. 17-20, 37-40.
- Ropp, Steve. *Panamian Politics: From Guarded Nation to National Guard.* New York: Praeger Publisher, 1982.
- Rouquié, Alain. "Revolutions militaires et indépendence nationale en Amérique Latine". *Revue Francaise de Science Politique* (Paris), (1971), vol. 21, No. 5.
- Russel Evans, G. *The Panama Canal Treaties Swindle: Consent to Disaster.* Carrboro: Signal Books, 1986.
- Salamin, Marcel. *El Salvador: sin piso ni techo.* Bogotá: Editorial La Oveja Negra, 1980.
- Sarkesian, Sam C. "Low Intensity Conflict: Concepts, Principles, and Policy Guidelines". *Air University Review,* vol. 26, No. 2, 1985, pp. 7, 11.
- Sconyers, Ronald. "The Information War". *Military Review,* vol. LXIX febrero de 1989, No. 2, pp. 44-52.
- Seabury, Paul y Codevilla, Angelo. *War: Ends and Means,* New York: Basic Books, 1989.
- Semidei, Manuela. "Panama, les Etats-Unis et la Zone du Canal", *Problemes D'Amerique Latine.* Notes et Etudes Documentaires, vol. XXIX, 29 novembre 1973.
- Simpson, Ross. "Heroes of Panama". *Soldier of Fortune,* septiembre de 1990, pp. 42-43.
- Sohr, Raúl. *Para Entender la Guerra.* México, D.F.: Alianza Editorial Mexicana y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991.
- Soler, Ricaurte. *Formas ideológicas de la nación panameña.* San José: EDUCA, 1972.
- Soler, Ricaurte. *Panamá: historia de una crisis.* México, D.F.: Siglo XXI eds., 1989.
- Soler, Ricaurte. "Panamá: la autonomía universitaria de 1968 a 1978". *Tareas* Nº52, abril-septiembre de 1981.
- Soler, Ricaurte. *Panamá: nación y oligarquía, 1925-1975.* Panamá: Ediciones de la revista Tareas, 1976.
- Soler, Ricaurte (ed.). *Pensamiento político en Panamá en los siglos XIX y XX.* Panamá: Biblioteca de la Librería Cultural Panameña, vol. 6, 1988.
- Soler Torrijos, Giancarlo. "Los muertos provocados por la invasión". *Opinión Pública* Nº24, febrero de 1990, p. 6-7.
- Soler Torrijos, Giancarlo. "No hemos tenido el apoyo adecuado de Washington para el proceso de Contadora. Entrevista a James Carter". *Diálogo Social,* septiembre 1986, p. 47.
- Soler Torrijos, Giancarlo. "Panamá: primero, soberanía". *Nueva Sociedad* (Caracas, Venezuela), No. 97, septiembre-octubre de 1988, pp. 12-18.
- Soler Torrijos, Giancarlo. "Panamá: Los retos del movimiento popular frente al impasse de la crisis", *Coyuntura Centroamericana* (México D.F.), agosto-septiembre de 1988, pp.16-19.
- Soler Torrijos, Giancarlo. "Se profundiza la crisis, arranca la maquinaria electoral". *Coyuntura Centroamericana* (México, D.F.), diciembre 1988-enero 1989, pp. 19-21.
- Soler Torrijos Giancarlo. "The Rise of Military Reformism in Panama: The Torrijos Regime 1968-1981". Tesis de grado para optar por el título de Bachelor of Arts in Development Studies de la Universidad de California en Barkeley, Mayo de 1987.

- Summers, Harry. "How to be the Word's Policeman". *The New York Times Magazine*, Mayo de 1991.
- Summers, Harry G. "Tactical Victory, Strategic Defeat". *On Strategy: A Critical Analysis of the Vietnam War.* New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1982.
- Sweetman, Bill. *Stealth Bomber: Invisible Warplane, Black Budget.* Osceola: Motorbook International Publishers, 1989.
- Sweetman, Bill y James Goodall. *Locheed F-117a: Operation and Development of the Stealth Fighter.* Osceola: Motorbooks International Publishers, 1990.
- "The Architect of Just Cause Lt. Gral. Carl Stiner Explains his Panama Plan". *Army Times*, 12 de marzo de 1990, p. 14.
- The Independent Commission of Inquiry on the U.S. Invasion of Panama (ed.). *The U.S. Invasion of Panama: The Truth Behind Operation Just Cause.* Boston: South End Press, 1991.
- Torrijos Omar. *La Batalla de Panamá.* Panamá: M.V. Publishing Co., 1981.
- U.S. Department of State. *The Defense and Neutrality of the Panama Canal Under the New Treaties* Special Report No. 37. Washington, D.C.: Bureau of Public Affairs, Department of State, 1978.
- Urrutia, Ricardo. "Panamá: las crecientes tensiones con Estados Unidos". En *Las políticas exteriores de América Latina y el Caribe: continuidad en la crisis.* Compilado por Heraldo Muñoz. Buenos Aires: Grupo Editotial Latinoamericano, 1986.
- Von Clausewitz, Carl. *On War.* Princeton:Princeton University Press, 1976, p.579.
- Watson, Bruce y Peter Tsouras. *Operation Just Cause: the U.S Intervention in Panama.* Boulder, Colorado: Westview Press, 1991.
- Woerner, Fred." The Strategic Imperatives for the United States in Latin America". *Military Review* vol. LXIX No. 2, febrero de 1989.
- Woodward, Bob. *The Commanders.* New York: Simon & Schuster, 1991.
- Woodward, Bob. *Veil: The Secret Wars of the CIA.* Nueva York: Simon & Schuster Inc, 1987.

Otras publicaciones del CELA

- **Las clases sociales en Panamá**, Georgina Jiménez de López, Hernán F. Porras, Ricaurte Soler y Marco A. Gandásegui, h.(1993)
- **Las luciérnagas de la muerte**, José Franco, (1992)
- **El teorema de Fermat**, Carlos Chuez, (1992)
- **Metodología para la investigación social**, Ileana Gólcher, (1992)
- **La batalla de San Miguelito**, Rolando Sterling, (1991)
- **Operación Causa Justa**, Enrique Chuez, (1991)
- **"Las casas son para vivir, que no vuelva la guerra"**, Antonella Ponce, (1991)
- **La verdad sobre la invasión**, Olmedo Beluche, (3ª ed.,1991)
- **La fuerza de trabajo en el agro**, Marco A. Gandásegui, h. y otros, (2ª ed., 1989)
- **Panamá: crisis política y agresión económica**, Marco A. Gandásegui, h., (2ª ed., 1989)
- **Las luchas obreras en Panamá**, Marco A. Gandásegui, h., y otros, (2ª ed., 1988)
- **La ciudad fragmentada**, Alvaro Uribe, (1988)
- **El mito de la comunicación social**, Marco A. Gandásegui, h., (1987)

Las tácticas político-militares de Estados Unidos utilizadas en la invasión a Panamá fueron, como luego en el Golfo Pérsico, tácticas fundamentales para el Nuevo Orden Mundial. Su futuro, sin embargo, dependerá de la lectura que la nueva administración en Washington haga sobre el legado internacional de Bush y de las necesidades de reordenamiento económico de Estados Unidos. También dependerá de la interpretación que los líderes del resto de los países del orbe hagan sobre las posibilidades que este orden internacional ofrece para ejercer su autonomía periférica.

Las nuevas organizaciones, los frentes sociales y los líderes populares hoy enfrentan las tareas inconclusas que plantea la autodeterminación. Los mártires del 20 de diciembre "han muerto ya de bala". Que no "vuelvan a morir de indiferencia", parafraseando una expresión del general Torrijos, dependerá de la fuerza y consistencia de la comunidad panameña para asumir las riendas de su propio destino.